

**SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN
SOBRE SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS,
CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA,
ARTES Y PATRIMONIOS ELABORADO EN
CUMPLIMIENTO DEL MANDATO
OTORGADO POR EL REGLAMENTO
GENERAL DE LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL**

PLENO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL:

La Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios tiene el honor de informar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del reglamento general de la Convención Constitucional, respecto de las propuestas de normas constitucionales aprobadas por esta instancia sobre las materias que se indican más adelante, en cumplimiento del mandato otorgado por la Convención Constitucional. El presente documento constituye, básicamente, una síntesis de las sesiones celebradas por la Comisión. Los enlaces a los archivos audiovisuales de todas ellas se encuentran en el respectivo anexo que se adjunta al final de este informe.

I.- ANTECEDENTES GENERALES

1. Origen

El día 29 de julio de 2021 los convencionales señor Ignacio Achurra y señora Malucha Pinto convocaron a 160 organizaciones del mundo de la cultura para preparar una presentación que, luego, fue entregada a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, señora Elisa Loncon y señor Jaime Bassa, y a los coordinadores de la Comisión de Reglamento, señora Amaya Álzvez y señor Daniel Bravo. En esa misiva se proponía la existencia de una comisión permanente para abordar la cultura como eje transversal de la nueva Constitución Política y obligar al Estado a ser garante de los derechos culturales.

Más adelante, en la sesión de la mañana del día 18 de agosto de 2021, la Subcomisión de Estructura y Funcionamiento de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional escuchó a los convencionales

señora Malucha Pinto y señor Ignacio Achurra, quienes asistieron acompañados del abogado señor Rodrigo Hernández.

En esa oportunidad, ellos plantearon la conveniencia de considerar en la organización y estructura de la Convención Constitucional una Comisión de Cultura, entendida como un espacio en que se discuta el derecho y necesidad de todo ser humano a ser plenamente reconocido en su naturaleza; a desarrollarse y expresar su identidad; a tener la opción de aportar desde lo que cada uno es. Desde esta instancia, argumentaron, se desarrollaría un enfoque cultural que cruce el proceso constituyente y permee los diversos contenidos del nuevo texto constitucional.

Al concluir sus intervenciones, los miembros de la Subcomisión sostuvieron un extenso intercambio de opiniones con los invitados, agradecieron sus propuestas y les formularon diversas consultas, las que fueron respondidas por la señora Pinto y el señor Achurra.

Por otra parte, el día 24 de agosto de 2021, la convencional constituyente señora Cristina Dorador invitó a más de 450 personas vinculadas al mundo de la ciencia, la investigación y la tecnología para discutir la posibilidad de solicitar la creación, al interior de la Convención Constitucional, de una comisión permanente de conocimientos, ciencia, innovación y tecnología.

Este último planteamiento la señora Dorador lo materializó, junto a los convencionales señoras Amaya Álvarez y Carolina Vilches, y el señor Daniel Bravo, mediante la presentación de una indicación al proyecto de Reglamento de la Convención que proponía la creación de una comisión sobre sistemas de conocimientos, que fue sometida a discusión en el contexto del debate de la Comisión de Reglamento.

Cabe hacer presente que en el primer informe de la Comisión de Reglamento no se contemplaba una comisión de la referida naturaleza. Fue más tarde, cuando el Pleno decide fusionar las dos comisiones que preliminarmente se sugerían con competencia en el ámbito de los derechos fundamentales (una, para tratar derechos los individuales y políticos y, otra, para considerar los derechos colectivos, económicos y sociales) cuando se crea el espacio para incorporar una nueva comisión.

En estas circunstancias, en un esfuerzo conjunto, los convencionales señoras Dorador y Pinto y señor Achurra presentaron un conjunto de quince indicaciones que buscaban incorporar al reglamento una comisión sobre las referidas materias de su interés, así como definir su nombre y competencia.

En definitiva, el resultado de las votaciones recaídas en las referidas indicaciones dieron lugar al artículo 68 del Reglamento de la Convención, que consagra la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

2. Constitución e integración

Transcurrido el plazo de recepción de las postulaciones que los convencionales constituyentes debían presentar para integrar comisiones, que expiró el día jueves 7 de octubre a las 21:00 horas, la Secretaría de la Convención realizó el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 70 del Reglamento, así como de inscripción de las y los convencionales en las respectivas comisiones. El resultado fue presentado en la reunión de la Mesa Directiva realizada el viernes 8 de octubre de 2021.

De esta manera, según lo establecido en los artículos 3, letras c) y p); 32; 39, letra v); 61 y 70 del Reglamento General de la Convención Constitucional, así como en el acuerdo que sobre la materia adoptara la Mesa Directiva, se definió la integración de las referidas comisiones temáticas de la Convención.

Según lo informado por el Oficio N° 163, de la Presidencia de la Convención, la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios quedó conformada por las y los convencionales constituyentes señoras y señores Ignacio Achurra, Miguel Ángel Botto, Francisco Caamaño, Alexis Caiguan, Carlos Calvo, Bernardo de la Maza, Cristina Dorador, Ricardo Neumann, Malucha Pinto, Angélica Tepper, Paulina Valenzuela, Loreto Vidal, Margarita Letelier, Margarita Vargas y Carolina Videla.

En el mencionado documento se precisa que esta composición cumple los requisitos de paridad y escaños reservados exigidos por el Reglamento.

De conformidad con lo anterior, con fecha 14 de este mes, la Presidenta de la Convención Constitucional citó a los miembros de la Comisión a la sesión del martes 18 de octubre de 2021 con el objeto de proceder a constituirse y adoptar los acuerdos que le permitan dar cumplimiento al Reglamento General en cuanto a sus actuaciones y al plazo para evacuar sus propuestas.

En sesión celebrada en la última fecha referida, la Comisión acordó efectuar una ronda de presentaciones de sus integrantes con el propósito de alcanzar un mayor conocimiento acerca de ellos mismos.

El convencional señor Ricardo Neumann dio inicio a este espacio informando que es abogado de la Pontificia Universidad Católica, donde se desempeñó como dirigente estudiantil. Obtuvo un máster en Teatro y Gestión Cultural de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. En 2019 trabajó como abogado y productor teatral en Broadway, en el Manhattan Theatre Club, y fue director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, gerente regional de Valparaíso y ex director del área de Cultura de esa organización.

Luego, la convencional señora Angélica Tepper indicó que ha sido dirigente gremial y que, en ese empeño, ha tenido entre sus prioridades lo cultural y ha intentado relevar especialmente la figura de Pablo Neruda.

A continuación, el convencional Bernardo de la Maza señaló que es periodista y que fue elegido por el distrito 8. Comentó que concurre a la Convención muy marcado por el deterioro de la calidad de vida en las ciudades de nuestro país. Agregó que tiene grandes esperanzas en la nueva Constitución, especialmente después del estallido social, ya que el país requiere cambios fundamentales.

En seguida, el convencional señor Miguel Angel Botto indicó que fue elegido por el distrito 6 y que esta Comisión le atrae particularmente por vincularse con dos áreas que para él son fundamentales: su formación profesional (es ingeniero) y su gusto por la poesía, además de ser él un cantautor.

Posteriormente, la convencional señora Cristina Dorador manifestó que es música, área en la que se dedica al contrabajo. Hasta hace poco, acotó, participaba en la Orquesta de Cámara de la Universidad de Antofagasta. También se ha dedicado a cantar en coro; es hija de poetas y, además, le gusta escribir. Por otra parte, explicó que su formación profesional se ha desarrollado en el ámbito científico, su profesión es Licenciada en Biología, habiendo obtenido, después, un doctorado en ciencias naturales en microbiología. Actualmente, dijo, es académica de la Universidad de Antofagasta.

Más adelante, el convencional señor Francisco Caamaño, señaló que es constituyente electo del distrito 14, como independiente en un cupo de Pueblo Constituyente. En lo laboral se ha dedicado a trabajar en el servicio público, en la Universidad de Chile, en el Departamento de Geofísica, principalmente en administración y gestión de diferentes proyectos científicos. Preciso que su profesión es ingeniero en administración en finanzas, y cuenta con diplomados en evaluación de proyectos y control de gestión. También se identificó como activista medioambiental.

Por su parte, la convencional señora Margarita Letelier, indicó que es médico veterinaria, profesión cuyo ejercicio la ha llevado a trabajar en el área agrícola. Manifestó que, además, se ha desempeñado en cargos gremiales.

Luego, la convencional señora Carolina Videla, relató que es constituyente del distrito 1, esto es, que viene de una zona extrema y de sacrificio. Es trabajadora social de profesión, y también gestora cultural y cantora popular, por elección. Resaltó que, en su región, la de Arica y Parinacota, se vive la interculturalidad, expresión de lo cual es el tercer carnaval más grande de América latina.

Enseguida, la convencional señora Loreto Vidal, manifestó que tiene 51 años de vida, de los cuales 32 años se ha dedicado a su quehacer profesional, el que ha consistido, en una primera etapa, en la enfermería clínica, donde se especializó en trasplante y diálisis. Luego decidió estudiar una segunda carrera porque descubrió la trascendencia de conocer el derecho al acceso y a la calidad en las atenciones de salud. Por lo tanto, también es abogada. Informó que estudió un magíster en bioética y se ha dedicado a la docencia. Además, añadió, está a cargo de una ONG dedicada a las personas en situación de calle.

A continuación, el convencional señor Ignacio Achurra, señaló que es actor, estudió en la Universidad de Chile, tiene un magíster en artes de la Universidad Católica. Ha sido director teatral durante 20 años, dirige un colectivo artístico. También ha sido profesor universitario en el extranjero y en Chile. Dirigió y fundó un festival internacional de teatro callejero, en el espacio público. Agregó que viene de una familia de artistas.

Por su parte, el convencional señor Carlos Calvo, dijo que es profesor, jubilado hace tres años y que tiene 75 años. Fue invitado a postular a la Convención por el Partido Socialista, como candidato independiente. Manifestó que como profesor está insatisfecho de cómo se entiende hoy la educación y de la concepción que se tiene de la escuela, toda vez que no entusiasman al estudiante con el aprendizaje. Estudió filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso y, posteriormente, un máster en educación y uno en antropología, además de un doctorado en educación, todo ello en la Universidad de Stanford. Trabajó en un instituto de educación de adultos para América Latina y el Caribe.

A su turno, la convencional señora Malucha Pinto expresó que se siente muy contenta de formar parte de esta Comisión pues cree profundamente en este espacio, al que calificó como “la Comisión del Futuro”. Dijo que este grupo de trabajo enfrenta desafíos no sólo nacionales, sino planetarios, recordando, al efecto, la frase de Galileo Galilei, según la cual las cosas están ligadas por lazos

invisibles y “no se puede arrancar una flor sin molestar a una estrella”. Desde otro punto de vista, destacó que ella es teatrera nacional, directora de un colectivo artístico y de una fundación.

Siguiendo la misma línea, la convencional señora Margarita Vargas, aseveró que está muy complacida de pertenecer a esta instancia, entre otras razones, por provenir del pueblo kawésqar, rico en patrimonio, cultura y arte. Agregando que su pueblo ha hecho tremendos aportes a la sociedad, en cuanto a la investigación científica, la música, el arte, la cultura. Es de Puerto Edén, indicando que tuvo el privilegio de vivir con sus padres y abuelos kawésqar, por el cual vivió la cultura, aprendió a cantar. Toda su cosmovisión y patrimonio, está relacionado con la Naturaleza...

Posteriormente, la convencional señora Paulina Valenzuela, contó que tiene 36 años y es mamá de Fernando, de 19 años, y Rayen, de 2 años. Relató que es profesora general básica, con mención en matemáticas, y se desempeña en el primer ciclo de este nivel educacional. Vive y trabaja en Paine, comuna del distrito 14, donde ha permanecido siempre, desempeñándose en escuelas rurales.

Finalizó las presentaciones el convencional señor Alexis Caiguan, quien expresó que es mapuche huilliche, artesano y músico. Añadió que se desempeña como Educador Tradicional y dirigente social. Puso de relieve que una de sus motivaciones para integrar la Convención y esta Comisión era aportar a estas entidades los valores aprendidos de su madre y su padre.

3. Cometido de la Comisión

Según lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento General de la Convención, las comisiones deberán tratar las materias de su competencia y tendrán la finalidad de estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno.

4. Objeto de la Comisión

La Convención Constitucional aprobó en su oportunidad el documento denominado “Reglamento General de la Convención Constitucional”.

En el artículo 61 de este cuerpo normativo se dispone que “Las comisiones temáticas son órganos colegiados para tratar una o más materias en la esfera de su competencia y cuya finalidad es estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno, conforme a lo establecido en el presente Reglamento”.

Entre las instancias temáticas antes aludidas se encuentra la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. El artículo 68 del citado texto reglamentario determinó que, a lo menos, las siguientes materias serían de su competencia:

- a) Institucionalidad, gasto fiscal, presupuesto, fomento y políticas públicas de largo plazo en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades;
- b) Rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades;
- c) Derecho a participar en la vida cultural;
- d) Derecho a participar en el desarrollo de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios;
- e) Democratización y acceso a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades;
- f) Libertad de investigación científica, creación artística y toda actividad creativa;
- g) Derecho a la protección contra los usos indebidos de la ciencia y tecnología;
- h) Derecho a la protección de intereses morales y materiales de producciones científicas, literarias, artísticas y culturales;
- i) Derecho a la comunicación y derechos Digitales;
- j) Protección de saberes colectivos, populares, territoriales y comunitarios, y su reconocimiento e inclusión en los sistemas de conocimientos;
- k) Garantías del conocimiento, autonomía tecnológica, modelo de desarrollo e innovación frente a los cambios globales y crisis climática;

l) Principios de la bioética y protección de los avances de la tecnología;

m) Televisión pública, espectro radioeléctrico, Consejo Nacional de Televisión y regulación cinematográfica;

n) Derechos de los pueblos indígenas en relación con su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas y de su propiedad intelectual sobre ellos, y

ñ) Principios e institucionalidad de la bioética para la promoción de valores, normas y políticas sustentadas en valores éticos, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad de las personas, la integridad y la justicia, para enfrentar los desafíos del desarrollo social, económico, tecnológico y científico del país.

Con el antecedente del mandato reglamentario señalado precedentemente, la Comisión celebró su sesión constitutiva el día 18 de octubre de 2021, oportunidad en la cual, junto con tomar nota de las principales disposiciones reglamentarias que regirían su labor, las y los convencionales constituyentes integrantes de esta instancia comprometieron su mejor esfuerzo y dedicación en las tareas para las que fueron mandatados por la ciudadanía.

5. Coordinación y otros cargos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento General, la mayoría de las y los integrantes de la Comisión en sesión N° 40 renovó la Coordinación por dos convencionales, encargada de dirigir el debate y de informar periódicamente al Pleno, de acuerdo a su cronograma de trabajo, el avance de la Comisión. Los Coordinadores elegidos fueron las convencionales constituyentes señoras Malucha Pinto y Carolina Videla.

Asimismo, en la misma sesión, se renovaron los enlaces transversales de la Comisión, siendo electos el convencional señor Ricardo Neumann y la convencional señora María Angélica Tepper.

II.- LABOR DESARROLLADA POR LA COMISIÓN.

La Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios celebró sesenta y tres sesiones, entre los días lunes 18 de octubre de 2021 y el 27 de marzo de 2022.

En tales sesiones participaron las y los convencionales constituyentes miembros de la Comisión, cuya asistencia quedó registrada en las actas de tales sesiones, según se da cuenta en el sitio web oficial de la Convención Constitucional, destacándose una asistencia del total de los integrantes de la Comisión cercana al cien por ciento de las sesiones celebradas y demás actividades realizadas por ella.

III. DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL

Tal y como se informara en el Primer informe de la Comisión, para abordar en general el mandato de proponer normas constitucionales referidas a las materias de competencia de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios a lo largo del trabajo de la Comisión: (i) se recibieron audiencias públicas con representantes de órganos e instituciones del Estado, así como de representantes de la academia y centros de estudio, de la sociedad civil, ONGs, gremios y la ciudadanía; (ii) se desarrollaron visitas y actividades en terreno, para recopilar mayor información y antecedentes sobre estas materias; y (iii) se recopilaron las iniciativas constituyentes vinculadas a la competencia de la Comisión y se deliberó en torno a las mismas.

Las referidas audiencias públicas ya fueron informadas en el Informe N° 1 de esta Comisión.

Audiencias del inciso tercero del artículo 42 del Reglamento de Participación Popular.

En cuanto a este punto, es preciso señalar que una vez votadas en general las iniciativas constituyentes sobre los temas que abordara la Comisión con ocasión del primer informe, se recibieron las audiencias contempladas en el inciso tercero del artículo 42 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente.

La selección de los expertos se efectuó a proposición de las y los convencionales constituyentes miembros de la Comisión. Expusieron las siguientes personas:

Paulina Ramos Vergara, Académica Bioética y Asesora Jurídica, Facultad de Medicina UC y Pontificia Universidad Católica de Chile.

Francia Jamett, Encargada de la Unidad de Memoria y DDHH del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Patricio Díaz, Coordinador de la sección de gestión para la salvaguardia del Dpto. de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A continuación, se consigna una síntesis de las exposiciones de los especialistas recién mencionados.

Paulina Ramos Vergara

Comenzó su presentación, señalando que los textos que comenta incluyen el derecho al conocimiento, el derecho a la comunicación científica, y los beneficios del conocimiento y protección contra los usos indebidos y nocivos; luego, los derechos de autor, el derecho de propiedad intelectual indígena, y el rol del Estado en materia de derecho de autor. Además, hay normas en relación a derechos digitales, protección de datos, derecho a la información digital de calidad, y respecto al derecho a la memoria.

Un primer comentario, señaló que las Constituciones son hijas de sus tiempos y proyectos de futuro. Las constituciones no surgen en una oficina de proyectos, ni se diseñan en una mesa de dibujo, para luego ponerlas en práctica. Casi siempre las constituciones son el producto de una situación histórica-política de envergadura existencial. Continuó afirmando que el profesor de derecho Bruce Ackerman, de la Universidad de Yale, habla del “constitutional moment” necesario para la labor constituyente. La incorporación de determinados postulados materiales al texto constitucional en uno de esos momentos resulta siempre de la voluntad de dejar sentadas determinadas decisiones básicas que representan el consenso constitucional.

Por lo tanto, argumentó, agregar contenidos en el marco de un proceso constituyente es algo profundamente diferente a la introducción de contenidos durante la vida y vigencia prolongada de una Constitución. Por otra parte, destacó y agradeció el gran trabajo normativo que han realizado que parte de la escucha de propuestas constitucionales diferentes y en algunos casos divergentes no resueltas, con un conglomerado de derechos y obligaciones fundamentales, también de enunciados programáticos, garantías institucionales y hasta normas de carácter meramente simbólico.

Luego, señaló que en el segundo informe se observa que se proponen la consagración en el texto constitucional de un catálogo de nuevos derechos, de propuestas de nueva institucionalidad, de un rol dinámico y más amplio del Estado. Destacó el gran valor de los derechos a que hacen mención y se agradecen las formulaciones en términos simples, breves y directos. Señaló

que los Derechos fundamentales son los entendidos como aquellos derechos, libertades, igualdades e inviolabilidades que fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la dignidad de los titulares. Los derechos humanos, para su efectividad requieren de normativas claras, de un lenguaje preciso, de una cultura que los promueva, de una institucionalidad que los garantice y considere sanciones eficaces ante su amenaza y vulneración. ¿Cómo se garantizan los nuevos derechos constitucionales? ¿Con el recurso de protección?

Remató diciendo que: “Sólo por una cuestión de tiempo y por el trabajo que como académica he venido realizando me detendré en los siguientes cinco puntos:

1.- Llama la atención de nuevos fines del Estado a que hacen mención varias normas de este texto solo a modo ejemplar “El Estado deberá fortalecer la conciencia histórica de las comunidades...”. También se agregaron la protección medioambiental y el bienestar animal. Estos enunciados que se enmarcan en el derecho constitucional objetivo no generan ningún derecho subjetivo de los ciudadanos, aunque no dejan de tener efectos, porque a partir de su orden jurídico - constitucional superior respecto de la legislación inciden en la interpretación y aplicación del derecho ordinario.

2.- Se reconoce con diferentes formulaciones algunas más extensas que otras “el derecho y libertad de investigación, creación y difusión del conocimiento”. Este derecho y libertad reconoce como límites los otros derechos fundamentales. La necesidad de ponderar los derechos.

3.- La Ciencia, los sistemas de conocimiento hoy más que nunca queda en evidencia se desarrollan en comunidad, institucionalizada y de forma colaborativa. La pandemia marcó un antes y después en muchas dimensiones de la vida personal y social por de pronto la colaboración público- privada en la investigación sanitaria y atención sanitaria.

4.- Que el mal uso de las tecnologías (neuro o biotecnologías) que pueden afectar la integridad física, psíquica y mental de las personas es un gran aporte.”

Destacó en este ámbito el artículo 1.5, que dice que la Constitución garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, síquica y mental de toda persona humana. Con todo, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su

utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.

Señaló como comentario, que debió considerarse la integridad mental.

Apuntó que en la teoría de los derechos fundamentales la integridad física y síquica, tiene un amplio desarrollo por la jurisprudencia y la doctrina que no responde directamente a la nueva categoría que plantea el desarrollo de la neurociencia. De allí que, corresponde un tratamiento especial en los Tratados Internacionales, en las Constituciones y también a nivel legal la protección de la integridad mental ante el mal uso de las neurotecnologías. Dicho en otras palabras, la protección a la integridad mental no está comprendida dentro del enunciado de derechos y garantías existentes y en los antecedentes de su estipulación. Más adelante indicó que no parece procedente o aconsejable tratar de incorporar los ámbitos de protección requeridos por el surgimiento de fenómenos nuevos, dentro del enunciado de derechos ya existentes. Por ejemplo, forzar incluir “la indemnidad mental “en la” indemnidad síquica” categoría ya existente, atendido que su contenido protegido responde a otras premisas”.

Continuó señalando que la integridad física ha sido tradicional y consistentemente entendida como la integridad somática, en el sentido de proscribir la sección, daño o privación de cualquier parte del cuerpo de una persona, siendo el mecanismo de protección usual el requisito de regulación legal para las intervenciones corporales. La protección a la integridad síquica fue introducida dentro del catálogo de derechos en el caso de Chile recién en la Constitución de 1980 con el objetivo preciso o específico de proteger los procesos psicológicos (de percepción, de cognición, de reflexión) que llevan a una persona a configurar su identidad, desarrollar los procesos mentales asociados a ella, y mantenerla en el tiempo; los típicos ejemplos de daño a la integridad síquica mencionados en su momento fueron la estimulación subliminal y las técnicas de “lavado de cerebro”.

Por último y para finalizar, destacó una propuesta de norma que mandata al Estado (Poder Legislativo y Ejecutivo) para que consideren las mejores evidencias científicas y de otros sistemas de conocimientos disponibles en la formulación de normas jurídicas, planes, proyectos y políticas públicas.

Francia Jamett

Comenzó su presentación señalando que se basa en su experiencia en gestión en sitios de memoria y sus funciones profesionales en el Ministerio de las Culturas. Se trata de recuperar los sitios de memoria y profundizar la acción del Estado en esa materia. Indicó que no existe una política pública integral o profundizada sobre el derecho a la memoria y las víctimas de la dictadura cívico-militar. La acción del Estado no ha sido continua, a pesar de lo que señalan las Comisiones de la Verdad como el Informe Rettig y el Informe Valech. A este último documento se refirió con mayor énfasis.

Luego, indicó que desde el año 2005, cuando fue publicado el Informe Valech, se establecieron las medidas de reparación y derecho a la memoria, las cuales incluyen las garantías de no repetición, vale decir, que estos acontecimientos no se reproduzcan nuevamente. Realizando una cita textual del Informe, concluyó que este obliga al Estado a establecer el derecho a la memoria, el reconocimiento de la memoria y a la reparación, además incorporando a la sociedad en la participación del restablecimiento de ese derecho. Por último, se propone la construcción de sitios de la memoria y creación de fondos tanto de editoriales como para construir obras de arte en este sentido.

Por otra parte, indicó, se debe profundizar la educación en derechos humanos, entre otras medidas. También que haya un reconocimiento sobre los hechos ocurridos.

Argumentó que en 2015 se conforma la Unidad de Derechos Humanos en el Ministerio de las Culturas, y que apoya 95 asociaciones de Derechos Humanos que administran y gestionan los llamados Sitios de Memoria, lugares que tienen significado para el recuerdo, homenaje o conmemoración de las violaciones a los Derechos Humanos. Destacó también las expresiones artísticas o culturales, que otorgan una conciencia sobre los Derechos Humanos, y la creación de mensajes donde contribuye como medida efectiva a un marco de no tolerancia a la violación de los Derechos Humanos, o a no crear una normalización del horror.

Finalizó reforzando la importancia del lenguaje artístico que pretende transmitir y que han generado una posibilidad de encuentro ciudadano. Hay que recordar que el Estado debe garantizar el derecho a la memoria, lo que debe dar pie a una cultura basada en el respeto a los Derechos Humanos, lo que también se traspasa a la elaboración de políticas públicas concretas. Los proyectos que desarrollan estas organizaciones representan un tipo de resistencia cultural con sentido, pertenencia y proyección hacia el futuro.

Patricio Díaz

Planteó que durante el trabajo de la Convención se ha visto un gran despliegue respecto a las culturas comunitarias, y su relación con el Patrimonio Cultural e Inmaterial (PCI), y en ese ámbito abordó ciertas demandas de los movimientos comunitarios.

En la Constitución actual, artículo 19 inciso 10, se aborda el punto del tema del patrimonio, que tomó en consideración la noción de “patrimonio construido”, que relevó la conferencia de la UNESCO de 1972. Es decir, señaló, existe una trayectoria en el Estado respecto al patrimonio construido e incluso documental, trayectoria que se expresa en la creación de instituciones como la DIBAM. Sin embargo, el Estado firmó una serie de tratados que lo obligan a acomodarse a nuevas realidades.

Señaló luego que el trabajo de la Convención está tomando los conceptos más modernos respecto al PCI, rescatando incluso el arte o culturas callejeras, lo que sin duda es un avance. La Declaración de Friburgo, por ejemplo, se destacó como documento considerado clave. Sin embargo, surge la necesidad de relevar todavía más la noción de la PCI.

Hacia 2008, continúa expresando, Chile ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, ubicada en el mismo rango del Convenio 169 de la OIT y de las restantes convenciones internacionales firmadas por el Estado de Chile, muchos de ellos promovidos por la UNESCO. En este contexto y en paralelo, hay que señalar que el patrimonio está siendo resguardado más bien por comunidades y grupos más bien por fuera de las fronteras del Estado. Por lo tanto, hay una gran deuda del Estado de Chile, esto es, ser un Estado garante respecto al tema patrimonial.

Argumentó que, en el trabajo desarrollado en la Convención, falta aún un mayor reconocimiento sobre PCI, a pesar de los avances en el tema indígena o callejero. El PCI es esencialmente una noción de naturaleza comunitaria, sin color político, que incluye conocimientos artesanales, religiosidad popular, oficios antiguos, culturas urbanas y rurales, carnavales, y una serie de otras expresiones que el Estado debiera proteger, siguiendo al Convenio 169.

En la práctica, existen más de 700 comunidades de cultoras, cultores, portadoras de PCI que en este momento quedarían sin protección, y por ello las propias comunidades se han quejado frente al Estado de falta de protección. Las comunidades cuestionan el rol del Estado al respecto.

Después, y como ejemplos concretos, planteó el tema de los organilleros, quienes en una oportunidad fueron reprimidos por la fuerza policial,

acusados de tráfico de animales. Como segundo ejemplo, en la Fiesta de la Tirana, cuyos bailes religiosos fueron demandados principalmente por su música. El tercer ejemplo, señaló, los alfareros de Quinchamalí u otras tradiciones como los Bailes Chinos del norte, todos ellos trabajos o expresiones sobre la cual no hay resguardo de su autoría de tales obras artísticas, por lo que tienen un riesgo de desaparición. En el fondo, estos son ejemplos de tradiciones no protegidas.

Concluyendo, afirmó que este es el “tiempo de las comunidades”, a quienes les gustaría verse reflejada en la nueva Constitución. Incorporar sus demandas sería un avance en términos de democracia comunitaria y para el propio patrimonio cultural en el país.

IV.-DELIBERACIÓN DE INICIATIVAS

Iniciativas constituyentes

A continuación, se efectúa una descripción de las iniciativas convencionales constituyentes, de las iniciativas indígenas constituyentes y de las iniciativas populares de normas que la Comisión ha conocido y dan lugar al presente informe. Al efecto, se describirán los antecedentes de cada proposición constitucional o una síntesis de ellos, el texto normativo propuesto y la deliberación habida en torno a ellas.

De igual manera, se consignan los acuerdos que, en cada caso, adoptó la Comisión a su respecto.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°104-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre descentralización de la ciencia, ingresada por Juan Pablo Ogalde Herrera y Elaine Herrera Berna de la Comunidad Indígena de La Banda.

Para la fundamentación de esta Iniciativa se expuso:

El problema radica en la excesiva centralización de los recursos y reconocimientos científicos, no solamente en la región metropolitana, sino que también en instituciones académicas como la Universidad de Chile o la Pontificia Universidad Católica. Se debe ser más inclusivo y descentralizar las ciencias, considerando a las regiones e igualdad de género en recursos, instituciones y/o reconocimientos honoríficos.

Así, el 13 de agosto de 2018 por decreto Ley No. 21105 se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y las subsecretarías regionales ministeriales comenzando por cinco macro zonas (Norte, Centro, Centro-Sur, Sur y Austral), para a partir del quinto año (2023) continuar con la creación de todas las subsecretarías regionales. Luego el año 2020 se crea la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) que reemplaza al CONICYT o Centro Nacional de Ciencia y Tecnología. Cambios que apuntan en la dirección correcta para descentralizar la ciencia y el conocimiento en Chile considerando el bajo presupuesto del Estado dedicado al financiamiento de actividades de I+D en el país que alcanza un 0,2% del PIB, mientras que el promedio para países OCDE es de un 0,56%. Según portal de ANID, en Chile hay 9.204 personas trabajando como investigadores/as y 15.548 personas en actividades de I+D, y en Jornadas Completas Equivalentes (JCE).

Además, se calcula 1,1 personas investigadoras por cada 1.000 personas trabajando, mientras que en los países miembros de la OCDE el promedio es de 8,6. Por otro lado, la productividad científica que es un reflejo de la cantidad de investigadores, donde se observa una total asimetría entre la Región Metropolitana y las otras regiones. Así, la mayoría de masa crítica de los investigadores e investigación se concentra en la Región Metropolitana, Santiago.

Los investigadores compiten por Fondos concursables nacionales como Fondecyt, FONDAP, Anillos, proyectos Basales, etc., fondos que brindan apoyo para generar conocimiento por varios años. Al concentrarse la mayoría de los investigadores en la Región Metropolitana hace que las desigualdades sociales observadas en Chile por la centralización también se mantengan y proyecten al ámbito científico, donde las regiones ganan menos proyectos comparado con la Región Metropolitana, cuentan con menos investigadores por habitante, carecen de centros de investigación de excelencia, carecen de Universidades de excelencia en investigación, hay también carencia de academias de ciencias o capítulo regionales, y un mínimo reconocimiento a sus investigadores que compiten con una cancha totalmente desnivelada en oportunidades, infraestructura y masa crítica de capital humano avanzado. Si bien se reconoce que se han hecho esfuerzo por descentralizar la ciencia esto no son suficientes. A

modo de ejemplo, ANID lista 15 centros basales por cinco años renovable cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la base científica de Chile para que el país pueda alcanzar mayor desarrollo social y económico (ANID 2022) y que los resultados de las investigaciones contribuyan con la política pública y/o aumentar la competitividad de la economía chilena. De estos centros, el 87% (13/15) están asociados o liderados por Universidades de la región metropolitana y solo 13% (2/15) a regiones. De igual manera si observamos la Academia de Ciencias de Chile, creada en 1964 vemos que en su gran mayoría los investigadores representan a Universidades de la Región Metropolitana y las regiones están muy poco representadas. Misma situación ocurre con los Premios Nacionales que honran a investigadores sobresalientes en diversas disciplinas: la mayoría de los galardonados son de la zona central. Las regiones y las mujeres a menudo han sido invisibilizado(a) s con estos honores.

Por otro lado, la constante especialización y surgimiento de nuevas especializaciones en medicina, economía o prehistoria por ejemplo hace necesario que se amplíe el abanico de premios nacionales. Por ejemplo, el premio Nacional de Historia debería dividirse en Premio Nacional de Historia y Premio Nacional de Ciencias Arqueológicas y Bioantropológicas considerando las múltiples generaciones de científicos y científicas que aportan a generar nuevos conocimientos y que no son reconocidos a nivel nacional. Más aun, Chile es reconocido a nivel mundial por su riqueza arqueológica, y paleontológica entre otras, donde de las siete maravillas chilenas que son patrimonio cultural de la humanidad reconocidos por UNESCO, tres de ellas son de carácter arqueológico: El parque nacional Rapa Nui (1995), El sistema vial andino Qhapac Ñan (2014), y Los asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro (2021). De igual forma debería existir un Premio Nacional en Medicina y en Economía.

Por último, y no menos importante, cabe señalar la paradoja que por decretos de Ley no todas la Universidades del CRUCH tienen la misma participación en los jurados o comités que buscan reconocer a sus pares en los premios nacionales. Por ejemplo, la Universidad de Chile aparece por decreto ley N° 19.169 formando parte de todos los jurados, centralizando gran parte de las decisiones públicas y políticas de la academia, mientras que las otras Universidades deben irse rotando y solo participan mediante un representante del CRUCH.

Se propone entonces una descentralización de los recursos, capital humano y reconocimientos académicos, propendiendo a una homologación, equilibrio y/o equivalencia de fuerzas en la estructura científica del país. Dando a

las regiones una mayor posibilidad de desarrollo, descentralizando las políticas y toma de decisiones del este ámbito.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

ARTÍCULO X1: EL Estado garantiza el financiamiento para la investigación en toda región y Universidad regional, asegurando su participación con equidad de condiciones con masa crítica equivalente.

ARTICULO X2: Las regiones y comunas contarán con recursos que le permitan desarrollar investigaciones de interés comunal y regional, potenciando el desarrollo científico, tecnológico, artístico y musical, conforme a las necesidades particulares catastradas y en prelación de lo establecido por el estado.

ARTICULO X3: El Estado debe asegurar que todas las regiones tengan igualdad en oportunidades de crear centros educacionales y de excelencia en todos sus niveles, asignando atribuciones y competencias a la respectiva autoridad de gobierno y administración del territorio comunal.

ARTICULO X4: El Estado fomentará la formación de científicos o inserción de estos en regiones y comunas, a fin de potenciar el conocimiento científico en las diversas disciplinas de forma equitativa.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°144-4

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho de propiedad privada, la libertad de adquirir toda clase de bienes, y el derecho a la libre creación intelectual, artística y científica, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Rocío Cantuarias, Jorge Arancibia, Martín Arrau, Carol Bown, Rodrigo Álvarez, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza y, Arturo Zúñiga.

Esta iniciativa ingresó a la Secretaría de la Convención el día 10 de enero de 2022, y la Mesa Directiva resolvió que pasara a la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio.

De lo anterior se dio cuenta en la sesión del Pleno de la Convención N° 49°, del 18 de enero de 2022.

Los resultados económicos y sociales de una nación son a su vez el resultado de su buen o mal diseño institucional. En aquellas naciones donde se observa un diseño inclusivo sus nacionales experimentan un mayor progreso y desarrollo y, con ello, un mayor bienestar social general. Un diseño institucional inclusivo implica: (i) que el poder no está concentrado y que hay pesos y contrapesos efectivos; (ii) competencia en los mercados, de manera que haya capacidad de mover el statu quo; (iii) capacidad de participar en la vida social y económica y de acceder a las diversas oportunidades, para lo que es clave la educación; (iv) derechos de propiedad, bien establecidos, que permitan capturar el resultado del esfuerzo personal; y (v) el respeto por el Estado de Derecho, que implica la existencia de un conjunto de reglas que son parejas para quienes se encuentran en la misma situación y que son respetadas por autoridades, personas y por la sociedad civil en general.

En un diseño institucional inclusivo, a diferencia de uno extractivo, los negocios no controlan al Estado ni el Estado controla los negocios. En este sentido, y respecto a la discusión que tiene lugar en Chile sobre el rol del Estado en materia económica, lo que cabe preguntarse es cuánto de la falta de inclusión social o del grado deseable de inclusión social implica (o no) que el Estado deba jugar un rol preponderante. No se trata de negarle un rol al Estado, pues no lo hacemos.

Por el contrario, éste tiene un papel muy importante que jugar, entre otros, para corregir aquellas fallas del mercado que puedan ser solucionadas por una intervención estatal o regulatoria -en la medida que ella sea menos costosa que la falla que se pretende corregir- y en materia de la política social, de manera de generar las condiciones para que todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades en la vida nacional y para la realización de su proyecto de vida, debiendo -el Estado- realizar todas las acciones necesarias para alcanzar el bienestar social a través de las acciones redistributivas. Ello además de otros roles insigne como el conservar el orden público interno y la seguridad externa; conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, etc.

La pregunta a hacerse entonces es qué instituciones o qué cuestiones del diseño institucional debemos cuidar con el objeto de que ni el mercado ni el Estado se transformen ya sea en un mercado o en un Estado clientelar (porque no debemos olvidar que las fallas y el mal funcionamiento que hoy se le critican o adjudican al mercado bien pueden aplicarse al Estado, y en

una mayor y más preocupante proporción, considerando el poder que éste detenta). De ahí que sea tan relevante promover la competencia, la apertura de los mercados, la innovación, los contrapesos institucionales, el Estado de Derecho y, por, sobre todo, la promoción de la persona y el respeto por sus derechos en el centro.

El enfoque, entonces, no anula ni busca anular el rol del Estado, sino que lo redirige hacia promover la libertad de las personas y que éstas tengan los medios para participar en igualdad de condiciones de la vida en sociedad, sin sustituir a la persona. Si, en cambio, el rol del Estado es preponderante, la sociedad no será más inclusiva, sino que habremos caído en el clientelismo estatal. De ahí que, entre otras cuestiones muy relevantes del diseño institucional y que se tratan en otros capítulos, cobren gran importancia el resguardo del derecho de propiedad, los derechos de las personas para emprender (y desafiar el statu quo, la libre competencia), y el no ser objeto de discriminaciones arbitrarias o quedar sujeto a la discrecionalidad, por parte del Estado, en el trato en materia económica y tributaria.

Respecto del derecho a la propiedad y de propiedad, cabe destacar que en prácticamente todas las Constituciones del mundo se consagra el derecho de propiedad privada. En Chile, el “Estatuto Constitucional de la Propiedad” se podría resumir en:

- La libertad para adquirir toda clase de bienes, llamada también garantía del derecho “a la propiedad” (artículo 19 N°23 de la Constitución);
- El derecho de propiedad propiamente tal (artículo 19 N° 24, incisos primero al quinto de la Constitución);
- La propiedad minera (artículo 19 N° 24, incisos sexto al décimo de la Constitución);
- La propiedad sobre las aguas (artículo 19 N°24, inciso decimoprimer de la Constitución); y,
- La propiedad intelectual, que comprende la propiedad intelectual propiamente tal y la propiedad industrial (artículo 19 N° 25 de la Constitución).

Así, la Constitución actual, establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales. Es básicamente una reformulación de los contenidos de las Cartas de 1833 y 1925.

Contiene 10 párrafos, de los cuales 6 están dedicados a los recursos naturales: cinco a la propiedad minera y uno a los derechos sobre las aguas.

La Carta Magna vigente salvaguarda: “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.” A su vez dispone que la Constitución asegura a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales”. Asimismo, la Constitución actual da el mandato a la ley para regular la propiedad, la cual a su vez ya se encontraba regulada, en mayor parte, en el Código Civil. Los titulares del derecho de propiedad son todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en Chile, tengan o no calidad de residentes o se encuentren de paso.

La Constitución actual señala al efecto que “Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Así, el derecho de propiedad en Chile sí tiene límites. El primero está en la Constitución, la cual establece que los límites de su “función social”, es decir “cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”. El segundo está en el Código Civil, en que se encuentra la definición legal de propiedad, que dice “El derecho de dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o el derecho ajeno” (artículo 582). Es más, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en las últimas décadas, hasta llegar a afirmar que los contratos celebrados por privados están también sujetos a las limitaciones que se derivan de la función social de la propiedad. Es precisamente esta función social la figura jurídica que habilita la causal de limitación de la propiedad, y que “comprende cuando exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental” (artículo 19 numeral 24° inciso segundo de la Constitución).

Por tanto, resulta equívoco sugerir que en Chile existiría un derecho de propiedad absoluto, o que éste tendría preponderancia sobre otros derechos fundamentales como la vida. Así lo ha establecido por lo demás el Tribunal Constitucional, en su sentencia rol N° 1452-09, de 2010, en cuanto a que “esta autorización, dada por el constituyente al legislador para disponer limitaciones y

obligaciones a la propiedad, a condición de que se deriven de su función social [...], se aplica, prima facie, a todas las clases y especies de propiedad, incluyendo los bienes incorporeales, sin excluir los que nacen del contrato. Que, al establecer reglas para balancear los legítimos intereses públicos con la defensa de la propiedad privada, la Carta Fundamental establece unos mismos criterios, cualquiera sea el origen o título de la propiedad adquirida. [...] Y que tampoco hay nada en la naturaleza de derecho de propiedad sobre bienes incorporeales que impida limitarlos debido a la función social de la propiedad”.

Con la reforma a la Constitución del año 2001, se agregó “la libertad de hacer y difundir las artes”. Se asegura, por lo tanto, el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie. La ley debe seguir protegiendo por el solo hecho de la creación de la obra, que adquieren los autores de obras de inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos. Lo anterior es especialmente relevante de cara a los desafíos e instrumentos con que se enfrentarán los retos que impone la cuarta revolución industrial.

Uno de los efectos derivados de la función social de la propiedad es la expropiación, que se encuentra regulada dentro de la misma Constitución. La expropiación puede definirse como “un acto de la autoridad administrativa competente fundado en una ley que lo autoriza, en virtud de la cual se priva del dominio del bien sobre el cual recae ese derecho o de alguno de sus atributos o facultades esenciales, por causa de utilidad pública o de interés nacional, con sujeción a un procedimiento legalmente determinado y pagando al expropiado la indemnización justa”. Es por esto que, para expropiar se necesita primero dictar una ley; segundo, que la ley autorice la ejecución de una o más expropiaciones; tercero, que la ley sea dictada por utilidad pública o el interés nacional y; cuarto, debe determinar que las cualidades de los bienes que se expropien estén dentro de las causales de utilidad pública o interés nacional. Son, por tanto, tres fases, una que le corresponde al legislador, otra que le compete al órgano administrativo y una tercera que se confía al juez.

Así, el artículo 19 N° 24 inciso 3 de la Constitución actual se expresa que: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los tributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional”. Sin embargo, y cumpliendo la función básica de cualquier Constitución, que es proteger a los individuos del poder arbitrario del gobernante o de terceros, se establecen esenciales medidas de reparación y protección. La primera es que el expropiado puede reclamar de la legalidad del acto expropiatorio en tribunales, con derecho a indemnización por el daño

patrimonial causado que se fijará en la sentencia. La segunda es que, a falta de acuerdo, se debe pagar la indemnización en dinero en efectivo y al contado.

Sobre la materia, es necesario tener presente que existen otro tipo de expropiaciones, las llamadas “expropiaciones regulatorias”. Este fenómeno surge en EE. UU. a raíz del fallo de la Corte Suprema en el caso *Pennsylvania Coal vs Mahon*. La doctrina elaborada por el derecho constitucional estadounidense, y que es ocupada a menudo en el derecho de la inversión extranjera, manifiesta que se está frente a una expropiación de este tipo cuando el Estado regula un derecho de propiedad, de tal forma que lleva a que éste pierda un valor importante, por lo tanto, debería ser indemnizado. Esta argumentación se ha utilizado durante el último tiempo para debatir reformas en materias de carácter educacional, ambiental y en la regulación por cobros de estacionamientos.

Esto tiene especial importancia para la inversión (y entonces para el bienestar social), en que se efectúan gastos y desarrollan proyectos bajo ciertas reglas y bajo una situación determinada por esas reglas, y luego, a través de la legislación, las cargas y beneficios son alterados. La doctrina de las expropiaciones regulatorias ya se ha hecho explícita en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y tuvo su aparición por primera vez en el contexto de un fallo sobre peajes de transmisión eléctrica. Teniendo en consideración este problema, sería razonable, como lo hace la Constitución de Suecia, que se estableciera constitucionalmente una compensación por las intervenciones sobre la propiedad que impliquen la privación de sus facultades que no sean esenciales. Si bien, el Tribunal Constitucional en un principio aceptó la figura de la “expropiación regulatoria”, luego fue regresando a la tradición ya asentada en el derecho chileno, según la cual la pregunta relevante es si la limitación es legítima atendiendo a ciertos criterios de resolución. Y es en atención a tal distinción (entre limitación y expropiación) que el Tribunal Constitucional no ha admitido indemnización por cualquier limitación del derecho de propiedad que prive al particular de las facultades no esenciales.

En el contexto actual, los casos de colusión, financiamiento ilegal de la política y abusos de diverso tipo ocurridos durante los últimos años han generado un rechazo más o menos transversal hacia las élites económicas que es fundamental revertir, pues genera una serie de efectos nocivos en la dinámica política actual y para el bienestar de la población. Uno de ellos tiene relación con la proliferación de discursos que no se condicen con lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, en los últimos años se ha sugerido en los discursos públicos cierta contradicción entre la defensa de los derechos de propiedad y un desarrollo inclusivo y digno. Sin embargo, la evidencia sugiere que ocurre algo muy distinto.

Aquellos países que tienen una defensa robusta de la propiedad privada son los mismos países que tienen altos índices de desarrollo y también altos índices de igualdad.

Si se revisan las estadísticas mundiales, se podrá dar cuenta de que la propiedad privada en Chile no está lo bastante protegida en comparación con los países nórdicos y otros países europeos. Si revisamos el último índice 2020 de libertad económica (Index of Economic Freedom) del instituto de investigación Heritage Foundation, se puede notar que el lugar obtenido por Chile en el “índice de protección del derecho de propiedad” es la posición número 44 de 185 países, lo que deja a Chile en los últimos países del cuartil superior en materias de una real protección del derecho de propiedad.

Más interesante aún es ver que países como Nueva Zelanda, Suecia, Holanda, Finlandia, están hoy en el top ten de la tabla de aquellos países que protegen de forma más férrea la propiedad privada.

En simple, es posible inferir que la protección de la propiedad privada es una condición necesaria para la tan anhelada dignidad en el país.

De hecho, los resultados de un estudio reciente, titulado “Propiedad Privada, Desarrollo e Igualdad”, publicado en la Serie Debates Públicos, de la Universidad del Desarrollo, muestra que existe una fuerte correlación —de un 0,80 con alta relevancia estadística— entre la fuerza con la que se protege el derecho de propiedad en un país y el nivel que ha alcanzado de desarrollo humano ajustado por desigualdad.

De esta forma, la defensa y promoción de los derechos de propiedad constituyen una condición necesaria para poder alcanzar mayores niveles de desarrollo humano y bienestar.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, salvo respecto de aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o los que deban pertenecer a la Nación toda y así lo declare la ley.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella. Cuando así lo exija el interés nacional, una ley

de quorum calificado podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.

numero XX: El derecho de propiedad privada, en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales, y su transferencia y transmisión, entre personas vivas o por causa de muerte, con arreglo a la Constitución y las leyes, las que deberán respetar el contenido esencial del derecho.

La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado, en caso alguno, de sus bienes o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, esto es, usar, gozar y disponer, o del bien sobre el que recaiga, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa justificada de utilidad pública o de interés social o nacional. La expropiación solo podrá materializarse, y la toma de posesión material efectuarse, previo pago al contado y en dinero efectivo del total de la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. La indemnización se fijará de común acuerdo. A falta de acuerdo, la indemnización será determinada por los tribunales ordinarios de justicia y provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley.

Los tribunales ordinarios de justicia son competentes para determinar toda cuestión relativa a la legalidad del acto expropiatorio y al importe de la indemnización, los que deberán resolver conforme a derecho. Asimismo, toda persona que sea privada de su propiedad sin su consentimiento tendrá derecho a recurrir ante los tribunales de justicia para impugnar la toma de su propiedad, la indemnización o la cuantía de la misma.

La propiedad admitirá las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Las limitaciones y obligaciones derivadas de la función social darán lugar a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado al propietario siempre que causen afectación esencial del derecho, sean retroactivas o infrinjan el derecho a la igualdad ante las cargas públicas. Corresponderá exclusivamente a los tribunales ordinarios de justicia determinar, conforme a derecho, estas circunstancias. La función social de la propiedad sólo comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Número XX: El derecho a la libre creación intelectual, artística y científica y a la producción, divulgación y difusión de las artes y la investigación científica y técnica. Ese deber del Estado promover las artes y las ciencias.

La protección de los derechos de autor, cuya duración no será

inferior al de la vida del titular, así como de los derechos de propiedad industrial y otros derechos derivados de actividades intelectuales, artísticas, científicas, de investigación, tecnológicas o de otras creaciones análogas se reconocen y garantizan por el tiempo que señale la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial, lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y del artículo anterior.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°152-7 (4)

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho de propiedad y la libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes y creaciones intelectuales o artísticas, y de transferirlo o transmitirlo, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Bernardo Fontaine, Roberto Vega, Rodrigo Álvarez, Pablo Toloza, Patricia Labra, Luis Mayol, Geoconda Navarrete, Cristián Monckeberg, Angélica Tepper, Hernán Larraín, Manuel José Ossandón, Felipe Mena, Eduardo Cretton, Katherine Montealegre, Raúl Celis y, Marcela Cubillos.

Esta iniciativa ingresó a la Secretaría de la Convención el día 10 de enero de 2022, y la Mesa Directiva resolvió que pasara a la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio.

De lo anterior se dio cuenta en la sesión del Pleno de la Convención N° 49°, del 18 de enero de 2022.

A lo largo de la historia la propiedad ha gozado de un decidido prestigio y hoy en día el derecho de propiedad se encuentra consagrado en prácticamente todas las constituciones del mundo y en muchos tratados internacionales. Así, por ejemplo, la Constitución de Francia justifica la consagración del derecho de propiedad en su carácter “sagrado” y en su inviolabilidad, siendo la inviolabilidad mencionada también en las constituciones de Dinamarca, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú, entre otras.

El prestigio del derecho de propiedad no se vincula directamente con razones de eficiencia económica. En efecto, si la consagración del derecho de propiedad es o no el modo más eficiente de generar riqueza en un país no parece ser una cuestión que deba ser resuelta en el capítulo constitucional que se refiere a los derechos fundamentales de la persona, aquellos que les corresponden en tanto tales y que se derivan de su misma naturaleza. En lugar de ello,

encontramos dos razones fundamentales que nos impulsan a consagrar el derecho de propiedad en este capítulo. En primer lugar, que la propiedad es garante de la libertad de los individuos y freno del poder estatal. En segundo lugar, que la propiedad es legítima en tanto que las personas tienen derecho a los frutos del propio trabajo.

El goce de los frutos del propio trabajo no sólo es legítimo, sino que tiene también una naturaleza social, en tanto permite el intercambio, las relaciones y el encuentro entre las personas. Por otra parte, los espacios de autonomía que ofrece la protección de la propiedad privada también deben leerse bajo el prisma de su contribución a la vida en comunidad. La propiedad, en efecto, permite el desenvolvimiento de los individuos en la sociedad civil y su contribución con ella en la búsqueda del bien común.

Sin perjuicio de lo anterior, en contra de la propiedad suelen levantarse argumentos que aseguran que ésta promovería desigualdades excesivas y, en consecuencia, enemistad cívica. Por ello, esta propuesta de texto encarga a la ley establecer las limitaciones y obligaciones de la propiedad que se deriven de su función social, lo que tiene por objeto evitar que se abuse de la propiedad privada en perjuicio del bien de todos. Por otra parte, el texto indica que la propiedad se encuentra limitada por su función social y que de ella derivan ciertas obligaciones, lo que no implica en caso alguno que el Estado pueda condicionar la protección de la propiedad al cumplimiento de ciertos fines. La tarea del legislador es, más bien, compatibilizar la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad con su función social, a fin de armonizar los intereses particulares con el bien común. Por último, al indicarse lo comprendido en la noción de función social de la propiedad, se ha intentado otorgar ciertas directrices al legislador que, de todos modos, tendrá la flexibilidad suficiente para efectuar las modificaciones que exijan los tiempos, evitando arbitrariedades.

La regulación constitucional de la expropiación intenta, precisamente, compatibilizar el contenido esencial del derecho de propiedad con su función social. En efecto, en virtud de ésta, el Estado puede privar a los particulares de su propiedad en casos de utilidad pública o interés nacional. En virtud de aquel, la Constitución ampara los derechos de las personas en el procedimiento expropiatorio. La redacción de las garantías relativas a la expropiación se asemeja a lo dispuesto en otras constituciones vigentes en el mundo. Así, por ejemplo, la constitución de Alemania establece que la expropiación “podrá ser efectuada sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización”; la de España indica que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”; y la de

Dinamarca indica que “nadie puede ser obligado a desprenderse de su propiedad si no es por causa de utilidad pública. La expropiación sólo podrá tener lugar en virtud de una ley y mediante la correspondiente indemnización”. Por su parte, los textos constitucionales de Bélgica, Croacia, Francia, Argentina, Perú y Uruguay, entre otros, exigen el pago previo de una indemnización.

Objetivos generales de la propuesta.

(i) Consagrar el derecho de propiedad en el texto de la nueva Constitución.

(ii) Proteger el derecho de propiedad en tanto institución que permite la autonomía y el ejercicio de la iniciativa de los particulares, así como el goce de los frutos del propio trabajo.

(iii) Reconocer el derecho de propiedad en sus diversas especies, lo que implica más de una forma de propiedad (individual, familiar, comunitaria, cooperativa, estatal, mixta, indígena etc.).

(iv) Extender la protección tanto a las cosas corporales como a las incorporeales, de modo que ambos queden bajo el mismo estatuto. Al extenderse sobre las cosas incorporeales, el derecho de propiedad permite proteger los derechos adquiridos, especialmente de los ataques del legislador.

(v) Reservar a la ley la regulación del derecho de propiedad (sólo ella puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social). La reserva de ley impide que pueda regularse la propiedad por medio de un decreto con fuerza de ley o cualquier otra norma de inferior jerarquía a la de la ley común.

(vi) Compatibilizar la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad con su función social, a fin de armonizar los intereses particulares con el bien común.

(vii) Posibilidad de que el legislador establezca limitaciones a la propiedad derivadas de su función social. En efecto, las limitaciones al dominio que -por mandato del constituyente- puede hacer el legislador, no pueden afectar la propiedad en su esencia, sin la correlativa indemnización de perjuicios.

(viii) Determinar qué comprende la función social de la propiedad. La importancia de señalar lo que comprende la función social radica en establecer conceptos indeterminados de amplitud necesaria que permiten hacerse cargo de los distintos cambios y tendencias respecto de la función social, evitando arbitrariedades del legislador.

- (ix) Otorgar garantías frente a expropiaciones:
 - a. Garantías de procedimiento expropiatorio.
 - b. Indemnización previa en caso de expropiación.
 - c. Indemnización equivalente al perjuicio patrimonial causado.

Objetivos que se buscan impedir con la propuesta.

- (i) Falta de protección a los particulares sobre los bienes de su propiedad.
- (ii) Derecho de propiedad sólo sobre cosas corporales.
- (iii) No reservar a la ley la regulación del derecho de propiedad.
- (iv) Imposibilidad de que los particulares puedan adquirir bienes, limitando así su iniciativa y la esfera de su autonomía.
- (v) Afectación de derechos adquiridos por vía legislativa.
- (vi) Posibilidad de que pueda regularse la propiedad por medio de un decreto con fuerza de ley o cualquier otra norma de inferior jerarquía a la de la ley común.
- (vii) Arbitrariedad del legislador para determinar qué comprende o en qué consiste la función social de la propiedad.
- (viii) Posibilidad de privar a alguien de su derecho de propiedad fuera de un procedimiento expropiatorio.
- (ix) Falta de garantías frente a expropiaciones:
 - a. Posibilidad de expropiar por causales genéricas que puedan prestarse a abuso.
 - b. Posibilidad de expropiar sin indemnización.
 - c. Posibilidad de expropiar sin indemnización previa.
 - d. Posibilidad de expropiar sin pago de indemnización equivalente al perjuicio patrimonial causado.

Temas que proponemos incorporar en la nueva Constitución.

- (i) Posibilidad de que los particulares puedan adquirir derecho de propiedad.
- (ii) Protección del derecho de propiedad sobre cosas corporales e incorporeales.
- (iii) Reservar a la ley la regulación del derecho de propiedad.
- (iv) La función social de la propiedad.
- (v) Garantías frente a privación de la propiedad:
 - a. Garantías de procedimiento expropiatorio.
 - b. Indemnización previa en caso de expropiación.
 - c. Indemnización equivalente al perjuicio patrimonial causado.

Constituciones extranjeras que sirvieron de modelo.

En relación con el Derecho Comparado, de acuerdo con el comparador de Constituciones con el que ha aportado nuestra Biblioteca del Congreso Nacional, se evidencia que el derecho de propiedad se consagra en al menos 166 Constituciones. Así, se sintetiza en la herramienta que aquel derecho “permite a los individuos y a las empresas la propiedad exclusiva de bienes inmuebles, efectos, instrumentos financieros u otros objetos”.

Con ello se demuestra que estamos ante un derecho fundamental que es, además, de alcance global.

A mayor abundamiento, es aún más garantista en lo que dice relación con “la protección de la expropiación”, considerándose en 180 Constituciones. Así, se especifica que, así se “protege a las personas y empresas de la confiscación gubernamental de su propiedad sin una compensación adecuada. El monto de la compensación puede especificarse con la utilización de términos como “justa”, “completa”, “adecuada”, “suficiente”, etc”.

Con ello se demuestra que estamos ante un derecho fundamental que es, además, prácticamente universal.

Asimismo, para una mejor revisión, es preciso tener presente a modo de ejemplo las siguientes normativas constitucionales:

Constitución de Alemania:

Artículo 14.3. La expropiación está permitida sólo por razones de bien común. Podrá ser efectuada sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización. La indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados. En caso de discrepancia sobre el monto de la indemnización quedará abierta la vía judicial ante los tribunales ordinarios.

Constitución de Argentina:

Artículo 17. La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Constitución de Bélgica:

Artículo 16. Nadie puede ser privado de sus bienes salvo en caso de expropiación con fines públicos, en los casos y modalidades establecidos por la ley y a cambio de una indemnización justa pagada de antemano.

Constitución de Bolivia:

Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión.

Constitución de Croacia:

Artículo 50. En interés de la República de Croacia, los bienes pueden ser restringidos o expropiados por ley previa indemnización equivalente a su valor de mercado.

Constitución de España:

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Constitución de Dinamarca:

Artículo 73.

1. La propiedad es inviolable. Nadie puede ser obligado a desprenderse de su propiedad si no es por causa de utilidad pública. La expropiación sólo podrá tener lugar en virtud de una ley y mediante la correspondiente indemnización.
2. Cuando un proyecto de ley sobre expropiación sea aprobado, un tercio de los miembros del Folketing podrá exigir, en los tres días laborables siguientes a la aprobación definitiva del proyecto, el proyecto no sea presentado a la sanción real, antes de la celebración de nuevas elecciones al Folketing y cuando el proyecto sea aprobado nuevamente por la Cámara constituida.
3. Los tribunales son competentes para determinar toda cuestión relativa a la legalidad del acto expropiatorio y al importe de la indemnización. La verificación del importe de la indemnización puede ser conferida por una la ley a los tribunales instituidos a este efecto.

Constitución de Francia:

Artículo 17. Desde que el derecho a la propiedad es inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de él, a menos que la necesidad pública, legalmente establecida, obviamente lo requiera, y se haya pagado una indemnización justa y previa.

Constitución de Hungría:

Artículo XIII.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. La propiedad conlleva responsabilidad social.

2. Los bienes sólo pueden ser expropiados excepcionalmente, en interés público y en los casos y formas previstos en una ley, con sujeción a una indemnización plena, incondicional e inmediata.

Constitución de Perú:

Artículo 70. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

Constitución de Portugal:

Artículo 62.

1. Se garantiza a todos el derecho a la propiedad privada y su transmisión “intervivos” o “mortis causa” con arreglo a la Constitución.

2. La expropiación por causa de utilidad pública sólo podrá ser efectuada de acuerdo con la ley y mediante el pago de una justa indemnización.

Constitución de Uruguay:

Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieron por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.

Normativa internacional sobre derecho de propiedad y su protección.

No solo es suficiente con la inspiración de las Constituciones comparadas, cada vez es más relevante los acuerdos internacionales al efecto,

que dan cuenta de derechos que van demostrando una universalidad en favor de las personas, independiente de su origen.

Como se verá en este apartado, el derecho de propiedad y sus garantías son parte de la normativa internacional, a nivel universal y regional, en diversos continentes. En adelante, se citan las declaraciones, cartas y tratados internacionales al efecto, con los artículos específicos que dan cuenta de la relevancia global que tiene este derecho fundamental. Muchos de estos son aplicables a Chile, y, los demás, sirven para tener presente que la propiedad y su protección es un derecho que va más allá de las latitudes.

Entre otros (dado que se ha revisado la propiedad en general -podría agregarse también aquellos de propiedad intelectual, industrial, artística), destacan los siguientes textos internacionales:

1.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Artículo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

2.- Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

3.- Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

ARTÍCULO 1

Protección de la propiedad

Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la

reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas.

4.- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

5.- Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados

Artículo 2

2. Todo Estado tiene el derecho de:

c) Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de la compensación sea motivo de controversia, ésta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con el principio de libre elección de los medios.

6.- Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul)

Artículo 14

Estará garantizado el derecho a la propiedad. Este solamente podrá ser usurpado en el interés público o general de la comunidad y de conformidad con las disposiciones de las leyes adecuadas.

7.- Declaración de los Derechos Humanos en el Islam

ARTÍCULO DECIMOQUINTO

a) Todo ser humano tiene derecho a la propiedad, adquirida por medios legalizados en la Sharía, así como a toda propiedad que no resulte dañosa, ni a sí ni a otros, individuos o sociedad. La expropiación no será lícita sino por exigencias del interés público, y ello a cambio de una indemnización justa e inmediata.

b) Se prohíbe la confiscación o incautación de bienes, excepto a requerimiento de la Sharía.

8.- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Artículo 17. Derecho a la propiedad

1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual.

9.- Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Artículo 23. Derecho a la propiedad.

Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor,

principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.

10.- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

Artículo 15. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada.

11.- III (Tercer) Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra

Artículo 18 - Propiedad del prisionero

Todos los efectos y los objetos de uso personal -- excepto las armas, los caballos, el equipo militar y los documentos militares -- quedarán en poder de los prisioneros de guerra, así como los cascos metálicos, las caretas antigás y los demás artículos que se les haya entregado para la protección personal. Quedarán también en su poder los efectos y objetos que sirvan para vestirse y alimentarse, aunque tales efectos y objetos pertenezcan al equipo militar oficial. Nunca deberá faltar a los prisioneros de guerra el respectivo documento de identidad. La Potencia detenedora se lo proporcionará a quienes no lo tengan.

No se podrán retirar a los prisioneros de guerra las insignias de graduación ni de nacionalidad, las condecoraciones ni, especialmente los objetos que tengan valor personal o sentimental. Las cantidades de dinero de que sean portadores los prisioneros de guerra no les podrán ser retiradas más que por orden de un oficial y tras haberse consignado en un registro especial el importe de tales cantidades, así como las señas del poseedor, y tras haberse entregado un recibo detallado en el que figuren, bien legibles, el nombre, la graduación y la unidad de la persona que expida dicho recibo. Las cantidades en moneda de la Potencia detenedora o que, tras solicitud del prisionero, sean convertidas en esa moneda, se ingresarán, de conformidad con el artículo 64, en la cuenta del prisionero.

La Potencia detenedora no podrá retirar a los prisioneros de guerra objetos de valor más que por razones de seguridad. En tales casos, se seguirá el mismo procedimiento que para retirar cantidades de dinero.

Estos objetos, así como las cantidades retiradas en moneda distinta a la de la Potencia detenedora y cuyo poseedor no haya solicitado el respectivo cambio, deberá guardarlos esa Potencia y los recibirá el prisionero, en su forma inicial, al término del cautiverio.

12.- IV. (Cuarto) Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

CAPÍTULO VI PROPIEDAD PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 97 - Valores y efectos personales

Los internados están autorizados a conservar sus objetos y efectos de uso personal. No se les podrán retirar las cantidades, los cheques, los títulos, etc., así como los objetos de valor de que sean portadores, si no es de conformidad con los procedimientos establecidos. Se les dará el correspondiente recibo detallado.

Las cantidades de dinero deberán ingresarse en la cuenta de cada internado, como está previsto en el artículo 98; no podrán cambiarse en otra moneda, a no ser que así se exija en la legislación del territorio donde esté internado el propietario, o con el consentimiento de éste.

No se les podrá retirar los objetos que tengan, sobre todo, un valor personal o sentimental. Una internada sólo podrá ser registrada por una mujer.

Al ser liberados o repatriados, los internados recibirán en numerario el salario a su favor de la cuenta llevada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, así como cuantos objetos, cantidades, cheques, títulos, etc., les hayan sido retirados durante el internamiento, excepto los objetos o valores que la Potencia detenedora deba guardar en virtud de la legislación vigente. En caso de que un bien sea retenido a causa de dicha legislación, el interesado recibirá un certificado detallado.

Los documentos familiares y de identidad que lleven los internados no podrán serles retirados más que contra recibo. En ningún momento los internados deberán carecer de documentos de identidad. Si no los tienen, recibirán documentos especiales, expedidos por las autoridades detenedoras, que harán las veces de documentos de identidad hasta el final del internamiento. Los internados podrán conservar una determinada cantidad en efectivo o en forma de vales de compra, para poder hacer sus adquisiciones.

Artículo 98 - Recursos financieros y cuentas personales

Todos los internados percibirán con regularidad subsidios para poder adquirir productos alimenticios y objetos tales como tabaco, artículos de aseo, etc. Estos subsidios podrán ser créditos o vales de compra.

Además, los internados podrán recibir subsidios de la Potencia de la que son súbditos, de las Potencias protectoras, de cualquier organismo que los socorra o de sus familiares, así como las rentas de sus bienes de conformidad con la legislación de la Potencia detenedora. El importe de los subsidios asignados por la Potencia de origen será el mismo para cada categoría de internados (inválidos, enfermos, mujeres encintas, etc.), y no podrá fijarlo esta Potencia ni distribuirlo la Potencia detenedora sobre la base de discriminaciones prohibidas en el artículo 27 del presente Convenio.

Para cada internado, la Potencia detenedora llevará debidamente una cuenta en cuyo haber se anotarán los subsidios mencionados en el presente artículo, los salarios devengados por el internado y los envíos de dinero que se le hagan. Se ingresarán también en su cuenta las cantidades que se les retiren y que queden a su disposición en virtud de la legislación vigente en el territorio donde esté el internado. Se le darán todas las facilidades, compatibles con la legislación vigente en el territorio respectivo, para remitir subsidios a su familia o a personas que de él dependan económicamente. Podrá retirar de dicha cuenta las cantidades necesarias para los gastos personales, dentro de los límites fijados por la Potencia detenedora. Se le darán, en todo tiempo, facilidades razonables para consultar su cuenta o para obtener extractos de la misma. Esta cuenta será comunicada, si lo solicita, a la Potencia protectora y seguirá al internado en caso de traslado.

Historia constitucional chilena

En adelante, se sintetizan las consagraciones de la propiedad en nuestros textos constitucionales:

- CP 1818 (artículo IX, capítulo I, Título I)
- CP 1828 (artículos 10 y 17)
- CP 1833 (artículo 12 N°5)
- CP 1925 (artículo 10 N°10)
- CP 1980 (artículo 19 N°24)

No obstante, a lo anterior, es preciso tener en cuenta que en la reforma Constitucional de 2005 liderada por el ex Presidente Lagos mantuvo el Derecho de Propiedad, el que se ha mantenido hasta nuestros días.

Y, además, es preciso tener presente que el Proyecto de reforma constitucional presentado por la Ex Presidenta Michelle Bachelet en 2018, también establecía el derecho de propiedad con garantías al efecto. En concreto, se consagraba en el artículo 19, N° 30. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

“La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

NXX. [Del derecho de propiedad y la libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes] Toda persona tiene derecho de propiedad privada, en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales y la libertad para adquirir el dominio sobre estos, salvo respecto de aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres o aquellos que pertenezcan a la Nación toda, cuando éstos hayan sido declarados así por ley.

[De los modos de adquirir la propiedad y sus limitaciones] Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Toda limitación y obligaciones sobre la misma, derivada de su función social, da derecho a ser indemnizado por el daño patrimonial efectivamente causado, siempre que causen afectación esencial del derecho, sean retroactivas o infrinjan el derecho a la igualdad ante las cargas públicas. Corresponderá exclusivamente a los tribunales ordinarios de justicia determinar, conforme a derecho, estas circunstancias.

[Libertad de transferir o transmitir la propiedad] Se reconoce el derecho de toda persona a comercializar, transferir y transmitir la propiedad, sea entre personas vivas o por causa de muerte, respetando la Constitución y las leyes sobre la materia, las que deberán respetar en todo momento el contenido esencial del derecho.

[De la inviolabilidad de la propiedad y la expropiación] La propiedad privada es un derecho inviolable. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, del bien sobre que recae, o de alguno de los atributos o facultades

esenciales, excepto si por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador, mediante ley general o especial, autoriza la expropiación de cualquier clase de bienes, teniendo siempre el expropiado derecho al pago de la indemnización por los perjuicios patrimoniales efectivamente causados.

[De la toma de posesión del bien expropiado] La expropiación solo podrá materializarse, y la toma de posesión material efectuarse, previo pago al contado y en dinero efectivo del total de la indemnización.

[De la indemnización por el bien expropiado y su forma de pago] La forma de pago de la indemnización será determinada de común acuerdo entre el expropiante y expropiado. Si no hubiere acuerdo, la indemnización será determinada por los tribunales ordinarios de justicia y provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley.

[De la expropiación y eventual reclamación ante tribunales] Toda cuestión relativa a la legalidad de un acto expropiatorio, así como a la fijación de la indemnización en caso de que no haya acuerdo entre el expropiante y el expropiado, podrá ser planteada ante los tribunales ordinarios de justicia, los cuales dictarán sentencia conforme a derecho. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

[De la propiedad sobre las creaciones] Es deber del Estado promover las artes, las ciencias y la actividad inventiva y creativa en general. Toda persona tiene derecho a la libre creación intelectual, artística y científica; a la producción, divulgación y difusión de las artes y la investigación científica y técnica; y a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial que resulten de tales actividades, conforme a la ley.

La protección de los derechos de autor, cuya duración no será inferior al de la vida del titular, así como de los derechos de propiedad industrial y otros derechos derivados de actividades intelectuales, artísticas, científicas, de investigación, tecnológicas o de otras creaciones análogas se reconocen y garantizan por el tiempo que señale la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial, lo prescrito en los incisos segundo a séptimo.”

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°158-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el deber de fomentar el desarrollo de la educación cívica y los saberes de la ciencia y la justicia, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Martín Arrau, Margarita Letelier, Pablo Toloza, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Cecilia Ubilla, Ruth Hurtado, Pollyana Rivera y, Harry Jürgensen.

Esta iniciativa ingresó a la Secretaría de la Convención el día 11 de enero de 2022, y la Mesa Directiva resolvió que pasara a la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio.

De lo anterior se dio cuenta en la sesión del Pleno de la Convención N° 49°, del 18 de enero de 2022.

La educación es un elemento esencial al desarrollo de un país, como también una herramienta indispensable para una garantía de igualdad de oportunidades y mejorar el nivel de vida para los conciudadanos.

En tal sentido, la temprana formación cívica resulta clave para la valoración del sistema democrático y su conocimiento, como también para el ejercicio de los derechos democráticos. Por tanto, la plena ciudadanía de las futuras generaciones con sentido de responsabilidad y conocimiento de lo que significa la adquisición de hábitos cívicos, debiendo ser así la enseñanza de educación cívica un ramo importante y que debe ser tratada de manera separada de otros ramos, a fin de enseñarla en profundidad.

La elaboración de una Nueva Constitución es una oportunidad para que las comunidades educativas en su conjunto puedan integrar, en sus experiencias de aprendizaje, el despliegue de las competencias ciudadanas tan necesarias para el robustecimiento de la democracia. Ello implica el que vivir en un Estado democrático suponga el ejercicio de derechos y libertades en la participación de elección de autoridades, pero también la consciencia de un deber de responsabilidad del ciudadano, asumiendo el compromiso inherente a la soberanía popular de la cual son portadores.

Por lo mismo, la educación cívica tiene una relación amplia con sociabilizar la política, ayudando a la formación de los sujetos para que adquieran estos las suficientes habilidades y competencias para poder relacionarse con las instituciones y su entorno político, lo que se hace imprescindible en los tiempos

actuales. Por ello, se hace necesario elevar a un rango constitucional en materia de educación el elevar el aseguramiento y fomento del desarrollo de la educación cívica, sin que dependa de un gobierno de turno, sino que como una política de Estado.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo.- Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación cívica en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación”.

Por lo anterior, solicitamos tener por presentada esta propuesta de norma constitucional, declarar que ésta cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 83 del Reglamento General de la Convención Constitucional, y en virtud del artículo 85 y 86 del mismo cuerpo reglamentario proceder a su sistematización y tramitación.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°168-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho indígena al uso de la hoja de coca en espacios ceremoniales, laborales y cotidianos, ingresada por Leonel Salinas M. y el pueblo Lican Antai, Comunidad Atacameña de Lasana.

Para la fundamentación de esta Iniciativa se expuso lo siguiente:

Desde la elección del escaño reservado Lickan Antai, Félix Galleguillos Aymani, se comenzó un proceso de despliegue territorial basado en la ayuda voluntaria de servidores comunitarios denominados tajniri. Estos tajniricota tienen la función de facilitar la comprensión del proceso constituyente en las comunidades lickan antai. Quién presenta esta propuesta es el tajniri del Valle de Lasana y presidente electo de su Comunidad, pueblo que desde el periodo de candidatura estuvo involucrado en levantar la postura de sus comuneros frente a la Convención.

Desde el inicio de la Convención, se han realizado reuniones de aforo reducido, reuniones telemáticas abiertas y recorridos que sumados al trabajo

desarrollado en las semanas territoriales lograron levantar posturas, intereses y necesidades relevantes de los pobladores y comuneros del Valle de Lasana, localidad rural, indígena y ancestral ubicada en el altiplano chileno.

Entre los principales acuerdos logrados, se destacan la necesidad de consagrar el derecho al uso de la hoja de coca, el resguardo del agua y demás recursos naturales de la zona, la protección de la soberanía agro-ganadera, alimentaria y de las semillas ancestrales y finalmente, el compromiso del Estado con la conservación patrimonial como un mecanismo para enfrentar el cambio climático, la explotación extractivista desmesurada y la injusticia socio- territorial.

Para lograr estos fundamentos nos basamos preferentemente en el conocimiento ancestral de nuestros comuneros, que mantienen viva en su memoria las costumbres y saberes propios del lickan antai y de los aportes que entregaron los jóvenes de la comunidad.

Objetivo de la norma

Consagrar constitucionalmente el derecho de los pueblos indígenas andinos a utilizar la hoja de coca en los contextos ceremoniales, rituales y religiosos; espacios laborales y de trabajo formales e informales y; en la vida cotidiana, sin perjuicio ni discriminación de los agentes y aparatos del Estado ni de entes, empresas o demás figuras particulares y/o privadas.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo x: La Constitución asegura a las comunidades indígenas y sujetos indígenas individuales, los siguientes derechos respecto al uso de la hoja de coca:

1° El reconocimiento por parte del Estado, del uso ancestral de este producto por parte de los pueblos indígenas del actual territorio chileno.

2° El derecho a comerciar e intercambiar este producto de forma local, provincial, regional, a nivel país y también de manera transfronteriza con los pueblos de los países vecinos.

3° El uso de la hoja de coca por parte de los pueblos, comunidades y sujetos individuales indígenas en contextos ceremoniales, rituales y/o religiosos;

en espacios de trabajo y/o laborales tanto formales como informales y; en la vida cotidiana.

4° La no persecución, perjuicio y/o discriminación por parte de los agentes y aparatos del Estado o por entes, empresas y personas naturales del ámbito particular y privado hacia los pueblos, comunidades y sujetos particulares indígenas por el uso de la hoja de coca en los contextos señalados en el punto anterior.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°196-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el reconocimiento de los saberes milenarios y la ciencia y la tecnología de los Pueblos Indígenas, ingresada por el Cornelio Chipana, Juan Castro de la comunidad indígena Aymara de Enquelga, Elia Vilca de la comunidad indígena Aymara de Lirima, Juan Carlos de la comunidad indígena Aymara de Ticnamar, Dagoberto Mamani de la comunidad indígena Aymara Esquiña, Marcos Jiménez de la comunidad indígena Aymara de Guallatiri y Wilfredes Chacama del Instituto de cultura, ciencia y tecnología andina ICCYTA.

Los motivos de esta Iniciativa fueron los siguientes:

Durante varios años el Instituto de Cultura Ciencia y Tecnología Andina (en adelante ICCYTA) trabajó en comprender, investigar y promover los saberes ciencia y tecnología Andina, este organismo fue fundado por sabios de la zona norte. Cuenta con personalidad jurídica y un directorio compuesto por sabios y sabias por sobre 70 años de edad. Su director y fundador es Cornelio Chipana Herrera, quien es un Historiador aymara y especialista en culturas indígenas. Bajo su dirección el ICCYTA ha desarrollado investigaciones aplicadas, rescate de memoria histórica de pueblos, publicaciones de textos, seminarios y un “Congreso Internacional Amawtiku de saberes Ciencia y Tecnología Milenaria” (Iquique, 2017). Este congreso convocó a 37 destacados académicos de las más diversas disciplinas, dentro de los cuales 19 eran doctores en ciencias indígenas, de a lo menos 15 universidades de América. Estas actividades contaron con el Apoyo de Conadi Norte.

Bajo dicha experiencia se ha trabajado esta propuesta, esto es, en base a las conclusiones de talleres, seminarios y congresos, siendo este un resumen de un conjunto de conceptos y reflexiones colectivas, con la participación de muchas personas a lo largo de 10 años de trabajo.

La presente propuesta fue fruto de la participación de decenas de personas que han reflexionado y adherido al desarrollo de las ciencias y tecnología andina en las regiones de Arica Parinacota y Región de Tarapacá. Inclusive en Santiago, donde también se realizó un seminario y se presentó la propuesta para que se incorpore la ciencia y tecnología ancestral en los

Objetivo de la norma

1.- Reconocer como patrimonio nacional, los saberes milenarios, la ciencia y tecnología de los pueblos indígenas, para que este recurso sapiencial sea parte del desarrollo nacional.

2.- Que el estado procure desarrollar un dialogo de saberes y un dialogo inter científico, para que la nación toda sea coherente con la plurinacionalidad histórica.

3.- Crear Facultades de ciencia y tecnología de saberes milenarios, con su respectiva fuente de financiamiento, de modo que los saberes milenarios, se desarrollen desde sus propios idiomas, para constituirse en un instrumento del desarrollo intercultural, con identidad territorial.

4.- Que el Estado Chileno forme recursos humanos especializados de excelencia en las ciencias indígenas; otorgando competencias en las distintas disciplinas científicas, para que puedan ejercer la docencia, investigación, como así mismo la creación de modelos tecnológicos innovadores para el bienestar nacional y el desarrollo económico, ecológico y sustentable de los territorios.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Art. 1. La Constitución reconoce que los saberes milenarios de los pueblos indígenas, consideran que las primeras fuentes del saber para el desarrollo de la ciencia y tecnología, provienen de los bosques, los ríos, los salares, los desiertos, valles, el mar, las nubes, las montañas, glaciares, lagunas, etc. en suma de toda su biodiversidad. Por lo cual deben ser preservados como patrimonio científico originario de la nación. Con este fin el Estado debe procurar la creación de ecozonas de exclusividad científica, en distintos pisos ecológico del país; las que deberán ser declaradas reservas eco científicas estratégicas para la

vida del planeta, acorde al razonamiento del saber milenario de los pueblos indígenas, que consideran a la naturaleza como el primer laboratorio científico y tecnológico.

Art. 2. La Constitución reconoce los sistemas de conocimientos y saberes ancestrales milenarios como patrimonio cultural inmaterial de toda la nación Chilena. Para su desarrollo debe procurar el dialogo de saberes y el dialogo inter científico, donde la ciencia y tecnología convencional racionalista se complemente con la lógica sistémica y holística de los pueblos indígenas. Así entonces el desarrollo científico debe sostener el pluralismo epistemológico, como también el florecimiento de las tecnologías alternativas para la preservar el medio ambiente y los ecosistemas; mediante la aplicación de una ciencia y tecnología multicultural, transdisciplinaria, sustentable y holística.

Art. 3. El Estado y sus instituciones pertinentes, especialmente las Universidades Públicas, deberán desarrollar -con participación de la representación indígena- planes de mediano y largo plazo para rescatar y fortalecer todas las disciplinas de ciencia y tecnologías milenarias, con los más altos estándares académicos; originalidad epistémica, gnoseológica y ontológica; de forma tal que estas puedan lograr un nivel de desarrollo similar a la ciencia y tecnología convencional vigente, complementando y nutriendo el saber nacional chileno y por ende el desarrollo nacional.

Art. 4. El Estado deberá garantizar el desarrollo de la ciencia y tecnología de los pueblos indígenas, como principio rector de una sociedad multicultural con sentido dialógico, holístico e inter científico. Entendiéndose que toda política del Estado Plurinacional chileno debe incorporar los estudios y conocimientos avanzados de los pueblos indígenas, como la teoría de género, el derecho consuetudinario, la agroecología, especialmente su historia y las relaciones socioculturales, según sus cosmovisiones, expresados en sus idiomas, garantizando el derecho a la expresión y desarrollo de las lenguas indígenas.

Art. 5. El Poder Legislativo deberá considerar también la racionalidad cósmica milenaria de los pueblos indígenas, en todo su proceso legislativo, para lo cual debe considerar los aspectos culturales, afectivos, ecológicos, éticos, estéticos, productivos y reproductivos; como así mismo los principios de la reciprocidad, complementariedad de género, la unidad en la diversidad y el suma qamaña (vivir armoniosamente con la naturaleza). Temas que deben ser tratados en toda materia legislativa como contenidos pertinentes a la plurinacionalidad chilena.

Art. 6. Las Universidades Públicas deberán crear las Facultades de Ciencia y Tecnología de los Saberes Milenarios (FCTSM), con la implementación de recursos humanos y medios necesarios, para dotar de óptimas condiciones, la restauración y generación vivificante de las ciencias milenarias de todos los pueblos indígenas de Chile, como patrimonio nacional complementario e imprescindible para el desarrollo nacional. Las facultades antes señaladas contarán con recursos propios de la administración financiera del Estado. Complementariamente se deberá legislar para establecer un gravamen como el royalty minero, a empresas mineras, forestales, pesqueras, e hidroeléctricas, que están instaladas en territorios de los pueblos indígenas.

Art. 7. La Facultades de Ciencia y Tecnología de Saberes Milenarios FCTSM, tendrán por mandato constitucional difundir oportunamente los conocimientos y el resultado de su labor de investigación, a todos los Ministerios y unidades administrativas del Estado, a nivel Nacional, Regional y Comunal, de modo de contribuir con las teorías decoloniales y descentralización de las políticas públicas, fomentando un genuino desarrollo con identidad local, regional y nacional, surgido de la sapiencia comunitaria y colectiva en sus respectivos territorios.

Art. 8. La constitución reconoce que los saberes milenarios son colectivos y se sustenta en las organizaciones socioculturales, por lo mismo la restauración de dichos saberes y conocimientos, deben ser con la participación de los sabios de los respectivos pueblos indígenas, y la activa participación de la sociedad civil indígena; con el objeto de contribuir a la descontaminación ambiental, la gestación de nuevos modelos de desarrollo sustentable, la aplicación de tecnología simbólica para enfrentar el cambio climático. En suma, deben promover los valores del Suma Qamaña (Vivir Bien armoniosamente con la naturaleza) a nivel nacional y situar en el centro de la ciencia y tecnología nuestra madre naturaleza.

Art- 9. Las Facultades de Ciencia y Tecnología de saberes milenarios FCTSM, tendrán por obligación desarrollar también un modelo pedagógico intercultural bilingüe para la formación de futuros maestros y profesionales en las diversas disciplinas, quienes deberán contribuir con sus conocimientos a la plurinacionalidad y al desarrollo nacional con identidad. En especial debe procurar el estudio y promoción de las prácticas socioculturales bilingüe, considerando a las lenguas indígenas como transmisoras de los saberes milenarios, para las prácticas de la intraculturalidad e interculturalidad de los territorios. Para este fin se deberá disponer diversos medios de comunicación,

como un recurso imprescindible para el desarrollo de la identidad plurinacional de Chile.

Art. 10. El Estado deberá legislar las materias que correspondan a leyes del ordenamiento jurídico, para la concreción de los fines y objetivos que señala los articulados del presente capítulo de Ciencia y Tecnología Ancestral.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°231-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la pérdida de la memoria de los más mayores Kawesqár, ingresada por Carlos López y Juana Pérez.

Los fundamentos de esta Iniciativa fueron los siguientes:

Carlos López coordinador y miembro de la secretaria técnica de participación y consulta indígena, junto con la comunidad kawésqar, Juana Pérez, trabajaron propuestas de normas y también revisaron aporte de fundación Mar y Ciencia en apoyo del pueblo kawesqar, y se transformó su propuesta en artículos individuales.

Objetivo de la norma

Lo que buscan es el cuidado de su territorio ancestral, pero no pueden volver a vivir allá ya que la vida ha cambiado, pero el cuidado del lugar es importante ya que ahí descansan sus antepasados y quieren volver allá. Se busca el cuidado de las personas mayores para que tengan una vida digna y puedan traspasar sus historias a las nuevas generaciones.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo xx El estado velará y garantizará la salud gratuita y expedita de los ancianos de los pueblos indígenas.

Esto en modo de restitución al proceso de colonización y vulneraciones a los derechos humanos sucedidas al pueblo kawésqar y su gente adulta mayor y sus descendientes que aún recuerdan todo ese proceso vívidamente.

Similar al sistema país programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos para las personas que sufrieron vulneraciones a sus derechos humanos durante el periodo de dictadura.

Artículo xx El Estado de Chile reconoce la preexistencia del pueblo kawésqar y reconoce sus territorios ancestrales.

Artículo xx El Estado de Chile se compromete de manera obligatoria, a restituir las tierras ancestrales a los kawésqar y respetara sus formas ancestrales de administración y distribución.

Artículo xx El Estado de Chile se obligará, a respetar la cultura kawésqar y a entregar los medios e insumos por los cuales este pueblo pueda ejercer su cultura ancestral y el traspaso a las nuevas generaciones.

Artículo xx El Estado de Chile respetará las formas ancestrales de medicina kawésqar y las protegerá y las promoverá en su pueblo, respetando y velará cuidando las fuentes naturales de recursos naturales.

Artículo xx, El Estado de Chile se compromete a impartir un método de enseñanza intercultural kawésqar en la educación chilena, para integrar a los pueblos y compartir cultura.

Artículo xx Será deber del estado educar y contar la verdad histórica del proceso de colonización del pueblo kawésqar en la educación básica media y universitaria.

Artículo xx El Estado de Chile se compromete al cuidado ambiental de los territorios ancestrales del pueblo kawésqar y también cuidadora de sus recursos naturales y animales para uso cultural.

Artículo xx El Estado de Chile reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza, diferenciándolos por el territorio a cual estos tienen pertinencia.

Artículo xx Es deber del Estado, tener un registro genealógico de los pueblos indígenas, esto para evitar problemas en el proceso de acreditación indígena por pueblo.

Artículo xx. La libertad de idiomas y lenguas será garantizada.

Las lenguas indígenas y tribales son parte del patrimonio vivo e inmaterial de dichos pueblos, cuya existencia se hace necesaria para la supervivencia y transmisión de su cultura y cosmovisión, por lo que el estado en conjunto con los mismos pueblos deberá elaborar planes y medidas para que se sigan hablando y evitar su desaparición.

Artículo xx. La libertad de medios de comunicación será garantizada.

Medios de comunicación análogos, digitales u otros, serán indispensables para el fomento de las lenguas indígenas, cuya oferta será considerada un servicio público garantizado por el estado de manera directa o subsidiaria. Se prohíbe todo tipo de intervención y censura más allá de establecer criterios para velar la pluralidad de opiniones.

Artículo xx. La libertad de las expresiones artísticas será garantizada.

Las expresiones artísticas ancestrales de los pueblos indígenas y tribales, como confección de indumentaria, cestería realizada por medio de la técnica de aduja anudada, entre otras, al igual que las materias primas para su confección, serán especies protegidas y fomentadas,

Artículo xx. El patrimonio arqueológico en el territorio nacional será protegido los hallazgos de indumentaria y vestigios de su existencia, de origen orgánico como inorgánico, pertenecen al patrimonio arqueológico material cuyos titulares son dichos pueblos.

Artículo xx. La libertad de ejercicio de costumbres y tradiciones será garantizada.

La caza tradicional de especies terrestres y marinas, como la recolección de moluscos con fines ancestrales, y con el objeto de mantener viva la cultura de los pueblos canoeros y su alimentación originaria no será obstaculizada.

Artículo xx: Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Artículo xx: La familia en sus diversas formas es el núcleo fundamental de la sociedad.

Artículo xx: El Estado reconoce, ampara y promueve el desarrollo de los grupos intermedios sin fines de lucro, reconociendo con preferencia en el ámbito público a aquellos que provengan de grupos originarios.

Artículo xx: El Estado está al servicio de la persona humana, la naturaleza y sus ecosistemas. Su finalidad es promover el Bien común garantizando el equilibrio ecológico, la conservación y regeneración de la naturaleza, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales sostenibles y sustentables que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece.

Artículo xx: es deber del Estado resguardar los ecosistemas terrestres y aéreos, así como también los océanos y el maritorio, promoviendo la seguridad nacional, y dando protección a la población y a la familia.

Artículo xx: es deber del Estado propender a la divulgación de conocimientos científicos, así como también aquellos que provengan de pueblos originarios, promoviendo la integración armónica de todos los sectores de la nación, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°233-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el reconocimiento expreso de los Kawésqar en la Constitución, ingresada por Carlos López, Comunidad Indígena Kawésqar Ekcewes y Asociaciones Indígenas Rural Comuna de Río Verde.

Los fundamentos de esta Iniciativa fueron los siguientes:

Se trabajó en virtud de la siguiente problemática:

1. Que no puedan ejercer su cultura.
2. Que no puedan enseñar su cultura.
3. Que pierdan su lengua.
4. Pérdida de continuidad con sus formas ancestrales medicinales.
5. Pérdida de acceso a su territorio ancestral materno.
6. Reconocimiento de los kawésqar.
7. La comunidad magallánica no conoce a los kawésqar, muchos menos en río verde, (comuna) seno skyrim, otway, isla riesco.
8. Gobernación tiene dividido a natales, pero ellos viven en las arenas.
9. Pérdida de protección del terreno, /empresas construyen sobre lugares tabo y antiguos asentamientos kawésqar. / estancieros. / animales /falta de respeto de los territorios ancestrales.
10. Ampliar el concepto de grupos intermedios y su reconocimiento a nivel constitucional, permitir que todo el ordenamiento jurídico sea interpretado en pro de los grupos intermedios, beneficiando a la sociedad entera.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo xx

El Estado de Chile se compromete de manera obligatoria, a restituir las tierras ancestrales a los kawésqar y respetara sus formas ancestrales de administración y distribución.

Artículo xx

El Estado de Chile se obligará, a respetar la cultura kawésqar y a entregar los medios e insumos por los cuales este pueblo pueda ejercer su cultura ancestral y el traspaso a las nuevas generaciones.

Artículo xx

El Estado de Chile respetará las formas ancestrales de medicina kawésqar y las protegerá y las promoverá en su pueblo, respetando y velará cuidando las fuentes naturales de recursos naturales.

Artículo xx,

El Estado de Chile se compromete a impartir un método de enseñanza intercultural kawésqar en la educación chilena, para integrar a los pueblos y compartir cultura.

Será deber del estado educar y contar la verdad histórica del proceso de colonización del pueblo kawésqar en la educación básica media y universitaria.

Artículo xx

El Estado de Chile se compromete al cuidado ambiental de los territorios ancestrales del pueblo kawésqar y también cuidadora de sus recursos naturales y animales para uso cultural.

Artículo XX

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia en sus diversas formas es el núcleo fundamental de la sociedad.

Artículo XX

El Estado reconoce, ampara y promueve el desarrollo de los grupos intermedios sin fines de lucro, reconociendo con preferencia en el ámbito público a aquellos que provengan de grupos originarios.

Artículo XX

El Estado está al servicio de la persona humana, la naturaleza y sus ecosistemas. Su finalidad es promover el bien común garantizando el equilibrio ecológico, la conservación y regeneración de la naturaleza, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales sostenibles y sustentables que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Artículo XX

Es deber del Estado resguardar los ecosistemas terrestres y aéreos, así como también los océanos y el maritorio, promoviendo la seguridad nacional, y dando protección a la población y a la familia.

Artículo XX

Es deber del estado propender a la divulgación de conocimientos científicos, así como también aquellos que provengan de pueblos originarios, promoviendo la integración armónica de todos los sectores de la Nación, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°368-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a la democratización de los conocimientos , cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Francisco Caamaño, Malucha Pinto, Loreto Vidal, Daniel Bravo, Carolina Videla, Dayyana González, Francisca Arauna, Ivanna Olivares, Adriana Ampuero, César Uribe, Loreto Vallejos, Paulina Valenzuela, Ingrid Villena y María Rivera.

Los conocimientos son creaciones humanas en el campo de lo simbólico, específicamente, son interpretaciones de la realidad nacidas al alero de interacciones sociales, sólo tienen sentido desde lo colectivo, ya sea por su origen y/o por su interpretación y se producen en cualquier espacio de diálogo entre seres humanos y/o con la Naturaleza, aunque se reconocen mecanismos específicos para este fin como la investigación.

Estos pueden clasificarse en dos tipos, por un lado existen los conocimientos formales que nacen en espacios de investigación o creación donde se aplican métodos sistemáticos como las distintas variantes del método científico u otros equivalentes en su principio de interrogación como es el caso de las artes.

Por otro lado, existen los conocimientos no formales, que son aquellos propios de los pueblos y sus culturas, que no se enmarcan en la definición de formales. Esto incluye aquellos propios de los pueblos originarios, también llamados conocimientos ancestrales, aunque no se restringen a ellos, pues también podrían clasificarse aquí los conocimientos populares. Entre ambas disciplinas o áreas del saber de este tipo de conocimientos, no debería existir ninguna jerarquía.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha habido intensas discusiones sobre el carácter común o abierto de los conocimientos. En particular, en los espacios de discusión en Latinoamérica ha decantado una definición, que considera que los conocimientos son o deberían ser bienes comunes. Esta definición ha sustentado la existencia de diversas iniciativas para poner en valor esta definición como la FLOK Society, o las distintas iniciativas de ciencia abierta y software libre.

Todos los pueblos y culturas desarrollan un conocimiento válido para vivir en su ecosistema, y se extienden a lo largo de la historia. Sin embargo la rápida urbanización y la extensión de los terrenos agrícolas pueden tener graves consecuencias para el entorno natural de las comunidades y el conocimiento que éstas tienen del mismo. Las talas y desbroces pueden provocar la desaparición de bosques sagrados, o la necesidad de encontrar fuentes alternativas de madera para la construcción. El cambio climático, la continua deforestación y la expansión de la desertificación ponen en peligro de extinción a muchas especies y ocasionan la decadencia de la artesanía tradicional y la herboristería, a medida que las materias primas y las especies vegetales van desapareciendo. Además de las amenazas externas que se ciernen sobre su entorno social y natural, muchas comunidades pobres o marginadas propenden a adoptar modos de vida o modelos de desarrollo puramente económicos ajenos a sus tradiciones o costumbres. Aunque algunos aspectos de los conocimientos tradicionales, como el uso medicinal de especies vegetales locales, pueden ser de interés para los científicos y las empresas, ello no impide que muchas prácticas ancestrales están desapareciendo.

Esta propuesta busca responder a distintas falencias que se encuentran en la actualidad, una de ellas es la justicia epistémica, tan ausente en nuestros territorios. Miranda Fricker (2007) plantea la llamada “Injusticia epistémica”, que se refiere a cuando se anula la capacidad de un sujeto para transmitir conocimiento y a la vez dar sentido a sus experiencias sociales. Existen dos tipos de injusticia epistémicas, una de ellas es la testimonial, que sucede cuando a una persona no le creen o no la toman en serio en base a prejuicios y la otra es la hermenéutica, que es cuando no existen recursos cognitivos y lingüísticos para comprender las experiencias propias o de otros.

Por otro lado, esta propuesta presenta enfoques que buscan el buen vivir, la no maleficencia y la inclusión entre sus principios rectores.

- La concepción del Buen Vivir se propone superar los errores y las limitaciones del pensamiento euro centrista, de un determinado discurso de la modernidad y del capitalismo como única forma posible de pensar y vivir. Ello se

encuentra asociado a las diversas nociones y teorías tradicionales del progreso y el desarrollo que se sustentan en el crecimiento exponencial de bienes y servicios lo cual supone la explotación ilimitada de los bienes naturales y humanos que existen en el planeta.

- El principio de no maleficencia se basa en el principio ético *primum non nocere* (latín) o “lo primero y primordial es no hacer daño”. Meta-análisis de literatura biomédica sugiere que este principio ético ha ido siendo citado cada vez más desde principios del siglo XX. Además, este principio es una de los cuatro lineamientos centrales de la bioética y la bioética con enfoque intercultural, siendo recurrentemente utilizado en las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto muestra la relevancia creciente de este principio en el orden internacional y la factibilidad de su aplicación.

- El enfoque de la inclusión parte de dos constataciones fundamentales basadas en evidencia.

1. Que todas las personas tienen necesidades diversas y cambiantes para aprender, comunicar e implicarse en el contexto de los sistemas de conocimientos.

2. Que la adaptación y participación de las personas en los sistemas de conocimiento responde no solo a su diversidad, sino que mayoritariamente a la existencia de barreras arbitrarias de acceso a priori a los sistemas de conocimientos.

Estas barreras de acceso se extienden desde la existencia de formatos, métodos y materiales inflexibles hasta formas de representación de la información, formas de acción y expresión, y también formas de implicación en los procesos orientados solo a un pequeño sector de la población. Con esto, se configura un contexto de participación excluyente el cual no considera la diversidad de la sociedad. Normalmente, esta exclusión se deriva de una premisa inicial que supone que es más eficiente informar, enseñar, aprender, investigar, socializar, registrar o difundir pensando en un modelo teórico de personas uniformes construido en base a promedios estadísticos. Por el contrario, la evidencia neurocientífica, pedagógica y de las ciencias sociales sugiere fuertemente que no existe un modelo único de persona que participe de los sistemas de conocimientos, y con ello no existe una única manera adecuada de representar la información, comunicar, implicarse y aprender. Por ello, múltiples disciplinas han propuesto que los sistemas de conocimiento y producción de valores materiales e inmateriales adopten un enfoque inclusivo, el cual asume a priori que la diversidad de personas existe. La existencia de estas barreras de

acceso y la ausencia de un enfoque inclusivo, tiene grandes consecuencias para alcanzar una democratización de los sistemas de conocimiento, siendo particularmente nocivas:

a. Que las barreras de acceso y la ausencia del enfoque inclusivo son en la práctica digresiones e impiden el ejercicio de múltiples derechos existentes. Por ejemplo: Que la educación es un derecho de todas las personas. Por lo tanto, la democratización de los sistemas de derecho sin el enfoque inclusivo generaría las mismas limitaciones.

b. Que la planificación de iniciativas y políticas públicas sin enfoque inclusivo tiene como resultado un costo adicional evitable, que se da al intentar ir adaptándolas a las diversidades que existen. En contraposición a tener un enfoque inclusivo desde la génesis de las iniciativas y políticas públicas.

Considerando lo anterior, cualquier cuerpo legal que busque la democratización de los sistemas de conocimientos debe considerar como condición *sin equa non* (latín., Trad.: sin la cual no), el abordaje de la existencia de esta diversidad desde el punto de vista de la inclusión y los derechos que de ello se derivan.

En nuestra actual constitución podemos encontrar en su artículo 19 que “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”, lo que no asegura debidamente una democratización de los conocimientos de manera de lograr una equidad social y dar respuesta a los desafíos que nos depara el futuro.

El 13 de agosto del 2018 de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.105 se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lo que es un paso importante para los conocimientos en Chile, entendiendo que la discusión previa solo contemplaba un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dejando fuera el Conocimiento, sin embargo, no solo se logró incorporar la palabra “conocimiento” sino que, además, está presente en gran parte de sus funciones. También se logró instalar, entre otras cosas, la importancia del trabajo transdisciplinario y se incorporó el enfoque de género.

El decreto N° 2, de 2020, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación crea el Consejo Asesor y se establecieron sus normas de funcionamiento. El artículo 9° de la norma antes referida dice que el Consejo estará integrado por ocho personas calificadas, ajenas a la Administración Central

del Estado, las que deberán contar con reconocidos méritos en el área de la academia, ciencia, tecnología y de la innovación de base científico-tecnológica. Asimismo la norma estableció que la integración del Consejo deberá ser plural equilibrada, con una adecuada representación de las regiones, de género y de las diversas disciplinas.

Respecto a la realidad de Chile, podemos decir que existe una gran diversidad de territorios y realidades, tanto culturales como geográficas y, a pesar de ello, las decisiones en torno al modelo de desarrollo, políticas públicas y generación de conocimientos e investigación se realizan de forma centralizada, con escasa participación ciudadana y no se consideran las realidades locales. La OCDE ha situado a Chile como uno de los países más centralizados junto a Grecia e Irlanda.

La complejidad regulatoria en materia de derecho de autor o de propiedad intelectual en Chile, a estas alturas debería ser re entendido y modificado para poder lograr la democratización de los conocimientos, integrando herramientas normativas como es el caso del fair use o uso justo en EEUU, permitiendo que el sistema normativo del copyright tenga mayor capacidad de adaptación y con ello, que el flujo económico y cultural asociado a estos nuevos contextos tecnológicos se transforme en un beneficio para la sociedad. La gran ventaja del uso justo, es que por tratarse de una excepción abierta o general, permite ser usada con mayor flexibilidad. Concluyendo ciertos requisitos generales, puede adaptarse a una diversidad de casos y al surgimiento de nuevas tecnologías. Estos tres pasos, contenidos en el Convenio de Berna de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, deben concurrir copulativamente, determinan si el uso de una creación protegida, sin autorización del titular, es o no legítimo, a saber:

- a) Que el uso esté limitado para determinados casos especiales;
- b) Que tal uso no atente a la explotación normal de la obra; y
- c) Que tal uso no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

En cuanto a la producción de conocimientos formales en nuestro país, esta se encuentra restringida principalmente a las universidades y centros de investigación, desarrollo e innovación, dejando de lado al resto de organizaciones civiles y comunidades y personas. Adicionalmente, los nuevos conocimientos se mantienen concentrados en los mismos organismos que los generan, dificultando el uso y goce por parte de otros actores de la sociedad, esto lo podemos visualizar

en los indicadores del observatorio del sistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e investigación.

Por otro lado, el modelo de desarrollo ha atendido solamente la dimensión económica, desatendiendo el bienestar social, equidad y sustentabilidad. Adicionalmente y referente a los conocimientos e investigación, se ha descrito que se encuentran desacoplados de la matriz productiva del país, tanto a nivel nacional como regional y que no existe una estrategia de largo plazo para su desarrollo. Por último, solo un 2,6% de las personas contratadas por el Estado poseen grado de doctor en contraste con el 22,7% de los países de la OCDE, reflejando una baja integración del capital humano en las políticas públicas y decisiones del Estado.

Para democratizar los conocimientos es necesario que exista un entramado institucional que se haga cargo no solo de difundir y disponibilizar el conocimiento formal creado, sino que crear los mecanismos necesarios para que la sociedad sea parte de dichos procesos. En tanto, al interior de las instituciones estatales de investigación y creación debe existir una verdadera democracia que le permita a sus comunidades ser parte activa de las políticas que la regulan, como el financiamiento, la evaluación y el uso que se le da a los conocimientos. Por cierto, sería interesante tener una institucionalidad específica que se dedique a impulsar procesos de aprovechamiento del conocimiento generado para el desarrollo de políticas públicas, por lo tanto, deben existir instituciones encargadas de promover y organizar la comunicación efectiva entre gestores de políticas públicas y los productores del conocimiento.

El acceso y goce equitativo de los conocimientos y resultados de las diferentes investigaciones, requiere de acciones activas que permitan su difusión y posicionamiento en la sociedad. Esas acciones deben surgir desde el mismo Estado que las guía, fomenta, articula y financia, cerrando el ciclo con su difusión. Las políticas públicas para difundir los conocimientos deben realizarse de manera horizontal promoviendo una visión integradora multidimensional de tal manera de lograr fortalecer las comunidades y lazos sociales con los avances del conocimiento.

El estado debe tener instituciones que promuevan políticas de difusión de los conocimientos reconociendo que estos son necesarios para la formación de las personas, la ciencia y conocimientos están estrechamente imbricados con la sociedad y determinan muchos de sus aspectos esenciales de la propia sociedad. Las personas necesitan saber cómo influye en sus vidas, cómo debe utilizarlo y, llegado el caso, cómo controlarlo. Las instituciones deben lograr esto a través del establecimiento de la arquitectura necesaria para facilitar el

intercambio, diseminación, conservación, integración y apropiación social de los conocimientos.

Por último, en términos institucionales es de esperar que el Estado tenga mecanismos para fomentar, proteger y poner en valor como bienes de interés común y públicos, los conocimientos no formales, creados al alero de comunidades y pueblos originarios. Esta forma de conocimientos no debe estar ajeno a los creados en espacios formales, y el Estado debe ser garantía de que ese encuentro ocurra en distintos espacios, siempre fomentando el respeto por la diversidad de conocimientos y culturas, y por la territorialidad de los espacios.

Actualmente la investigación opera dentro un paradigma que algunos autores denominan “neoextractivismo científico”, es decir se exportan o externalizan conocimientos, de la misma manera como se hace con las materias primas, de esta manera el conocimiento generado se pierde en publicaciones indescifrables. A las y los investigadores se les exige producir bienes empaquetados en conocimientos indexados, sólo para aumentar las cifras e indicadores bibliométricos internacionales, al margen de su sentido social y crítico. Si solo nos enfocamos en invertir en ciencia y tecnología posiblemente podremos alcanzar los “indicadores económicos que nos lleven al desarrollo”, sin embargo este desarrollo será inviable y producirá problemas y desajustes en su aplicación y contacto con la sociedad (rechazo a la ciencia, desempleo y falta de confianza, etc.). Por lo tanto, la producción y avance del conocimiento científico debe ir acompañado de un fortalecimiento de la investigación en ciencias sociales, artes y humanidades para comprender cómo estas tecnologías impactan y transforman los procesos sociales y culturales.

Proponemos que sean los territorios quienes decidan sobre las áreas de investigación y conocimientos a desarrollar y sus presupuestos, priorizando las potencialidades y necesidades locales. Creemos que esto permitiría la apropiación y democratización de los conocimientos, potenciaría la identidad y su impacto territorial. Adicionalmente, sugerimos que, tanto los conocimientos como la investigación se desarrollen de manera coherente con el modelo de desarrollo permitiendo de esta manera, orientar los esfuerzos públicos de manera más efectiva y eficiente, insumar y ajustar el modelo y por último, maximizar su impacto. Para finalizar, la integración de los conocimientos y resultados de la investigación en las políticas públicas, permitiría reflejar de manera más fidedigna e integral la realidad, tomando decisiones basadas en evidencia, minimizando la ocurrencia de errores.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Principios

Artículo X1. El Estado reconocerá las distintas formas de producción y creación de los conocimientos, tanto los conocimientos formales, los conocimientos ancestrales y los conocimientos populares.

Artículo X2. La creación, producción y el proceso de desarrollo de los conocimientos buscarán promover el bienestar de las personas, comunidades y la naturaleza, respetando el buen vivir y el principio de no maleficencia.

Artículo X3. La creación, producción y el proceso de desarrollo de los conocimientos al alero del Estado, se realizará de manera descentralizada, en coherencia con la autonomía de los territorios.

Artículo X4. El desarrollo, contenido, aplicaciones, tecnologías y progresos de los conocimientos y la investigación, deben ser accesibles para todas las personas y comunidades, adoptando un enfoque inclusivo para lograr la equidad social.

Artículo X5. Por su carácter colectivo y simbólico los conocimientos de cualquier tipo son bienes comunes de todas las personas que participan de su proceso de creación.

Derechos

Artículo X1. Todas las personas y comunidades tienen derecho:

A. A Gozar y participar del desarrollo, contenido, aplicaciones, tecnologías y progresos de los conocimientos y la investigación de manera democrática, accesible, con un enfoque de inclusión. Este derecho implica la posibilidad de participar en todo el proceso de creación de conocimientos, esto es, en la planificación, el desarrollo, la evaluación, la interpretación, la transmisión, la conservación, el goce de sus resultados y/o eventuales beneficios.

B. Al acceso, conservación y difusión de los conocimientos e investigación, por medio del uso justo de estos.

C. A que sus conocimientos y saberes sean protegidos como bienes comunes, y a su vez, la protección de los espacios de diálogo o encuentro que permiten este proceso creativo.

D. A participar de la producción y creación de los conocimientos que comprometan a sus territorios o intereses y a gozar de sus beneficios en forma equitativa.

E. A que sus diversos sistemas de generación de los conocimientos, tanto ancestrales y populares, sean reconocidos por la sociedad y fomentados equitativamente por el Estado.

F. A ser protegidas de las consecuencias nocivas del desarrollo de los conocimientos y la investigación.

G. A agruparse para generar, difundir y promover los conocimientos. El Estado debe fomentar, promover y destinar recursos para garantizar este derecho.

Artículo X2. Todas las personas que participan de los espacios formales o institucionales de investigación o creación tienen derecho a participar de las políticas que regulan su actividad, esto es, planificación, evaluación, financiamiento y aplicación de los conocimientos.

Artículo X3. Las personas que producen o crean conocimiento en espacios formales deben ser reconocidas como trabajadores y trabajadoras y tendrán todos los derechos y deberes derivados de este rol. Las condiciones y formas de este reconocimiento quedarán dispuestas por ley.

Roles del estado

Artículo X1. El Estado será garante de respetar las diversas ramas del conocimiento, los saberes ancestrales y los saberes populares; y que los conocimientos creados al alero del Estado tengan como objetivo el buen vivir, y que éstos sean considerados bienes comunes.

Artículo X2. El Estado debe constituir y sostener espacios formales que tengan por objetivo la creación colectiva de conocimientos en todas las áreas del saber. Además debe asegurar la existencia y protección de los espacios de encuentro social, donde los conocimientos formales y no formales se producen. La investigación y los conocimientos creados en conjunto con la comunidad deberán tener como objeto el buen vivir.

Artículo X3. El Estado debe asegurar la existencia de espacios de formación general y específico para que las personas puedan participar de la creación de conocimientos, así como de su apreciación.

Artículo X4. El Estado debe crear los mecanismos para la apreciación y validación de los conocimientos formales entre las personas; así como crear mecanismos para promover la consideración de los conocimientos no formales en los espacios formales de investigación.

Artículo X5. El Estado deberá considerar los distintos tipos de conocimiento en su acción regulatoria y normativa, específicamente en la formulación de normas jurídicas, reglamentos, planes, proyectos, políticas y programas. En el caso de los conocimientos formales el Estado considerará aquellos conocimientos emanados de sus propias instituciones, que hayan sido validados por los métodos definidos por las propias disciplinas tanto nacional como internacionalmente. A su vez, el Estado debe considerar los conocimientos no formales, propios de las comunidades afectadas por las políticas en cuestión, validadas a través de mecanismos de participación reglamentadas por la ley.

Institucionalidad

Artículo X1. Existirá una institución central conformada por una mesa multi-ministerial que establecerá un marco de trabajo colaborativo, estandarizado y democrático, además de la infraestructura, herramientas metodológicas y técnicas necesarias para cumplir esta labor.

La mesa multi-ministerial tendrá los siguientes roles:

- A. Garantizar el goce equitativo del valor producido por el conocimiento y la investigación.
- B. Proteger a las personas, comunidades y la naturaleza de los potenciales daños derivados del avance del conocimiento.
- C. Integrar los conocimientos y progreso al diseño de políticas públicas, asegurando coherencia entre la producción de conocimientos y el modelo de desarrollo.
- D. Desarrollar e impulsar políticas públicas para comunicar los conocimientos y resultados de investigación, incluyendo su divulgación, accesibilidad y comunicación efectiva.

Artículo X2. Existirá una institucionalidad intermedia, que será la interfaz entre la mesa multi-ministerial y todas las personas. Dentro de esta institucionalidad se consideran, a lo menos, a las universidades, los institutos de investigación, los institutos tecnológicos, los centros de formación técnica, los museos, las bibliotecas, los sitios patrimoniales, y las otras instituciones estatales cuya función sea crear o difundir conocimientos.

La institucionalidad intermedia tendrá los siguientes roles:

- A. Promover, desarrollar y ejecutar los procesos de producción de conocimientos en las áreas o disciplinas de su quehacer.

B. Dotarse de una gobernanza democrática, es decir, incluyendo a todos los actores involucrados en su funcionamiento.

C. Considerar mecanismos activos de participación de la sociedad no-experta en sus funciones propias.

D. Priorizar aquellas iniciativas que aporten al desarrollo de la sociedad, de manera justa, equitativa, democrática y en respeto de la naturaleza.

E. Operar de manera descentralizada a lo largo del país, de acuerdo a la realidad de cada territorio y de cada institución.

F. Coordinarse con la autoridad nacional, las autoridades regionales, y con las otras instituciones consideradas intermedias, para la mejor ejecución de sus funciones, así como para responder a planes regionales o nacionales de creación o difusión de los conocimientos.

Artículo X3. Existirá un conjunto de instituciones colaboradoras en los procesos de creación de conocimientos, cuyo rol principal no es la creación o la difusión de los conocimientos, pero sí tiene alguna relación. Dentro de estas instituciones se considerarán, al menos, a los colegios, los hospitales y otras dependencias de la salud pública, las municipalidades y los servicios públicos dependientes de ministerios sectoriales.

Las instituciones colaboradoras tendrán los siguientes roles:

A. Coordinar con las instituciones intermedias en los procesos que involucren la creación, uso o difusión de conocimientos, para intercambiar prácticas, personal y objetos intangibles de manera expedita.

B. Estar disponibles para la participación de planes y programas nacionales, regionales o locales en torno a la creación de conocimientos.

C. Facilitar la participación de los usuarios de sus servicios, en los mecanismos participativos que las instituciones intermedias poseen.

Artículo X4. Existirá una entidad autónoma, representativa y de rango constitucional, que definirá la Estrategia Nacional del Conocimiento. La gobernanza de esta entidad será democrática, equitativa, paritaria, descentralizada y con enfoque de género, y estará establecida por la ley.

A. La antedicha entidad tendrá los siguientes roles: Definir la Estrategia Nacional del Conocimiento, que incluirá objetivos y directrices generales del sistema de producción de conocimiento.

B. En su rol principal, procurar mantener los equilibrios entre las distintas disciplinas, territorios y tipos de conocimientos.

C. Crear mecanismos de participación popular, que incluyan con especial énfasis la participación vinculante de espacios regionales descentralizados.

D. Mantener un estricto apego a la probidad administrativa y operar con máxima transparencia.

Norma Transitoria:

Artículo XX. El Estado debe aumentar progresivamente el gasto público para fomentar la creación, producción y difusión de los conocimientos.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°508-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre Chile Digital, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Martín Arrau, Eduardo Cretton, Margarita Letelier, Ruth Hurtado, Pablo Toloza, Harry Jürgensen, Claudia Castro, M. Cecilia Ubilla, Teresa Marinovic, Alfredo Moreno y Carol Bown.

Si hay algo que nos ha enseñado la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por el protagonismo tecnológico, es que el mundo ya no cambia de forma lineal, sino exponencialmente.

El hecho que avances en el ámbito tecnológico están integrándose con los mundos físicos, biológicos y digitales, ha generado un profundo impacto en la vida real, cambiando fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. Impacto en el mundo social, laboral, en la economía, en los hábitos de consumo, de educación, de uso del tiempo, por mencionar algunos.

Según el informe Digital Dividends del Banco Mundial (2016), las cifras de actividad en un día típico de la vida digital son impactantes: 207.000 millones de correos electrónicos enviados; 4.200 millones de búsquedas en Google; 803 millones de tuits; 152 millones de llamadas por Skype; 186 millones de fotos en Instagram; 8.800 millones de vídeos vistos en YouTube; 36 millones de compras por Amazon, entre otros. Es la actividad que generan los 3.200 millones de personas que utilizan internet. Y esto, considerando que aún existe un 60% de la población mundial que no tiene acceso a internet.

Chile es el país latinoamericano con el porcentaje más alto de acceso a Internet. En el año 2000, según datos del Banco Mundial, el país tenía a un 16,6% de su población siendo usuarios de internet, mientras que la última proyección de este dato para el año 2020 de Fundación País Digital, con datos previos al efecto de COVID-19, muestra que superó el 80% de la población usando internet.

Los datos también dan cuenta de que el alcance de esta tendencia ha sido desigual a lo largo del territorio nacional. Existen condicionantes socioeconómicos en el uso de internet en Chile como por ejemplo, el nivel de educación, la edad, el ingreso económico y la zona de residencia, urbana o rural. Estos mismos condicionantes profundizan la brecha digital, aun cuando los niveles de infraestructura digital aumentan progresivamente. Un ejemplo dramático de esta desigualdad es La Región de la Araucanía, la que ocupa el último lugar en la tasa de acceso a Internet fijo con un 33% de su población (Subtel, 2021). Asimismo, en Temuco, la capital de la región, un 12,5% de personas declaran que no saben utilizar un computador o smartphone y un 23% declara que no saben o no les informan cómo utilizar Internet (Centro de Políticas Públicas Universidad Católica de Temuco, 2021).

Por todo lo anterior, uno de los desafíos más relevantes para las sociedades es garantizar que las oportunidades, así como las externalidades y riesgos, se distribuyan de modo equitativo.

Digitalización y Economía

La digitalización tiene una dimensión económica que es importante resaltar, que se asocia con la productividad y, en consecuencia también, con los salarios, las oportunidades laborales, equidad y el crecimiento económico. Tal como lo recoge la experiencia internacional, aquellos países con un mayor grado de digitalización, medida como porcentaje de la población con acceso a internet o índice de calidad de las telecomunicaciones, exhiben una productividad notablemente mayor al del resto de los países. Esto dice relación con la mayor

eficiencia que se alcanza no sólo en el aparato productivo, dado el espacio que abre para la automatización de procesos y desarrollo de nuevos emprendimientos, sino que además por las ventajas y agilidad que se alcanza en trámites con el Estado y en la relación con las entidades públicas. Por el lado de los hogares, en tanto, se reconoce que facilita la vinculación con el sector financiero, comercial y de servicios.

Hay varios ejemplos de países que han impulsado la digitalización y la introducción de nuevas tecnologías, con mejoras notables en la productividad. Como es bien sabido, la productividad en Chile ha estado prácticamente estancada en la última década, lo que ha llevado a sistemáticas caídas en la estimación del crecimiento económico de largo plazo. Hasta hace unos años atrás ésta se estimaba de acuerdo al Banco Central en 3,5%, mientras que hoy día la misma se ubicaría en torno a 2%. Con el impulso en la productividad que han tenido aquellos países que han apostado por la digitalización, se podría recuperar la capacidad estructural de crecer entre 3% a 3,5%, lo que implica un incremento de la riqueza del país cercana a 14%. Esto conlleva un incremento en el valor de la actividad económica equivalente al día de hoy de casi US\$ 1.000 billones, más de 3 veces el PIB actual de Chile, que traería consigo mejoras en salarios y una distribución del ingreso más equitativa, de la mano con la alfabetización digital.

Un Chile Diferente

Todo texto constitucional tiene dos grandes apartados, la estructura institucional del poder y los derechos y deberes de las personas. Junto con ello, hay constituciones que tienen una sección inicial en la cual se disponen los valores y principios constitucionales, radicando en ella aquellos elementos definitorios del Estado y sus deberes. En lo que sigue se presentan ideas generales de propuestas para que puedan ser consideradas en las distintas partes de la nueva Constitución.

I. Las personas tienen el derecho a acceder a las tecnologías, a internet y a la información de manera informada, responsable, segura, ética, libre y participativa. Junto a ello, se debe asegurar la producción, el intercambio y difusión de la información.

II. Las personas tienen derecho a la protección de sus derechos en el ambiente digital, de manera que en este nuevo escenario tecnológico no se menoscabe sus derechos, tales como el derecho a la intimidad, a la honra a las comunicaciones privadas, a la propiedad, la libertad de emprender, entre otros.

III. La modernización del Estado debe considerar para su mejor gestión, eficiencia y eficacia, las posibilidades que brindan las tecnologías de la información; debiendo adoptar las medidas administrativas y legales para su desarrollo y aplicación. La tecnología debe permitir dar mayor énfasis a los procesos administrativos digitales, a la probidad, la transparencia y medidas anti-corrupción.

IV. En el diseño, ejecución y desarrollo de las políticas públicas de los distintos niveles del gobierno (nacional, regional y local) es necesario incorporar y utilizar las tecnologías de la información para lograr un mayor bienestar para las personas. La salud, la educación o el trabajo son áreas que pueden ser priorizadas en este ámbito.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X (1).- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales frente la recolección, archivo, empleo y difusión de los mismos.

Los datos personales sólo podrán ser almacenados o difundidos previa autorización de su titular o por mandato de la ley siempre que ésta invoque un interés público preponderante.

La ley regulará la forma y condiciones del ejercicio de este derecho y sus limitaciones.

Artículo X (2).- El Estado, en el desarrollo de la legislación y en las políticas públicas, deberá considerar para su mejor gestión, eficiencia y eficacia, las posibilidades que brindan las tecnologías de la información; incorporando especialmente procesos administrativos digitales. Los distintos niveles del gobierno deberán incorporar y utilizar las tecnologías de la información en el diseño, ejecución y desarrollo de sus planes, políticas y programas.

Artículo X (3).- El ejercicio de los derechos establecidos en este párrafo no pueden menoscabar la titularidad y ejercicio de los demás derechos establecidos en esta Constitución.”.

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a la diversidad de opiniones y al debate contradictorio en la era digital, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Francisco Caamaño, Carolina Videla, Paulina Valenzuela, Loreto Vidal, Malucha Pinto, Alexis Caiguan, Loreto Vallejos, Ericka Portilla, Francisca Arauna, Cristóbal Andrade, César Uribe, Marco Arellano, Camila Zárate y Hugo Gutiérrez.

No estar desacuerdo es lo que caracteriza esta forma específica de la política que es la democracia, que para funcionar depende no solo de la diversidad de opiniones sino además de la confrontación de opiniones opuestas mediante un debate contradictorio.

I) Internet, que fue desde sus inicios una red abierta y sin trabas, dio lugar a la emergencia de un espacio común digital y a un ejercicio sin precedentes del debate inclusivo y contradictorio.

II) Sin embargo, debido a la falta de regulación apropiada, las redes sociales se constituyeron en monopolios mundiales que privatizan este espacio y obstaculizan la deliberación.

III) Se hace necesario regular nuestro espacio común digital, para promover la deliberación, puesto que esta es fundamento y condición de la democracia.

La emergencia del espacio común digital gracias a internet

Según Jacques Rancière, la política es el arte de las identidades cruzadas, de la construcción local y singular de casos de universalidad y, ante todo, el conflicto por la existencia de un escenario común hecho de relaciones de mundos. En ese sentido, la democracia es una forma de la política y de vivir juntas y juntos.

Es por esto que, en la antigüedad, la democracia ateniense integró el principio de la libertad de expresión, reconocido como un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, en los años '80, el informe de la Comisión Internacional Para el Estudio de los Problemas de la Comunicación sostuvo que “el derecho a comunicarse significa mucho más que recibir información” ya que es llave de otros derechos.

Por otro lado, según Hannah Arendt, la facultad de juzgar, necesaria para la construcción de una ciudadanía democrática, descansa en un acuerdo potencial con otros, en una comunicación con otros, con los que en última instancia se debe llegar a un acuerdo.

En este sentido, según Henri Verdier, para que una democracia funcione, la libertad de expresión debe estar orientada a la deliberación, es decir, a un proceso en el que las voluntades de los ciudadanos dialoguen y formen una decisión aceptada tanto por la minoría como por la mayoría.

Es el no estar desacuerdo lo que caracteriza esta forma específica de la política que es la democracia, que para funcionar depende no solo de la diversidad de opiniones sino además de la confrontación de opiniones opuestas mediante un debate contradictorio, que el pueblo de Atenas inventó al reivindicar su igualdad con los ricos.

De este acceso al diálogo, a la confrontación de opiniones y a la deliberación democrática depende la formación de la voluntad política y se desprende la legitimidad de nuestro pacto social. Internet, que fue desde sus inicios una red abierta y sin trabas, dio lugar a un ejercicio sin precedentes del debate inclusivo y contradictorio.

Hackers, activistas, estudiantes, pueblos originarios, disidencias sexuales y todas y todos cuya voz no encontraba asidero ni en el discurso público ni en la prensa, tomaron Internet por asalto para, gracias a la libertad que este proveía frente a los poderes institucionales, poder finalmente participar del debate.

Esto dio lugar a un nuevo ágora, el espacio común digital, en el que las personas comparten recursos, se comunican e intercambian opiniones. Este espacio común, por su pluralismo, no está ajeno de conflictos ni es aquello en lo que estamos de acuerdo. Al contrario, es el espacio en el que podemos estar en desacuerdo.

Detrás de la constitución caótica de este nuevo espacio común en Internet encontramos a empresas privadas que han sabido captar nuestra lealtad creando servicios que nos permiten publicar contenidos, compartirlos con otras personas y desafiar así las «barreras materiales» al ejercicio de la libertad de expresión: las redes sociales.

Las redes sociales contribuyen a la fragmentación de la sociedad

Sin embargo, algo salió mal. Las redes sociales se fueron constituyendo en monopolios mundiales a una velocidad vertiginosa, apoderándose del ejercicio de la libertad de expresión, privatizando el territorio de Internet y actuando como verdaderos estados de facto.

Desgraciadamente, a diferencia de un Estado de Derecho, cuya acción tiene como objetivo la defensa y la promoción del interés general, una red

social actúa en su interés propio y el de sus inversionistas, no en el nuestro. Su visión del «bien común» es la filantropía, incompatible con la solidaridad democrática.

Las redes sociales estructuran el debate público: las normas que nos imponen condicionan el contenido mismo de nuestra manera de pensar, las opiniones que nos proponen sus algoritmos son las con mayor potencial de «like», no las de mejor calidad ni las más necesarias para la construcción de una ciudadanía democrática.

Asimismo, actores malintencionados y políticos populistas aprendieron a explotar los algoritmos de recomendación para avanzar sus agendas anti-democráticas, incitando al odio, a la violencia y a la beligerancia entre la ciudadanía, transformando Internet en un supermercado de la opinión, en una ruta de la dopamina.

El populismo es esencialmente anti-democrático puesto que busca imponer una verdad unilateral mediante el negacionismo de todo lo que se vive y la manipulación comportamental de la ciudadanía. Sin ir más lejos, en las últimas elecciones presidenciales fuimos testigos de varios casos de desinformación por redes sociales: «El diputado electo por el Partido Republicano Gonzalo de la Carrera (...) compartió una supuesta imagen de Gabriel Boric en violentas manifestaciones durante el estallido social. (...) Boric respondió mostrando la imagen original (correspondía a la inundación de su vivienda), De la Carrera (...) reconoció que se trataba de una desinformación y que recibió “órdenes de publicar”.

Magdalena Moncada (...) publicó una imagen de una estación de metro de Santiago vandalizada y vinculándolo a los seguidores de Gabriel Boric. Desde las autoridades del tren subterráneo negaron cualquier daño. (...) La imagen publicada por Moncada en realidad era de las protestas de 2019.»

La fragmentación de la ciudadanía, bombardeada constantemente por estrategias inescrupulosas de propaganda política, cuyo objetivo es inducir en estos comportamientos en el ámbito político, en secreto y sin contradicción, atenta contra el fundamento mismo de la democracia como forma de política: la confrontación de opiniones.

Así, las redes sociales se terminan convirtiendo en el espacio común digital en el que nos desenvolvemos y en el que calculamos nuestro modo de ser en el mundo. Sus algoritmos de recomendación acaban dibujando este espacio, sin que podamos salir de él ni decidir colectivamente las reglas del juego que

queremos aceptar. Necesitamos liberarnos de esta tutela. Necesitamos un espacio común que sea realmente común.

Se hace necesario regular nuestro espacio común digital, para promover la deliberación, que es condición de la democracia

Primero, puesto que la ley es la misma en todas partes, proponemos garantizar un mandato constitucional abierto que permita al legislador y las autoridades crear un marco jurídico-institucional de gobernanza de nuestro espacio común digital, de manera paulatina y en buen entendimiento con el privado y ciudadanía.

Es tarea del legislador y de las autoridades públicas imaginar, experimentar e implementar soluciones democráticas que permitan luchar contra las vulneraciones de los derechos en redes sociales, como son las amenazas de muerte, pedopornografía, violencia y ciberataques, respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, en lugar de continuar aumentando el poder de vigilancia del Estado sobre la ciudadanía, se propone una «estrategia horizontal», que reposa sobre una alianza con la sociedad civil para señalar casos de abuso, y una colaboración con las redes sociales para facilitar el trabajo diligente de las autoridades.

Dado el carácter monopólico mundial de las empresas privadas que controlan nuestro espacio común digital, una política que busque restablecer el equilibrio democrático debe realizarse en el marco de la cooperación internacional. La Ley de Gobernanza de Datos y Ley de Mercados Digitales europeas son buenos ejemplos.

No podemos pedir a las redes sociales que se «autorregulen». Hablamos de la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, todo control debe estar sujeto a los principios de un Estado de Derecho: proporcionalidad, transparencia, y debido proceso. Confiarles esta tarea implicaría privatizar la democracia.

Por otro lado, tampoco debemos caer en la trampa de intentar «proteger» a las personas de ciertas opiniones en redes sociales, puesto que sería una vulneración a la libertad de prensa que se construye justamente a partir de opiniones que desafían y son mecanismo de control de la acción del Estado.

Debemos confiar al Estado la misión de encontrar las condiciones materiales, jurídicas e institucionales, que promuevan un espacio digital propicio a la manifestación de la verdad, la confrontación pacífica de puntos de vista y la serenidad del debate. Toda misión distinta sería una amenaza para la democracia.

Debemos buscar soluciones que no amenacen Internet. La tecnología en sí no es buena ni mala, pero tampoco neutral". Asimismo, las redes sociales no son ni buenas ni malas, pero construyen un espacio digital que no es neutral. Son empresas privadas, con un modelo de negocio definido: la publicidad comportamental.

Los algoritmos de recomendación, además de proponernos libros, canciones y gatos bailando, deben servir un propósito de interés general: promover la diversidad de opiniones y el debate contradictorio. Hoy sirven otro bien distinto: vendernos más y más publicidad, incluso al precio de la desintegración del espacio común.

Cuando en Chile, a una persona que utiliza la plataforma YouTube para mirar el último debate presidencial, se le impone de manera unilateral e inaceptable una propaganda política personalizada, pagada justamente por uno de los candidatos presentes en el debate, a lo que asistimos es a la estocada final a la democracia.

Es hora de recuperar la gestión democrática de nuestro espacio común digital.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Preámbulo

Considerando que el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales y libertades públicas a lo largo y ancho del país no puede excluir nuestro espacio común digital ni prescindir del control soberano de los medios tecnológicos que garanticen su ejercicio pleno.

Artículo X1 — Definición de red social: Una red social es todo servicio digital que permite a una persona publicar contenidos de su elección, hacerlas así accesibles a otras personas y que realiza una editorialización de estos contenidos, de manera automatizada o no.

Artículo X2 — Diversidad de opiniones y debate contradictorio:

Toda red social deberá tender a integrar requisitos de interés general, recomendando contenidos con opiniones diversas y contradictorias.

Artículo X3 — Cooperación entre redes sociales, autoridades y la ciudadanía: Toda red social deberá promover mecanismos que garanticen el respeto de los derechos y libertades fundamentales y que faciliten la notificación de abusos y la capacidad de toda autoridad competente de actuar.

Artículo X4 — Obligaciones del Estado: Es deber del Estado proteger el espacio común digital, en respeto de la mínima intervención, proporcionalidad y necesidad, remitiendo siempre a autoridad competente y mediante una participación activa de la sociedad civil.

Artículo X5 — Equilibrio democrático: Las autoridades podrán tomar las medidas necesarias que le confiera la ley para prevenir situaciones de monopolio, favorecer la competencia y crear un marco propicio para confrontación pacífica de puntos de vista.

Artículo X6 — Transparencia de los algoritmos: Toda persona tiene derecho a saber cuándo una red social utiliza un algoritmo para editorializar contenidos, conocer el tipo de contenido que prioriza y en qué proporción y a comprender los impactos generales de su uso.

Artículo X7 — Pluralismo algorítmico: Toda persona tiene la libertad de elegir los algoritmos para editorializar contenidos que utiliza y a proponer criterios alternativos, así como el derecho a que estos no estén basados exclusivamente en criterios de mercado.

Artículo X8 — Publicidad: Toda publicidad personalizada debe conciliarse con el interés general. Se prohíbe toda publicidad política personalizada o cuyo objetivo sea inducir comportamientos determinados en las personas en el ámbito político.

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre reconocimiento constitucional de la cultura tradicional y el folclore chileno, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Pollyana Rivera, Raúl Celis, Claudia Castro, Patricia Labra, Ruth Hurtado, Cecilia Ubilla, Harry Jürgensen, Geoconda Navarrete y Pablo Toloza.

Considerando que la presente iniciativa popular de norma no logró alcanzar las 15.000 firmas requeridas para ser sometida a tramitación por parte de la Convención Constitucional, y que la cultura desempeña un papel fundamental dentro de la sociedad chilena, se hace necesario perseverar en esta iniciativa por esta vía.

¿Qué problema buscamos solucionar?

Actualmente, el Estado de Chile no reconoce nuestra cultura tradicional como componente esencial de la identidad del pueblo chileno y de las diversas comunidades que lo conforman y no goza de la valoración, el respeto y transversalidad en relación con otras manifestaciones de la cultura. Esta invisibilización por parte del Estado ha provocado una mala interpretación en relación con lo que se entiende y forma parte de la cultura tradicional y a su vez, este hecho trae consigo que se malentienda el concepto mismo y genere confrontaciones que debieran estar al margen de todo debate, pues el concepto de cultura tradicional se debiera entender como el quehacer del pueblo cuando se transmite entre generaciones, lo que incluye la diversidad de expresiones de comunidades y pueblos originarios.

Por otra parte, debemos dar cuenta de un proceso aún inacabado del pleno reconocimiento de la mujer en el desarrollo de la cultura tradicional, aun cuando la práctica y la historia nos ha demostrado la importancia de su aporte; nadie podría discutir la calidad y relevancia de las mujeres chamanteras, las tejedoras del crin, o las alfareras en todas y cada una de las regiones del territorio nacional y por supuesto, la enorme importancia de las machis en la cultura mapuche. Por estos hechos, el Estado y la sociedad están en deuda con las mujeres cultoras, las artistas, artesanas y cuidadoras del saber ancestral, siendo de importancia capital dar debida cuenta de ello.

Finalmente, el Estado no asume su responsabilidad expresa de rescatar, respetar, promover y difundir la cultura tradicional chilena en todas sus expresiones y dimensiones formativas y creativas.

¿Cuál sería la situación ideal?

Que el Estado reconozca la cultura tradicional como componente esencial del pueblo chileno y las comunidades que lo conforman y junto con ello, asuma la responsabilidad de establecer mecanismos para el rescate, el respeto, promoción, difusión y proyección de la cultura tradicional chilena. Asimismo, validar como oficios y profesiones a aquellos cultores, investigadores, artesanos, escritores, artistas y cualquier otra persona que desarrolle algún tipo de manifestación de la cultura tradicional.

Que el Estado tenga el deber de garantizar el acceso a las expresiones de la cultura tradicional, tanto en el ámbito público como privado e incorporarlas en el Curriculum Nacional de Educación, en todos sus niveles de formación, así como también reconocer y fomentar la labor formativa comunitaria en esta materia.

Debe ser, también, responsabilidad del Estado velar porque el ejercicio de los derechos de las personas, para acceder a las distintas expresiones de la cultura tradicional, sea materializado evitando la discriminación por género, etnias o distribución territorial, garantizando la adecuada disponibilidad de recursos para ello.

¿Qué debe contemplar la Constitución?

La nueva constitución debe contener normas expresas de las definiciones que la sociedad debe darse como República que reconoce su multiculturalidad y la multiplicidad de comunidades que forman la identidad patria, incluyendo a todo el abanico social, desde quienes se reconocen como cultores, pasando por las agrupaciones y hasta quienes se perciben como nación, siendo cada una de ellas un Yo legítimo que debe estar protegido por el Estado como institución generada por la sociedad para alcanzar su desarrollo pleno, entendido como un bien común a todos los que son parte de Chile.

El reconocimiento de la cultura tradicional como parte esencial del pueblo chileno y las diversas comunidades que la conforman como un derecho fundamental con rango constitucional. Además, establecer el deber del Estado, de garantizar el ejercicio de este derecho.

El reconocimiento de la cultura tradicional debe implicar la incorporación de sus expresiones en el Curriculum de la educación formal e informal, validando profesionalmente a aquellos cultores que la desarrollan actualmente.

Sustento normativo de la iniciativa

La constitución política contiene las normas básicas sobre las que se asienta el pacto social que da cuenta y forma de la república, en ella se pone de relieve la identidad del pueblo, de sus ciudadanos y cada una de las comunidades que forman su tejido social. Sobre este punto fundamentamos el deber de materializar la importancia de la cultura tradicional en sí para este pacto social, ya que actualmente la cultura tradicional y el folclor no tienen reconocimiento en la Constitución Política de la República de Chile.

La Declaración Universal de Derechos Humanos versa:

En el art 27 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

En el Artículo 22 de la Declaración se añade que toda persona tiene derecho a la realización, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, de los derechos culturales, indispensable para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.

Las personas ligadas a las distintas expresiones del folclor, de la cultura tradicional, tenemos la justa y sana aspiración a que el Estado reconozca el valor de ella en la formación de la identidad y la importancia de nuestra labor para que Chile tenga una identidad que sea respetada por todas las personas dentro y fuera del territorio nacional.

En cada área del saber existe una riqueza cultural que parte desde la práctica tradicional y su transmisión generacional, por consiguiente, sostenemos que tiene la misma validez que la generada desde la academia; por ello, el devenir cultural de Chile está incompleto si seguimos excluyendo una parte medular del mismo y más grave aún si afirmamos, con total justicia, que estas expresiones de nuestra cultura son parte esencial del alma de Chile

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X.1.- El Estado de Chile reconoce que la cultura tradicional y el folclor chileno, en todas sus expresiones, constituye la base esencial de la identidad nacional, haciéndola extensiva a todas las comunidades, territorios y áreas culturales de la República. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el rescate, promoción y difusión la cultura tradicional chilena.

Se entiende por cultura tradicional de Chile, el conjunto de prácticas y saberes que se transmiten inter generacionalmente y que se reflejan mediante las artesanías, bailes, cantos, chistes, costumbres, cuentos, expresiones religiosas, gastronomía, habitabilidad, historias, leyendas, mitos, música, proverbios, ritos, supersticiones, entre otros, y que constituyen una práctica habitual en todas y cada una de las comunidades del territorio nacional y como esto se comparte entre las distintas comunidades, así como también el estudio y sistematización de estas materias. Para efectos de esta normativa, entendemos el uso de las palabras folklore y folclor como sinónimo del concepto antes descrito.

Artículo X.2.- El acceso a las distintas expresiones de la cultura tradicional es un derecho fundamental de toda persona y de las comunidades del territorio nacional, en igualdad de oportunidades, siendo deber del estado garantizar y promover su acceso por medio de la educación permanente y la enseñanza técnica, artística y profesional en todos los niveles del proceso educativo, por medio de profesionales y establecimientos idóneos.

Los cultores y artistas de la cultura tradicional chilena tienen derecho a que el Estado proteja su actividad, los procesos formativos y creativos, en cuanto respeten el orden justo y los derechos que de esta constitución emanan, sin que ello signifique una desprotección y/o abuso de los recursos naturales y de los demás derechos que garanticen la constitución y la ley.

Artículo X.3.- El Estado de Chile debe velar porque exista la adecuada institucionalidad cultural para la promoción de las distintas expresiones de la cultura tradicional y proveer los recursos adecuados para apoyar a los cultores, creadores, investigadores y otros que participen en el rescate, puesta en valor, difusión, proyección, de igual modo, su estudio y preparación académica profesional de las personas y grupos ligados al folclor y que esta institucionalidad exista a nivel comunal, regional y nacional.

La ley establecerá los mecanismos para rescatar, promover, difundir mediante diversos medios de comunicación, respetar, educar, incentivar, fomentar y dar acceso, registrar, desarrollar y proteger la cultura tradicional chilena y el folclor.

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el patrimonio cultural común, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Daniel Bravo, Natalia Henríquez, Loreto Vallejos, Francisca Arauna, Ingrid Villena, Francisco Caamaño, Daniel Stingo, Luis Jiménez y Cristóbal Andrade.

De acuerdo al ordenamiento chileno, pertenecen al patrimonio cultural común –también llamado dominio público autoral– las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido; las obras de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folklórico; las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga la ley de propiedad intelectual –Ley N° 17.336–; las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estén protegidas en la forma establecida en el artículo 2° de la Ley N° 17.336; y las obras expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario.

Por otro lado, el Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, las Instituciones semifiscales o autónomas y las demás personas jurídicas estatales son titulares del derecho de autor respecto de las obras producidas por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos. Sólo mediante resolución del titular del órgano público pueden liberarse cualquiera de dichas obras, para que formen parte del patrimonio cultural común.

Ahora bien, lo característico de las obras del patrimonio cultural común podrá ser utilizado por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra.

Hoy, las obras literarias, artísticas y científicas generadas por el Estado de Chile o con recursos entregados por el mismo, y financiadas a través de los impuestos que todas y todos pagamos, no forman parte del patrimonio cultural común, es decir, no somos libres de utilizarlas. Entre tales obras encontramos, por ejemplo, las fotografías y vídeos oficiales, mapas, planos, folletos, manuales, recomendaciones, logos y canciones, entre otros.

Las personas debemos solicitar una autorización del titular del órgano público para poder dichas obras, aún solo copiarlas y publicarlas en otros medios. Esto implica a su vez, que el titular es quien podrá decidir si liberar o no dichas obras, para que se han generado con fondos públicos.

Lo anterior implica que no podemos acceder libremente al conocimiento generado a través de financiamiento estatal. Esto contrasta con el escenario ideal, en el cual todas las obras generadas por el Estado, sean

liberadas inmediatamente para que formen parte del patrimonio cultural común, ya que fueron financiadas con recursos de todas y todos.

Debido a que las obras literarias, artísticas y científicas generadas por los órganos estatales, o con recursos entregados por Estado, son financiadas a través de los impuestos de las chilenas y chilenos, no pueden ser aprovechadas o rescatadas, generando un beneficio que las personas de Chile, siendo que debería ser un derecho de todas y todos poder hacerlo, y por ende, estas obras deberían formar de parte, de manera automática y sin ninguna solicitud de por medio del patrimonio cultural común de las chilenas y chilenos. Esto último debería ser un derecho fundamental.

El dominio público es el estado que adquieren las obras literarias, científicas y artísticas es, de hecho, el patrimonio cultural de la humanidad y una fuente inagotable para la creación de nuevos bienes intangibles, dado que, finalizado el plazo de monopolio legal sobre la propiedad intelectual, cualquier persona puede utilizar las obras de manera relativamente libre. En otras palabras, el dominio público la habilita a tener una circulación mucho más extendida y a un costo mucho más bajo.

Sin embargo, la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual, establece que la protección de los derechos de una obra dura por toda la vida de su autor o autora y luego se extiende por 70 años después de su muerte. En el caso de que se trate de una persona jurídica privada la protección es de 70 años a contar de la primera publicación de la obra.

Una vez cumplido dicho tiempo, la obra pasa al dominio público, esto es, pasa a integrar el patrimonio cultural común. A partir de entonces, la obra puede ser usada y reproducida sin necesidad de contar con la autorización del titular de los derechos.

Las obras generadas con recursos públicos debieran incorporarse de manera directa al patrimonio cultural común, permitiendo el acceso a todas y todos, ya que evidentemente el dominio público beneficia a la comunidad como un todo, pero también juega un rol esencial en la generación de nuevas creaciones y producciones intelectuales, y por ende para investigadores, científicos, educadores, artistas, autores y creadores que requieren acceder al estado de la técnica y de la cultura.

Para comprender esta relación, hay que explicar en forma previa, un supuesto común a prácticamente toda actividad creativa-inventiva: hoy en día, todo avance tecnológico, científico y cultural no es un hecho aislado, sino que

debe mirarse dentro del contexto complejo propio de toda creación inserta en uno o más sectores del conocimiento de la humanidad. Así toda creación intelectual o industrial es generada aprovechando los esfuerzos colectivos desarrollados por muchas generaciones de creadores o investigadores anteriores.

Contenido de la iniciativa.

La iniciativa propuesta consta de un artículo, con tres incisos.

El primer inciso del artículo propuesto establece que toda obra literaria, artística y científica, cualquiera que sea naturaleza y su soporte, que haya sido producida por el Estado, o cualquiera de sus funcionarios, pertenecerán de pleno derecho al patrimonio cultural común, y podrán ser utilizadas por cualquier persona, siempre que preserven su paternidad e integridad.

En el segundo inciso del artículo de la propuesta, se contempla una excepción a la regla general, respecto a las actividades propias de las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación, cuando aquellas tengan un sentido estratégico y una ley así lo declare expresamente.

En el inciso final del artículo, se establece que la ley dispondrá la forma en que las obras de particulares financiadas con fondos públicos sean liberadas al patrimonio cultural común o licenciadas para su uso, copia y distribución públicas.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX. Patrimonio Cultural Común. Las obras literarias, artísticas y científicas de cualquier naturaleza, en soporte físico, electrónico o audiovisual, producidas por el Estado, o por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos, pertenecen al patrimonio cultural común y podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se reconozca la autoría y la integridad de la obra.

Lo anterior no será aplicable a las obras desarrolladas en el contexto de actividades propias de las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación, cuando aquellas tengan un sentido estratégico y la ley así lo declare.

La ley arbitrará los medios para que las obras de particulares financiadas con fondos públicos sean liberadas al patrimonio cultural común o licenciadas para su uso, copia y distribución públicas.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°901-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho de los pueblos y naciones indígenas al uso y traslado de la hoja de coca y su reconocimiento como parte de su patrimonio cultural, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Félix Galleguillos, Carlos Calvo, Alejandra Flores, Isabela Mamani, Luis Jiménez, Margarita Vargas, Wilfredo Bacian, Malucha Pinto, Isabel Godoy, Paulina Valenzuela, Rosa Catrileo y Tiare Aguilera.

La hoja de coca y su significado en las naciones andinas es milenaria y ancestral, ya que contempla su participación en todas las tradiciones y costumbres que se siguen realizando hasta el día de hoy.

Según María Rostworowski, habrían existido en el período precolombino por lo menos “dos variedades de coca, la una de la región oriental de los Andes y la segunda cultivada en vertientes del Océano Pacífico, por lo que su investigación nos indica que es el actual norte grande de Chile; los profesores Waldo Ríos y Elías Pizarro, recopilaron antecedentes referente a la presencia de plantaciones de la hoja de Coca en la actual región de Arica y Parinacota, mencionando que “la variedad más interesante para el Inca. Además, las evidencias arqueológicas señalan la existencia de una tradición por la coca en la región y, en particular, en el valle de Azapa, la que es corroborada por la información etnohistórica y toponímica”.

Si bien el uso de la hoja de coca es amplio y variado desde tiempos ancestrales, se poseen registros que esta se continuó utilizando en la colonia, ya que “formaron en la época colonial, e incluso hoy día, un binomio indisoluble en las alturas andinas, de modo que no fue posible la una sin la otra, al menos con la intensidad con que las explotaciones mineras se desarrollaron” la cita hace alusión a la complementariedad de los mineros con el masticar la coca en las alturas y en los socavones, ya que como se ha mencionado la hoja de coca no sólo es utilizada en situaciones rituales, sino que es una actividad diaria que complementa la alimentación y sacia el estómago; durante la colonia muchos indígenas de las naciones andinas fueron obligados a trabajar en la mita del Cerro de La Plata de

Potosí en el Alto Perú y al obligarlos a emigrar de sus territorios originales y en contacto con otros indígenas desarrollaron o practicaron sus conocimientos y/o prácticas comunes como lo fue la utilización de la hoja de coca diariamente.

Las pueblos y naciones Andinas se han reconocido abiertamente Lickanantay, Aymara, Quechua, Colla o Diaguitas y han enfrentado un difícil panorama al encontrarse en una zona en donde la estabilidad política y social a escaseado, primeramente han sobrevivido a una colonia

e independencia de la corona española para luego estar insertos en el Estado de Perú como ocurrió con en el caso de Arica y Tarapacá y en el Estado de Bolivia con Antofagasta y Calama, posterior a esto han estado en medio de un conflicto bélico como lo fue la Guerra del Pacífico y con todo el proceso de Estado/nación de Chile y los procesos ya vividos con la Chilenización, a través del cual se pretendía sistemáticamente homogeneizar las formas de vida y cultura de las naciones andinas a la población occidental.

En el caso de Arica y Parinacota su adscripción al Estado chileno es desde 1929 con el Tratado de Lima en donde se reconoce la soberanía chilena a esta zona, en tanto Tarapacá pasa a ser parte de Chile desde 1883 con el Tratado de Ancón.

La región de Antofagasta ex región del litoral, en donde se localiza la población Lickanantay es de soberanía chilena recién en 1888, tras la toma de Chile de esta área como zona estratégica de guerra en 1879.

En consecuencia, las Naciones indígenas en el norte han sobrevivido a diferentes cambios en distintos marcos sociales, políticos y económicos durante cada periodo diferente de su historia, pero han logrado preservar sus costumbres, tradiciones, ritos, lengua y cosmovisión; en tal sentido la hoja de Coca cuyo nombre científico corresponde al género *erithroxylum*, ha sido utilizada de manera ancestral por las naciones andinas preexistentes al Estado de Chile.

En época republicana “La hoja de coca cruzó todas las rutas andinas que comunicaban a Bolivia y Chile, desde la triple frontera de Ancomarca hasta la triple frontera del Zapaleri, como es el caso de las fronteras de Tarapacá y Antofagasta” y fue utilizada en las oficinas Salitreras de todo el norte por las y los trabajadores que residían en aquellos espacios, una vez más llevándola en su mochila cultural como parte de su identidad y memoria histórica, existiendo basta evidencia antropológica que estos flujos migratorios en el altiplano andino a través de los cuales surgía cotidianamente la interculturalidad entre naciones indígenas, las cuales adoptaron manifestaciones y significados simbólicos cristianos

focalizados en el catolicismo, generando un proceso de sincretismo religioso el cual ha continuado con ahínco el requerimiento de la hoja de coca para llevar a cabo las festividades y ceremonias propias de la identidad de las naciones indígenas.

Otra evidencia tras el cierre de las oficinas salitreras corresponde a documentación de la intendencia de Tarapacá, donde se señala que “Desde la perspectiva de las autoridades chilenas, el circuito de la hoja de coca era contrabando y debía controlarse policialmente; por ello, hacia 1909 se solicitaba un “puerto de cordillera” para obligar a pagar derechos a productos tradicionales como la papa chuño, el charqui y la coca. Un documento de la Intendencia de Tarapacá del 24 de septiembre de 1937 muestra además la preocupación de las autoridades por el contrabando de este tipo de mercancías, que demuestra lo inútil de su control fronterizo. Para entonces, ya había concluido el ciclo del salitre”.

La utilización de la Hoja de Coca o también conocida con su nombre científico como parte del género *erythroxylum* la que es usada en prácticas rituales, espirituales, tradicionales y medicinales en los pueblos Lickanantay, Aymara, Quechua, Colla y Diaguita, así como ocurre con la hoja de coca al estar presente en cada rito que se realiza en los andes, ya sea en las mesas ceremoniales, como ornamentación y/o como instrumento de lectura o acompañamiento espiritual de las autoridades ancestrales.

También se utiliza para realizar pagos a la tierra y a las divinidades y ancestros que coexisten con nosotros conforme a las ritualidades propias de la cosmovisión andina. Dentro de sus usos en ceremonias se destacan las siguientes: ceremonias como el floreo de animales, los trabajos comunitarios, las limpiezas de canales, fiestas patronales, matrimonios, bautismos, ritos mortuorios, carnaval de los pueblos, nacimientos entre otros con fines festivos.

Por otra parte, la hoja de coca deshidratada y en su estado natural sin ningún tipo preservante o agente externo se utiliza para ser masticada en la boca con la finalidad de extraer sus propiedades, este proceso se puede acompañar ceniza mezclada o con azúcar, esta actividad es saciadora del hambre y previene el sueño. Esta práctica no necesita estar inmersa en algún tipo de festejo o festividad y es realizada diariamente por las y los miembros de las comunidades andinas.

Otro tipo de uso de la hoja de coca se usa en infusiones para calmar dolores corporales, especialmente del estómago y el mal agudo de montaña o conocido coloquialmente como mal de altura o mal de puna.

Con la hoja de coca también se realizan cataplasmas y con esto se cubren heridas y/o quemaduras para facilitar su curación, estas cataplasmas se usan en personas y animales.

La hoja de coca en su estado natural y tal como se detalla en los párrafos precedentes su utilización, es parte importante y fundamental en el Desarrollo de los pueblos Andinos, Históricamente (colonia) fue sólo catalogada como alimento o moneda de intercambio simplificando su importancia, pero aun cuando la Colonia o los Estados Nacionales no comprendieron la magnitud de lo que representaba su uso, este se mantuvo en el tiempo y en el territorio, hasta hoy en día.

En el mismo sentido, esta propuesta pretende contribuir a disminuir los conflictos fronterizos históricos que ha generado en la población indígena, la falta de preeminencia del derecho consuetudinario nacional e internacional de los pueblos y naciones indígenas en razón del porte y traslado de la hoja de la coca desde el país que es exportador de la hoja de coca para la realización de diversas actividades y fines señalados, exponiéndose desde multas hasta penas de prisión de libertad, como consta en diversos expedientes de la fiscalía y causas del poder judicial en aquellos juzgados y cortes que no cuentan con formación en derechos de pueblos indígenas y su regulación dentro del estándar internacional, evidenciando la carencia de un pluralismo jurídico que se haga cargo de aquello y logre uniformar a la jurisprudencia en esta materia, omitiendo en la significación del elemento material que conlleva la uniformidad de las conductas junto al elemento psicológico a través del cual varias personas coinciden en el reconocimiento de un deber en el estándar de comportamiento.

De esta manera, el reconocimiento patrimonial de la hoja de coca para todas las naciones indígenas, se hace cargo de materializar el ejercicio del reconocimiento de a la libre determinación de los pueblos, como sujetos titulares de derechos colectivos, sin perjuicio de los derechos individuales, por lo que no podemos referirnos a un pleno ejercicio de derechos si no se permite a las naciones indígenas preexistentes vivir en conformidad a sus diversas culturas, garantizado su incorporación y ejecución en las políticas públicas en la materia desde el estándar internacional de derechos; ya que es fundamental el derecho a practicar o manifestar las tradiciones culturales y religiosas, generado el sentido de identidad grupal, de establecer vínculos de orgánicas comunitarias y de solidaridad, estrechando confianzas o afianzar las existentes.

En suma, la importancia identitaria de la conservación y manifestación de las tradiciones, ritos, usos y costumbres que emana desde su rol constitutivo tanto de la identidad personal y colectiva de su cultura, que se traduce

en último término, en una condición esencial del desarrollo integral de la personalidad.

Fundamentos normativos:

Este derecho de los pueblos y naciones indígenas encuentra su fundamento normativo en diversos instrumentos internacionales, a considerar:

- Artículos 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Artículos 5, 6, 7, 27 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
- Artículos 3, 4, 5, 19, 32, 33, 34 y 46 de la Declaración ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.
- Artículos 3, 9, 21 de la Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas.
- Artículos 3, 5, 8.1, 8.2 letra a y d, 11, 12, 13, 15, 31 y 36 de la Declaración de las Naciones Unidas.
- Artículos 2.b, 5, 7.1.3, 13, 23, 27.1, 28, 30, 31 y 32 del Convenio 169 de la OIT.
- Artículo XXVIII de la Declaración Americana de la OEA.
- Artículos 2, 8.1, 21.2, 44, 8.2 letra e, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
- Artículos 3, 4, 20.1, 24, 26 y 31 del Convenio 169 de la OIT.
- Artículo XII de la Declaración Americana de la OEA sobre Pueblos Indígenas.
- Acuerdo de Integración Subregional Andino. (Acuerdo de Cartagena).

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XXX. La constitución reconoce la hoja de coca como patrimonio, parte de la identidad cultural de las naciones indígenas, garantizando el uso y transporte en función de la memoria colectiva de sus tradiciones, costumbres, espiritualidad y salud intercultural.

INICIATIVA POPULAR DE NORMA N°36-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho al deporte, la actividad física y la cultura del deporte, cuyos autores son la Asociación de caballos de pura raza chilena de Ñuble.

Problema a solucionar

La desprotección de las tradiciones chilenas.

Situación ideal

La situación ideal es la inclusión de las tradiciones dentro de la nueva constitución.

Qué debe contemplar la nueva constitución

La nueva constitución debería incluir el reconocimiento, la valoración, perpetuidad y fomento de las actividades tradicionales de nuestro país.

Argumentos para respaldar la propuesta

Con el apoyo y respaldo de las comunas a través de sus respectivos Alcaldes y habitantes de cada Comuna de nuestro País

Reseña sobre quién o quiénes proponen y la historia de la elaboración de la iniciativa

Rolando Antonio Díaz Gómez Ingeniero Forestal de la Universidad de Concepción actual integrante del directorio de la asociación de criadores de caballos de pura raza chilena de Ñuble.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Que el Estado de Chile se compromete al reconocimiento valoración perpetuidad fomento y resguardo de las actividades tradicionales de nuestro país tanto en el ámbito cultural, gastronómico deportivo y recreativo.

INICIATIVA POPULAR DE NORMA N°52-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre Chile su cultura, costumbres y tradiciones, cuyos autores son la organización Vive Chile Rural.

En un contexto mundial de cambios y transformaciones, en que muchos bienes y productos están siendo librados a las fuerzas del mercado, creemos que es altamente deseable que aquellas creaciones valiosas y que dan sentido a un gran número de habitantes de nuestro país, queden a salvo del empobrecimiento y degradación generados por una cultura del consumo que no es capaz de valorar la originalidad y autenticidad de los productos que nacen desde el interior de nuestro país, específicamente desde la ruralidad y el campo chileno.

Situación Ideal

Que el Estado ampare y proteja los productos, usos, costumbres y oficios de la ruralidad.

Qué debe contemplar la nueva constitución

Nuestra propuesta es que los productos culturales deben ser objeto de un cuidado especial por parte del Estado y, además, que es preciso que estos sean fomentados debido al riesgo cierto que desaparezcan y con ellos se perderían saber ancestrales que han definido la identidad del país.

Argumentos para respaldar la propuesta

Nos referimos a creaciones como la artesanía en cuero o greda, a nuestra música folclórica a la cual pertenecen las payas, la cueca y el guitarreo que encuentran en artistas como Violeta Parra su más alta expresión. A nuestros bailes nacionales, de norte a sur, que se manifiestan en grandes fiestas de religiosidad popular como la Tirana o la Virgen de Andacollo, y en la celebración de Fiestas Patrias durante la semana del 18 de septiembre.

Todas estas expresiones tienen un valor que le es intrínseco que es preciso cuidar porque son creaciones en las cuales el pueblo de Chile se reconoce y se reencuentra.

Dentro de estas expresiones también buscamos incluir usos, costumbres y tradiciones ancestrales de nuestros pueblos originarios, sus prácticas deportivas como la chueca, que se respete su cosmovisión protegiendo su espiritualidad.

Reseña sobre quién o quiénes proponen y la historia de la elaboración de la iniciativa

La Corporación Vive Chile Rural se creó hace varios años para rescatar, promover y preservar las tradiciones y el patrimonio cultural de Chile.

Esta Corporación agrupa a un conjunto de organizaciones vinculadas al arte, la cultura, el folclor, el deporte.

Esta iniciativa surge de un conjunto de diálogos realizados entre las organizaciones que componen nuestra Corporación y el trabajo que venimos desarrollando en el fomento de las expresiones culturales que dan origen a la identidad nacional.

Cada una de las organizaciones ha realizado por décadas esfuerzos por mantener vivas nuestras expresiones culturales, afrontando en múltiples ocasiones dificultades y falta de apoyo del Estado, por eso surge la necesidad de establecer un marco jurídico que apoye y promueva dichas expresiones culturales en el más amplio sentido.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Será un deber del Estado proteger y fomentar las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas que tengan origen en las costumbres y tradiciones del país.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N° 24-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el el “derecho a beneficiarse de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios, libertad de investigación y protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología”, cuyos autores son los

convencionales constituyentes señoras y señores por Cristina Dorador, Ignacio Achurra, Malucha Pinto, Carolina Videla, Bernardo de la Maza, María Angélica Tepper, Francisco Caamaño, Alexis Caiguan, Paulina Valenzuela, Carlos Calvo, Margarita Vargas, Loreto Vidal, Miguel Ángel Botto, Jorge Abarca, María Elisa Quinteros y Manuela Royo convencionales.

El Sistema Internacional de los Derechos Humanos reconoce diversos elementos del que hemos denominado “derecho a beneficiarse de los conocimientos y sus aplicaciones”. En primera instancia, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en su primer inciso, consagra que “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Lo anterior supone una confluencia entre la cultura, las artes y las ciencias, que se integran dentro del mismo derecho. Este derecho está también consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), en su artículo XIII, bajo el título “Derecho a los beneficios de la cultura²”.

En instrumentos posteriores este derecho adquiere un mayor detalle. En el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en la letra b) del primer inciso se afirma el derecho a: “Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. En el inciso segundo se hace explícito que en el aseguramiento del pleno ejercicio de este derecho deben tomarse medidas tendientes a “la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura³”. En el inciso tres se enfatiza la libertad de investigación, que también se regula en esta norma. Por último, en el inciso cuarto se plantea la cooperación y las relaciones internacionales como beneficiosas para la cuestiones científicas y culturales. Luego estos mismos derechos se encuentran reconocidos en el artículo 14 del Protocolo de San Salvador.

Específicamente respecto a la ciencia, existen documentos que han desarrollado dicho tópico, cuyo propósito ha sido el de interpretar de forma actualizada los derechos ya enunciados. Este ha sido un trabajo reciente por parte de la UNESCO, que ha derivado en los documentos “Derecho a la Ciencia⁴” y “Ciencia como Derecho Humano⁵”. Un elemento fundamental de este trabajo dice relación con la distinción entre dimensiones universales y particulares de la ciencia. Por ejemplo, el derecho social a verse beneficiado del progreso científico tiene a la sociedad en su conjunto como sujeto de derecho, y tiene como objeto de derecho a los conocimientos producidos por la ciencia; mientras que la libertad de investigación atañe mucho más específicamente a grupos humanos reducidos, como pueden ser los científicos. En el mismo sentido se identifica una diferencia

entre el carácter libre, social y colectivo de los conocimientos, con la protección de intereses morales y materiales de personas singulares que participan de la creación, desarrollo, conservación y transmisión de conocimientos específicos. Asimismo, se introduce la pregunta de cuáles son los límites de aquellos conocimientos libres y colectivos, especialmente cuando dicho carácter colinda con cuestiones de carácter estratégico-político o económico. En buena medida, se considera que será la política científica la que resuelva en concreto estos dilemas.

Por otro lado, se avanza en conceptualizaciones más precisas, así como también en una explicación sobre el porqué es valioso proteger este derecho. A saber: 1). Porque ese progreso científico, sus beneficios y aplicaciones son una condición para el ejercicio de otros derechos 2). Porque el progreso científico, sus beneficios y aplicaciones son necesarios para asegurar el desarrollo sostenible y 3). El derecho a la ciencia es valioso en sí mismo. En torno a esto último, cabe ser enfáticos en que el derecho a la ciencia no se reduce solamente a gozar de sus productos, sino que también implica la participación en igualdad de condiciones del proceso de producción científica.

Otro asunto desarrollado por estos documentos tiene que ver con la relación entre el derecho en comento con otros saberes: “Una vía interpretativa es la de considerar distintos tipos de saberes, con rasgos diferenciales. En tal caso sería necesario establecer claramente los límites entre ellos, para lo que se requiere un diálogo entre quienes sostienen los conocimientos tradicionales y los científicos, con el propósito de explorar las relaciones entre los diferentes sistemas de conocimientos”.

La primera parte de la iniciativa de norma constitucional (en adelante “iniciativa”) establece un articulado dedicado a lo que se ha resignificado como el “Derecho a beneficiarse de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios”. El artículo de la iniciativa en comento establece como una obligación del Estado, el asegurar a toda persona y a la sociedad en su conjunto, una participación libre dentro de los procesos de creación, desarrollo, transmisión, conservación y enriquecimiento de sistemas de conocimientos y sus aplicaciones, entendiendo por “aplicaciones” la utilización concreta de la ciencia en relación con las preocupaciones y las necesidades específicas de la población. En este sentido, La ciencia aplicada incluye la tecnología derivada de los conocimientos científicos, como las aplicaciones médicas, las aplicaciones industriales o agrícolas, o la tecnología de la información y las comunicaciones.

La primera innovación de esta iniciativa se da en relación al “Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. La normativa internacional se centra en la noción de “progreso científico”, un concepto acuñado

en directa relación a las ciencias y que, en cierto sentido, pareciera restringir el ámbito de aplicación de la norma⁷. Esta iniciativa sustituye dicha noción por la de “sistemas de conocimientos”. Si bien ha existido una determinación histórica de no establecer una noción unívoca de ciencia en materia jurídica (pues es una determinación que depende del contexto histórico y sociocultural de la actividad científica⁸) y pese a que en los últimos años se ha establecido una tendencia clara en torno a la ampliación de la noción de ciencia y conocimiento, de forma que dicha noción pueda englobar a aquellas formas de conocimiento que no se obtienen a través de métodos científicos clásicos o tradicionales⁹, se ha optado por establecer el concepto de “sistemas de conocimientos” el cual amplía de forma inequívoca el ámbito de aplicación de la norma, a otros conjuntos de saberes estructurados, dinámicos y coherentes entre sí, que proporcionan resultados útiles o efectos específicos a partir de manipulaciones calculadas o comprobadas a partir de diversas evidencias basadas en experiencia, comprobación empírica o marcos conceptuales compartidos por una comunidad respectiva.

Esto, en ningún caso, obsta a considerar a la ciencia como un pilar fundamental de los sistemas de conocimientos contemporáneos y regulados por las normas internacionales, sino que, más bien, permite ampliar la significación de lo que entendemos bajo el ámbito de aplicación de la norma internacional y permite un adecuado reconocimiento de distintos saberes históricamente excluidos dentro de lo que comúnmente se denomina “ciencia”. En este sentido, podemos señalar que la noción de conocimientos ha sido utilizada previamente en un sentido similar al que se le entrega en esta norma, teniendo como ejemplo a la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2018, donde se afirma: “la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña”.

Para la correcta interpretación de esta iniciativa, es de especial relevancia para sus autores el dejar patente que la noción de sistemas de conocimientos limita con dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, los sistemas de conocimientos suponen la existencia de evidencia como un pilar fundamental del sistema. La evidencia en este contexto se entiende derivada de conocimientos empíricos, teóricos y experienciales y, en ningún caso la evidencia puede confundirse con opiniones, creencias o tendencias. En segundo lugar, los sistemas de conocimientos generan efectos y tienen resultados, por lo que estos deben tener un sentido acorde a la búsqueda del bien común, por lo que, a su vez,

estos efectos y resultados no pueden ser contraproducentes con el sistema de conocimiento o con sus propósitos.

Así, esta nueva noción permite, no sólo el goce de los beneficios de la ciencia (ya que no se restringe a algunas disciplinas o miradas unívocas acerca de lo que se entiende por conocimiento) y permite la incorporación de una serie de saberes que pueden tener una amplia aplicación en nuestra sociedad. Por ejemplo: el descubrimiento de nuevas vacunas, el desarrollo de nuevas tecnologías para la construcción, la aplicación de conocimientos sociales y conceptuales para terminar con la discriminación y la violencia de género, o la utilización de las artes como formas para trabajar con situaciones traumáticas y conflictivas a nivel individual o colectivo, son todas posibles formas en que los sistemas de conocimientos pueden ser útiles, entendiéndose que sus aplicaciones y resultados son herramientas fundamentales para la consecución de otros derechos de esta carta fundamental.

Aún así, en ningún caso podrá darse una interpretación que establezca que las aplicaciones son el único objetivo de los sistemas de conocimientos, puesto que estos tienen también valor en sí mismos, más allá de los beneficios que pueda generar su aplicabilidad.

Dentro de la pluralidad de conocimientos reconocidos por este artículo, se enumera en su segundo inciso a las artes, humanidades, las ciencias y, junto a ellos, a saberes ancestrales, territoriales, populares y conocimientos estéticos, estos últimos entendidos por la “estética” (el área de los conocimientos que se concentra en indagar los modos sensibles con los que los seres humanos y su entorno interactúan se vinculan y aprenden) como aquellos conocimientos que adquirimos a través de los sentidos.

La explicitación de esta diversidad resulta necesaria para avanzar hacia una mayor justicia epistémica entre estos diversos sistemas de conocimientos, en la medida que su reconocimiento diferenciado da pie para robustecer sus particularidades y valoración social. El interés de la norma es el igual reconocimiento, y sentar las bases de una igual protección y desarrollo equitativo de aquellas prácticas propias de ciertos territorios y pueblos, las cuales han sido transmitidas por generaciones y relacionadas a diversos ámbitos (como el agrícola, pecuario, cultural, etc.).

Este igual reconocimiento implica la adopción de medidas tendientes a su protección, materia que se profundizará en los debates y ejes temáticos propios de la comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Artes y Patrimonio de esta Convención Constitucional. El reconocimiento

también busca enaltecer y establecer que estos conocimientos desempeñan un papel importante, no sólo en el diálogo equitativo intercultural entre los mismos sistemas de conocimientos (de tal manera que se evite la imposición de un sistema sobre otro) sino, también, establecerlos como un elemento relevante en la toma de decisiones públicas.

Siguiendo esta misma línea, la iniciativa, tanto en su primera parte como en su parte final, establecen un inciso y un principio constitucional que constituyen un reconocimiento constitucional explícito a la consideración de los sistemas de conocimientos en la formulación de normas jurídicas, planes, proyectos, políticas y programas.

Esta consideración hace alusión a las mejores evidencias científicas y de otros sistemas de conocimientos, pertinentes según el contexto de formulación y el carácter de estos instrumentos. Al hablar de las “mejores evidencias científicas”, hacemos alusión a la “calidad”, elemento intrínseco de este derecho, entendido como aquellos conocimientos más avanzados, actualizados, generalmente aceptados y verificables que se encuentren disponibles en el momento.

La aceptabilidad no se refiere únicamente a los conocimientos en sí, sino que también se extiende a las normas que engloban a dichos conocimientos e, incluso, hace alusión a la regulación y certificación de dichos conocimientos (este último criterio, aplicado a aquellos sistemas de conocimientos en los que se tenga aplicación). Por último, se entiende que este elemento engloba y fomenta el diálogo con las comunidades científicas y de los diversos sistemas de conocimientos en poblaciones marginadas por décadas de políticas centralistas en los diversos territorios y/o regiones del país.

Por último, la iniciativa da una especial consideración a otro elemento del derecho, la disponibilidad, estableciendo un especial interés por parte del Estado en la conservación, desarrollo y la difusión de los conocimientos teniendo en consideración los diversos contextos culturales, sociales y territoriales. Este inciso también incluye dentro de la enumeración a la divulgación y la educación científica. La incorporación de esta obligación de forma explícita en el texto constitucional implica una coordinación mayor por parte del Estado para asegurar la distribución y la disponibilidad de los conocimientos, teniendo implicancias prácticas materiales, como el establecimiento de lugares destinados a la difusión de los conocimientos, el desarrollo de una institucionalidad sólida que garantice el desarrollo de la investigación y la potenciación de la educación de los diversos sistemas de conocimientos.

La segunda parte de la iniciativa constitucional se refiere a la “Libertad de Investigación”. En este derecho hay una innovación importante porque ya no se habla solamente de libertad de investigación “científica”, sino que la libertad de investigación se aplica a todos los sistemas de conocimiento. Con esto, implícitamente se define al investigador que realiza investigación no solo como “científico”, sino como un trabajador que realiza actividades de investigación en alguno de los sistemas de conocimiento. La norma propuesta entiende que, para que los conocimientos puedan desarrollarse, necesita que el Estado la blinde otorgándole protección y, al mismo tiempo, establezca su abstención de interferir en la libertad de las personas, comunidades e instituciones que desarrollan los distintos sistemas de conocimientos y la difusión de sus resultados.

En este sentido, el Estado estará obligado a hacer todo lo posible para que todos y todas conozcan estos derechos y realizar acciones estatales concretas para su efectivo goce. También, se instituye que las normas que regulen el ejercicio de la libertad de investigación protejan la búsqueda del conocimiento, búsqueda que debe entenderse en su sentido más amplio. La libertad de investigación, al ser aplicada no solo a la ciencia, sino que a los distintos sistemas de conocimientos mencionados en esta norma, amplía la concepción de las personas que se dedican a esta actividad. Ya no solo considera a investigadores científicos, sino que también considera a trabajadores que participan en actividades de investigación en los distintos sistemas de conocimiento, ya sea de manera individual o colectiva.

Tal como se señaló con anterioridad, la norma vuelve a enfatizar y a establecer la necesidad de establecer mecanismos “descentralizados” en materia de Investigación, ya que Chile es un país de realidades y territorios diversos, pero a pesar de ello, las decisiones respecto al modelo de desarrollo, políticas públicas y generación de conocimientos e investigación se realizan de forma centralizada, con una participación ciudadana limitada y sin especial consideración de las realidades locales. En ese mismo inciso se encuentra la “equidad de género” en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento, apoyando y visibilizando la participación de mujeres docentes e investigadoras, eliminándose todas las barreras posibles de ingreso a las mujeres a las áreas científicas y de conocimientos, provocándose así una transformación de las instituciones y de la generación de conocimientos.

La norma también hace alusión a que la autonomía jurídica-constitucional de una institución facilita el cumplimiento de su mandato, protegiendo sus decisiones de influencias políticas de turno (externalidades que pueden ser de variado origen), permitiendo que los objetivos tengan perspectiva

de largo plazo, dotando a la institución de independencia política y operativa. Este es un elemento clave para la democracia, ya que las instituciones autónomas facilitan el desarrollo de la ciencia y propenden al desarrollo ordenado y progresivo de esta. Sin embargo, esto no significa necesariamente una autonomía de facto, por lo que es del interés de sus autores que esta norma pueda ser complementada vía legal y abrirse a la posibilidad de otros mecanismos complementarios que la garanticen.

Por último, respecto a este apartado, la objeción de conciencia se caracteriza por su carácter pasivo, en una abstención, un “no hacer”, siendo esencialmente pacífica y con un determinado planteamiento moral. Deriva de la libertad de conciencia siendo un derecho fundamental subjetivo. Así se determina la posibilidad abierta para las personas y colectivos que desarrollen labores de investigación, de poder retirarse ante proyectos cuestionables, siendo el retiro una acción tendiente a un objetivo concreto que sería la manifestación de este derecho.

En su parte final (entendiendo que ya hicimos alusión, en párrafos anteriores, al principio constitucional formulado en el último apartado de esta iniciativa), se establece una serie de normas tendientes a la regulación de la protección contra los usos indebidos de los conocimientos. Una primera dimensión de este derecho establece como límite a la participación del “Derecho a beneficiarse de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios” y de la “Libertad de Investigación” el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y garantías de las personas, las comunidades¹⁶ y la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

En este sentido, se establece un inciso específico destinado a incorporarse en un futuro “Derecho a la Integridad Física y Psíquica”, que hace alusión a esta protección. Dicho inciso recoge elementos esenciales contenidos en el artículo 18 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas¹⁷, fijando límites claros en una serie de acciones, establecidas en los términos más generales posibles para englobar la mayor cantidad de categorías, en materia de creación, desarrollo y uso de las tecnologías, la experimentación científica, intervenciones biomédicas y otros similares.

En una segunda dimensión, este derecho busca establecer una regulación de carácter constitucional, con sanciones exigibles a quienes transgredan estos deberes, frente a una tendencia global de creciente uso indebido de los conocimientos para la generación de desinformación, apoyada y amplificadora por diversos medios de tecnologías de la información. Este uso indebido ha probado ser, en los últimos años, una fuente de diversas

transgresiones a los derechos fundamentales. En este sentido, se establece que ninguna persona pueda, ya sea mientras ejerce o en el ejercicio de funciones públicas, divulgar información falsa o desactualizada entre la población, entregándose la regulación específica de los alcances de esta norma a una ley posterior, algo que en ningún caso limita el ejercicio de este inciso constitucional.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Derecho a beneficiarse de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios

Artículo XX. El Estado asegura el derecho de todas las personas y comunidades a participar libremente de los procesos de creación, desarrollo, transmisión, conservación y enriquecimiento de los diversos sistemas de conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios, sin discriminación arbitraria alguna y de forma equitativa y descentralizada.

Entre los sistemas de conocimientos que se reconocen en esta constitución se encuentran: las ciencias, las artes, las humanidades, los saberes ancestrales, los saberes locales y territoriales, los saberes populares y los conocimientos estéticos. El Estado reconoce la autonomía y libre determinación de los pueblos en estos sistemas.

El Estado garantiza activamente la conservación, el desarrollo, la promoción, la difusión, las iniciativas de divulgación y la educación científica de los conocimientos y sus aplicaciones en diferentes contextos culturales, sociales y territoriales, poniendo especial atención a su acceso abierto y de calidad.

La formulación de normas jurídicas, planes, proyectos, políticas y programas deberá considerar las mejores evidencias científicas y de otros sistemas de conocimientos pertinentes, que se encuentren disponibles.

Libertad de investigación

Artículo XX. El Estado promueve y garantiza la libertad de creación e investigación y difunde los resultados de esta, fomentando el intercambio de datos e ideas y producción de conocimientos de manera descentralizada, con equidad de género y territorial.

Las personas y los colectivos que desarrollan labores de investigación relacionadas con los sistemas de conocimientos podrán organizarse y establecer instituciones autónomas, definiendo previamente los fines, objetivos y

métodos para la investigación. Podrán cuestionar libre y abiertamente la ética de los proyectos y podrán retirarse por razones de conciencia.

Protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología

Artículo XX. Toda participación individual y colectiva en la creación, desarrollo, transmisión, resguardo y enriquecimiento de los conocimientos y la tecnología deberán tener como límites el respeto a derechos fundamentales, las fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y garantías de las personas, las comunidades y la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

En relación con el desarrollo científico y tecnológico, las personas tienen derecho a que se respete su vida privada, dignidad, integridad física y psíquica, y los derechos fundamentales. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para la protección de este derecho.

Toda persona que ejerza funciones públicas o sea candidata a ejercerlas, deberá abstenerse de divulgar información falsa o desactualizada entre la población, especialmente cuando produzca efectos perjudiciales o tendientes a vulnerar otros derechos fundamentales. Una ley regulará los requisitos, procedimientos y sanciones en caso de incumplimiento de este deber, sin perjuicio de la aplicación directa que los Tribunales de Justicia puedan hacer de esta norma, de acuerdo con las demás disposiciones constitucionales.

I. Propuesta de inciso sobre la protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología, dentro de un futuro derecho a la integridad física y psíquica:

El Estado asegura a todas las personas el derecho a la protección de su dignidad e integridad física y psíquica, y otras fuentes aplicables dentro del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo su identidad genética y del microbioma humano, frente a cualquier tipo de intervención tendiente a la creación, desarrollo y uso de las tecnologías, la experimentación científica, intervenciones biomédicas y otros similares. Asimismo, toda persona que participe en este tipo de intervenciones tiene derecho al acceso a sus propios datos, expedientes médicos y documentos de investigación conducidos por personas e instituciones públicas o privadas.

II. Principio constitucional sobre el valor esencial de los sistemas de conocimientos y sus aplicaciones:

Artículo XX. El Estado reconoce el valor esencial que tienen los sistemas de conocimientos y sus aplicaciones para el bien común, el buen vivir, la definición y despliegue de todo modelo de desarrollo del país, y la toma de decisiones informadas. El Estado garantizará y promoverá el trato equitativo, el diálogo y la ponderación en las decisiones públicas de todos los sistemas de conocimientos.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 24-7, la que fue aprobada por votación unánime de la comisión.

INICIATIVA CONSTITUYENTE INDÍGENA N°155-7

La siguiente iniciativa convencional indígena que abordó la Comisión sobre el derecho sobre conocimientos tradicionales, ingresada por la señora Andrea Santibáñez M., y patrocinada por los señores y señoras, Arcenio Llancamil de la Comunidad Llancamil, Orfa Pañicú de la Comunidad Erasmo PAñicú Vejar, Osvaldo Pinto de la Comunidad Eulalio Cañulef, Leonor Pañicu Godoy de la Comunidad Newen-che, Margarita Garcés de la Comunidad Antiñir Ormero, Carolina Sandoval de la Comunidad Román Millapan, Felicita Curumilla de la Comunidad Luminado Chapuco, Berta Martínez de la Comunidad José Santos Curumilla, Verónica Henríquez de la Asociación indígena Paillako Futa Trawun, Luisa Hueitra de la Comunidad La Luma Mapuche Kimun, Samuel Díaz Linco de la Comunidad Estero la Plata, María Calviu de la Comunidad José Calviu, Rosa Almonacid de la Comunidad José Guillermo Almonacid Levicoi, Otilia Huentrutripai, y Judith Reyes de la Comunidad Reyes Curinao.

Esta norma ha sido construida mediante un trawun de introducción a la normativa y redacción de estas, para luego convocar un trawun con las comunidades aledañas a la comuna de Paillaco, desde donde se tomó la iniciativa de norma en base a lo que se ha conversado a lo largo de años tras el inicio de los movimientos de pueblos originarios en la zona.

Esta norma encuentra sus bases en:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos /Derecho a determinar libremente el desarrollo cultural (Artículo 1(1))/ Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Artículo 18)/Libertad de expresión (Artículo 19) /Derecho de personas pertenecientes a minorías étnicas a su cultura (Artículo 27) /Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales Derecho a determinar libremente el desarrollo cultural (Artículo 1(1))/ Derecho a la cultura (Artículo 15) / Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial Prohibición del racismo, del odio racial y de la incitación a la discriminación racial (Artículo 4) /No discriminación en el goce del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; del derecho a la libertad de opinión y de expresión y del derecho a participar en actividades culturales (Artículo 5 (d) y (e)) /

Eliminación de los prejuicios raciales (Artículo 7)/ Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer /Medidas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer (Artículo 3) /Eliminación de los estereotipos y prejuicios de género (Artículo 5).

Convención sobre los Derechos del Niño Libertad de expresión (Artículo 13)/ Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Artículo 14)/ Derecho de acceso a la información (Artículo 17 (d))/ Derecho de los niños indígenas a practicar su cultura (Artículo 30).

Derecho a participar en la vida cultural (Artículo 31)/ Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. /Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (Artículo 12)/ Libertad de opinión y de expresión (Artículo 13)/

Respeto de la identidad cultural (Artículo 31) /Iniciativas de Pueblos Originarios/ Educación en la lengua y cultura maternas (Artículo 45)/ Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad/ Libertad a de opinión y de expresión (Artículo 21)/ Derecho a participar en la vida cultural (Artículo 30 (1) y (4)/

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes/ Respeto a la identidad cultural (Artículo 2 (b))/ Deber de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales (Artículo 5)/ Derecho al desarrollo desde la propia cosmovisión; evaluación de incidencia social, espiritual y cultural de proyectos de desarrollo (Artículo 7 (1) y (3))/

Respeto de la relación espiritual de los pueblos indígenas con la tierra (Artículo 13)/ Sistemas educativos incluyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas (Artículo 27 (1))/ Derecho a la educación en la lengua materna y preservación de las lenguas indígenas (Artículo 28)/ Convenio para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial/

Definición de patrimonio cultural inmaterial (Artículo 2)/ Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (Artículo 11)/ Convenio sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales/ Respeto a los derechos humanos (Artículo 2)/ Definición de diversidad cultural y de expresiones culturales (Artículo 4(3)/ Promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales (Artículo 5 (1)/ Convención Americana sobre Derechos Humanos/ Libertad de Conciencia y de Religión (Artículo 12)/ Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos,/ Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”/ Respeto a la diversidad cultural como finalidad de la educación (Artículo 13 (2))/ Derecho a los beneficios de la cultura (Artículo 14).

Declaraciones

Declaración ONU sobre derechos de los pueblos indígenas/ Derecho a la libre determinación y cultura (Artículo 3)/ Derecho a conservar y reforzar instituciones culturales (Artículo 5)/ Derecho a no sufrir la destrucción de su cultura (Artículo 8 (1) y (2) (a) y (d)/ Derecho a practicar y revitalizar costumbres culturales (Artículo 11)/ Derecho a practicar tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas (Artículo 12)/ Derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas (Artículo 13)/ Derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas (Artículo 14)/ Derecho a la dignidad y diversidad de su cultura (Artículo 15)/ Derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas (Artículo 16)/ Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural (Artículo 31)/ Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas/ Derechos colectivos a usar sus propias lenguas e idiomas (Artículo 6)/ Derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas/ Derecho a la identidad e integridad cultural (Artículo 13)/ Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación (Artículo 14)/ Protección del Patrimonio Cultural y de la Propiedad Intelectual (Artículo 28)

Sobre la base de las consideraciones precedentes, propone aprobar los siguientes textos:

Articulado de la Iniciativa

Los pueblos y naciones preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, proteger, desarrollar, enseñar, compartir y difundir sus conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales.

Conjuntamente con los pueblos y naciones preexistentes, se adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 155-7, la que fue aprobada por 11 votos a favor, 0 votos en contra, y 4 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°295-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la libertad creativa, protección de los creadores y su rol en la educación, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Ricardo Neumann, Loreto Vidal Hernández, Miguel Ángel Botto, Margarita Letelier, Carlos Calvo Muñoz, Angélica Tepper K., Bernardo de la Maza, Adriana Cancino Meneses, Hernán Larraín, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Felipe Mena, Bernardo Fontaine, Harry Jurgensen, Constanza Hube y Ruth Hurtado.

La Libertad Creativa y su impacto en el bien común:

La creatividad es un rasgo esencial de la naturaleza y expresividad humanas, presente en cada una de las personas, y que ha dejado su rastro a lo largo de la historia facilitando la innovación y el progreso de la humanidad. La capacidad creativa, contrario a lo que algunos podrían pensar, no dice relación solamente a las producciones simbólicas, sino que es un elemento clave en la

interacción humana a todo nivel, incluyendo las culturas, las artes, los patrimonios, y también la ciencia, tecnología y la innovación.

Debido a su importancia como parte esencial de la naturaleza, individualidad y expresividad humanas, el Estado debe reconocer la capacidad creativa de las personas como un elemento anterior a la existencia del Estado mismo, ya que este no es sino producto de la misma creatividad. La creatividad se puede ejercer de manera individual o colectiva a través de las distintas asociaciones que, en función de sus fines específicos, colaboran con el Estado y entre sí, para resolver problemas y satisfacer las necesidades de las personas y nuestra comunidad política.

Así, la libertad creativa como capacidad de un individuo que vive y se relaciona en comunidad, tiene un eminente rol social que el Estado debe reconocer y promover como parte elemental del desarrollo material e inmaterial del país. La identidad, el sentido de pertenencia, la autorrealización, la búsqueda de la felicidad, y, en definitiva, la vida propia son estas manifestaciones creativas del intelecto humano y se orientan directamente al desarrollo integral del individuo y la actualización de sus potencias a través de una vida creativa que se vive en sociedad. La libre creatividad es un elemento clave en el desarrollo integral del ser humano y de la sociedad en su conjunto, razón por la cual el Estado debe promover siempre y en todas sus actuaciones las condiciones para que todos y cada uno de las y los miembros de las distintas comunidades del país puedan buscar libremente su felicidad y calidad de vida a través de dicha libertad expresiva.

Todo lo anterior ya ha sido recogido en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ratificado y firmado por Chile, que en su artículo 15 número 2 consagra el deber del Estado de promover la ciencia y la cultura y en el número 3 lo obliga a respetar la libertad, elemento fundamental, en la investigación y la creación:

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho [a participar de la vida cultural], figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.¹

En virtud de lo expuesto, la libertad creativa y su impacto en el bien común se consagran en el inciso 1ro de esta norma, mientras que dicha libertad y función se promueven, protegen y desarrollan a través de 3 vías, señaladas en los incisos 2do (descentralización y diversificación de la creatividad), 3ro (protección de los creadores) y 4to (rol de la educación) de la norma:

Descentralización territorial, diversificación financiera y colaboración social en la promoción de la ciencia y la cultura a través de organizaciones creativas:

Chile es un país intercultural con diversas cosmovisiones. A lo largo y ancho de nuestro territorio hay una gran multiplicidad de identidades, tradiciones y expresiones culturales que le dan sentido a la realidad material e inmaterial que rodea a las diversas comunidades de nuestro país. Dicha diversidad intercultural es parte esencial de un progreso equitativo y descentralizado, y debe reconocerse, protegerse y promoverse desde el Estado y la sociedad en su conjunto. Son las personas y sus agrupaciones, en colaboración con los agentes del Estado, las que en definitiva configuran una diversidad científica y cultural plural y descentralizada, que se construye desde la diversidad de los territorios y no solo desde la centralidad de la estructura estatal. Las políticas públicas en Chile deben ir justamente en el sentido de respetar y promover la libertad creativa, su ejercicio descentralizado en todo el territorio del país y la diversidad cultural que deriva de la diversificación en el soporte, financiamiento y toma de decisiones que el Estado comparte con las comunidades. Se deben acercar las decisiones a las comunidades que viven y desarrollan una determinada cosmovisión, de modo que no se vean perjudicadas por la decisión que toma una persona lejana a ella y que la desconoce, coartando su libertad de crear y desarrollar su propia cultura e identidad.

En virtud de lo anterior, y viendo las dificultades de acceso y participación de los territorios más aislados y vulnerables del país, existe la urgente necesidad de desarrollar las ciencias y las culturas de manera descentralizada y transformar a las y los ciudadanos en protagonistas de la actividad creativa del país. El habitante debe reconocerse como principal agente cultural. La cultura no es sólo para los y las artistas o profesionales. Cada persona que viva en el territorio nacional debe poder ejercer su derecho a participar y ejercer su capacidad creativa.

La importancia de la creatividad en este contexto es tal, que la UNESCO en la convención del 2005 definió Expresiones Culturales como “Las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural”, haciendo énfasis en que esta expresión puede ser

individual o colectiva. En función del reconocimiento de la creatividad humana y la diversidad intercultural que ella produce, el Estado debe promover ecosistemas de soporte, financiamiento y políticas públicas que promuevan la producción científica y simbólica en el encuentro de cosmovisiones que no podrán desarrollarse de manera armónica si no se hace desde sus respectivos territorios, de manera descentralizada: respetando la identidad territorial y cultural de las diversas comunidades del territorio nacional.

El Estado, las personas, y las agrupaciones creativas que ellas conforman en la diversidad del libre intercambio y de la sociedad civil, deben ser los agentes de soporte diversificado de la creatividad humana y la diversidad intercultural. El Estado no puede ser el único actor, ya que su naturaleza burocrática y sus costos de agencia hacen que su estructura intente encerrar y categorizar la creatividad en compartimientos de estanco inflexibles, mediante formularios y procesos que discriminan la capacidad creativa con fondos concursables que difícilmente pueden abarcar la diversidad y capilaridad territorial de la creación humana. Estos procesos de apoyo monopolizados en la burocracia estatal, dejan en manos de unos pocos miembros de una elite cultural, decisiones de financiamiento y promoción de identidades simbólicas diversas que deberían compartirse con la comunidad antes que limitarse en un pequeño grupo de jurados de fondos concursables o miembros de un comité de donaciones culturales.

Si queremos lograr ecosistemas de convivencia e intercambio multicultural, se requiere elaborar un marco jurídico que nos permita el desarrollo de ecosistemas creativos donde las decisiones de financiamiento y promoción científica y cultural se tomen desde las comunidades, en lugar de quedarnos exclusivamente con el Estado y su estructura central. Son las propias comunidades las más indicadas para definir si participar de su propia cosmovisión, evitando que el Estado centralice y neutralice los procesos creativos que corresponden primordialmente a las personas y sus agrupaciones.

Por todo lo anterior, es que proponemos los principios de descentralización creativa y diversificación en el soporte de las mismas, que busca justamente que se proteja y promueva la diversidad intercultural de Chile otorgándoles un mayor protagonismo a las personas y sus agrupaciones a través de la descentralización territorial y la diversificación en materias de financiamiento, producción, ejecución, participación, disfrute y divulgación de las ciencias y las culturas, y los frutos individuales y colectivos que se deriven de las mismas.

Como señala el experto en políticas culturales Tyler Cowen, “la descentralización incentiva la creatividad, ya que esta solo puede florecer cuando las distintas visiones del mundo pueden triunfar. Mientras más se acerque el

financiamiento y la toma de decisiones a los lugares donde se encuentra el talento creativo, más diversidad y pluralismo de cosmovisiones existirán”³.

Para ello, se propone desarrollar fuentes de financiamiento y soporte diversificados entre el sector público y privado, que a su vez sean focalizados a estructuras asociativas sin fines de lucro con una estructura de beneficios tributarios que dependan de la naturaleza creativa con la que se constituyó dicha asociación receptora.

El Estado en este caso, deja de recibir vía impuestos, fondos de las personas y agrupaciones particulares que, incentivadas por beneficios tributarios, pasan a tomar parte directa en el soporte de la creatividad con sus decisiones de donación. Lo que acá proponemos es que dichos recursos de los particulares, en vez de diluirse en la burocracia estatal vía impuestos generales, se ocupan directamente y por decisión de las mismas personas en organizaciones sin fines de lucro de carácter científico y cultural. A través de esta lógica de “subsidio indirecto”, las decisiones de soporte creativo ya no estarán exclusivamente en manos del Estado y sus procesos concursales, y es la comunidad la que comienza a participar en la promoción de la creatividad científica y cultural a través de esta acción facilitadora del fisco.

Lo anterior, permite hacer efectiva la descentralización y autonomía en las decisiones de las regiones y comunidades locales, reconociendo su identidad y diversidad territorial, a través de espacios creativos que acojan y combatan la precariedad en la que hoy se encuentran los creadores.

Adicionalmente, esto supera nuestro actual sistema de donaciones “por proyecto” de plazo limitado y que deben pasar caso a caso por un comité de donaciones, y lo complementa por asociaciones que pueden acceder a incentivos y beneficios tributarios por su sola constitución como una organización de naturaleza creativa. En la realización de dichos fines, la ley establecerá un tratamiento tributario especial que incentive la promoción de este tipo de organizaciones creativas y desarrollará un sistema de creación, registro, transparencia y rendición de cuentas que impida abusos y garantice su colaboración efectiva con el bien común.

Una bajada práctica de este principio, materia de ley que deberá definir el legislador, es lo que sucede en EEUU con las organizaciones 501(c)(3), asociaciones sin fines de lucro que cumplen determinados fines, tales como religiosos, caritativos, científicos, educativos, entre otros⁴. Es a través de los beneficios y subsidios directos e indirectos que reciben este tipo de organizaciones (que no pagan impuestos ya que contribuyen al bien común), que

en definitiva se incentivan las actividades creativas y se promueve su identificación local a través de la participación directa de las personas y organizaciones que apoyan a las asociaciones creativas.

Dichas personas y organizaciones que donan a estas asociaciones tienen derecho a una deducción de impuestos por el solo hecho de apoyar a la organización, lo que incentiva a donar sin necesidad de pasar por la burocracia y costos de transacción de nuestra actual ley de donaciones culturales, que requiere que un comité apruebe los beneficios tributarios por la duración limitada de proyectos puntuales, en vez de que sea la naturaleza de la institución la que permita acceder a dichos beneficios de manera automática, como es el caso de la experiencia estadounidense que se estructura bajo la figura de un “Estado Facilitador” que promueve y descentraliza desde las personas y sus comunidades las decisiones de soporte a los ecosistemas creativos.

Esto permite una participación mucho más efectiva de las personas en la vida cultural y no solamente la centraliza en la burocracia estatal y los comités de expertos que de ella derivan en sus procesos concursales.

Rol social de la creatividad y protección a los creadores:

Una forma de incentivar la libertad creativa, y promover así la ciencia y la cultura de nuestro país, es con una eficiente protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de aquellos que crean o investigan. El reconocimiento de la autoría sobre obras del intelecto humano se constituye así en un incentivo que reconoce y da certezas jurídicas a los actos de creación del intelecto humano. Así cada vez habrá más personas que deseen desarrollar este tipo de actividades en Chile, favoreciendo el desarrollo creativo de nuestro país.

La propiedad intelectual ha sido y sigue siendo la forma que la sociedad encontró para retribuir el trabajo creativo sin la subordinación del creador o creadora a ningún tipo de poder que limite su libertad de creación. Así, este tipo de derechos no sólo permite el sustento del creador sino que se convierten en la base esencial que le garantiza el ejercicio de su libertad de expresión y libertad creativa en una sociedad democrática de derechos.

De esta forma, el derecho de autor y la propiedad industrial que conforman la propiedad intelectual no es solo un estímulo a la creación desde un punto de vista individual, sino que también tiene una consecuencia directa en el rol social que la creatividad tiene en nuestra comunidad política. Así la propiedad intelectual tiene dos caras, una de carácter individual que protege y da certeza jurídica los creadores y las creadoras e incentiva la producción simbólica o

científica al estar debidamente reconocida en nuestro ordenamiento; y otra faceta de carácter colectivo que debe promover la creatividad desde su función social como bienes públicos esenciales al desarrollo del país.

Este equilibrio es un estándar presente en la regulación internacional de esta materia y, tal como se señala en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su punto 275, debe haber un equilibrio entre los derechos de las y los creadores y el derecho de la ciudadanía de acceder y participar del progreso científico y cultural. Por lo anterior el objetivo debe estar en buscar una relación equilibrada y armónica entre la protección de la propiedad intelectual de las y los creadores y la función social que cumplen sus obras para la sociedad. Lo anterior fue recogido expresamente en la recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos que se acordó el año 2017 en la Conferencia General de la Unesco, en la que se señaló que se debe velar por encontrar un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y el acceso abierto a los conocimientos.

En cuanto a la extensión de esta protección intelectual, deben consagrarse las facultades patrimoniales de los creadores con las facultades esenciales del derecho de propiedad privada sobre bienes inmateriales. Por tanto, ellas también se hayan sujetas a la función social de la propiedad, admitiendo limitaciones y excepciones que la ley expresamente contemple y que se justifiquen en función de su impacto para la sociedad.

Así encontramos en nuestra legislación y también en el derecho comparado, diversas limitaciones a la propiedad intelectual como consecuencia del necesario equilibrio que debe lograrse con la función social de la misma, como hipótesis de uso gratuito, sin tener que solicitar autorización al autor o autora cuando sea para fines educativos o caritativos por ejemplo, o también el establecimiento de plazos de protección de la propiedad sobre creaciones que por su importancia para el interés general definido por ley, obstaculizarían al bien común si se explotaran monopólicamente de manera perpetua. En cuanto a las facultades morales del creador, la norma individualiza los atributos que estas facultades entregan (paternidad, divulgación, edición e integridad). Por último, se garantiza la protección de las creaciones humanas con aplicación en procesos industriales, a través de la **propiedad industrial** sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos y otras creaciones análogas en los plazos y condiciones que establezca el legislador.

Sistema educativo integral e interdisciplinario que desarrolle pensamiento crítico y creativo a través de habilidades “STEAM”:

La libertad creativa, como se señaló anteriormente, cumple un rol social esencial. A través de ella cada individuo puede buscar su felicidad y buen vivir, su realización material y espiritual, ejercer su propia identidad y darle sentido a su vida. Sin libertad creativa no solo la cultura y la ciencia no se podrían desarrollar, sino que también traería una serie de consecuencias muy perjudiciales para la vida de las personas, como crisis existenciales, individuos sin propósito, falta de sentido de pertenencia, individualismo y, en definitiva, personas infelices que viven en una sociedad carente de sentido. Es ahí donde radica la importancia de la libertad creativa. Si las y los miembros de una sociedad la ejercen y se forman en ella desde un buen sistema educativo, tendremos una sociedad mucho más plena en el desarrollo de condiciones que permitan a todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional, alcanzar el bien común a través de su mayor realización material y espiritual posible.

Dentro de la promoción de estas condiciones juega un rol primordial el sistema educativo, ya que es en la familia, en primer lugar, y en las escuelas, en segundo lugar, donde se forman creativamente las y los ciudadanos. El trabajo en conjunto del Estado con las personas, sus comunidades y asociaciones (que son realmente las que generan ciencia y cultura desde su capacidad creativa) se debe concretar en sistemas de educación y conocimiento que incentiven la creatividad en la investigación científica y tecnológica, la creación artística y simbólica y la protección y promoción del patrimonio cultural de nuestro país.

El Estado tiene el deber de que el sistema educativo forme íntegramente a las personas, otorgándole las herramientas necesarias para poder desenvolverse plenamente en sociedad. Una de estas herramientas, aplicable a todas las áreas de la vida, es justamente la libertad creativa a través del desarrollo de habilidades científicas, tecnológicas, ingenieriles, artísticas y matemáticas (“STEAM”, por sus siglas en inglés).

Se deben promover las habilidades STEAM, que permita tener un sistema educativo interdisciplinario en la que se le entreguen múltiples instrumentos al estudiante en las diversas áreas del conocimiento. Una educación verdaderamente integral, permite a las y los estudiantes desarrollar su identidad propia y su originalidad por la diversidad de herramientas que se les entregan, las que, en ejercicio de la libertad creativa, se pueden utilizar de manera independiente o en relación unas con otras, habiendo infinitas posibilidades. Mientras más sean las herramientas y más integral y holística sea nuestra educación, mayores serán las oportunidades para los ciudadanos. Lo anterior fue señalado por Brennan, Monroy-Hernandez y Misnick, quienes proponen que las y los jóvenes no solo deben consumir conocimientos, sino que también deben tener

acceso a espacios en los que puedan desarrollarse como creadores y creadoras, o también llamados “makerspaces”. En estos espacios creadores es donde se forja la diversidad y se descubre la identidad, ejerciendo aquellas herramientas que se nos entregan en la solución de problemas porque “No somos estudiantes de asignaturas sino estudiantes de problemas. Y los problemas pueden perfectamente traspasar los límites de cualquier asignatura o disciplina”⁸.

Un buen sistema educativo, no es aquel que homogeniza a las y los estudiantes y los reprime, sino que es aquel que premia la diversidad creativa, incentivándola de tal modo que cada persona pueda descubrir su originalidad y su propia identidad individual y colectiva. Esto se hace especialmente importante en el siglo XXI, donde debido al fenómeno denominado como la “cuarta revolución industrial”, debemos fomentar en nuestro sistema educativo habilidades integrales e interdisciplinarias que diferencien la acción humana desde una creatividad que es irremplazable por las máquinas y la inteligencia artificial (que progresivamente ocupa espacios laborales en Chile y el mundo). Como señala de Greef, Post y otros “La educación que demanda el Siglo XXI debe promover competencias relacionadas a las habilidades del Siglo XXI y contribuir en el “saber conocer”, “saber hacer” y “saber ser” de las personas para desenvolverse cultural, social y laboralmente en el mundo”⁹. El sistema educativo debe preparar a los estudiantes para el presente y el futuro, por lo que no se debe entender a la educación como disciplinas aisladas, lo que sucedía durante las primeras revoluciones industriales en que los trabajos eran monotemáticos y especializados, sino que como un todo, un verdadero *sistema* educativo, cuyo centro es la persona, y su finalidad el desarrollo humano integral.

Todo lo anterior ya ha sido recogido en tratados internacionales ratificados y firmados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño de la Unicef¹⁰, que en su artículo 29 señala que:

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades ;

Es por todo lo anterior que debe haber un nuevo enfoque de lo que entendemos por educación, desde la concepción holística del ser humano, el cual se desarrolla en conjunto con los otros, en relación con el mundo, y no de manera individual o parcelada. Hay que romper con la lógica educativa actual, que asume que las y los estudiantes ya tienen habilidades básicas, personales o sociales, que son esenciales en la búsqueda de la felicidad y en la convivencia social¹¹. Se

debe promover la educación integral e interdisciplinaria, basada en la libertad creativa, cuyo objetivo nos permita cultivar ciudadanos y ciudadanas más felices y en paz.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo.- La Constitución asegura a todas las personas:

La libertad creativa y su libre ejercicio como un elemento esencial de la naturaleza, individualidad y expresividad humana. El Estado reconoce la función que esta libertad cumple para la realización de la persona en sociedad y el desarrollo de la comunidad política en su conjunto.

La libertad creativa se promoverá de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil. Para ello, la ley generará mecanismos de soporte que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa, respetando la autonomía de las comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural que derivan de ella. En la realización de dichos fines, la ley establecerá un tratamiento tributario especial que incentive la promoción de organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la ejecución de la libertad creativa, sea esta científica o cultural, y les definirá un sistema de conformación, registro, transparencia y rendición de cuentas que garantice su colaboración efectiva con el bien común.

El Estado promoverá el rol social de la creatividad junto al desarrollo y divulgación de los sistemas de conocimiento científicos, tecnológicos, artísticos y culturales mediante la protección patrimonial y moral de sus autores, e intérpretes en la creación y difusión de sus obras. Esta protección comprende la propiedad sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por un tiempo que no podrá ser inferior a la vida del titular, y otros derechos, como la paternidad, edición, e integridad de sus creaciones, en las condiciones que establezca la ley. Asimismo, se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos y otras creaciones análogas en los plazos y condiciones que establezca el legislador.

En la realización de los fines perseguidos por el presente derecho, el Estado desarrollará políticas, planes, programas e infraestructura que promuevan un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el

pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento”.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°428-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la consagración del derecho a las ciencias, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Loreto Vidal, Manuel Woldarsky, Malucha Pinto Solari, Ingrid Villena Narbona, M. Angélica Tepper, Francisco Caamaño, Vanessa Hoppe, Carolina Videla, Paulina Valenzuela, Ricardo Neumann, Margarita Vargas, Daniel Bravo, María Trinidad Castillo, Carlos Calvo Muñoz, Natalia Henríquez y Marcos Barraza.

La propuesta constitucional para consagrar el derecho a las ciencias que comprende la formación de investigadores e investigadoras, la libertad de investigar, el derecho de acceso a la ciencia, a sus beneficios y el deber del Estado de fomentarlas y financiarlas.

Antecedentes

Relevancia y progreso del sistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia el valor de la ciencia y su aplicación, así como el beneficio de la articulación por el Estado de los esfuerzos para enfrentar este flagelo creando una red de atención sanitaria conformada por establecimientos públicos y privados. Por su parte las Universidades en un trabajo de investigación colaborativo como nunca antes se había visto en Chile crearon consorcios, coordinaciones que les permitieron realizar investigaciones, estudios clínicos y tecnologías en forma conjunta con centros de Arica a Punta Arenas con apoyo del Estado y recursos donados por privados. Ello demostró que en Chile es posible el desarrollo de la Ciencia, tecnología y cultura creando un ecosistema para lograr ir de la sobrevivencia a la convivencia y al buen vivir entre las universidades, la empresa, el Estado y la sociedad civil, en el marco de un desarrollo armónico con el medio ambiente. La Ciencia debe ser motor para el desarrollo integral de todos los que habitan este territorio.

El proceso de generación de nuevo conocimiento, fruto de la curiosidad y de la necesidad de comprender la naturaleza, ha sido clave para el progreso de la humanidad. La expansión del saber, desde una genuina vocación

que interpela el entorno, que escucha con atención, indaga y formula preguntas relevantes, se sustenta en la práctica y el conocimiento, integrando distintas perspectivas para poder abordar los complejos desafíos que nos demanda la sociedad, es una verdadera necesidad.

Los problemas a abordar incluyen ámbitos tan diversos y contemporáneos como la inmunología, la depresión y la personalidad, las enfermedades crónicas, la justicia educacional o la relación entre arte, performatividad y activismo. También se abordan áreas prioritarias para nuestro desarrollo país, como el desarrollo sustentable, la gestión de desastres naturales, la cohesión social y la interculturalidad, así como temas de inteligencia artificial y robótica, astrofísica o ingeniería biomédica, entre muchos otros.

La investigación también cumple un rol clave en la formación de las personas, conectando a los alumnos con la práctica, dándoles nuevas herramientas, y las especializa a nivel de magister o doctorado, a través de una visión amplia y de los nuevos desafíos de un mundo siempre cambiante y más complejo. Sin embargo Chile solo cuenta con aproximadamente 1 doctor por cada 1.000 ocupados (población 25-64 años), mientras que el promedio de la OECD es de aproximadamente 9,5 doctores por cada 1.000 ocupados. En Chile aún no hemos hecho del conocimiento, la ciencia y su transferencia un factor sustantivo para el desarrollo sostenible basta ver que solo se destina para esto el 0.35% del PIB), muy por lejos del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2.4% del PIB), de acuerdo con cifras de la OCDE de 2018. Las diferentes manifestaciones del Arte como aporte al conocimiento y a un desarrollo sostenible no se valoran en su profunda dimensión. En efecto, los programas del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) no abordan con profundidad este aspecto y los Programas del Min CTCL, lo consideran muy marginalmente. Las artes, en su amplio sentido, construyen y le da identidad a una sociedad.

Problemas de una regulación legal de la investigación científica que termina por excluir a los más vulnerables: el caso del artículo 28 de la Ley N°20584 y de la modificación de la regulación de los estudios clínicos por la Ley conocida con el nombre Ricarte Soto. La moción, patrocinada por la Senadora Ena Von Baer, en conjunto con los Senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi, Alejandro Guillier y Rabindranath Quinteros, propone modificar normas sobre ensayos clínicos con fármacos y dispositivos médicos del Código Sanitario y la norma del artículo 28 de la Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes de los pacientes. (Boletín N°13829-11.)

El proyecto recoge planteamientos formulados por diversas universidades públicas y privadas y Academias de Medicina, realizados sobre el marco regulatorio para la investigación científica en seres humanos. Se advierte que la Ley N° 20.584 y la Ley Ricarte Soto, contienen normas que se alejan de los estándares del derecho comparado y de los principios éticos internacionales consensuados en instrumentos como las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, publicada en 2016 por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, la Declaración de Helsinki.

En primer lugar, la ley N° 20.850 introdujo cambios en el Código Sanitario, incorporando un nuevo título al libro IV de este cuerpo legal, el título V, «De los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico», con normas que crean condiciones de incerteza jurídica, y no logran cumplir con el adecuado equilibrio entre la protección de los intereses de los sujetos participantes y el acceso a los beneficios de la ciencia para la sociedad.

En segundo término, el artículo 28 la Ley N° 20.584 introduce una norma que limita la investigación científica con personas con discapacidad psíquica o intelectual que no puedan manifestar su voluntad, lo que se contradice con la Ley N° 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano y Convenios internacionales sobre derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, esta misma norma atenta contra derechos que hoy esta Convención tiene mandatado plasmar en la nueva carta fundamental, al exigir que personas con esta discapacidad que son competentes para consentir en su participación en una investigación científica, cuenten además con el consentimiento de su representante legal.

Las pautas éticas internacionales van en la dirección contraria de esta norma legal, promoviendo precisamente la inclusión y no discriminación de estas personas en la investigación, cuando esta responde a las necesidades o prioridades de salud de estos grupos y se cuente con protecciones especiales como el consentimiento por representación y niveles de riesgos mínimos. El artículo 28 de la Ley 20 584 terminó siendo modificado por el artículo 25 N°4 de la Ley N° 21331 del 2021 sobre salud mental dejando a un mayor grupo de personas excluidas de mejoras en su atención de salud al limitar la investigación científica en sus patologías por no poder re consentir.

A modo ejemplar el caso del Hantavirus “Una enfermedad huérfana.” Previo a la modificación del artículo 28 por la Ley 21.331 en los pacientes con infección aguda con compromiso de consciencia o con apoyo médico como

ventilación mecánica, se podía solicitar el consentimiento a representantes del paciente; esto considerando lo agudo del problema y la necesidad de tomar muestras o intervenir oportunamente precisamente en ese momento.

La infección por hantavirus es objeto de estudio en Chile por una red de investigadores a lo largo del país, por más de 25 años obteniendo logros que han sido un aporte importante para la caracterización y el adecuado manejo de la grave fase aguda de la enfermedad, con beneficio para los pacientes, sus familias y la comunidad.

Es prácticamente de regla que los pacientes afectados, una vez diagnosticados, tienen una evolución clínica caracterizada por un rápido agravamiento con compromiso y deterioro, *con* resultado de muerte en aproximadamente un tercio de los casos. Los casos, por su gravedad, suelen llegar a los centros de salud con deterioro de conciencia o tan graves e inestables desde el punto de vista respiratorio y cardíaco, por lo se tomaba un consentimiento inicial a un familiar o representante legal y re-consentir (el propio paciente) una vez que estuviese en condiciones de hacerlo.

En términos prácticos, se trata muchas veces de pacientes que transitoriamente no están en condiciones de dar consentimiento. Con la actual legislación se han detenido proyectos de investigación que buscan la caracterización de los factores biológicos y genéticos que condicionan la evolución grave de los pacientes con infección por hantavirus; esto tiene el potencial de contar con marcadores biológico que permitan predecir qué paciente tendrá una evolución grave y eventualmente focalizar tratamientos en los factores identificados; otro proyecto de investigación aborda la transmisión interpersonal (de persona a persona) del virus, elemento epidemiológico único para el hantavirus que tenemos en Chile.

La pregunta es ¿Quién es el siguiente caso dentro de un conglomerado, familiar, laboral? A la fecha existen muchas otras condiciones en que se requieran estudios de investigación en pacientes afectados por una condición aguda y transitoriamente incapacitados de dar su consentimiento (por ejemplo accidentes de tránsito, accidentes vasculares cerebrales, traumatismo encéfalo craneano, evolución grave de infección por coronavirus, estado de coma metabólico, etc.)

Previo a esta interpretación, en los pacientes con infección aguda con compromiso de conciencia o con apoyo médico como ventilación mecánica, se podía solicitar el consentimiento a representantes del paciente; esto considerando lo agudo del problema y la necesidad de tomar muestras o intervenir oportunamente precisamente en ese momento

La infección por hantavirus en nuestro país si bien es de baja incidencia (40-70 casos al año), afectada a personas jóvenes (promedio edad 34 años), sin morbilidades previas, y la letalidad oscila alrededor del 30%. Como equipo de investigadores, quienes firman y una red de investigadores a lo largo del país, llevamos estudiando esta enfermedad por más de 25 años obteniendo logros que han sido un aporte importante para la caracterización y el adecuado manejo de la grave fase aguda de la enfermedad, con beneficio para los pacientes, sus familias y la comunidad.

Es prácticamente de regla que los pacientes afectados, una vez diagnosticados, tienen una evolución clínica caracterizada por un rápido agravamiento con compromiso y deterioro grave de las funciones cardíaca y pulmonar (Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus), con resultado de muerte en aproximadamente un tercio de los casos. Los casos, por su gravedad, suelen llegar a los centros de salud con deterioro de conciencia o tan graves e inestables desde el punto de vista respiratorio y cardíaco, que hemos optado por tomar un consentimiento inicial a un familiar o representante legal y re-consentir (el propio paciente) una vez que estén en condiciones de hacerlo.

A la fecha al igual que lo sucede con la infección por hantavirus, existan muchas otras condiciones en que se requieran estudios de investigación en pacientes afectados por una condición aguda y transitoriamente incapacitados de dar su consentimiento (por ejemplo accidentes de tránsito, accidentes vasculares cerebrales, traumatismo encéfalo craneano, evolución grave de infección por coronavirus, estado de coma metabólico, entre otros.).

El rol fundamental de las Universidades

A nivel nacional, las universidades producen el 85-90% de las contribuciones científicas del país, forman al 100% del personal con entrenamiento avanzado y concentran entre el 70 y el 75% de las y los investigadores activos de Chile. Por otro lado, el 38,9% de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) se realizan en establecimientos de educación superior, mientras que el 75,6% de las y los doctorados declara que su actividad principal se desarrolla en una institución universitaria. Asimismo, han dado vida a gran parte de los centros de excelencia, como el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, cuyo rol preponderante en la pandemia es manifiesto. En efecto, a través de estos centros de investigación se ha logrado crear grupos estables de investigación que se desarrollan conjuntamente entre distintas universidades, interdisciplinariamente y a lo largo de país, y muy importantemente, en red con destacados centros internacionales.

La calidad de la ciencia chilena se debe precisamente al trabajo en las universidades y se distingue a nivel latinoamericano, alcanzando un impacto normalizado de 1,24 de acuerdo a Web of Science (WoS), mientras que el porcentaje de participación de Chile en la producción mundial de artículos científicos se ha cuadruplicado en los últimos años, como reporta el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.

Para avanzar en la calidad de la ciencia se requiere una inversión pertinente y efectiva, que también permita contar con investigadores e infraestructura de altos estándares internacionales.

Desafíos del sistema para un desarrollo estratégico y sostenible

El Estado debe articular el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, gestionar los recursos económicos y los incentivos necesarios para la investigación, la creación, la asistencia técnica y la transferencia tecnológica, con el fin de diseminar efectivamente el conocimiento, promover el descubrimiento y las actividades productivas.

Asimismo, debe guiar las políticas de investigación, creación y transferencia, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de una planificación nacional.

En este contexto, la formación de capital humano avanzado, adquiere un rol primordial. Chile requiere que doctoras y doctores se incorporen a las universidades y también al sector público para producir un salto significativo que nos permita ver con claridad alternativas de desarrollo sostenible y su complejidad. Se requiere reforzar la capacidad académica, particularmente en regiones.

Asimismo, el avance en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación debe ser sustentable. Es una prioridad ineludible que obliga a conservar el equilibrio ecológico. Debemos estar permanentemente atentos y vigentes, respecto a los desafíos del desarrollo sustentable en un contexto de monitoreo y generación de evidencia global. La salud y como lo recalca el concepto “una salud” se da en la intersección de la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental. Para lograr una salud planetaria óptima se requiere esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas que trabajen a nivel local, nacional y mundial.

El conocimiento generado debe impactar positivamente la vida de las personas, por esto el Estado debe adoptar medidas para proteger el conocimiento generado de diversas formas, incluidos regímenes de propiedad intelectual y de

derecho de autor, incluido el Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido generalmente como PCT, pues, para impulsar nuestro desarrollo y poder escalarlo, debemos ser capaces de transferir nuestro conocimiento al mundo. Asimismo, se deben adoptar las medidas pertinentes para proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus saberes y materiales derivados de sus conocimientos.

El conocimiento generado debe contribuir a que más y mejor evidencia informe el proceso legislativo, vinculando el encuentro entre productores de conocimiento científico y tomadores de decisión en el ámbito legislativo. El conocimiento generado debe ser accesible, pues es un motor de transformación y de democratización de oportunidades. La ciudadanía tiene derecho a participar en el progreso científico, sus aplicaciones y gozar de sus beneficios.

Necesidad de consagrar en la Constitución “El derecho a las ciencias”.

“La Ciencia sólo puede prosperar en un clima de libertad. Y este clima de libertad no depende únicamente de una libertad externa, es decir, de su independencia respecto a cualquier tipo de influencia política, sino también de que exista libertad dentro de la Ciencia (...), ya que el alma de la Ciencia es la tolerancia.” (Kelsen). Se espera que en el texto constitucional se consagre “el derecho a la ciencia” que comprenda la libertad de investigación científica, el derecho de acceso a la ciencia, a sus beneficios (artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el derecho a que el Estado realice una labor de fomento de la investigación científica en términos de provisión de educación científica básica y superior, de infraestructuras, personal investigador, títulos y acreditaciones, y recursos específicos.

El establecimiento de este derecho junto con principios constitucionales claros a este respecto, se espera sirvan para garantizar el desarrollo científico en el país así como límites a su regulación por el legislador.

La libertad de investigar en cuanto garantía frente a las injerencias no deseadas en el proceso de investigación, es singular en cuanto se trata de una actividad de carácter institucional y colectiva necesaria para la mejora de las condiciones de vida y salud de la comunidad. Es colectiva porque es una actividad que adquiere tal condición en el marco de validación de una comunidad científica.

Por otra parte, el conocimiento científico debería ser categorizado como un bien público en cuanto exige su producción en forma colaborativa y divulgación masiva de los resultados en plataformas de publicaciones abiertas. Y

participar en la investigación científica y gozar de sus beneficios considera formar parte de las decisiones estratégicas sobre la definición de las agendas de investigación o las formas de transferencias de esos conocimientos, incluidas las relativas a su comercialización. Ello obligaría a animar a sectores crecientes de la población a transitar de beneficiarios de los avances científicos a actores relevantes de estos avances.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X.- El Estado debe garantizar el derecho a las ciencias, destinando recursos para el desarrollo de la investigación científica y artística, con criterios de descentralización y el resguardo de los saberes ancestrales. El Estado debe promover la educación científica y artística en los distintos niveles educativos, la formación de investigadores e investigadoras, títulos, acreditaciones e infraestructura para tales efectos.

Se entiende por investigación todos los estudios sistemáticos que se realicen con el fin de descubrir el misterio de la humanidad, de la historia, manifestaciones artísticas, culturales en su más amplio sentido, del hábitat a través de los milenios, de los animales no humanos, de las especies, mares y cielos. Y que tiene como finalidad el desarrollo integral de las personas y pueblos que habitan el territorio.

Artículo XX.- La Constitución reconoce la función pública de las universidades reconocidas por el Estado las que deben tener el bien común como fin principal y les garantiza autonomía académica, administrativa y económica a fin de cumplir su cometido educacional y de investigación.

Artículo XXX.- La Constitución garantiza libertad de producción, y creación artística, literaria, científica y técnica. La cual tendrá como límite el bien común y el respeto por los principios bioéticos.

Artículo XXXX.- La Constitución garantizará a todas las personas sin distinción el derecho a negarse o participar en las investigaciones científicas en especial sobre sus necesidades y patologías. Este derecho también comprende gozar de sus beneficios y de la tecnología.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 428-7, la que fue aprobada por 14 votos a favor, y una abstención.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°392-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Lorena Céspedes, Paulina Valenzuela, Javier Fuchslocher, M. Angélica Tepper, Juan José Martín, Tammy Pustilnick, Carolina Videla, Carlos Calvo, Jorge Abarca, Patricia Politzer, Miguel Ángel Botto, Guillermo Namor, Benito Baranda y Mauricio Daza.

El diccionario de la RAE define “conocer” como “Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.” La búsqueda del conocimiento es una actividad intrínsecamente humana, y que puede tomar una gran diversidad de formas, dando origen a lo que podemos llamar tipos de conocimiento. Así, podemos reconocer el conocimiento intuitivo (Locke , 1999; Martínez y Guerrero, 2009) (que involucra una percepción inmediata, sin mediar mayor procesamiento intelectual), el conocimiento empírico (Cordua y Torreti, 1992; Martínez y Guerrero, 2009) (derivado de la experiencia), el conocimiento cultural (Blackler, 1995) (compartido entre pares de un mismo grupo, construido socialmente), o el conocimiento tecnológico (Ciaspuscio, 1996) (orientado a la creación, manipulación y evaluación de artefactos tecnológicos) por nombrar unos pocos ejemplos.

Considerando un tipo de conocimiento más formal, se distingue además la noción de conocimiento científico (Martínez y Guerrero, 2009), para designar a conocimientos adquiridos a partir de observación sistemática de la naturaleza, o a partir de modelos que la representan, debiendo siempre ser contrastables con las observaciones. La definición misma de conocimiento científico ha sido tema de debate por siglos, pero se puede afirmar que, en general, el conocimiento que llamamos “científico” debe ser “falseable” (Popper, 1934) (que se pueda poner a prueba su validez por medio de experimentos o modelos), y que exista un método sistemático ya sea para alcanzar dicho conocimiento, o para refutarlo.

Las características anteriores permiten diferenciar al conocimiento científico de otras nociones como creencias u opiniones. Todos estos conocimientos son parte de nuestra experiencia diaria, construyen nuestro acervo cultural, y nos orientan en nuestras decisiones. Esto, sumado al valor tanto personal como colectivo del conocimiento, inspira la presentación de esta norma, con la que se busca asegurar condiciones adecuadas para la creación de conocimiento y el goce de sus beneficios y aplicaciones por todas las personas, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y velando por el interés de los habitantes de nuestro país.

En primer lugar es importante notar que la generación de conocimiento, en cualquiera de sus formas, requiere de un adecuado espacio de libertad, como cualquier actividad creativa, para poder desarrollarse plenamente. Por ello se deben asegurar ciertas libertades básicas requeridas para dicha creación. Esto está respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 27 declara que *“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”* Menciones similares se pueden encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el Protocolo de San Salvador.

En esta norma, se entiende el conocimiento desde el punto de vista más amplio, no sólo vinculado al conocimiento científico. Así, en el artículo primero, se establece el derecho que tienen todas las personas a participar libremente de la creación del conocimiento y aplicaciones del mismo, distinguiéndose las distintas etapas de este proceso: *creación de conocimiento* (acción mediante la cual nuevo conocimiento surge), *desarrollo del conocimiento anterior*, *investigación* (facultad de iniciar o continuar un estudio sistemático que dé origen, eventualmente, a conocimiento), y *socialización del conocimiento a otras personas*. Cada una de estas etapas se puede ejercer libremente. Se hace énfasis que este derecho no se aplica sólo al conocimiento en sí, sino a sus aplicaciones como por ejemplo, la tecnología, entre otros.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el conocimiento sea usado en perjuicio de las personas o de las comunidades. Por ejemplo, participación de personas como sujetos de investigación sin el debido consentimiento informado, posibles transgresiones a la privacidad a través de estudios genéticos o análisis de actividad cerebral, etc. En algunos casos, son situaciones que hasta hace pocas décadas eran material de ciencia ficción, pero que los avances científicos

hacen cada vez más plausibles, poniendo diversos dilemas éticos asociados al desarrollo de conocimiento nuevo.

Lo anterior indica que la libertad señalada debe estar limitada, de esto se hace cargo el inciso dos del artículo primero. Dichos límites están dados por la protección a otros derechos fundamentales personales, entendiéndose que ello incluye protección a la integridad física y psíquica de las personas, y el respeto y valoración del medio ambiente, entre otras.

El Estado debe garantizar este derecho, teniendo distintos mecanismos. Sin perjuicio de otros mecanismos que determine la ley, la norma explicita dos de ellos, en el inciso tercero del artículo primero.

A. Considerando que la actividad científica individual o colectiva se ejerce libremente, es necesario que el Estado, además, considere su participación en la misma con el fin no sólo de participar en la creación de conocimiento, sino también para orientarlo a las necesidades específicas de los habitantes de Chile. Es por ello que la norma explicita la posibilidad de que el Estado garantice este derecho, por ejemplo, a través de la creación y desarrollo de entidades públicas que generen conocimiento. En esta categoría estas instituciones ya existentes como la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Instituto Antártico Chileno (INACH), o el Instituto de Salud Pública (ISP), que cumplen funciones de interés público y estratégico, Es necesario que el Estado vele para que estas instituciones, y otras similares que se puedan crear en el futuro, cumplan efectivamente con su labor pública, tomando en consideración tanto los intereses y necesidades locales como del país.

B. Además, la norma establece la posibilidad del Estado de fomentar la inversión en ciencia, tecnología, innovación y cultura, a través de iniciativas propias, alianzas entre el Estado o privados, o fomentando asociaciones entre entidades privadas, teniendo siempre presente el bienestar y el desarrollo de los habitantes de Chile y las comunidades, como el objetivo fundamental y primigenio de la inversión.

Así como el artículo primero se refiere a los derechos y las obligaciones del Estado con respecto a quienes crean conocimiento, el artículo segundo lo hace respecto a quienes reciben o pueden disfrutar de dicho conocimiento.

Tales derechos y obligaciones están refrendados por diversos documentos internacionales, que indican que “Toda persona tiene derecho a

tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” (Declaración universal de los DDHH, 1948); y que las personas tienen derecho a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones” (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966);

En efecto, el artículo segundo propuesto, en su primer inciso, establece el derecho de cada persona de disfrutar de los beneficios de la creación de conocimiento. Esto implica, tal como establece el tercer inciso, tener derecho libre y equitativo a acceder a dicho conocimiento, lo cual se puede concretar a través del acceso a artículos científicos, informes inéditos públicos o privados financiados por el Estado, a información por medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio, televisión) o digitales (tanto relativo al conocimiento técnico generado, como a la comunicación científica de manera no técnica, para alcanzar nuevos públicos), y muy especialmente a través de la educación.

En este contexto, disfrutar los beneficios del conocimiento no significa sólo ser informado respecto al mismo, sino también disfrutar de los avances tecnológicos o de innovación que resulten del conocimiento.

El segundo inciso del artículo limita los derechos declarados en **el inciso primero**, a fin de que su ejercicio no transgreda derechos de quienes han participado en la creación del conocimiento por ejemplo, a través del concepto de propiedad intelectual como se indica en la Declaración Derechos Humanos, art 27, inciso 2, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art 15, inciso 1.c, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art XIII, inciso 2; y el Protocolo de San Salvador, art 14, inciso 1c.

Por último, el artículo tercero propuesto se refiere a otras obligaciones del Estado derivadas de los artículos anteriores, en cuanto a la orientación que el conocimiento acumulado puede hacer sobre el diseño de las políticas públicas, y la disminución de inequidades que atentan contra el ejercicio de las libertades anteriormente declaradas, tales como brechas de género e inequidades territoriales.

Respecto a la toma de decisiones por parte del Estado, los desafíos que ha puesto en las décadas recientes el debate sobre la crisis climática y ecológica, o en los últimos años el desarrollo del Covid-19, revelan la necesidad de que las políticas públicas no sólo estén al servicio del bienestar de los habitantes del país, sino que dicho servicio se concreta de mejor manera cuando las decisiones y políticas públicas están informadas por el conocimiento científico aceptado.

Se debe tener presente, por cierto, que el concepto mismo de conocimiento científico “aceptado” puede estar sujeto a cambios, sobre todo en temas controversiales, como por ejemplo crisis climática y ecológica. Muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia ha sucedido que ciertas controversias no logran resolverse de manera sencilla. Esto puede deberse a múltiples razones, como por ejemplo la acumulación de evidencia contradictoria o inconclusiva; la propuesta de modelos contradictorios entre sí que, sin embargo, describen adecuadamente parte de los fenómenos naturales que interesa describir; o la ausencia de criterios definidos para decidir en favor de un modelo en particular. Es inherente al desarrollo científico que estas controversias surjan cada cierto tiempo, pero a la vez es también inherente al mismo que existen métodos sistemáticos para resolverlas, alcanzándose un nuevo cuerpo de conocimientos científicos aceptados.

Por ello es relevante tener claro que la dinámica anterior, propia de la Ciencia, no es obstáculo para entender que lo que denominamos conocimiento científico se ha alcanzado a partir del contraste entre distintos modelos, posiciones y evidencias, de tipo experimental, teórico, estadístico, etc., dependiendo del ámbito científico de que se trate, hasta alcanzar las conclusiones que mejor describen los fenómenos del estudio. Y por lo tanto, una vez que el conocimiento científico es aceptado como tal, la norma propuesta obliga al Estado a considerarlo en la elaboración o modificación de políticas públicas.

También es importante notar que la norma, en este caso, es específica al citar al conocimiento científico (a diferencia de los artículos anteriores), ya que es este conocimiento sistematizado el que, de acuerdo al consenso actual, permite tomar decisiones en base a evidencia comprobada. Esto podría entrar en conflicto con otros saberes de comunidades locales, o ancestrales. Por ello, en el artículo se ha cuidado de obligar al Estado a considerar el conocimiento científico en sus políticas públicas, en vez de obligarlo a basarse en dicho conocimiento. De este modo, se asegura que el conocimiento científico sea parte de la discusión al momento de diseñar una política pública u otros documentos oficiales, pero ponderando otros factores como el respeto a otros derechos fundamentales, saberes ancestrales y las sensibilidades de comunidades locales.

Un aspecto no menor de la relación virtuosa entre conocimiento científico y políticas públicas, es el hecho de que el conocimiento actual permite al Estado tomar acciones preventivas, o reactivas, ante distintos tipos de amenazas naturales y sus devastadores consecuencias. Probablemente el ejemplo más inmediato es el relacionado con el riesgo sísmico. Debido a su ubicación a nivel de

placas tectónicas, el Estado de Chile se encuentra en una zona altamente dinámica, denominada zona de subducción. En dicha zona, la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa Sudamericana, generando fricción, y con ello, el desencadenamiento de procesos geológicos violentos. La zona de contacto entre estas dos placas abarca desde la ciudad de Arica por el norte, hasta el Cabo de Hornos por el sur, evidenciando una compleja configuración tectónica gobernada por fenómenos de subducción que rigen todos los procesos geológicos y sus respectivas amenazas. Por este motivo, Chile es uno de los países más expuestos a sufrir el embate de fenómenos violentos de origen geológico como: erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis y remociones en masa,

Sin embargo, las amenazas naturales son bastante más diversas que las derivadas de nuestras condiciones geológicas. En efecto, nuestro país está sometido a constante riesgo por diversos fenómenos geofísicos (sismos, volcanismo, tsunamis causados por actividad sísmica local o remota), biológicos (como la pandemia que nos afecta actualmente), climáticos (consecuencias, por ejemplo, de la crisis actual como fuertes precipitaciones, prolongadas sequías, y diversos fenómenos atmosféricos), o incluso provenientes del espacio, como tormentas geomagnéticas, caída de meteoritos o basura espacial). Si bien muchos de estos fenómenos no se pueden prever, siendo intrínsecamente impredecibles, no es menos cierto que el estado del conocimiento actual permite tomar precauciones antes de que sucedan, para mitigar sus impactos. Esto se concreta, por ejemplo, a través de construcciones antisísmicas, planos reguladores que consideren fallas geológicas o riesgos de aluviones, alertas tempranas de tsunamis y actividad volcánica peligrosa, medidas sanitarias preventivas ante enfermedades, monitoreo de actividad geomagnética y de cuerpos orbitando en las cercanías de la Tierra. Consideramos que es obligación del Estado tomar las medidas de prevención, protección y rehabilitación que estén disponibles en base al conocimiento aceptado, para resguardar la vida de las personas ante la ocurrencia de estos eventos, y/o prestar auxilio con posterioridad a su ocurrencia.

Chile posee un legado histórico de desastres producto de una deficiente planificación territorial, una mínima o incluso ausencia en planes de prevención y acotados planes de rehabilitación, gestionando sólo procesos reactivos focalizados a la población afectada. Los habitantes de Chile poseen una memoria resiliente, plagada de actos heroicos y procesos exitosos de superación que evidencian el férreo compromiso de sus habitantes por el progreso continuo de sus comunidades. Por este motivo, urge de sobremanera redactar normativas que promuevan la elaboración de planes que busquen gestionar el riesgo y sus amenazas de forma eficiente, incentivando la prevención, reacción y rehabilitación de las comunidades ante este tipo de fenómenos destructivos.

Por otro lado, el desarrollo científico y tecnológico está claramente concentrado en Santiago y en algunos grandes centros urbanos tanto en la cantidad de centros de investigación con financiamiento público y en consecuencia el número de publicaciones hechas por investigadores e investigadoras (Ministerio de Ciencia, Tecnología, conocimiento e innovación [MICITEC], 2019), lo que atenta contra el derecho al acceso al conocimiento. Por ello en el inciso dos del artículo tercero el Estado debe procurar que el desarrollo del conocimiento sea equitativo y descentralizado, alcanzando todas las regiones del país, impulsando no sólo el derecho al goce del conocimiento del artículo 2, sino también la participación activa de las comunidades en la creación y desarrollo del conocimiento y sus aplicaciones. (GRÁFICA)

En concordancia con aquello, en el tercer inciso del artículo tercero se explicita además la necesidad de considerar un enfoque de género en las garantías a los derechos explicitados en los artículos primero y segundo, ya que no es posible pensar que se logra la libertad de participación en la creación y desarrollo del conocimiento, y la libertad de disfrutar de sus beneficios, sin el fomento a la participación de comunidades que han sido tradicionalmente marginadas del mismo.

El sesgo de género es muy visible en el ámbito de las ciencias, lo que ha hecho que las mujeres accedan menos a carreras relacionadas con el ámbito de la ingeniería, tecnología y ciencia, por ejemplo en el año 2018 solo el 27% de quienes rindieron la prueba electiva de física eran mujeres, asimismo solo el 8% de quienes ingresaron el 2018 a la carrera de ingeniería eléctrica eran mujeres y solo un 5% de mujeres se desempeña en trabajos asociado a la tecnología (MinMujeryEG, s.f).

También el Reporte de género y percepción social de la ciencia y tecnología elaborado por el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICYT (2017) indicó *“Los principales hallazgos entre los resultados de hombres y mujeres corresponden a señales de un mayor acercamiento de los hombres por sobre las mujeres hacia la ciencia y la tecnología”*, por tanto los enfoques de género, en este sentido, deberían permitir disminuir las brechas existentes que atentan contra un desarrollo pleno de los y las habitantes de Chile.

Ahora bien, para poder participar públicamente de la construcción, uso y beneficio del conocimiento científico y tecnológico, los ciudadanos y ciudadanas requieren una formación científica atingente, actualizada, temprana y oportuna, que esté siempre presente de forma obligatoria en el currículo nacional. De esta forma, se procura promover en todos y todas la capacidad de involucrarse

con temas relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo y crítico (OCDE, 2015), para atender cuestiones sociopolíticas, ecojusticia social, sanitarias y medioambientales (Sjöström, & Eilks, 2018).

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Art. XX1. Derecho a la creación del conocimiento y a difundirlo.

Se reconoce a todas las personas la libertad de investigación, creación y difusión del conocimiento y sus aplicaciones.

El ejercicio de esta libertad reconocerá como límite el resguardo a los Derechos Fundamentales consagrados en esta Constitución y Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile.

Es deber del Estado promover y respetar el ejercicio de esta libertad. Para ello fomentará la creación de entidades que generen conocimiento y establecerá mecanismos y alianzas que incentiven la inversión en artes, cultura, ciencia, tecnología educación e innovación, especialmente en aquellos campos que contribuyan al bienestar de los y las habitantes de Chile y la Naturaleza, e involucren al desarrollo de las comunidades y el país.

Art. XX2. Derecho a beneficiarse del conocimiento y sus aplicaciones.

Todas las personas tienen derecho al libre acceso al conocimiento y al goce de sus beneficios.

La Ley establecerá la forma en que esta libertad se ejercerá con respeto al resguardo a los derechos de quienes hayan generado dicho conocimiento.

El Estado tiene el deber de promover la conservación, difusión, socialización y acceso equitativo al conocimiento, así como a sus aplicaciones, por medio de políticas públicas en el ámbito de la educación, la cultura, el medio ambiente, la comunicación y otras que determine la Ley.

Art. XX3. Garantías específicas del derecho al conocimiento científico y tecnológico.

Es deber del Estado velar que la elaboración de políticas públicas, planes de gestión, instrumentos de planificación, programas, leyes u otros

instrumentos públicos consideren el conocimiento científico generalmente aceptado y el desarrollo tecnológico, y, en caso que afecten a comunidades indígenas, sus saberes ancestrales.

El Estado promoverá el fortalecimiento de la educación científica y la actividad científica y tecnológica en todas las regiones del país, fomentando un desarrollo equitativo entre ellas y sus localidades, de modo de incentivar la participación activa de las personas y comunidades.

El Estado deberá establecer políticas con enfoque de género tanto en los procesos de creación y comunicación del conocimiento científico y tecnológico como en el goce de sus beneficios.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 392-7, la que fue aprobada por 14 votos a favor.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°193-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión para que el Estado de Chile reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, garantice todas sus obligaciones para con los distintos pueblos y naciones indígenas preexistentes, que emanan de las obligaciones internacionales contraídas, ingresada por Jimena Cruz M., el pueblo Lican Antai y Patricia Cruz Mamani de la Comunidad Atacameña de la Puna.

Construcción de la norma se desarrolló a partir de la experiencia de la propia Comunidad en relación a su conocimiento tradicional, respeto hacia los ancestros y Pachamama. Además de prácticas de resignificación y redignificación (Cruz et al, 2020)* de trabajadores atacameños en centros de investigación y museos donde se acumula el patrimonio arqueológico atacameños en especial restos humanos que nosotros consideramos ancestros. Ya que desde hace mucho tiempo el rol de las ciencias sociales sobre los pueblos indígenas en que se ha jerarquizado el conocimiento científico sobre el conocimiento de los pueblos construido desde muchísimo más tiempo (Cruz J, Anza G, Cruz T y Cruz T (2020) Hacia la redignificación de los "Gentiles". Un intento de descolonización de las teorías, protocolos y manuales museográficos en San Pedro de Atacama a través

de la reivindicación y prácticas indígenas atacameñas (1960-2020). En Arthur, J. y Ayala, P.: El regreso de los ancestros. Movimientos indígenas de repatriación y redignificación de los cuerpos. Subdirección de Investigación: Santiago de Chile).

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX: Los Pueblos-Naciones indígenas tienen derecho a una protección especial de su territorio, lugares, pictografías, petrograbados, arquitectura y objetos que consideren sagrados.

Artículo XX: El Estado promoverá y garantizará reivindicación y descolonización de las tradiciones, interpretaciones y filosofías de los pueblos indígenas.

Artículo XX: Los cuerpos prehispánicos que sean considerados por los Pueblos-Naciones indígenas como sagrados recibirán un trato especial de acuerdo a las tradiciones propias de estos pueblos. Así pues, pueden demandar repatriación, reentierro, restitución y/o redignificación de los que consideren sus ancestros. El Estado está obligado a cooperar, ayudar y garantizar que se den estos procesos de manera segura, y respetando el querer y la tradición de los Pueblos-Indígenas.

Artículo XX: El Estado promoverá y garantizará el conocimiento tradicional indígena como un conocimiento válido en las relaciones pueblos indígenas-Estado-institutos de investigación.

Artículo XX: El Estado promoverá y garantizará el respeto y conciencia sobre los ancestros y miembros de los Pueblos- Naciones indígenas con el fin erradicar formas de racismo ya sea social, intelectual, cultural y que estos Pueblos ya no solo sean objetos de estudio, sino que principalmente sean sujetos de derecho.

Artículo XX: Los Pueblos-Naciones indígenas tienen derecho a decidir sobre sus patrimonios, historia, cultura y formas sociales tradicionales. Y a la consulta libre, previa e informada sobre investigaciones científicas.

Artículo XX: Los Pueblos-Naciones indígenas tienen derecho a la propiedad intelectual sobre su conocimiento tradicional, el cual incluye diversas materias como, ADN, lengua, medicina, alimentación y control de la producción científico literario.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 193-7, la que fue aprobada por 10 votos a favor, y 5 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°497-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho de propiedad intelectual, el dominio y sus límites, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Malucha Pinto, Wilfredo Bacion, Eric Quiroga, Tania Madriaga, Isabel Godoy Monardez, María Rivera, Bessy Gallardo, Carolina Vilchez, Francisco Caamaño, Vanessa Hoppe, Jorge Abarca, (faltan ccs).

Hemos sido testigos del bloqueo y del estancamiento de la difusión de nuevos conocimientos, especialmente desde fines del siglo XX, a causa de la mercantilización de éstos y del aprovechamiento de los derechos patrimoniales, convertidos en bienes de capital, más allá de la vida de la propia autoría y muchas veces extendidos varias generaciones.

Las lógicas que subyacen ahí son las relativas a la exacerbación del individuo y sus derechos a gozar de ciertos beneficios, por sobre el colectivo y el bien común. Esto ha sido una de las características del enfoque antropocéntrico con que se ha construido la sociedad moderna, que tiene su expresión más reciente en el ordenamiento cultural, social y económico del neoliberalismo, y que es causa de muchas de las crisis que padecemos en el presente.

En las últimas décadas sin embargo y particularmente en los últimos años, han reaparecido en la discusión pública ciertos principios relacionados con las cosmovisiones originarias que apuntan justamente en un sentido opuesto, es decir, el de relevar la comprensión de un ser humano inserto en una trama vital amplia y de una noción de las y los individuos nunca separados del colectivo y la realidad socio-histórica donde se desarrollan. Así hemos conocido, y hoy forman parte del Reglamento de Ética y Convivencia de la Convención Constitucional (Artículo 3.- Principio de ética en el ejercicio del cargo), principios como Suma Qamaña, Sumak Kawsay y el Kume Mongen (traducidos como Buen Vivir) como fundamentos de la existencia humana, y la causa que sostiene ese "buen vivir" en el caso de la cultura mapuche, el principio de Itrofill Mongen (toda la vida sin excepción), además el Principio Biocéntrico, propuesto por el chileno Rolando Toro Araneda a fines del siglo XX en el contexto del de desarrollo humano, en

particular la Biodanza que creó colectivamente con aportes de intelectuales, hombres y mujeres, principalmente de Argentina y Brasil.

Este Principio Biocéntrico consiste en una manera de sentir y de pensar, que reconoce una tendencia de la producción intelectual, artística y científica de la segunda mitad del siglo XX, expresada en personalidades como Ilya Prigogine, Albert Hofman, Martin Buber, Carl Sagan, Edgar Morin, Francisco Varela, Humberto Maturana, Paulo Freire y un largo etcétera; que se aleja de las nociones de lo antropocéntrico para poner en el centro a la vida.

Es así que desde un enfoque del Principio Biocéntrico , se puede considerar que el núcleo básico en torno al cual se estructura lo social es el vínculo afectivo consigo mismo/a, entre las personas y con el entorno. El Principio Biocéntrico está promovido y recuperado por comportamientos éticos, los cuales surgen a partir del desarrollo de nuestra inteligencia afectiva.

Este vínculo afectivo toma la forma de una red de relaciones amorosas en las que vamos desarrollándonos como seres humanos, y que tiene como horizonte el despliegue de nuestros potenciales genéticos en comunidad. Las posibilidades de ese despliegue, por lo tanto, están directamente relacionadas con la cualidad de esos vínculos en los cuales nos desenvolvemos históricamente, y de la vivencia que tengamos o no del amor comunitario. Desde ese punto de vista el desarrollo del individuo es un proceso que se da inevitablemente de manera simultánea con el desarrollo histórico-social en donde ella/elle/él está inserta o inserto.

De allí que la creación, en tanto que expresión de esa individualidad, es una actividad que forma parte del impulso de innovación frente a la realidad, organizando los elementos de un modo que no existía previamente, para crear un lenguaje único a partir de una vivencia dialógica con su contexto social, el que se hace presente en tanto está ocurriendo en un momento y espacio particular.

La obra de creación es siempre el resultado expresivo del acto de vivir en sociedad, por lo que se hace necesario estimularla, promoverla y protegerla; pero además, junto con esto, resguardar que esa expresión creativa no se vea limitada en el presente y para las futuras generaciones. Esto se traduce en la necesidad de distinguir claramente los aspectos morales -que permiten al autor o autora a ser reconocido como el creador o creadora de su obra- de los aspectos patrimoniales que permiten a las/los titulares percibir una retribución económica por el uso que terceros hagan de sus obras. Al mismo tiempo otorgar al dominio público un estatus de bien social en sí mismo y no sólo como un subproducto de la expiración de derechos patrimoniales de autor.

Durante largo tiempo hemos observado como obras que contribuyen al desarrollo humano y patrimonial de las y los chilenos dejan de contribuir al crecimiento del país al ser patentados. Creemos que no todo es transable, que aquellas creaciones y conocimientos (Ej. vacunas, metodologías de desarrollo humano, etc.) que aportan al buen vivir y al desarrollo integral de las comunidades, no deben ser privatizadas, ya que limitan el natural flujo de conocimiento que nos permite seguir creciendo como humanidad. Por lo tanto las ideas, procedimientos, métodos de operación, conceptos matemáticos o informáticos, deben circular libremente y no ser susceptibles de registros comerciales. Desde un enfoque biocéntrico, a favor de la vida, no sólo aquellos que pueden pagar deben tener acceso al conocimiento.

En consecuencia la Constitución debe considerar un equilibrio entre los derechos individuales y el patrimonio colectivo, que permita y garantice el desarrollo de una humanidad más plena e integrada. Estimular, proteger y compartir el conocimiento humano, sin que pongamos de por medio una transacción económica, también es una forma de promover la equidad y vincularnos afectivamente.

El dominio público, es la utilización de bienes con un fin de interés público, uso o servicios públicos y no susceptibles de dominio privado, cuya producción no tiene fines de lucro.

Dentro del dominio público, existen obras del llamado “patrimonio cultural común”, que pueden ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra, como por ejemplo, obras cuyo plazo de protección se haya extinguido, obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo cultural y/o folklórico, obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga la ley, etc.

También existen modelos de pensamiento alternativos de dominio público, donde se protege la propiedad intelectual desde otra perspectiva fundamentalmente en relación a los derechos morales, permitiendo su difusión y uso comunitario, como son: Licencia Creative Commons, Software Libre, Licencia GNU, Licencia GPL, etc.

Creemos en la necesidad de trascender, por lo tanto, las lógicas individualistas y actualizar las concepciones que nos permitan volver a comprender lo humano como parte de una trama vital amplia, en la que nuestro ser se integra en distintos niveles de vínculo para sostenerse y sostener la comunidad.

“La cultura que hace brillar el talento, no es del todo nuestro bien, y no podemos colocarlo exclusivamente a nuestra disposición. Por el contrario, pertenece principalmente a nuestro país que nos la dio, y para la humanidad, del cual la recibimos como un derecho de nacimiento” José Martí.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo xx

El Estado garantizará que todos los conocimientos artísticos, intelectuales y científicos, que aporten al desarrollo humano y/o al cuidado de la vida, y/o al buen vivir de la comunidad, serán protegidos, asegurada su difusión y de dominio público. El estado calificará dichos aportes e indemnizará a sus autores de acuerdo a lo que establezca la ley. Los derechos de autoría de su obra serán siempre protegidos.

Artículo xx

Los derechos patrimoniales derivados de una creación, tendrán vigencia post mortem de acuerdo a lo señalado en el Convenio de Berna, suscrita por Chile 1946, y ratificado por Chile 1975. Transcurrido el plazo que fija dicho Convenio, estos conocimientos serán de dominio público.

Artículo xx

Los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas sistematizados en comunidad y otros conexos, que aportan al desarrollo humano y/o al cuidado de la vida y/o al buen vivir de la comunidad, no podrán ser usados con fines comerciales, sin la autorización de dichas comunidades.

Artículo xx

Las obras cuya propiedad intelectual sea distinta a los herederos y que correspondan a materias señalados en **Inciso primero**, serán de dominio público, sin derechos post mortem y no tendrán derecho a indemnización.

Artículo xx

El Estado implementará el desarrollo de tecnologías, equipamiento, profesionales especializados en la investigación científica, para la creación de medicinas, procedimientos, para el desarrollo humano y/o al cuidado de la vida,

y/o al buen vivir de la comunidad, para asegurar la soberanía de la salud de toda la población.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 497-7. Fueron aprobados los artículos XX3 (8 votos a favor, 3 contra y 4 abstenciones) y XX5 (8 favor, 5 en contra y 2 abstenciones).

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°240-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho al resguardo de la propiedad intelectual, industrial y saberes ancestrales, ingresada por Marco Coñuecas P., el Pueblo Kawésqar, Canoeros Australes de la comunidad Indígena Kawésqar.

Tras diversas conversaciones sobre el proceso constituyente, un grupo de amigos del pueblo kawésqar comenzaron a trazar ideas de cómo una norma constitucional podría dar solución a diversas problemáticas que tienen los pueblos indígenas en Chile. Así, se reunieron Rosa Ovando, Marco Piutin Ovando, María Luisa Renchi Navarino, y con la ayuda de su amigo y asesor convencional, Pedro Muñoz Hernández decidieron elaborar 5 propuestas de norma relativas al territorio, a las lenguas, la protección de los recursos naturales y la autonomía, las que se redactaron entre el 15 y el 30 de enero de 2022.

La protección de la pertenencia de las personas a grupos culturalmente diferenciados ha estado presente en el derecho internacional de los derechos humanos desde la adopción, en 1966, del primer tratado sobre la materia: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Chile en 1972. Este reconoce el derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a mantener y practicar su propia vida cultural, religión y lengua “en común con los demás miembros de su grupo”.

Si bien se trata de un derecho individual, esto es, un derecho reconocido a las personas, el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar la aplicación del Pacto, ha reconocido su dimensión colectiva, al afirmar que su ejercicio depende de la capacidad del grupo de mantener su cultura, religión o idioma, lo que exige que el Estado adopte medidas para proteger la identidad cultural del grupo.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

ARTÍCULO XX1: Los pueblos indígenas, preexistentes al Estado de Chile, son reconocidos como custodios de sus conocimientos, cultura e identidad. Tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a preservar, desarrollar, administrar y transmitir a las futuras generaciones, su patrimonio cultural e histórico, tangible e intangible, que constituye la base de su continuidad colectiva e individual.

Los pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad; sus usos, costumbres, normas y tradiciones; las formas de organización social, económica, política y jurídica; las formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas; y la interrelación que existe entre manifestaciones culturales.

A los individuos a quienes se les reconozca su calidad indígena, como a las comunidades de un determinado pueblo nación preexistente, se les reconoce la titularidad de tales derechos ancestrales.

ARTÍCULO XX2: El Estado Chileno reconoce la propiedad intelectual de los pueblos naciones preexistentes sobre sus sistemas de conocimientos tradicionales, expresiones culturales, el patrimonio genético existente en la biodiversidad de los territorios indígenas, sus saberes y tradición oral, su medicina ancestral, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos, vestimentas, cosmovisiones, mitos, danzas, prácticas culturales, y sus tecnologías tradicionales.

ARTÍCULO XX3: Corresponderá a cada pueblo determinar, resguardar y administrar la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de su respectivo acervo, incluidas las nuevas obras, inventos, descubrimientos, marcas comerciales y demás bienes intelectuales susceptibles de protección.

ARTÍCULO XX4: El Estado tendrá el deber de prohibir la constitución de derechos de propiedad industrial, intelectual y similar sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, deberá anular cualquier registro o derecho que se haya constituido sobre aquellos y sin el consentimiento del respectivo pueblo.

ARTÍCULO XX5: Es deber del Estado realizar todas las acciones necesarias para obtener la restitución de los objetos pertenecientes al patrimonio

material de los pueblos y naciones preexistentes que, sin el consentimiento de éstos, se encuentren fuera del territorio nacional, debiendo financiar y suministrar el presupuesto necesario para la consecución de estos fines, incluyendo las gestiones diplomáticas y la litigación ante tribunales internacionales.

ARTÍCULO XX6: Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción frente a actos que tienen por objeto o consecuencia desposeer a los Pueblos de sus tierras, territorios y recursos, menoscabar sus derechos, incitar a la discriminación racial o etnia o promover una asimilación e integración forzada.

ARTÍCULO XX7: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a su identidad cultural, creencias religiosas, espirituales, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión; a la recuperación, protección y promoción de sus lenguas, lugares sagrados y de su ritualidades, así como plantas, el material genético de estos cultivos desarrollados a través de generaciones, no sea susceptible de apropiación por ninguna empresa privada, nacional o extranjera y se protegerán de la contaminación que pudiera producir plantas genéticamente modificadas, protección de animales, minerales y ecosistemas dentro de su territorios. A mantener preservar, administrar, reconocer, proteger, desarrollar, los valores y prácticas sociales, culturales, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnologías, su religiosidad y espiritualidad los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, y el patrimonio subacuático propio de dichos pueblos. El Estado garantizará con acuerdo a las leyes, la tutela y resguardo de estos derechos.

ARTÍCULO XX8: Los pueblos y naciones preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales.

El Estado asegurará la permanencia de a lo menos un colegio o liceo al interior de una comuna declarada como indígena, garantizando la continuidad de estudios para niñas y niños, adolescentes en los conocimientos y lenguas propios del pueblo. Para su revitalización y fortalecimiento, se favorecerán planes de estudio y enseñanza dirigidos a todos los individuos, lo que implicará incluir formación de adultos en sus propias culturas, conocimientos, creencias y lenguas.

ARTÍCULO XX9: En el territorio chileno quedará prohibido el uso de los conocimientos de los ancianos y sabios de los pueblos y comunidades sin el debido permiso y consentimiento de la propia comunidad a la que se acude.

En cualquier caso, toda publicación digital, impresa, manuscrita, sonora o audiovisual obtenida con motivo de una investigación realizada en terreno indígena o por vía remota con miembros de una determinada comunidad, deberá siempre priorizar la entrega de registros de respaldo a la comunidad como soporte para las generaciones futuras. No se permitirán publicaciones que no incluyan la definición exacta del proveedor de conocimientos en el trabajo de campo, a qué comunidad pertenece, el cargo o título ancestral que detente y la comunidad y pueblo al que pertenece, quedando prohibida la utilización de imágenes y registros de cualquier tipo que se hayan obtenido sin su consentimiento.

ARTÍCULO TRANSITORIO: El Estado chileno ordenará a todas las instituciones públicas o que cuenten con financiamiento público y que hubieren sustraído, resguardado bajo cualquier forma o soporte registros, instrumentos, objetos o cualquier tipo de elementos pertenecientes a un determinado pueblo, para que en el transcurso de un año contados desde la publicación de la presente constitución, hagan entrega formal y pública de un catálogo íntegro de dichos elementos o soportes y propenderá a alcanzar un acuerdo de custodia, para continuar manteniéndolos.

Si transcurridos 12 meses adicionales al tiempo de entrega del catálogo de dichos objetos o registros no se ha alcanzado un acuerdo con el pueblo respectivo y la mayoría de sus comunidades, los objetos, soportes y registros antes señalados, serán entregados a la custodia de la institución, organismo o comunidad que el propio pueblo determine.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 240-7, la que fue aprobada por 10 votos a favor, 4 votos en contra, y 1 abstención.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°832-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el acceso democrático a la comunicación científica, de una forma inclusiva y descentralizada, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Alejandra Flores, Cristina Dorador, Francisco Caamaño,

Bernardo de la Maza B., Malucha Pinto, Loreto Vidal, Ignacio Achurra y Alexis Caiguán.

La comunicación científica se define como el conjunto de procesos de presentación, transmisión e intercambio de información científica en la sociedad humana; constituye el mecanismo principal de existencia y desarrollo de la ciencia y resulta un proceso complejo si se trata de describir, narrar o valorar el proceso investigativo desde el enfoque cualitativo de la investigación.

Dependiendo del público objetivo a quien va dirigida la información, se identifican dos tipos de comunicación científica. El primero de ellos es la difusión, proceso en que los investigadores académicos dan a conocer sus trabajos, a través de artículos publicados en revistas científicas, congresos y seminarios disciplinares. La difusión brinda la oportunidad de compartir pensamientos e ideas con el resto de la comunidad científica, quien ayuda a mejorar la perspectiva científica del artículo y el nivel de conocimiento en él comprendido.

El segundo tipo de comunicación es la divulgación, concepto que nace en el momento en que la comunicación de un hecho científico deja de estar reservada exclusivamente a los propios miembros de la comunidad investigadora o a las minorías que dominan el conocimiento. En la divulgación se produce la conjunción de todos los aspectos culturales de un tema. Junto a los conceptos, procesos y herramientas de la ciencia, aparecen los propios de la historia, el arte, la economía y la relación con lo cotidiano, para poder llegar a una presentación completa, que sea a su vez, comprensible y relevante para el individuo.

En este contexto, la falta de acceso a contenidos científicos y su escasa valoración, por parte de la ciudadanía, por un lado, dificulta la promoción del desarrollo del pensamiento crítico y por otro, favorece la generación y el consumo de una gran disponibilidad de fake news, a través de diferentes plataformas. Un claro ejemplo de ello es la gran incertidumbre de una gran parte de la población ante la actual pandemia del COVID 19, generándose movimientos antivacunas y teorías de conspiraciones varias, entre otras.

Por ello, la divulgación científica, como acceso a los descubrimientos y avances científicos, permite a las personas, acercarse al entendimiento y valoración de nuestro entorno, conociendo y comprendiendo conceptos, procesos y fenómenos que ocurren en un sistema, en un contexto y tiempo determinado. Esto se traduce en una sociedad que enfrenta la toma de decisiones de una manera responsable e informada.

No obstante, cabe destacar que, a nivel global, el desarrollo de la divulgación científica ha ido en aumento progresivo. Sin embargo, en Chile aún se requiere avanzar en el posicionamiento de la comunicación y divulgación científica en la comunidad, de una forma democrática e inclusiva. Y si bien existen organizaciones que acercan la ciencia a la comunidad, a través de diversas iniciativas, mayoritariamente son dirigidas a la comunidad educativa, excluyendo a otros segmentos de la sociedad. Además, aun cuando existe un reciente interés por parte de la comunidad científica en divulgar sus conocimientos, es fundamental contar con herramientas mínimas necesarias para que la transferencia de conocimiento a la comunidad sea a través de una comunicación efectiva.

Al respecto, a diferencia de otros países de la región de Latinoamérica y el Caribe, como México, Brasil, Perú y Argentina, donde diversas universidades ofrecen programas de postgrados, en Chile se requiere avanzar en la formación y profesionalización de la divulgación científica, en base a los pilares centrales de la ciencia, educación, comunicaciones, las artes y adaptaciones inclusivas, a lo largo de todo el territorio nacional.

En relación a la valoración de las ciencias por parte de la comunidad, la II Encuesta de percepción social sobre Ciencia y Tecnología, realizada por CONICYT a nivel nacional, se evidencia que aun cuando más del 80% de los encuestados valora y se interesa por la ciencia, no más del 27% accede a información científica y solo el 7% manifiesta estar de acuerdo con el aumento de inversión pública en ciencia.

Estos antecedentes reflejan la importancia de avanzar hacia una real y eficiente democratización de la ciencia, a través del acceso a la ciudadanía a contenidos, en forma participativa, inclusiva y descentralizada. Esto sumado a que, en Chile, faltan lugares, instalaciones y tecnología para la reunión de pequeños o grandes grupo de personas en torno a un tema o una convención⁶. Solo se cuenta con un par de espacios privados localizados en Santiago. En algunas regiones, al momento de buscar infraestructura para eventos masivos, se debe recurrir al arriendo de salones en hoteles, que cuenten con ello. Esta carencia resulta perjudicial, al perder posibilidades de albergar eventos científicos, entre otros, que pueden traer tantos beneficios para el país. Beneficios no sólo económicos sino también culturales, políticos y sociales. Por ello, es relevante y fundamental disponer de espacios en regiones, para la realización de actividades de comunicación científica y artístico culturales, accesibles a toda la comunidad.

Finalmente, cabe destacar que el derecho a la ciencia pertenece al grupo de los derechos culturales y reconocido en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos de 1948, el que dispone que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), ratificado por Chile en 1989, compromete a nuestro Estado a respetar el derecho de “participar en la vida cultural” y “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. En tal perspectiva, estamos ante un derecho consagrado en lo más alto del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante, es necesario reconocerlo en igualdad de condiciones entre el resto de los derechos humanos, para desplegar todas sus potencialidades, incluyendo contenidos adicionales, más allá del de “beneficiarse de sus aplicaciones”. En este sentido, la comunicación científica, dispone la participación real de la ciencia, a través del ejercicio de comunicar y transferir conocimientos, por parte de quienes hacen ciencia, y a su vez, el de acceder a información y contenidos científicos, por parte de la comunidad, promoviendo el pensamiento crítico en una sociedad participativa e informada.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX: El derecho a la comunicación científica.

El Estado reconoce la comunicación científica como un mecanismo fundamental para el desarrollo de la ciencia, cuyo vínculo con la sociedad, a través de la divulgación, debe asegurar la implementación de políticas públicas que promuevan la educación y valoración de la ciencia y tecnología, en la población con un alcance territorial, teniendo especial consideración a grupos vulnerables y criterios de segmentación etaria, diversidad social, plurinacional, de género y capacidades especiales.

Es deber del Estado garantizar las condiciones para el desarrollo de la comunicación científica, a través de la implementación de políticas públicas conducentes a salvaguardar la disponibilidad y articulación de capacidades para la elaboración de contenidos, la comunicación efectiva y la ejecución de iniciativas de divulgación y difusión científica con enfoque de identidad regional, asegurando la generación de espacios e infraestructura pública con adaptaciones inclusivas disponibles para la realización de actividades interactivas con contenidos científicos, artísticos y culturales que permitan a todas las personas y comunidades, informarse acerca de los avances científicos a lo largo del territorio nacional.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 832-7, la que fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N° 429-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a la vida y a la integridad física, síquica y mental de toda persona humana, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Loreto Vidal, Loreto Vallejos, Natalia Henríquez, Vanessa Hoppe, Francisco Caamaño, Carolina Videla, Paulina Valenzuela, Ricardo Neumann, Daniel Bravo, Ingrid Villena, Marcos Barraza, Margarita Vargas, María Castillo, Carlos Calvo, Bárbara Sepúlveda y Francisca Arauna.

El Dr. Rafael Yuste confirma que, si bien el conocimiento está desarrollándose en forma acelerada en muchas áreas de la ciencia, es probable que ninguno tenga un efecto tan grande, ético, jurídico y social como la neurociencia”.

Asombra escuchar que estamos en presencia de cambios tan profundos gracias al desarrollo de las neurotecnologías que posibilitaran que las personas nos podremos comunicar solo mediante el pensamiento.

Las neurotecnologías son un gran aporte para una mejor vida humana. Sin embargo, su mal uso puede propiciar también algunas amenazas contra derechos fundamentales como la dignidad, la integridad, la igualdad, la libertad, la intimidad, la privacidad a través de la manipulación de las personas, ingresando a sus centros de decisión en sus recuerdos o en sus propios pensamientos.

Con estos avances la idea de que la mente humana es el último dominio de la absoluta protección de intrusiones externas ha ido quedando atrás. Por eso estimamos que es la hora de regular a nivel constitucional la protección de la integridad mental que es diferente a la síquica.

Las normas jurídicas inapropiadas tanto a nivel constitucional o legal producen efectos negativos y sin límites. Por ello esta propuesta es limitada agregar solo protección mental en la nueva carta política.

¿Qué son los neuroderechos y por qué son vitales ante los avances en neurociencia? “La evolución de la neurociencia y, en paralelo, de la neurotecnología es imparable. Durante las próximas décadas veremos, aunque suene a ciencia ficción, dispositivos capaces de decodificar la información de nuestro cerebro, amplificar nuestros sentidos o modificar nuestros recuerdos. Ahí entran en juego los límites éticos y, en ese sentido, los neuroderechos se revelan imprescindibles para proteger nuestra integridad mental y privacidad”.

El Dr. Rafael Yuste considera urgente crear una nueva categoría de derechos fundamentales: el derecho a la privacidad mental que busca proteger los datos mentales en cuanto datos propios y personalísimos en contra de intrusiones de terceros no consentidas; derecho a la identidad personal y a preservarla, intenta protegerla de interferencias de terceros que puedan afectar las preferencias, comportamientos y capacidad de decisión- el "yo" no se disuelva en la Red- ; El derecho a integridad mental, el acceso equitativo a las tecnologías, con el fin de que no se generen desigualdades ni privilegios; Hay consenso entre juristas que, la protección del derecho a la identidad personal considera la protección de aspectos o datos personales como el nombre, nacionalidad, pertenencia a una etnia o comunidad religiosa, entre muchas otras cualidades de nuestra realidad personal que nos vinculen con nuestro entorno más próximo, y nos permitan reconocernos a nosotros mismos como individuos que forman parte de una comunidad humana determinada. Sin embargo, en el último tiempo la neurociencia y la neurotecnología han permitido identificar que también existen aspectos neurológicos que constituyen características personales que nos hacen ser quienes somos y, por lo tanto, también debieran pertenecer al ámbito de la inviolabilidad protegida por el derecho a la identidad personal.

La libertad o agencia es lo que determina nuestra capacidad de hacernos cargo de los actos que realizamos. El poder de estas neurotecnologías es abismante, por de pronto, producen adicciones de las que sus usuarios aun no tomamos conciencia, pueden hacernos cambiar gustos, afectar nuestras elecciones políticas, sociales e incluso nuestras pasiones.

Así como el derecho a la vida privada nos protege de la intervención del Estado o de terceros en nuestras actividades e información personal, de modo equivalente, el derecho a la intimidad mental reconocería que la actividad neurológica de nuestro organismo y, especialmente, la información que se

obtenga de ella no puede ser intervenida sin nuestra voluntad y los datos resultantes no pueden ser utilizados sin nuestro consentimiento.

¿Las amenazas a la integridad mental, la libertad y privacidad por el mal uso de las neurotecnologías requieren de la creación de una nueva categoría de derechos, los neuroderechos? ¿No es suficiente los derechos ya reconocidos en los tratados internacionales y en las Constituciones?

Estos nuevos derechos no han sido recogidos en los términos mencionados en el punto primero en esos términos en instrumentos internacionales de derechos humanos, y tampoco

Los neuroderechos antes mencionados han dado lugar a una interesante, creciente y valiosa discusión en diferentes disciplinas. En el derecho en relación por de pronto a su contenido normativo y en cuanto a la temporalidad de su regulación dado el desarrollo de las neurotecnologías.

También se discute su fundamento fáctico en cuanto que los actos mentales, entre esos nuestros pensamientos y recuerdos NO solo son causados por su soporte biológico.

Para algunas personas las cuestiones que plantean las nuevas tecnologías desde ya pueden ser resueltas según los instrumentos internacionales vigentes teniendo presente principios como la autotelia (el hombre como fin), el principio pro homine, el principio pro debilis y el principio de igualdad en el goce de los beneficios de la ciencia.

Chile consideró que corresponde reconocer a los neuroderechos como una categoría especial de derechos fundamentales. De allí el proyecto reforma al artículo 19 N°1 de la Constitución que, se aprobó por la Ley N° 21.383 de 25 de octubre del 2021 y los proyectos de ley de neuroderechos y plataformas digitales todos con el fin de proteger la integridad y la indemnidad mental y cerebral así como la información proveniente de ella a propósito del mal uso de los avances científicos- neurotecnologías –.

Dicho artículo dispone La Constitución asegura a todas las personas

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.

“El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.”

El proyecto a la reforma constitucional ingresó a tramitación al senado el Miércoles 7 de Octubre, 2020 (Boletín N °13.828-19) y es hoy parte del artículo 19 N°1.

Se justifica este reconocimiento en varios elementos. En la teoría de los derechos fundamentales la integridad física y síquica, tiene un amplio desarrollo por la jurisprudencia y la doctrina que no responde directamente a la nueva categoría que plantea el desarrollo de la neurociencia. De allí que, corresponde un tratamiento especial en los Tratados Internacionales, en las Constituciones y también a nivel legal la protección de la integridad mental ante el mal uso de las neurotecnologías. Dicho en otras palabras, la protección a la integridad mental, la libertad, la privacidad no están comprendidos dentro del enunciado de derechos y garantías existentes y en los antecedentes de su estipulación.

No parece procedente o aconsejable tratar de incorporar los ámbitos de protección requeridos por el surgimiento de fenómenos nuevos, dentro del enunciado de derechos ya existentes. Por ejemplo forzar incluir “la indemnidad mental “ en la ” indemnidad síquica” categoría ya existente, atendido que su contenido protegido responde a otras premisas”.

La integridad física ha sido tradicional y consistentemente entendida como la integridad somática, en el sentido de proscribir la sección, daño o privación de cualquier parte del cuerpo de una persona, siendo el mecanismo de protección usual el requisito de regulación legal para las intervenciones corporales.

La protección a la integridad síquica fue introducida dentro del catálogo de derechos en el caso de Chile recién en la Constitución de 1980 con el objetivo preciso o específico de proteger los procesos psicológicos (de percepción, de cognición, de reflexión) que llevan a una persona a configurar su identidad, desarrollar los procesos mentales asociados a ella, y mantenerla en el tiempo; los típicos ejemplos de daño a la integridad síquica mencionados en su momento fueron la estimulación subliminal y las técnicas de “lavado de cerebro”. Sin perjuicio de que todo proceso mental tiene un componente químico-eléctrico, el contenido de la integridad síquica no apuntaba a la dimensión o sustrato orgánico

de los procesos mentales de que tratan los neuroderechos, sino a la forma en que ellos se desarrollan y se integran en la conciencia. De este modo, por ejemplo, una persona expuesta a un acoso o acecho constante puede ver perturbada su integridad síquica aun cuando su o sus acechadores no provoquen (ni busquen provocar) ninguna modificación en la química de sus procesos cerebrales o neurológicos en general.

Los derechos humanos para su efectividad requieren de normativas claras, de un lenguaje preciso, de una cultura que los promueva, de una institucionalidad que los garantice y considere sanciones eficaces ante su amenaza y vulneración.

De allí que se ve con esperanza que los últimos años en diferentes países de la región se han desarrollado procesos políticos que han llevado a la aprobación de nuevas constituciones en las que se reconocen nuevos derechos, como es el caso de Chile.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X. La Constitución garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, síquica y mental de toda persona humana.

El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 429-7, la que fue aprobada por 10 votos a favor, 3 votos en contra, y 2 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N° 262-7 (4)

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a la libertad de opinión, creación artística, información y comunicación, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y

señores Natalia Henríquez, Lidia González, Janis Meneses, María Quinteros, Isabella Mamani, Giovanna Grandón, Valentina Miranda, Elsa Labraña, Francisca Linconao y Bastían Labbé.

De conformidad al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, a mayor abundamiento, los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo anterior de conformidad al desarrollo de la naturaleza, contenido y alcance de este derecho humano hecho por el Comité de Derechos Humanos en su Observación General N°34 del año 2011, quienes señalan que, el derecho humano a la libertad de opinión “se erige como piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas”.

Parte de los compromisos asumidos por el Estado de Chile comprenden la obligación de asegurar que la legislación interna haga efectiva la libertad de opinión, impidiendo su obstaculización por parte de particulares o entidades privadas, estableciendo los recursos disponibles cuando éste sea vulnerado. Considerada la libertad de opinión como un derecho absoluto, por tanto, los Estados no pueden establecer excepciones ni restricciones a este derecho y, en consecuencia, “quedan protegidas todas las formas de opinión, como las de índole política, científica, histórica, moral o religiosa”. Comprendida dicha libertad tanto en su faz positiva como negativa, es decir, la libertad de expresar opinión comprende necesariamente la libertad de no expresarlas.

De acuerdo a los alcances sobre el contenido del derecho se le considera como una condición indispensable para el pleno desarrollo de la persona, a nivel individual pero también a nivel colectivo, dado que permite a las personas expresarse de una forma particular y la participación en la configuración de la sociedad.

En cuanto al efectivo ejercicio de la libertad de opinión, aquella conlleva además la protección de la confidencialidad de las fuentes de dicha información. El Comité de Derechos Humanos ha sido enfático respecto de a quiénes consideramos como sujeto activo de dicha protección aseverando que no se limita a periodistas, sino comprende también a “miembros de organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo investigaciones y publican conclusiones, e investigadores -académicos, autores independientes, escritores autónomos y otros agentes- que participan en la recopilación y el intercambio público de información”.

Comprendemos relevante mantener la consagración constitucional de la libertad de informar, lo anterior en concordancia con lo establecido en la Ley

Nº19.733 sobre libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, la que reconoce la libertad de emitir opinión y la de informar precisamente, sin censura previa, cuyo ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir información, y difundirla por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan, de conformidad a la ley.

La libertad de informar no sólo puede ser entendida como un derecho derivado de la libertad de expresión en su sentido individual, sino que, su ejercicio implica para la determinación de lo que es el interés del público y el interés privado. El funcionamiento de los medios de comunicación no puede quedar sujeto meramente a las dinámicas del mercado y a la oferta y demanda de productos informativos. La concentración de la propiedad de ellos atenta contra la generación del debate público, que corresponde a un bien colectivo participativo.

En atención a lo anterior, el rol protagónico de los medios de comunicación en la esfera pública, y en atención a los intereses sociales involucrados en la difusión de información, se justifica la imposición de determinados deberes y límites, de lo contrario, su posición dejaría de ser considerada como una libertad y pasaría a transformarse en un privilegio.

En consecuencia, con base en los antecedentes expuestos proponemos la norma constitucional con los siguientes contenidos:

- Se consagra el derecho a la libertad de opinión, que implicaría la de emitir opiniones de toda índole, creación, difusión, información y comunicación sin ninguna censura previa, a través además de cualquier medio, tecnología o soporte.

- Se propone que dicho derecho no puede ser restringido tampoco por medios indirectos, tales como el control ilegítimo, monopolización de medios o tecnologías de comunicación, su transmisión u otros que señale la ley.

- Se consagra la libertad de creación artística como un derecho relacionado, el que implica la libertad de creación y producción, así como propiedad sobre dicha creación al menos en la vida de su titular. Los pueblos indígenas gozarán además de derecho a preservar y controlar sus creaciones, las que solo podrán ser compartidas con expreso consentimiento de sus creadores, prohibiendo la apropiación cultural y científica de sus tradiciones y creaciones sin consentimiento libre e informado.

- Se establece el derecho a la información como derecho relacionado, que refiere al derecho de publicar ideas, información u opiniones por

cualquier medio o soporte de prensa o comunicación, así como a buscar la información, acceder a la información pública, investigación de hechos de relevancia pública, entre otros. Dicho derecho no puede ser sujeto a censura previa, y se establece el deber del Estado de protegerlo, y promover la difusión y producción de información en las distintas lenguas.

- Por último, se consagra una norma sobre medios de comunicación que establece la posibilidad del Estado de fundar medios de comunicación, mantenerlos y operarlos en las condiciones que establezca una ley y buscando el pluralismo de medios y todo tipo de oligopolios o monopolios en su propiedad. Se propone que la ley regule el acceso equitativo a los medios de comunicación, así como deberes de transparencia especiales para tales medios. La norma establece la responsabilidad social de los medios en sus publicaciones, así como la obligación de difundir información veraz. Se plantea la creación de un Consejo de Medios que permita viabilizar dicha propuesta con una institucionalidad robusta y autónoma.

Por otro lado, se establece la cláusula de conciencia y el secreto periodístico, a regularse por ley. Se propone además una norma para promover y difundir medios de comunicación indígenas, así como el acceso equitativo de los pueblos a la información y al espectro radioeléctrico para su difusión, a través de sus instituciones y formas propias.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX. Derecho a la libertad de opinión. Este derecho comprende la libertad de emitir opiniones e ideas de toda índole, la libertad de creación y difusión de las artes y las de informar y comunicar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, tecnología o soporte, sin consideración de fronteras, con pleno respeto a los derechos consagrados reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas que establezca a la ley.

Esta libertad no puede ser restringida por vías o medios indirectos, encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, tales como el control ilegítimo, la monopolización de los medios o de tecnologías de comunicación, transmisión, y aquellos que señale la ley.

Artículo XX. Derecho a la libertad de creación artística. Toda persona tiene derecho a la libertad de creación y producción artística y a la

propiedad sobre su creación por un tiempo no inferior a la vida del titular, conforme a la ley.

Los pueblos y naciones indígenas tienen derechos a preservar y controlar las creaciones artísticas de carácter colectivo propias, las que solo pueden ser compartidas por la expresa voluntad de la comunidad o de los pueblos que así lo decidan de acuerdo a sus costumbres e instituciones propias. Toda expresión artística o arte colectivo, en sus más diversas manifestaciones, no puede ser objeto de apropiación individual o con fines académicos o de entretenimiento o de naturaleza comercial sin el consentimiento previo, libre e informado del pueblo o nación indígena al que pertenece, sin perjuicio de lo anterior el consentimiento se debe entender siempre como provisional y revocable.

Artículo XX. Derecho a la libertad de información. Todas las personas tienen derecho a publicar ideas, información u opiniones, en cualquier medio, tecnología o soporte de prensa o comunicación. La libertad de información y de comunicación comprende el derecho a buscar informaciones, acceder a la información pública, investigar, recibir y difundir ideas e informaciones de relevancia pública y veraces, en forma oportuna y plural.

El ejercicio de dicho derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes.

Es deber del Estado dar acceso a la información y promover su producción y difusión en sus propias lenguas.

Artículo XX. Medios de comunicación. El Estado, las instituciones públicas y privadas, así como toda persona natural o jurídica, tiene el derecho a fundar, operar, mantener o participar en el desarrollo de medios de comunicación social, en las condiciones que señale la ley, garantizando el pluralismo de medios de comunicación social en sus diversas especies y prohibiendo todo monopolio u oligopolio estatal o privado sobre los medios de comunicación tanto en la propiedad, como en el financiamiento y control de los medios de comunicación social, como cualquier otra forma de impedir o restringir este derecho.

La ley regulará y facilitará el acceso equitativo y la distribución de las tecnologías comunicacionales que hagan uso del espacio radioeléctrico u otro espacio que por sus características dificulte el libre ejercicio de este derecho.

Toda la información relativa a la administración, dirección y propiedad total o parcial de cualquier medio de comunicación e información será de carácter público y deberá estar a disposición de cualquier persona.

La ley determinará y regulará las obligaciones de transparencia, así como las medidas de prevención, control y sanciones, para evitar la concentración en la propiedad de los medios de comunicación social.

Los medios de comunicación social tienen responsabilidad social y la obligación de difundir información veraz. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Existirá un Consejo Nacional de Medios de comunicación social, autónomo y con personalidad jurídica de derecho público, representativo de los diversos tipos de medios, conforme a la ley, encargado de velar por el correcto funcionamiento de todos los medios de comunicación social, públicos o privados, de cobertura nacional, regional, local o territorial, independientemente de su soporte. Una ley señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.

La Constitución asegura y garantiza la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, la que se desarrollará por el legislador.

El Estado de Chile en conjunto con los pueblos y naciones originarias adoptará medidas eficaces para garantizar el establecimiento de los medios de comunicación e información indígena, inclusive reconociendo cuotas sobre el espectro radioeléctrico, y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el acceso a internet y otras formas de tecnología que hagan posible la concretización de este derecho.

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas. Tienen también derecho a que se les comunique la información relevante relativa a la vida pública y la actividad del Estado en su propia lengua, de manera veraz y oportuna. El Estado en conjunto con los pueblos y naciones originarias a través de sus instituciones propias velará y promoverá la presencia de diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados. El Estado en conjunto con los pueblos y naciones originarias a través de sus instituciones propias velará y

promoverá la presencia de diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 262-7, la que fue aprobada por 11 votos a favor, 1 en contra, y 3 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°195-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión que reconoce y protege los derechos del autor sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales , cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Malucha Pinto, Ignacio Achurra, Giovanna Roa, Paulina Valenzuela, Miguel Ángel Botto, Ramona Reyes y Cristina Dorador.

Esta iniciativa ingresó a la Secretaría de la Convención el día 14 de enero de 2022, y la Mesa Directiva resolvió que pasara a la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio.

De lo anterior se dio cuenta en la sesión del Pleno de la Convención N° 49°, del 18 de enero de 2022.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Ya sea por el cambio climático, la globalización, el feminismo, la deconstrucción del neoliberalismo, la crisis pandémica, entre otros, se nos presenta un momento para pensar nuevas prácticas concretas para desmontar las hegemonías, las universalidades, las verdades dadas, y, al mismo tiempo, dar pie a una rica dinámica de alternativas horizontales y de creación individual y colectiva del país que somos y seremos. Se trata, ante todo, de proponer nuevas culturas emancipadoras.

Así, buscamos adentrarnos en un cambio en las formas en que nos hemos relacionado, por lo que el Estado cultural que proponemos en la

Convención Constitucional abre la posibilidad de construir una nueva relación para el país que anhelamos, creativo y profundo, de múltiples manos en su edificación.

Esto se ampara en que las culturas, las artes y los patrimonios nos han permitido poner afuera y convertir en lenguaje, en contenidos, nuestra conciencia que emerge del vínculo que establecemos con la naturaleza, con nuestro territorio, con comunidades, con las otras personas, con nuestro pasado. Y ese espacio vivo es en el cual, desde todo lo que somos, nos desciframos, nos descubrimos en quienes somos, nos conectamos con nuestra memoria y nos sentimos parte.

Consagrar un país, un Estado, una sociedad, que reconozca este ejercicio, lo comprenda y garantice a nivel colectivo e individual, nos permitirá el buen vivir, la felicidad y el bien común. Es importante recalcar que las culturas no nacen de las personas como individuales sino en la relación de unos y otros. Las culturas son necesariamente un proceso colectivo.

Ahora, Chile posee una larga tradición de protección constitucional sobre el derecho de autor, que comienza en la Constitución de 1833, a través de una norma incluida en el artículo 143 de ese texto, donde se señala que “Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o producción, por el tiempo que le concediere la ley; y si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente”. Esta reflejaba la concepción imperante en la época sobre su naturaleza jurídica, cuyas raíces se ubican más en el *droit d’auteur* de la Ilustración francesa que en el utilitarismo que se expresa en el sistema del copyright anglosajón del Estatuto de la Reina Ana.

Con la Constitución del 1925, la norma sobre derecho de autor se mantuvo inalterada en su esencia, mencionando en el numeral duodécimo del artículo 10 que “La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la lei. Si ésta exigiere su espropiacion, se dará al autor o inventor la indemnización competente”. A la par de lo anterior, se empezó a formar un verdadero Estado Social de Derecho, que se fue perfeccionando hasta 1973, período en el cual nuestro país suscribe la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Protocolo de San Salvador (1988), en todos los que la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas a las y los autores forma parte del catálogo indiscutido de los derechos humanos.

En cualquier caso, la reforma a la Constitución de 1925 que tuvo una mayor repercusión en la protección del derecho de autor es la de 1967, que incorpora expresamente la noción de función social de la propiedad, al indicar que la ley “establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos”, situado en su artículo 10 N°10.

Luego del plebiscito de 1988, se realizó un referéndum en 1989, con el cual se aprobó una serie de reformas constitucionales en la vuelta a la democracia, entre cuyos principales puntos estuvo el vigorizar los derechos fundamentales, declarando que éstos habrán de ser interpretados con arreglo a los principios universales de los derechos humanos (actual artículo 5, inciso 2°), elevando, a lo menos, a los tratados internacionales sobre derechos humanos a rango constitucional, preeminencia que también adquieren los acuerdos internacionales sobre derecho de autor antes referenciados.

De todas formas, el derecho de autor como derecho constitucional se encontraba contemplado en la versión originaria de la Constitución de 1980, estableciéndose que el “El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley”, aplicándole a ella las disposiciones del derecho de propiedad privada relativas a reserva legal para el modo de adquirir, de uso, goce y disposición, y las limitaciones como obligaciones que derivan de su función social; la protección ante expropiación; la necesidad de indemnizar en caso que ocurra expropiación; y la toma de posesión material del bien expropiado.

No obstante, la mayor protección constitucional del derecho de autor se alcanza con la reforma constitucional de 2001, que elimina la censura y consagra la libertad de creación artística. En general, la libertad de expresión goza de una relevante proyección normativa, “pero se trata de una historia plagada de retrocesos en medio de esos (aparentes) progresos normativos, donde las expresiones artísticas se han visto particularmente afectadas”.

Basta con recordar que esto se originó por estar el Estado de Chile obligado a hacerlo, en cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Olmedo Bustos y otros c. Estado de Chile”, motivado por un conjunto de actos de censura de la película “La última tentación de Cristo” de Martin Scorsese, desarrollo que deriva del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

A partir de la libertad de crear y difundir las artes, esta dimensión de los derechos culturales se hace justiciable a través del recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución actualmente vigente, promoviendo el inicio al desarrollo de un cierto estándar mínimo, a partir del tratamiento jurisprudencial, permitiendo configurar un contenido normativo más amplio de los derechos culturales.

Lo anterior tiene un correlato con el aporte del Derecho Internacional en cuanto a los tratados y pactos suscritos por nuestro país. Hasta 1950, Chile formó parte del sistema interamericano de protección del derecho de autor, cuyo inicio se ubica en el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, en el que se firma el Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística de Montevideo (1889), proceso que concluye, en 1946 con la adopción de la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se gesta el objetivo de integrar los dos sistemas imperantes -a saber, el europeo y el panamericano- y para ello se firma la Convención Universal sobre derecho de autor en Ginebra, cuyo propósito fue servir de puente para favorecer la progresiva entrada de los países de América al Convenio de Berna, a cuya unión Chile ingresa en 1970.

Actualmente la protección internacional del derecho de autor reposa en tres cuerpos normativos: primero, el Convenio de Berna (1886), revisado sucesivamente hasta el Acta de París de 1971; segundo, el Acuerdo sobre los ADPIC (1994), que es el resultado de los trabajos emprendidos en el GATT; y tercero, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (1996), que cimenta las bases para la regulación del uso de las obras a través de redes digitales.

En cuanto a los derechos de los artistas sobre esta materia, a nivel internacional se contemplan cuatro instrumentos: la Convención de Roma (1961), el Acuerdo sobre los ADPIC (1994), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012).

En resumen, en este tiempo lo que ha sido considerado positivo ha pasado a ser insuficiente, a la luz de los cambios de las sociedades contemporáneas. Estamos viviendo tiempos de grandes transformaciones sociales, económicas, humanas y culturales. La creencia de que elevar los estándares de protección de la propiedad intelectual es la medida necesaria para fomentar y garantizar un adecuado desarrollo de las ciencias, las artes, la cultura y las tecnologías ha demostrado no ser del todo cierta.

La creciente protección constitucional de los bienes culturales es una piedra angular viva de la comprensión del Estado cultural, que se expande gracias a la protección preferentemente de los órganos estatales, así como en el rol colaborador y participativo de la sociedad, las comunidades y las organizaciones, dentro de lo cual los derechos de autor juegan un rol principal como parte de los derechos culturales.

Por cierto que desde el texto constitucional debe ponerse en el centro que la autoría y la creación resultan fundamentales en la cultura, para transmitir valores, ideas y conocimientos, los cuales contribuyen -entre otros aspectos- a forjar la identidad cultural de una colectividad. La propiedad intelectual debe estar al servicio de los creadores y del patrimonio de la Nación, siendo, por ende, un patrimonio inalienable de los autores como también de la sociedad a la que pertenecen, constituyendo estos dos criterios la base de la propuesta de norma constituyente.

Como dice Häberle, “La Constitución no sólo es un texto jurídico o un conjunto de reglas normativas, sino que también es expresión de un determinado nivel de desarrollo cultural, es expresión de la auto representación cultural de un pueblo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas”.

Unos de los principales agentes en la generación, transmisión y preservación de la cultura, en todas sus dimensiones, son la comunidad artística, compuesta por autores, intérpretes y ejecutantes, que desde siempre han contribuido a la producción e intercambio de sus ideas, creaciones y producciones.

El derecho de autor ha sido y sigue siendo la forma que la sociedad encontró para retribuir el trabajo artístico sin la subordinación del creador a ningún tipo de poder que limite su libertad de creación y producción artística, como podrían haber sido los mecenazgos medievales.

El derecho de autor no sólo es el sustento del creador, sino la base esencial que le garantiza el ejercicio de su libertad de expresión en una sociedad democrática. En suma, el derecho de autor no es el estímulo para el trabajo artístico sino la consecuencia directa del ejercicio de la autonomía creativa del autor-individuo.

Por ello, a partir de lo que se desprende de las experiencias comparadas, el derecho de autor posee una cuádruple dimensión. Primero, que es un derecho humano, por lo que su reconocimiento como derecho subjetivo de autor se estructura desde esa visión. Segundo, que la persona como comunidad puede ejercer la titularidad del derecho. En este sentido la centralidad de la

persona en el reconocimiento del derecho es de suyo esencial y hace que el sistema legal deba estructurar su contenido a partir de las actividades del creador o artista, sea esta en forma individual o colectiva.

Tercero, que la libertad de creación artística es fundamental para valorar la libertad personal de cada individuo y comunidad para la creación. Finalmente, que hay intereses morales y materiales que proteger. El contenido normativo comprende una doble dimensión de la protección ya no sólo centrada en la explotación económica de la creación o producción artística sino principalmente en el vínculo personal que surge en todo proceso creativo entre autor y su obra y artista sobre su interpretación individual y única.

Desde esta perspectiva, la configuración constitucional del derecho de autor que se plantea es plenamente coincidente con el mandato asumido en estos acuerdos, ya que la protección garantizada al autor en éstos refiere no se limita al aspecto patrimoniales como fue originalmente, sino que también alcanza a la esencial función social, cuestión que deriva en un derecho principalmente cultural, además de la protección a los intereses morales del creador sobre su obra y del artista sobre su interpretación.

Lo anterior tiene un marco regional rico en experiencias, donde la constitucionalización del derecho de autor en Latinoamérica ha sido muy amplia. Esta tendencia de incluirlo como garantía constitucional se inaugura en el período de las revoluciones independentistas con la Constitución Política del Estado Libre e Independiente de Cundinamarca, en 1811.

En la actualidad, la totalidad de las constituciones de los 20 países de América Latina contienen dispositivos normativos que aluden al derecho de autor y otras tantas lo tienen en el resto del mundo, incluso varias de ellas lo hacen precisamente reconociéndolo como tal: Derecho de Autor (Alemania, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Uruguay), en otras es señalado como propiedad intelectual (Colombia, España, Nicaragua, Unión Europea), o propiedad exclusiva (Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana), o propiedad literaria y artística (Haití y Perú). No faltan casos en los cuales se utilicen más de una de estas expresiones en forma conjunta (El Salvador, Paraguay, Venezuela).

Ideas Matrices

Lo principal de la presente iniciativa es incorporar el derecho de autor en el catálogo de los derechos culturales de la nueva Constitución, teniendo un

balance en la protección de los intereses morales y materiales de los creadores con el acceso a los conocimientos, buscando el beneficio tanto de artistas como de la comunidad en general.

Por ello, en primer lugar, buscamos establecer el derecho a la protección de estos intereses, abarcando tanto creaciones como producciones de cualquier especie, sobre autores como intérpretes. Esto deriva su desarrollo a la ley, donde se deberá definir el modo de adquirir los derechos indicados, su contenido, heredabilidad, gestión colectiva y los mecanismos de tutela efectiva y oportuna.

En segundo lugar, establecemos que esa protección comprende el aprovechamiento o uso de las obra o interpretación, así como los derechos de paternidad, divulgación e integridad, de manera de abarcar los puntos fundamentales en favor de la comunidad artística, debiendo, nuevamente, la ley señalar tanto el tiempo -que no podrá ser inferior a la vida del titular- como la definición de lo que entendemos por cada uno de estos derechos.

Finalmente, comprendemos la regulación de la función social de los derechos de autor como una extensión de estos, no como un límite u obligación que constriñe a la propiedad intelectual, sino como apertura a relacionarse con el bien común, la justicia social o el servicio público. Cómo tiene dimensiones y características diferentes de la propiedad privada, esta área de los derechos subjetivos implica tomar en cuenta la participación en la vida cultural, la protección de los patrimonios culturales, el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del progreso científico, todo lo cual queda como reserva legal material para el legislador.

Esto se complementa mencionando que la regulación anterior debe contribuir al fomento de la creación cultural, para que haya una retroalimentación en los beneficios que surjan de las y los artistas para la comunidad, y viceversa.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo 1.- La Constitución asegura y garantiza a todas las personas o comunidades:

El derecho a la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales, de cualquier especie, del que sea autor o intérprete, en conformidad a la ley.

Esta protección comprende el aprovechamiento o uso de la obra o interpretación, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular, así como los derechos de paternidad, divulgación e integridad de éstas, lo que será determinado por la ley.

La ley deberá regular su función social, la que contemplará, entre otros, la participación en la vida cultural y la protección de los patrimonios culturales, así como el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del progreso científico y de los beneficios que de él resulte. Dicha regulación deberá contribuir al fomento de la creación cultural y artística, en beneficio tanto de los creadores y artistas como de la comunidad en general.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 195-7, la que fue aprobada por unanimidad de la comisión.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°339-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la protección de los derechos de autores e intérpretes, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Miguel Ángel Botto, Fuad Chaín, Marcos Barraza, Ricardo Neumann, Angélica Tepper, Carolina Videla, Patricia Politzer, Felipe Harboe, Bárbara Sepúlveda, Malucha Pinto, Patricio Fernández, Giovanna Grandón, Elisa Loncón. Adhieren Benito Baranda, Nicolás Núñez, Bessy Gallardo, Valentina Miranda y Hernán Velásquez.

Unos de los principales agentes en la generación, transmisión y preservación de la cultura, en todas sus dimensiones, son los Autores e Intérpretes, que desde siempre han contribuido a la producción e intercambio de sus ideas, creaciones y producciones artísticas. Decir Autor o Artista no sólo es hablar de cultura, identidad o memoria, sino de presente y futuro, ya que las creaciones intelectuales son una clara fuente para la construcción de nuevos significados individuales o colectivos.

El derecho de autor ha sido y sigue siendo la forma que la sociedad encontró para retribuir el trabajo artístico sin la subordinación del creador a ningún

tipo de poder que limite su libertad de creación y producción artística. Pero el derecho de autor no sólo es el sustento del creador sino la base esencial que le garantiza el ejercicio de su libertad de expresión en una sociedad democrática de derechos. En suma, el derecho de autor no es el estímulo para el trabajo artístico sino la consecuencia directa del ejercicio de la autonomía creativa del autor-individuo.

Chile posee una larga tradición de protección constitucional del derecho de autor, que comienza en la Carta de 1833, a través de una norma incluida en el Capítulo “De las garantías de la seguridad i propiedad”, la cual reflejaba en plenitud la concepción imperante en la época sobre su naturaleza jurídica, cuyos antecedentes se ubican más en la Ilustración que en el utilitarismo que expresa en el sistema del Copyright.

Artículo 143 de la Constitución de 1833: “Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o producción, por el tiempo que le concediere la Ley; si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente”.

Con la Constitución del 1925, el texto germinal se mantiene inalterado en su esencia, al consagrar un verdadero Estado Social de Derecho que se fue perfeccionando hasta 1973, período en el cual el conjunto de las naciones suscribe la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Protocolo de San Salvador (1988), en todos los que el derecho de autor forma parte del catálogo indiscutido de los derechos humanos.

La reforma a la Constitución de 1925 que tuvo una mayor repercusión en la protección del derecho de autor es la de 1967 que incorpora expresamente la noción de función social de la propiedad*, al indicar que la ley «establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos» (art. 10, N°10), la que, en todo caso, siempre ha formado parte del encuadre constitucional del derecho de autor así como de su configuración legislativa.

El paso muy relevante de ese período es el abandono del término propiedad intelectual para ser sustituido por el concepto de derecho de autor a través de la Ley 9.549, de 21 de enero de 1950, que fija un nuevo plazo de duración del derecho, acto que es secundado en julio de 1955 por los Decretos Supremos N°74 y N°75, que ordenan cumplir y llevar a efecto como leyes de la

república la “Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor” y la “Convención Universal sobre Derecho de Autor”.

Artículo 1º, Ley 9.549 de 1950: El derecho de autor a que se refiere el decreto ley N° 345, de 17 de marzo de 1925, dura la vida del autor y cincuenta años más contados desde la fecha del fallecimiento de éste.

Este proceso evolutivo, se concreta definitivamente, en el plano legal, con la Ley 17.336, de 1970, que consagrará en su Título I, bajo el rótulo de “Derecho de Autor” la protección de los creadores de obras de la inteligencia humana en los dominios literarios artísticos y científicos y como parte de su Título II, la protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes.

Este itinerario no cambia con la crisis política de 1973 y su ruptura institucional. Corolario de esto es que, en el Acta Constitucional N°34, que derogó el artículo 10 de la Constitución de 1925, el Derecho de Autor permanecerá dentro del catálogo de garantías fundamentales bajo su más pertinente denominación, asegurándosele a toda persona: “17. El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y adísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. Este derecho comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley”. Este numeral 17 es el mismo que se lee en el actual artículo 19 N° 25 de la Constitución, salvo un añadido inicial que analizamos más adelante.

Para facilitar el regreso de la democracia, luego del plebiscito del Sí y el No (1988), también por consulta ciudadana del 30 de julio de 1989, es aprobada una reforma constitucional, entre cuyos principales logros estuvo el vigorizar los derechos fundamentales declarando que éstos habrán de ser interpretadas con arreglo a los principios universales de hermenéutica de los derechos humanos (art. 5, Inc. 2º), elevando a lo menos los tratados internacionales sobre derechos humanos a rango constitucional, preeminencia que también adquieren los acuerdos internacionales sobre derecho de autor, que revisaremos luego.

Pero la cúspide de la protección constitucional del derecho de autor se alcanza con la reforma aprobada por la Ley 19.742 de 2001 que elimina la censura y consagra el derecho a la libre creación artística. Para los Autores y Artistas de Chile esta ha sido, sin duda la reforma constitucional más relevante desde el regreso a la democracia.

En general, la libertad de expresión goza de una relevante protección normativa, «pero se trata de una historia plagada de retrocesos en medio de esos

(aparentes) progresos normativos, donde las expresiones artísticas se han visto particularmente afectadas» (Lovera:2010: 157).

Basta con recordar que el derecho fundamental a la libre creación y circulación de las artes fue incorporado al numeral 25º del artículo 19 por la Ley N° 19.742 (2001) no por un acto de generosidad garantista, sino por estar el Estado obligado hacerlo en cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Olmedo Bustos y otros c. Estado de Chile”, motivado por un conjunto de actos de censura de la película “La última tentación de Cristo” de Martin Scorsese⁶, y su desarrollo deriva precisamente del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de la amplia lista de Constituciones nacionales que consagran la libertad de creación y de difusión de las artes.

A partir de “la libertad de crear y difundir las artes”, que la Constitución garantiza, esta dimensión de los derechos culturales se hace justiciable a través del recurso de protección, promoviendo el inicio al desarrollo de un cierto estándar mínimo, a partir del tratamiento jurisprudencial, permitiendo configurar un contenido normativo más amplio de los derechos culturales, lo que es bueno, pero insuficiente.

Digno de citar es el fallo de la CA de Santiago en el caso “Prat y otros con Infante y otros”, rol 5681-2002 y 5733-2002 (acumulados) de 16 de abril de 2003, en cuyo texto se señala que los autores y demás personas que estuvieron comprometidas en esa producción, al haberla escrito y difundido, hicieron uso de su libertad de expresión que no puede ser censurada por ningún órgano, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales o extracontractuales a que pueda dar lugar. La Corte entendió que impedir exhibiciones ulteriores de esta obra, acogiendo el recurso presentado, fundado en que la pieza teatral denominada “Prat” contendría referencias contrarias a la honra y dignidad de Arturo Prat, su familia y de los chilenos en general, se incurriría en una forma de censura previa, lo que le es vedado por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Pero la forma en que Chile asegura el acceso a la cultura como derecho humano es deficitaria, no sólo por su poca densidad normativa en la carta fundamental sino porque ella no garantiza el derecho a la cultura de ninguna forma, salvo en cuanto a la dimensión libertaria en el proceso de creación y difusión de las artes que se otorga a toda persona en cuanto autor o artista.

Compromisos Internacionales

Hasta 1950, el país formó parte del sistema interamericano de protección del derecho de autor, de fuerte raigambre formalista, cuyo inicio se ubica en el primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, en el que se firma el Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística de Montevideo (1889), para concluir, en 1946, en Washington, con la adopción de la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se gesta el objetivo de integrar los dos sistemas imperantes (europeo y panamericano) y para ello se firma en Ginebra, la Convención Universal sobre derecho de autor, cuyo propósito fue servir de puente para favorecer la progresiva entrada de los países de América al Convenio de Berna, a cuya Unión Chile ingresa en 1970.

Actualmente la protección internacional del derecho de autor reposa en tres cuerpos normativos, que obedecen a tres momentos jurídicos especiales en la constante búsqueda de soluciones ante el impacto de nuevas tecnologías sobre las formas de generación, producción y distribución de las creaciones intelectuales. Primero el Convenio de Berna (1886)⁸, revisado sucesivamente hasta el Acta de París de 1971. Segundo el Acuerdo sobre los ADPIC (1994) ⁹, que es el resultado de los trabajos emprendidos en el GATT. Por último, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (1996)^{10d} que cimenta las bases para la regulación del uso de las obras a través de redes digitales.

En cuanto a los derechos de los artistas éstos son cuatro, a saber, la Convención de Roma (1961), el Acuerdo sobre los ADPIC (1994), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012) .

Como ya vimos, la evolución descrita corre paralela con la progresiva consagración del derecho de autor en el sistema mundial de derechos humanos que se instala a partir de las Declaraciones Americana (1948 - art. XIII) y Universal (1948 - art. 27) que encuadran, en similares términos, el "derecho [de toda persona] a la protección" Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, suscrito en París el 24 de julio de 1971, promulgado por el DS N°266, de 1975.

Contenido Mínimo Protegido Universalmente

El derecho de autor definido tanto en el PIDESC (art 15) como en el Protocolo de San Salvador (art.14), posee una cuádruple dimensión.

Un Derecho humano: El reconocimiento del derecho subjetivo de autor se estructura como un derecho humano.

La Persona como titularidad del derecho: A partir del encabezamiento de ambas normas los tratados reconocen el derecho a todas las personas por el sólo hecho de ser seres humanos, sin distinción alguna. En este sentido la centralidad de la persona en el reconocimiento del derecho es de suyo esencial y hace que el sistema legal deba estructural su contenido a partir de las actividades del creador o artista, sea esta en forma individual o colectiva.

Libertad de Crear y Difundir. Esto implica valorar la libertad personal de cada individuo de creación y en cuanto forma y compromiso para la producción, promoción y preservación de los bienes culturales como contribución fundamental a la vida cultural del país, de las personas que sean creadoras o artistas.

Intereses morales y materiales: El contenido normativo comprende una doble dimensión de la protección ya no sólo centrada en la explotación económica de la creación o producción artística sino principalmente en el vínculo personal que surge en todo proceso creativo entre el autor y su obra y el artista sobre su interpretación individual y única.

Desde esta perspectiva, la configuración constitucional del derecho de autor que se plantea es plenamente coincidente con el mandato asumido en estos acuerdos ya que la protección garantizada al autor en éstos refiere no se limita al aspecto patrimoniales como fue originalmente, sino que también alcanza a la esencial libertad para crear y difundir las artes, cuestión que deriva en un derecho principalmente cultural, además de la protección a los intereses morales del creador sobre su obra y del artista sobre su interpretación, derechos de naturaleza personal.

Constitucionalismo del Derecho de Autor en otros países

La constitucionalización del derecho de autor en Latinoamérica ha sido muy amplia, incluso mayor que en el resto del mundo, aún que el sistema jurídico imperante exhibe un dispar tratamiento en los distintos códigos políticos. Esta tendencia de incluirlo como garantía constitucional se inaugura en el período de las revoluciones independentistas con la Constitución Política del Estado Libre e Independiente de Cundinamarca, en 1811.

Artículo 18. Constitución de Cundinamarca — 1811. Igualmente garantiza a todo ciudadano la libertad perfecta en su agricultura, industria y

comercio, sin más restricción que la de los privilegios temporales en los nuevos inventos a favor de los inventores, o de los que lo sean respecto de esta provincia, introduciendo en ella establecimientos de importancia, y de las obras de ingenio a favor de sus autores.

Desde ese instante declaraciones como ésta se comienzan a reproducir en varios proyectos y ensayos constitucionales, ya sea con motivo de la distribución de competencias en materia legislativa, especialmente en aquellas Cartas que prevén regímenes federales u otras organizaciones territoriales de carácter descentralizada, o bien, para reconocerle el carácter de garantía constitucional, concebida primero como privilegio, luego como una propiedad especial o propiedad literaria y artística, para asentarse finalmente como un derecho de autor y de artista independiente, sin perjuicio de la necesaria complementariedad con los demás derechos de su misma categoría.

Reconocimiento como Derecho Fundamental.

En la actualidad, la totalidad de las constituciones de los 20 países de América Latina contienen dispositivos normativos que aluden al derecho de autor y otras tantas lo tienen en el resto del mundo, incluso varias de ellas lo hacen precisamente reconociéndolo como tal: Derecho de Autor (Alemania, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Uruguay), en otras es señalado como “propiedad intelectual” (Colombia, España, Nicaragua, Unión Europea) “propiedad exclusiva” (Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana) o “propiedad literaria y artística” (Haití y Perú). No faltan casos en los cuales se utilicen más de una de estas expresiones (El Salvador, Paraguay, Venezuela).

La excepción se da en la Constitución de México que utiliza en el desarrollo del derecho, la expresión “propiedad intelectual”¹⁶ para referirse al conjunto de derechos concedidos a los autores, que luego en la norma sobre competencia legislativa denomina “derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma”. La expresión privilegio, casi en desuso, se emplea también por otras, en algunos casos como sinónimo de propiedad intelectual (Colombia y Honduras), pero también con un alcance más restringido para referirse a la propiedad industrial (Argentina, Brasil y El Salvador).

Una forma de reconocimiento, que podríamos denominar indirecto, se encuentra en algunos textos constitucionales que consagran el sistema federal, que distribuyen competencia, en determinadas materias, entre los órganos federales y regionales, tal como sucede en la Constitución Alemana de 1949 cuyo artículo 73, párrafo (1), señala que “corresponde a la Federación la legislación exclusiva en las siguientes materias: (...). La protección de la propiedad industrial,

los derechos de autor y los derechos de edición”. Lo mismo acontece en las constituciones de Canadá¹⁷, España¹ y EE. UU.¹, por mencionar algunas a modo de ejemplo.

Como es de esperar, normas similares se encuentran en los países de América Latina que han adoptado el sistema federal (Argentina, Brasil, México, Venezuela) todas las cuales depositan la facultad de legislar en materia de derecho de autor en la Asamblea o Congreso nacional. Pero llama la atención que la misma clase de disposición se encuentra además las Cartas de países no federales, tal vez ello se deba a que alguna vez en su historia optaron por dicho modelo y conservan aun esa norma, o bien esta cláusula de distribución competencial fue tomada de constituciones federales que sirvieron de fuente para sus actuales normas (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Claro que en todos estos casos esta norma administrativa posee un valor secundario, ya que la verdadera consagración del derecho de autor se encuentra en las cláusulas sustantivas que consagran los derechos y garantías fundamentales.

Contenido del Derecho de Autor.

En cuanto a su extensión, y derivado de lo anterior, la totalidad de las constituciones consagran la protección de las facultades patrimoniales de los creadores, de forma similar a la propiedad privada en general. Por tanto, ellas también se hayan sujetas a la función social de la propiedad, admitiendo limitaciones y excepciones que la ley expresamente contemple, pudiendo incluso ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública calificada por la ley, siempre que se garantice al titular el pago de una indemnización (/e., Argentina y Chile).

En cuanto a las facultades morales de autor, muy pocas refieren a ellas expresamente (Chile y Ecuador). Ecuador lo hace en iguales términos que los tratado y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, en cambio Chile lo hace individualizando los atributos que estas facultades entregan (paternidad, divulgación e integridad). En el resto de las constituciones las facultades no patrimoniales resultan ser garantías implícitas a partir del uso de los términos "derecho de autor" o "propiedad intelectual" en los cuales ellas son parte esencial del derecho (Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Uruguay).

El desarrollo del contenido del derecho de autor normalmente queda entregado a la ley, pero ciertas constituciones entregan, además, su configuración

a los tratados internacionales sobre la materia por ellos suscritos (Cuba, Guatemala y Venezuela). Sólo la carta de Brasil enumera los atributos patrimoniales cuando señala que “los autores tendrán el derecho exclusivo de uso, publicación o reproducción de sus obras”.

En cuanto al carácter temporal del derecho la mayoría de ellas lo consignan expresamente (Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana), pero la única que garantiza un plazo mínimo es la de Chile, siendo este la vida del autor, el que resulta implícito en el resto de las cartas fundamentales, más aún en aquellas en que la configuración del derecho también es dada por los tratados internacionales (Cuba, Guatemala y Venezuela), si se tiene presente que el Convenio de Berna expresamente establece como base de la protección “la vida del autor” y construye la vigencia temporal de éste en favor de los herederos, legatarios o cesionarios a partir de la muerte del creador (art. 7, apartado 1).

Relación con otros Derechos Fundamentales.

Como antes se señaló los derechos humanos son universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Que sean interdependientes significa que el conjunto de estos derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros²¹. Esta característica en especial ha inducido a que el derecho de autor sea regulado en forma conjunta con otros derechos, afectando a veces la nitidez de su configuración, e incluso ha permitido entender a algunos, de buena fe o con otras intenciones, como subordinado o preferente uno del otro.

La habitual asociación del derecho de autor ha sido con el derecho de propiedad (Argentina, El Salvador y Unión Europea), aun cuando la más común hoy en día es con los derechos de invención, marcas y patentes o propiedad industrial, ya sea considerando a ambos como uno sólo todo, al utilizar el concepto amplio de propiedad intelectual (Colombia, Unión Europea), o simplemente como parte de una misma norma, pero sin pérdida de la identidad de cada cual (Argentina, Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua ²², Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela), en las demás el derecho de autor se consagra en una norma independiente (Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Perú).

En los últimos años, en algunas Cartas fundamentales han pretendido destacar la proximidad del derecho de autor con los denominados derechos culturales. El origen de ella se encuentra en las declaraciones y tratados en materia de derechos humanos y principalmente en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se

reconoce a toda persona el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, en forma contigua al derecho de autor, proximidad o afinidad que en ningún momento debe confundirse con prelación o dependencia (Chile y Ecuador).

Cláusula del progreso de las artes y la ciencia útiles.

La influencia de la Constitución de los EE. UU., de 1787, en las primeras constituciones de América Latina ha sido ampliamente registrada a través de varios estudios, y esa influencia se dejó sentir, también, en materia de protección de los derechos de autor en varias oportunidades, no obstante, hoy la totalidad de las legislaciones de este continente se adscriben al sistema continental europeo y no al modelo de protección que ofrece el sistema de copyright, como se observará.

Primero, recordemos que la referida Constitución otorga al Congreso la facultad “para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, garantizando a los autores e inventores, por tiempo limitado, el derecho exclusivo al usufructo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos” (Art. I, Secc. 8, párr. 8). En este sentido, la norma es absolutamente clara en registrar que ella se apoya en una visión netamente económica-utilitarista que parte de la premisa de la libre utilización de las ideas y de la libertad de industria y comercio, por lo que el nacimiento del sistema del Copyright y del derecho de patentes norteamericano, tiene un fin distinto que la mera protección de los intereses materiales y morales del autor o inventor, ya que la protección concedida es un medio para “fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles”. En este sentido el Copyright es una concesión de derechos exclusivos y temporales a los autores sólo si ello sirve para el incremento de las ciencias y las artes útiles.

Como vemos la Constitución de los EE. UU., no consagra directamente la protección de la propiedad intelectual o el derecho de autor sino sólo otorga competencia al Congreso para hacerlo en el caso que la misma norma contempla. En este sentido estamos no ante una norma que consagre derechos subjetivos de naturaleza humanos sino sólo ante una norma constitucional programática, que son aquellas reglas incluidas en la Constitución que carecen de eficacia directa y solo establece criterios de actuación para el legislador ordinario. (Diccionario Panhispánico del español Jurídico RAE).

No cabe duda que muchas de las primeras constituciones de los países de América Latina abrazaron la teoría utilitarista, sin embargo ella ha sido abandonada definitivamente por todos, a partir de mediados del siglo XX, una vez que se acuerda la Convención de Washington (1946) y se aprueba la Convención

Universal sobre Derecho de Autor (1952) lo cual acontece en forma coetánea a la suscripción de las Declaraciones Americana y Universal de los derechos humanos (1948), que adhiere en plenitud a un sistema de protección basado en el concepto de un derecho de autor de carácter personal cuyo acatamiento universal viene dado precisamente por los tratados sobre derechos humanos aprobados posteriormente.

Norma Propuesta

Si el parámetro para medir el actual nivel de protección que la Constitución da a los derechos de autor en Chile es el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige como mínimo de protección el reconocer el derecho de toda persona a “beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”, deberíamos señalar enfáticamente que nuestro país está comprometido a otorgar a los autores un nivel muy acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En este sentido para alcanzar un nivel, sino óptimo, acorde con los compromisos internacionales adquirido por el Estado la nueva Constitución debe consagrar que los autores y artistas gozarán:

- (a) de un derecho individual;
- (b) centrado en la persona del creador o artista;
- (c) que garantice a toda persona su libertad de crear y difundir su arte;
- (d) que garantice protección tanto de sus intereses morales como patrimoniales;
- (e) por el tiempo que establezca en la ley y que no podrá ser inferior a la vida de su titular original, y
- (f) que sea perfectamente justiciable, esto es que se puede recurrir de tutela ante los tribunales de justicia, principalmente por medio del recurso de protección, así como también por medio de otras acciones especiales prevista en la ley sobre la materia, y demás generales que le son aplicable.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo [...].- La Constitución, a través de los órganos y autoridades en ella establecidos, asegura y garantiza a todos las personas como derecho directamente aplicable:

N° X.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor y de intérprete sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor y el derecho de intérprete comprenden la propiedad de la obra o prestación artística y los derechos de paternidad, divulgación e integridad de ellas, en conformidad a la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones e interpretaciones intelectuales y artísticas las garantías y limitaciones, que derivan de su función social, que esta Constitución establece a la propiedad en general.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 339-7, la que fue aprobada por 14 votos a favor.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°255-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la protección de los intereses materiales y morales que corresponden a las personas en razón de las producciones científicas, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Cristina Dorador, Ignacio Achurra, Alejandra Flores, Malucha Pinto, Loreto Vidal, Vanessa Hoppe, Manuela Arroyo y Angélica Tepper.

En materia de Derecho Internacional y DDHH, se reconoce el derecho de toda persona a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Así, tenemos varios instrumentos internacionales que hacen alusión a la materia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual señala “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

Otro pacto internacional que hace alusión a esta materia es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual alude a este derecho al señalar “Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

También esto se señala en la Declaración de Friburgo sobre derechos culturales, en donde se señala “El derecho a la protección de los intereses morales y materiales relacionados con las obras que sean fruto de su actividad cultural”.

En materia internacional, también se establece un régimen de protección de derechos de autor, a través de la Convención Universal sobre Derechos de Autor del año 1952. Esta norma establece un régimen de protección de derechos de autor, donde se establece que se deben respetar los derechos de la personalidad humana y favorecer el desarrollo de las letras, ciencias y artes.

En la normativa de la Unesco se reconoce la necesidad de que los Estados adopten medidas específicas para proteger otros derechos implicados de quienes están involucrados en las creaciones intelectuales, individual o colectivamente⁵. Dichos derechos merecen una igual protección a la otorgada por las normas internacionales en materia de propiedad intelectual.

En el ámbito específico de la ciencia, la recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos que se adoptó en la Conferencia General de la UNESCO el 13 de noviembre de 2017, establece que se deberá velar porque los resultados científicos y tecnológicos de los investigadores científicos gocen de una protección jurídica adecuada en lo que respecta a sus derechos de propiedad intelectual, especialmente de la que se concede en concepto de derechos de patente y de autor. La mencionada normativa dispone que se debe procurar la adecuada acreditación de las contribuciones a los conocimientos científicos, el equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el acceso abierto y el intercambio de conocimientos, además de la protección de las fuentes y los productos de los conocimientos tradicionales.

Esta recomendación dispone, entre otras materias, que los Estados deberían establecer mecanismos y tomar todas las medidas adecuadas encaminadas a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos y las obligaciones de los investigadores científicos, y otras partes interesadas.

Entre estos derechos y obligaciones, podemos encontrar: el garantizar su libertad intelectual, la cual debería abarcar la protección de su juicio independiente frente a toda influencia indebida; promover el acceso a los resultados de las investigaciones y compartir datos científicos entre los investigadores, así como con los encargados de formular políticas y con el público siempre que sea posible, teniendo presentes los derechos existentes; a revelar los conflictos de intereses reales o aparentes con arreglo a un código ético reconocido que promueva los objetivos de la investigación científica y el desarrollo; a velar por que los conocimientos provenientes de fuentes, comprendidos los conocimientos tradicionales, indígenas, locales y de otro tipo, sean adecuadamente acreditados, reconocidos y compensados, así como por que los conocimientos resultantes sean transmitidos a su vez a esas fuentes.

Por otro lado, este mismo organismo establece recomendaciones específicas entorno a la “Ciencia Abierta”, la que se entiende como “un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional”.

En la “Recomendación sobre Ciencia Abierta” del 8 de septiembre de 2021, establece que la “Ciencia Abierta” comprende todas las disciplinas científicas y todos los aspectos de las prácticas académicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades.

Este concepto se basa en una serie de pilares clave, donde se establece el “conocimiento científico abierto” (en donde encontramos, de forma no taxativa, publicaciones científicas, datos de investigación, recursos educativos, programas informáticos y equipos informáticos), “infraestructuras de la ciencia abierta”, “comunicación científica”, “participación abierta de los agentes sociales” y “diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento”. Este último punto, se refiere “al diálogo entre los diferentes poseedores de conocimientos, que reconoce la riqueza de los diversos sistemas de conocimiento y epistemologías, así como la

diversidad de los productores de conocimientos, de conformidad con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001)”.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX. El Estado garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos y las obligaciones de los investigadores científicos, y otras partes interesadas, acorde a las fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos.

Artículo XX. El Estado promueve el acceso a los resultados de las investigaciones científicas de los sistemas de conocimientos y el intercambio de estos conocimientos entre investigadores, encargados de formular políticas públicas y todas las personas y comunidades de forma descentralizada.

El Estado promueve que el acceso a los conocimientos sea lo más abierto posible, estableciendo un equilibrio entre la protección de los intereses materiales y morales que les correspondan a sus autores, su acceso abierto y su intercambio, así como sus alcances y dimensión internacional.

Cualquier restricción de acceso en esta materia ha de ser proporcionada y justificada únicamente por motivos de protección de las garantías fundamentales y fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos, la seguridad nacional, el orden público y los procesos judiciales.

Las personas e instituciones que emplean, financian, rigen u orientan a los investigadores o la investigación deberán respetar plenamente los intereses morales y materiales que correspondan a los investigadores en razón de sus producciones científicas.

Artículo XX. El Estado protege las fuentes y los productos de los conocimientos tradicionales, indígenas, locales y de otras fuentes similares, debiendo ser adecuadamente acreditados, reconocidos, compensados y transmitidos a ellos, respetando sus derechos fundamentales y las fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 255-7, la que fue aprobada por 13 votos a favor, y 2 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°420-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre derechos de autor en la era digital, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Francisco Caamaño, Francisca Arauna, Loreto Vallejos, Dayvana González, Lisette Vergara, Paulina Valenzuela, Loreto Vidal, Malucha Pinto y Carolina Videla.

Circunscribir el concepto de propiedad intelectual es complejo, ya que vincula dos conceptos que a primera vista no se armonizan. La peculiaridad principal de la propiedad es la exclusión, o sea, el derecho del propietario frente a cualquier otro a excluirlo del uso y goce de lo que posee. Y en el caso de lo intelectual es eso que no tiene forma física, que es intangible, y que éticamente conlleva la necesidad de ser compartido, dado que contribuye, de una manera u otra, a reflexionar sobre el mundo y la civilización, y en ocasiones a hacer la vida más fácil, constructiva, colaborativa y agradable a las personas.

El Derecho de Autor se entiende a nivel internacional como un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley otorga a los autores y autoras, por el solo hecho de la creación de una obra artística o científica¹. Un derecho de autor para el siglo XXI, en la era digital, debe sobrellevar una enorme pluralidad de intereses, y tiene que tener en cuenta que las creaciones intelectuales, buscan la libertad, autonomía y el bien común de la sociedad con sus producciones, donde, quienes participan en ello pretenden obtener una recompensa económica, o de reconocimiento justa por su trabajo, pero también es de suma importancia los intereses de las diferentes comunidades. Esto es de por sí complejo, y por ello se debe tener en cuenta algunos aspectos tales como:

a) Los distintos aspectos fundamentales como la libertad de expresión, la autonomía de las artes y la ciencia, la garantía de una información y de una comunicación transparente, los derechos fundamentales, como los de cuarta generación, etc.

- b) El interés en la educación y las investigaciones.
- c) El acceso a las artes, las ciencias, y las culturas.
- d) La cultura floreciente de economías creativas, muchas de ellas cibernéticas, la necesidad de puestos de trabajo, el "bienestar común" de la sociedad en un mundo globalizado.

Por lo anterior, el derecho de autor o la propiedad intelectual en Chile, a estas alturas debería ser re entendido y modificado para poder armonizar las exigencias de una sociedad de la información y del conocimiento, democrática e inclusiva donde como lo indica Lawrence Lessig en su libro Cultura libre, grandes medios están usando la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad.

En Chile actualmente, el Código Civil reconoce una especie de derecho de propiedad sobre los derechos intelectuales, y la Actual Constitución señala:

Capítulo lii De Los Derechos Y Deberes Constitucionales

Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas: (...)

25° La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Por su parte, la Ley N° 17.3363, capítulo 4 de propiedad intelectual, reconoce y regula el derecho de autor y los derechos conexos, que se otorgan a las industrias y artistas que se vinculan con la representación y difusión de las obras de los autores, como los cantantes, actores, empresas discográficas, productores de cine, empresas de software, los servicios públicos entre otros. En esta ley se les reconoce sus facultades sobre las expresiones de la creatividad y

producciones conexas y establece sus limitaciones temporales, como sus excepciones.

Esta ley sufre de grandes carencias y ambigüedades que dificultan entre otros, la disposición libre sobre su obra para que quienes la obtengan deban actuar de la misma forma, como por ejemplo si lo permiten licencias libres como Creative Commons, posibilitando a estos que determinen, si ceden la utilización de sus obras a terceros para que estos últimos tengan que actuar en conformidad a la misma licencia.

Internet y el ciberespacio, generado fuertemente a partir de la Web 2.0, son la estructura principal de la sociedad de la Información, conectada y del conocimiento, en el contexto del capitalismo cognitivo, representando espacios para la libre difusión de la información de todo tipo y también espacios para el desarrollo de la economía digital, con despliegue del mercado electrónico y la circulación del conocimiento en todas sus formas, cultural, visual, audiovisual, musical, literario, filosófico, científico, artístico, entre otros, dando cabida a la circulación de los conocimientos que desarrollan millones de personas en el mundo, como se puede comprobar en plataformas como, YouTube5, Instagram, Facebook, y en los repositorios de conocimiento educativos, artísticos, científicos, ciudadanos, etc.

La era digital ha facilitado el acceso a los contenidos y la circulación del conocimiento, lo cual se vio amplificado durante la pandemia, al permitir el contacto directo entre las y los creadores de contenidos amateurs, generadores de cultura artística, científica, popular, ancestral y ciudadanía digital entre otros, facilitando la libre generación, intercambio y circulación de la información y el conocimiento sin tener que pasar por el filtro del poder mediático⁶. Esto evidenció y contribuyó al goce de los derechos y principios fundamentales como la libertad de expresión e información o el acceso a la cultura. Lo anterior se puede apreciar en redes sociales de acceso abierto (AA) para académicos y académicas de todas las disciplinas en todo el mundo, los cuales apelan a los repositorios de acceso abiertos (Open Data Repository), dentro de los cuales destacan; Mendeley, PubMed Central, ResearchGate, arXiv y Academia.edu, cuyos principales objetivos son, compartir trabajos de investigación, monitorear sus impactos y procurar seguimiento a todas las investigaciones que están en sus repertorios en determinadas áreas de especialización.

Desde la constitución emanada en la década de los 80, en Chile han existido ocho modificaciones a la ley de propiedad intelectual (1985, Ley 18.443;

1990, Ley 18.957; 1991, Ley 19.072; 1992, Ley 19.166; 2003, Leyes 19.912 y 19.914; 2004, Ley 19.928, y 2010, Ley 20.435) y ninguna de las modificaciones de ley se ha adecuando a la realidad de la era digital y a la actual era del conocimiento. Todas estas modificaciones sólo han reforzado la protección a titulares y poseedores de los derechos de autor de un tercero, particularmente las industrias que se benefician de ello. La base de la estructura constitucional de los 80`, en esta materia, no ha tenido cambios sustanciales en lo que corresponde a los accesos públicos, excepto la reforma del año 2010 que amplió de manera tímida las excepciones a los derechos de autor y conexos, así como el intento de la modificación de 1992 que intentó cambiar la de 1991, pues daba más tiempo de protección autoral a artistas “ilustres”, lo que significaba que las obras de estos “ilustres” tenían mayores dificultades de acceder al dominio público y por ende de estar al alcance de toda la ciudadanía. En el 2001 se intentó un cambio, pero solo semántico con respecto a la terminología (de origen filosófico) de propiedad intelectual a derechos de autor.

Lo que ocurrió en la modificación del 2010 tiene ribetes importantes que antecedieron su promulgación, pues el año 2009 SCD Chile, junto a la entonces ministra de cultura, comenzaron a elaborar una propuesta para una importante modificación de la ley de derechos de propiedad, las cuales incluían restricciones profundas en lo que respecta a los accesos a la información y el conocimiento. Uno de los grandes conflictos de este intento de acuerdo entre SCD y el consejo de la Cultura era el cobro de un canon por la compra de cualquier producto que tuviera carácter de “virgen”, es decir: pendrives, DVD, papeles Resma entre otras cosas. La polémica se daba en el vacío legal que existe en la ley para incorporar el cobro de este canon aduciendo implícitamente que la ciudadanía en su conjunto, eran potenciales infractores de ley al poder usar los papeles en blanco, o el pendrive virgen para grabar música, películas, imprimir libros, etc.

Intentaron, además, no permitir que un particular escuche una obra musical protegida por el derecho de autor a cierto volumen, pues estaría distribuyendo una obra sin el permiso o pago a la o al autor de la obra, los jardines infantiles y colegios debían pagar cuotas altas si algún estudiante usaba una canción para una presentación interna. Existió, en ese entonces una campaña radial y televisiva que mencionaba “No Mates la Música”, basada en el hecho de que las personas ya estaban descargando las canciones de su predilección desde Internet. En la tesis del periodista Víctor Valenzuela “Historias sobre el derecho de autor en Chile”, menciona, asertivamente, que el riesgo de descargar y compartir música y contenidos a través de Internet lo que podía “matar” era la industria clásica en la era de Internet (con copyright anacrónicos), no los contenidos que se

estaban distribuyendo. Finalmente, se incorporó la modificación del año 2010 aumentando las penas y restricciones al acceso abierto, pero sin las enormes restricciones que se intentó, en un comienzo desde el Consejo junto a la SCD.

Marco Internacional

Chile es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), creada en 1967, que es una organización adscrita al sistema de Naciones Unidas que cuenta con 193 Estados miembros y su sede principal se encuentra en Suiza, la que originalmente se formó como una organización de titulares.

Las normas de propiedad intelectual sobre los sistemas de conocimiento en la era digital han priorizado impedir el acceso no autorizado a contenidos (copyright digital)⁹. Desde el año 1996 con los llamados Tratados Internet de la OMPI el Tratado de Derechos de Autor (WCT) y el Tratado de Derechos de los Artistas Intérpretes o ejecutantes y los productores fonográfico (WPPT) se ha impulsado a nivel internacional una agenda de , leyes para ampliar los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor y conexos sobre todas las utilizaciones por medios digitales, sin tomar atención en la importancia de asegurar un acceso necesario para el interés del acceso a la cultura, la educación y el desarrollo de la creatividad incremental, entre otros.

Para atenuar los efectos nocivos de la exclusión, naciones como Estados Unidos han admitido el desarrollo de los sistemas de conocimiento libres, mediante mecanismo como el fair use o uso justo y el apoyo al desarrollo de la science commons o la Open science. Estas dos últimas instancias son promovidas sobre todo por la Unión Europea y EE.UU, a los cuales destinan fondos públicos, debido a la importancia de la producción que se hace de estos instrumentos, como se ha visto en la producción de vacunas para el COVID 19. Destaca además las más de 3 décadas de financiamiento de 21 países de la Unión Europea al CERN de Suiza, desde el cual se liberó gratuitamente Internet.

Las formas para fomentar el acceso libre a la información y el conocimiento, pasan por comprender que el debate no se debe planear solo sobre el acceso a la información, sino que también a las formas de expresión del conocimiento que contienen la información.

En este sentido las leyes que promueven el desarrollo del conocimiento y su acceso por parte de la ciudadanía digital, toman como referente el desarrollo de las licencias públicas generales, “open access”, como las licencias públicas generales, licencias “creative commons”, licencia GNU de software libre y

los programas de intercambio de archivos entre pares o “peer to peer” (P2P), entre otros. Desde luego no puede ignorarse el valor del conocimiento compartido mediante libre acceso y difusión, ni el inestimable papel de Internet para el desarrollo del procomún, sobre todo en el campo de la educación, las artes, la música, el sonido y la ciencia, como lo demuestran algunas iniciativas que usan “open access”.

Se destaca el apoyo al desarrollo del conocimiento libre y su difusión la “Declaration on Access to Research Data from Public Funding”, del Comité para la Política Científica y Tecnológica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del 30 de marzo de 2004¹⁶, según la cual fomentar un acceso abierto y amplio a los resultados investigativos aumentará la productividad y la calidad de los sistemas científicos mundiales. La “Open Course Ware Initiative” del Massachusetts Institute of Technology, cuyo fin es colocar a disposición del público materiales docentes de diverso tipo y el “Acuerdo de la Asociación de Universidades Europeas sobre Open Access” del 25 de enero de 2008¹⁸, donde se constituyen como objetivos de las Universidades el despliegue de políticas para controlar y colocar a disposición del público los resultados de la investigación de sus integrantes, la ejecución de repositorios institucionales y políticas de información sobre derechos de propiedad intelectual a sus integrantes y de reserva del derecho a usar sus producciones científicas.

Un ejemplo de reconocimiento de los modelos de acceso abierto es España en la difusión de contenidos la cual tiene leyes importantes relativas a la propiedad intelectual y a la sociedad de la información y el conocimiento, como la Disposición Adicional tercera de la Ley 23/2006, de reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que dispone que: “El Gobierno favorecerá la creación de espacios de utilidad pública y para todos, que contendrán obras que se hallen en dominio público en formato digital y aquellas otras que sean de titularidad pública susceptibles de ser incorporadas en dicho régimen, prestando particular atención a la diversidad cultural española. Estos espacios serán preferentemente de acceso gratuito y de libre acceso por sistemas telemáticos, mediante estándares de libre uso y universalmente disponibles. Asimismo, a estos espacios podrán incorporarse las obras cuyos autores así lo manifiesten expresamente”.

Algunos ejemplos legislativos y constitucionales los podemos ver en Reino Unido, cuando en su legislación no aceptó los términos estrictos del Convenio de Berna sobre los derechos de autor y en 1952 incorporó el Common Law. La constitución de Estados Unidos dio un paso más allá integrando en su

constitución, en el artículo I, sección 8, cláusula 8, donde se establece que: “El Congreso tiene el poder para promover el progreso de las Ciencias y las Artes útiles, asegurándoles por tiempo limitado a los autores e inventores los derechos exclusivos sobre sus escritos y descubrimientos, respectivamente”. El objetivo de esto último es lo público y de no enriquecer a las industrias editoriales. En Argentina el 2014 entró en vigencia la Ley 27.078 (Ley Argentina Digital) en donde se pone al bien público el desarrollo de las TICs para un acceso de la ciudadanía a los servicios y bienes sobre la información y las comunicaciones de forma horizontal y de calidad a toda la ciudadanía. Bajo esta misma línea, en el mismo país, existe la Ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública. Con ello se está reconociendo la relevancia del acceso abierto y un compromiso para poner a disposición del público los contenidos de titularidad pública.

En la Unión Europea, la Comunicación de la Comisión del 14 de febrero de 2007, sobre acceso, distribución y conservación de información científica en la era digital²⁰, llama a atender la necesidad de potenciar la investigación, la difusión de la ciencia y la competitividad en una economía basada en la información y en la ciencia, impulsando modelos de difusión de la información de acceso abierto, acrecentando el número de repositorios como las revistas científicas digitales, los autoarchivo del autor y los puntos de acceso por parte de las Universidades.

En el caso de las tecnologías de software, como paradigma de la nueva ola internacional del problema del derecho de propiedad intelectual, los principios del GNU creado en 1983 dieron el paso a que hoy exista el Software Libre en el uso cotidiano de los aparatos tecnológicos. Esto abrió el concepto del Open Source del cual nacen diversas licencias para el uso, modificación y formas de compartir la creación y el conocimiento de otros y dejarlo en las mismas condiciones para que otros hagan lo mismo en todo el mundo. El Estado brasileño, boliviano, cubano, uruguayo, ecuatoriano, Santa Fé y de Río Negro en Argentina, Bogotá, Múnich (Alemania), multiplicidad de gobiernos regionales españoles, Francia, Italia, Rusia, todas las escuelas públicas de Austria, etc. usan y promueven el uso de Software Libre. Cabe recordar que el uso de software propietario por los estados involucra el pago anual de centenas de miles de millones de pesos a empresas privadas como Microsoft.

Este modelo colaborativo ha sido exitoso en el desarrollo de nuevas tecnologías. El ejemplo concreto es el desarrollo del núcleo de Linux (GPL (GNU General Public License)), el cual es usado desde teléfonos Android, los televisores de las casas, computadores de usuarios y casi todos los supercomputadores entre muchos otros.

Lo otro importante de este modelo, es que el uso de tecnologías libres para ser usadas y modificadas promueve la creación y desarrollo colaborativo de herramientas. El carácter abierto del código permite que este sea auditado por terceros, lo que produce, por ejemplo, infraestructuras transparentes en el uso que se le da a los datos.

Teniendo todo esto presente, en un país aislado geográficamente como es Chile por su cordillera, los mares australes, el desierto en el norte, y el océano Pacífico, pero abierto al desarrollo de las nuevas tecnologías, debemos recordar que Chile es uno de los países donde la gente más se conecta en Latinoamérica por Internet y en promedio cada persona tiene a lo menos un smartphone, y a pesar de las actuales brechas de acceso que deben ser cambiadas, como lo formulan diversos intelectuales, amateurs y organizaciones chilenas, se hace necesario formular normas que permitan el acceso libre al conocimiento contemporáneo generado en el país como en el exterior en los tiempos de Internet, y que se potencie la creación de conocimiento para usufructo de nuestra sociedad, y para la sociedad global. Esto es clave si se pretende ingresar como nación a la era actual del conocimiento y la información del mundo, sin la cual, seríamos constantes subsidiarios y receptores pasivos del conocimiento global que se genera exponencialmente. Aquí toma relevancia considerar, en la discusión, los derechos humanos de cuarta generación.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Principio:

Artículo X1. Los derechos de propiedad intelectual son derechos que deben armonizar con el interés o bien público.

Es deber del Estado reconocer y garantizar el uso justo a todas las personas que hacen uso de las creaciones protegidas de conformidad, con un objetivo de bien común.

Es deber del Estado priorizar aquellas iniciativas creativas que promuevan el desarrollo social equitativo, en concordancia con los derechos humanos y la naturaleza.

Derechos:

Artículo X1. Toda persona, colectivo o comunidad tiene el derecho a

- La protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales, así como también hacer uso justo de otras creaciones. Los requisitos, límites y condiciones para esa protección quedarán establecidas por ley.
- Organizarse de manera colectiva para fortalecer sus procesos creativos y la gestión de su trabajo de conformidad con el bien común.
- Exigir la protección de las obras en dominio público y el acceso a estas, promoviendo un uso ético de ellas.
- Un reconocimiento moral de la autoría de sus obras independiente de la licencia u estatus legal que tenga la obra.
- Que sus creaciones sean resguardadas, como archivo, en un espacio digital patrimonial de administración pública y participación comunitaria. Las condiciones quedarán establecidas por ley.

Artículo X2. El Estado garantiza a todas las personas el derecho a acceder, investigar, modificar, compartir y crear la información y los conocimientos, para las materias, estudios y/o creaciones que estime conveniente de acuerdo a su desarrollo personal o colectivo.

Rol del Estado

Artículo X3. Es deber del Estado velar por la igualdad de acceso a los conocimientos, utilizar y promover recursos y herramientas de libre acceso y distribución; así como aquellas que permitan la innovación por medio de su modificación.

Artículo X4. El Estado garantiza la preservación digital de la memoria como también el patrimonio histórico, mediante espacios digitales de administración pública. Además de la protección y del acceso a las creaciones que se encuentren en dominio público.

Artículo X5. El Estado garantiza que las creaciones desarrolladas con su colaboración sean liberadas bajo licencias que permitan su libre uso, modificación y distribución para todos los habitantes del territorio, sin perjuicio de los derechos de protección de datos sensibles. También será admisible su liberación al dominio público conforme a la voluntad de sus autores. Las condiciones quedarán establecidas por ley.

Institucionalidad

Artículo X6. Existirá una institución central conformada por una mesa multi-ministerial que establecerá un marco de trabajo colaborativo, estandarizado y democrático, además de la infraestructura, herramientas metodológicas y técnicas necesarias para cumplir esta labor.

La mesa multi-ministerial tendrá los siguientes roles:

A. Garantizar el goce equitativo del valor producido por el conocimiento y la investigación.

B. Proteger a las personas, comunidades y la naturaleza de los potenciales daños derivados del avance del conocimiento.

C. Integrar los conocimientos y progreso al diseño de políticas públicas, asegurando coherencia entre la producción de conocimientos y el modelo de desarrollo.

D. Desarrollar e impulsar políticas públicas para comunicar los conocimientos y resultados de investigación, incluyendo su divulgación, accesibilidad y comunicación efectiva.

E. Disponer del acceso a los repositorios de conocimientos y saberes, formales e informales, de personas y comunidades, para los/las habitantes del país.

F. Apoyar, financiar y promover proyectos de liberación del conocimiento que aporten al bien común.

G. Asegurar la innovación por medio de la modificación de los conocimientos e información existentes, siempre y cuando sea de uso justo para la comunidad, o legítimo por parte de quienes crearon tales conocimientos e informaciones.

H. Su composición, funciones y demás atribuciones serán establecidas bajo la Ley.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 420-7. Esta fue realizada de forma separada por cada uno de los artículos que la componen. Resultaron aprobados: Artículo X1 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones; Artículo X1.1 10 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones; Artículo X2 por 15 votos a favor; Artículo X3 11 votos a favor y 4 abstenciones; Artículo X4 por 12 votos a favor y 3 abstenciones; Artículo X5 por 8 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Fue rechazado el Artículo X6 por 5 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°245-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el patrimonio cultural y los pueblos y naciones preexistentes al Estado y del pueblo tribal afrodescendiente chileno, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Alexis Caiguán, Victorino Antilef Ñanco, Natividad Llanquileo Pilquimán, Machi Francisca Linconao, Isabel Godoy Monárdez, Margarita Vargas López, Ivanna Olivares, Cristina Dorador Ortiz, Alejandra Pérez, Lissette Vergara y Giovanna Grandón.

El significado dado históricamente al patrimonio cultural si bien ha sido puesto en cuestión por los diversos pueblos y naciones preexistentes, existe un consenso general de que éste debe, de todas formas ser protegido de forma integral, requiriendo una redefinición de patrimonio que sea culturalmente pertinente, incorporando para ello la autodeterminación de los pueblos, en cuanto derecho y como principio esencial para la comprensión y ejercicio de los derechos de los pueblos de manera efectiva y no colonial.

Tal autodeterminación se encuentra en distintos instrumentos internacionales, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, que en su artículo 73 señala respecto a los Estados Miembros, que estos se obligan:

- a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso;
- b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto (...)

El patrimonio cultural, tal como lo establece la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, es fundamental para su identidad cultural e incluso para la continuidad de los pueblos.

En esta línea la citada Declaración Americana señala en su artículo XIII: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad

cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras.”

Un punto clave de tal Declaración es que reconoce no sólo el patrimonio cultural tangible e intangible, sino que además incluye el histórico y ancestral.

En este sentido, el patrimonio de los pueblos y naciones, al estar íntimamente ligado con su identidad cultural, incorpora diversos ámbitos esenciales para el desarrollo de los pueblos, como lo son la tierra, la cosmovisión, su espiritualidad, su religiosidad, sus ritos, ceremonias, instituciones, sus técnicas y saberes, su medicina, sus sitios arqueológicos y sagrados, su tierra y territorio, sus petroglifos, sus fósiles y sus restos humanos que han sido usurpados, entre otros elementos que configuran sus formas de vida. El patrimonio cultural no es un tipo de patrimonio aislado del resto de elementos que determinan la identidad de los pueblos, sino que como sus rasgos determinantes y distintivos, es todo lo que han construido, lo que siguen construyendo y reconstruyendo, es sus formas de agricultura, su forma de alimentarse y de organizarse, su sitios sagrados, su relación con sus tierras, todo aquello que determinan quiénes son y cómo eligen vivir. Es, en conclusión, todo aquello que compone su forma de vida y su cosmovisión.

En una realidad en que han sido sistemáticamente discriminados, expuestos a la globalización, al racismo, extractivismo y colonialismo, la protección de su patrimonio cultural, en los diversos ámbitos, resulta ser un pilar fundamental para la construcción de un Estado Plurinacional, que debe observar a la autodeterminación de los mismos pueblos, no responder a un agente externo que ha ejercido estas prácticas que les ha privado de su patrimonio cultural y de su identidad, y que aún hoy continúa privándoles, poniendo en riesgo la continuidad de los pueblos y naciones que no pertenezcan a la visión hegemónica.

El patrimonio cultural es la vida y la forma de vida de los pueblos, un elemento vivo y dinámico como lo son los mismos pueblos y naciones, considerando no solo el pasado, sino también el presente y futuro.

Patrimonio cultural y la autodeterminación

El estándar internacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas, establece constantemente la intrínseca relación entre los diversos derechos y formas de ejercicio de estos, con la autodeterminación.

En esta línea, la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3° señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultura”, mientras que el artículo 11 establece:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”.

Por otro lado, la misma Declaración en su artículo 12 señala “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.”, a su vez, el artículo 13 incorpora los derechos de los pueblos sobre tales elementos, como la posibilidad de transmitirlo a futuras generaciones:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y

administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.”

En la misma línea encontramos el artículo 15 de la Declaración, que señala:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.”

Mientras que el artículo 31 establece, de forma explícita el derecho de los pueblos sobre su patrimonio cultural y su propiedad intelectual:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.”

Derecho Comparado

Estas nociones, derechos y formas de protección al patrimonio cultural de los pueblos indígenas y por ende, su forma de vida e identidad cultural, ha sido reflejada de una u otra forma en diversas constituciones del continente que han procurado dar protección al patrimonio.

La Constitución de Bolivia por ejemplo, señala la protección del patrimonio cultural indígena en distintos apartados de su Constitución.

En primer lugar, el artículo 99 señala que el patrimonio cultural es inalienable, inembargable e imprescriptible, obligando al Estado, entre otros, al

registro, protección, restauración, recuperación, revitalización. Agrega además la posibilidad de ejercer una acción popular.

Además, incorpora la protección al patrimonio natural, obligando a no comprometer la soberanía sobre los recursos naturales, para ello define el patrimonio cultural como las especies nativas de origen animal y vegetal, obligando al Estado a establecer las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo, incorporando la protección todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento (artículos 346 y 381).

La Constitución de Brasil también otorga la posibilidad de ejercer una acción popular, respecto al patrimonio público, para el medio ambiente, el patrimonio histórico y cultural (artículo 72).

Por otro lado, la Constitución de Ecuador establece como deberes primordiales del Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país (artículo 3). Mientras que el artículo 14 señala “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”

Además, a partir del derecho a la identidad cultural reconoce el derecho a acceder a su patrimonio cultural en el artículo 21 “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.”

Mientras que, en virtud de la identidad plurinacional del Ecuador, señala especialmente la responsabilidad del Estado en la materia, en el artículo 380: “Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.”

Por su parte, la Constitución de Colombia señala nuevamente la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los patrimonios e incluso de las tierras de “grupos étnicos”, en su artículo 63: “Los bienes de uso público, los

parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargable” y establece la posibilidad de readquirir cuando se encuentren en manos de particulares y las especialidad que tendrá para los “grupos étnicos”, “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.” (artículo 72) brindando además la posibilidad de acciones populares respecto al patrimonio y el ambiente (artículo 88)

Mientras que, Costa Rica señala en el artículo 89: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.”

Régimen de protección

Sin embargo, es inevitable abordar la que respecto al patrimonio de los pueblos, este no pertenece al dominio público, sino que tal como establecen los instrumentos internacionales ya señalados, es parte de la autodeterminación de los pueblos y son éstos quienes han construido y siguen construyendo su identidad cultural, sus instituciones, su relación con la tierra y sus formas de vida.

En este sentido, es necesario distinguir cuándo hablamos de dominio público y la regulación que debieran tener los derechos de los pueblos, por cuánto de ser considerados de dominio público, se permitiría que los elementos -que el derecho internacional de los derechos humanos ha otorgado a los pueblos como parte de su derecho propio- puedan ser objeto de apropiación o de utilización indebida por parte de terceros.

En esta línea, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) recurre a principios y normas del Sistema de Propiedad Intelectual para salvaguardar el patrimonio indígena, evitar esta utilización indebida y garantizar la participación de los pueblos en los beneficios del uso y aprovechamiento de este patrimonio presente, pasado y futuro. Y es que, para la OMPI, el derecho de propiedad intelectual, el dominio público se configura por aquellos materiales intangibles que no están sujetos a derechos de propiedad intelectual exclusivos y

que, por tanto, se encuentran libremente disponibles para ser utilizados, explotados o reproducidos por cualquier persona.

Considerar los conocimientos tradicionales de los pueblos y su patrimonio como parte del dominio público ha permitido excluir a los pueblos de la protección y sido utilizado como justificación de su apropiación indebida por parte de terceros. Mientras que la propiedad intelectual, si bien puede proteger del uso de terceros, por sí sola puede dar paso a restricciones que impidan la regeneración y revitalización, al igual que impedir la posibilidad de expresiones contemporáneas de la identidad de los pueblos.

Así, el dominio público no respondería al estándar internacional al que se ha comprometido el Estado de Chile, mientras que la propiedad intelectual si bien permite la apropiación y usos indebidos del patrimonio de los pueblos, también produce insuficiencias para proteger de manera íntegra los derechos de los pueblos. Es entonces cuando debemos mirar aquello que el mismo derecho internacional como parte fundamental del ejercicio de los derechos de los pueblos: la autodeterminación.

Los sistemas jurídicos propios de cada pueblo establecen restricciones y condiciones sobre quién puede usar cierto conocimiento o bajo qué circunstancias (por ejemplo aquellos que son sagrados, que se consideran secretos, que consideran que han de ser compartidos a terceros, etc.), es decir, son regulados por el derecho propio o derecho consuetudinario de cada pueblo.

De esta forma, atendiendo las razones ya brindadas, el estándar internacional establecido respecto al patrimonio cultural, las diversas implicancias y elementos que este incorpora en la vida y formas de vivir de los pueblos, como las complejidades de dar una regulación que no provenga de los pueblos sino sólo una mirada jurídico-occidental, junto con la importancia del patrimonio cultural para los pueblos y naciones, nos lleva a presentar la siguiente propuesta de norma.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X1. Del Patrimonio

1. Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho al pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, comprendiendo su patrimonio natural, genético, humano, y propiedad intelectual, considerando la

naturaleza colectiva de los mismos, que ha sido transmitido de generación en generación.

2. Tienen derecho, además, a continuar transmitiendo este patrimonio cultural material e inmaterial de generación en generación, dado que constituyen la base de su existencia y garantiza su continuidad colectiva e individual, al formar parte de la expresión e identidad de cada pueblo y nación. Dentro de este patrimonio cultural se ha de considerar los diversos elementos que lo configuran, tales como la flora y fauna, su tierra y territorio, mar y maritorio, sus sitios sagrados y arqueológicos, los materiales producto de sus técnicas, tecnologías, arquitectura, artes y ciencias, su escritura y literatura, expresiones orales, cantos y otras expresiones orales, diseños, sus ceremonias y ritos, su lengua y, especialmente, sus restos humanos.

3. La propiedad intelectual colectiva de los pueblos y naciones preexistentes comprende, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales entre los cuales se encuentran los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, los diseños y procedimientos ancestrales, las manifestaciones culturales, artísticas, espirituales, tecnológicas y científicas, su herencia cultural y memoria, el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los conocimientos y desarrollos propios relacionados con la biodiversidad y la utilidad y cualidades de semillas, las plantas medicinales, la flora y la fauna.

4. Para el pleno ejercicio de estos derechos se reconoce la autodeterminación de los pueblos, la relación con la tierra y el territorio, sus sistemas de conocimientos e instituciones propias. El patrimonio cultural y propiedad intelectual de los pueblos es inviolable, inembargable, indelegable e imprescriptible, respetando siempre su derecho e instituciones propias. Esta protección podrá incluir la adopción de medidas para reconocer, registrar y proteger la autoría individual o colectiva de los pueblos y naciones dentro de la regulación que se les brinde y debe impedir el uso no autorizado de las producciones científicas, literarias y artísticas de los pueblos y naciones por terceros.

5. El Estado, con la participación plena y efectiva de los pueblos y naciones, adoptará las medidas necesarias para que los acuerdos y regímenes nacionales o internacionales provean el reconocimiento y la protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual asociada a dicho patrimonio de los pueblos indígenas. En la adopción de estas medidas, se realizarán consultas vinculantes, encaminadas a obtener el consentimiento libre, previo, informado y fundado de los pueblos indígenas.

Artículo X2: Rechazo a la asimilación

1. Los pueblos y naciones preexistentes y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento externo de asimilación.

2. El Estado no deberá desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política alguna de asimilación de los pueblos y naciones preexistentes y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, ni de destrucción de sus culturas.

Artículo X3: Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación

1. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, tienen el derecho a rescatar, preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias costumbres, cosmovisiones, formas de alimentación, historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura, y a designar y mantener sus propios nombres para la denominación de sus comunidades, individuos y lugares.

2. El Estado deberá adoptar medidas adecuadas y eficaces para proteger el ejercicio de este derecho con la participación plena y efectiva de los pueblos y naciones preexistentes.

3. Los pueblos y naciones, tienen derecho a promover, mantener y desarrollar todos sus sistemas y medios de comunicación, incluidos sus propios programas de radio y televisión, y acceder en pie de igualdad a todos los demás medios de comunicación e información. El Estado tomará medidas para promover y asegurar la transmisión de programas de radio y televisión en sus propias lenguas, particularmente en sus territorios y donde tengan presencia. El Estado apoyará y facilitará la creación de radioemisoras, televisoras y canales digitales, así como otros medios de información y comunicación libres, asegurando el espacio igualitario para la transmisión eficaz de estos.

4. El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones, garantizará que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 245-7, la que fue aprobada por 11 votos a favor, y 3 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N° 147-7

La siguiente iniciativa convencional indígena que abordó la Comisión sobre el derecho a resguardo a la propiedad intelectual , ingresada por Loreto Millalén de la Asociación de Mujeres Indígenas Ad Llalín, Marisol Vega de la Asociación Indígena Ayllu Sullay Reche, José del Carmen Calquín de la Asociación Indígena Lof Mapuche José Calquín Morales, Patricia Llancapán de la Asociación Indígena Inapire Huinchanmapu, Erika Rivera de la Asociación Indígena Newen Domo, Cecilia del Carmen Collío de la Asociación Indígena Pewen Kimun, Sebastián Collonao de la Asociación Indígena Consejo Mapuche de Lo Prado, Rosa Cayún de la Asociación Indígena We-Liwen Lo Prado, Maritza Quileñan de la Asociación Indígena de Artesanos de Pueblos Originarios, Beatriz Antillanca de la Asociación Indígena Nguillatue Relmu Chod Lafken y Nathaly Huentecura de la Asociación Indígena Nehuentuan de San Bernardo.

A partir de los documentos y la escuela de creación de normas que creó la constituyente Natividad Llanquileo, es que sentimos que podíamos lanzarnos contra el tiempo a estudiar, aprender y ponernos manos a la obra en la creación de una propuesta de norma constitucional, comenzamos con llamadas telefónicas para alentar la voluntad y decisión de hacerlo reunirnos y autoconvocadas como mujeres mapuche, la ñaña Ingrid Conejeros coordinó a través de ZOOM las invitaciones y reuniones, confluimos ñañas de distintas regiones, territorios y roles, nos reunimos intensamente durante un mes, reuniones largas durante la noche 3 veces y hasta 4 veces por semana finalmente por la complejidad de la tarea se priorizó por crear una norma que asegure la representación de las mujeres mapuche en la vida política del país y esa norma la entregamos en forma presencial en la convención.

Durante el proceso uno de los temas importantes para todas las comunidades fue la vulneración de derechos a través de los extractivismos epistémicos, usurpación y usos indebidos de las creaciones y conocimientos de nuestros pueblos. En lo personal en torno a esta temática he tenido la posibilidad de trabajar desde el arte textil, el teatro, la performance, desde hace ya al menos hace 13 años y basada en las conversaciones, entrevistas, círculos de palabra,

investigación y seguimiento de noticias y casos de tergiversación, apropiación indebida, extractivismos epistémicos, etc, tuve la posibilidad de formar un Rakizuam en torno a este tema, así mismo recopilar también reflexiones, anhelos, experiencias triunfantes en el plano de las regulaciones de este tipo de relaciones, es por esto que desarrollé esta norma y la presento patrocinada por comunidades que se interesan en defenderla para que sea parte de nuestro cuerpo normativo en la próxima constitución de este país.

Regular relaciones entre naciones en torno a las creación y conocimientos colectivos transgeneracionales preexistentes, para poner fin y evitar toda clase de apropiación indebida, plagio, piratería, tergiversación, extractivismo epistemológico, abuso y la aberrante discriminación colonial que aún perpreta vulneraciones a los derechos de los pueblos y primeras naciones por encontrarse naturalizadas sus lógicas en nuestra sociedad. Se menciona a la academia, cadenas comerciales, políticas asociadas a los emprendimientos, entre otras, instituciones e instancias involucradas y convocadas a ceder en igualdad de condiciones todos los benéficos que obtuvieron y obtienen por el uso de nuestras creaciones, en forma proporcional a las generaciones involucradas en las creaciones colectivas de naturaleza inapropiables, de las que han hecho usufructos, lejos del consentimiento y prácticas de reciprocidad que en forma justa y equilibrada debiesen recibir los pueblos y naciones preexistentes involucrados.

La norma propone regular esta relación desde la perspectiva y epistemas de los mismos pueblos y naciones preexistentes, así como la reparación de las vulneraciones sistemáticas a nuestros derechos en torno al conocimiento y formas propias de generarlos, dar garantías de no repetición; proponiendo el derecho propio de cada pueblo nación como primer articulado regulatorio de las relaciones y así mismo el reconocimiento urgente de autorías y coautorías en creaciones de todo ámbito pasadas, presentes y futuras donde los pueblos naciones preexistentes han generado creaciones y conocimientos. Así mismo se pone límite a la creciente imposición que exige a las y los portadores y sostenedores de los conocimientos y creaciones colectivas a tener estudios occidentales para circular lo que estandariza el conocimiento, atrofiando la diversa y distinta capacidad de regenerarse y transformarse desde sus metodologías y sistemas propios en forma coherente y eficaz.

La norma explica que se requiere que el Estado reconozca el epistemicidio y la urgente necesidad de destinar espacios, infraestructuras y recursos suficientes a través de políticas públicas a lo largo y ancho que permitan en forma urgente desarrollar esta transformación para beneficio total de la

sociedad en su conjunto y para el desarrollo pleno de las ciencias, artes, técnicas y tecnologías de factura única en el mundo de origen milenarios en este territorio

El continuo creativo de las naciones preexistentes requiere en forma urgente desarrollarse sin obstáculos, sin la perversa amenaza, constante y naturalizada del saqueo y usurpación de sus creaciones colectivas transgeneracionales preexistentes; la tergiversación que vacía su sentido y fines últimos cada día; la apropiación indebida, el extractivismo epistémico, la invisibilización de autorías individuales y/o colectivas, tratos peyorativos y bullying; discriminación positiva hacia nuestros cuerpos de conocimiento y metodologías de generación de los mismos, nuestras creaciones e innovaciones, la subyugación de nuestro sistemas de generación de conocimientos a otros sistemas de creación y evaluación occidentales; la obligatoriedad o forzamiento a inscribir las creaciones colectivas en sistemas propietarios cuando por naturaleza son creaciones inapropiables y se encuentran adscritas a un sistema de códigos estéticos, religiosos, epistemológicos, económicos, lingüísticos e históricos propios. Este cuerpo de creaciones cobra su sentido en el Ad Mapu derecho propio mapuche, y en los sistemas de normas propios de cada una de las demás naciones y pueblos preexistentes al Estado, los que conforman nuestra propia forma de ser que ha resistido hasta el hoy.

Las creaciones colectivas transgeneracionales preexistentes son una fuente incalculable de riqueza, conocimiento e inspiración multidimensional para las sociedades humanas en su conjunto. Sin embargo, las fuentes desde donde emanan y sostienen hasta el día de hoy los conocimientos, no se han visto beneficiadas en forma proporcional a su gestión y agencia transgeneracional y en volumen proporcional a todas las generaciones involucradas. El Estado y sociedad chilena ha sido excluyente con quienes son la fuente viva y portan, son creadores y sostenedores de los conocimientos y los sistemas de generación de los mismos, lo que se debe reparar del modo que las comunidades decidan y dar garantías de no repetición.

El Mapuchedungun y demás idiomas originarios, continúan generando saberes en todas las dimensiones de la vida, que benefician a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no han sido reconocidos como creación colectiva transgeneracional preexistente.

El hecho de que estos conocimientos y la forma de generarlos se compartan con el mundo no está en discusión, por ello el Estado debe garantizar el derecho a acceder a dicho conocimiento en su forma propia de generarse, lo contrario, a nuestro juicio corresponde a otra manifestación inaceptable de racismo y colonialismo.

El despojo territorial que ha sufrido nuestro pueblo, es la razón de nuestro empobrecimiento, y tiene múltiples dimensiones. Una de ellas también es la apropiación desvergonzada de nuestras creaciones colectivas ya sean lingüísticas, artísticas, científicas, arquitectónicas, estéticas, técnicas y tecnológicas propias, entre otras haciendo una práctica habitual y naturalizada los extractivismos epistémicos.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

1º El Estado Plurinacional de Chile, reconoce y garantiza la protección de todas las creaciones colectivas transgeneracionales preexistentes que han emanado de la estrecha relación entre las naciones y pueblos originarios con su territorio y todas las existencias, desde sus epistemologías, filosofía y religión construyendo con ello su propio sistema de conocimiento y generación de los mismos. Consecuencia de esto es que el Estado reconoce el derecho propio mapuche Ad Mapu como vehículo para el entendimiento como puentes comunicantes para ambas sociedades, para el digno respeto de la filosofía Ad mapu, la política Kollang y Parlamento, el Arte Textilería Nren mapuche entre otras artes y ciencias, y así mismo con el cuerpo de conocimientos y epsitemas de cada uno de los pueblos y naciones preexistentes que han resistido y sobrevivido al genocidio y epistemicidio hasta hoy perpetrados.

2º El Estado Plurinacional de Chile reconoce y garantiza el derecho a escoger como primera opción estos sistemas de conocimientos propios y sus formas de generarse como vía para resolver los desafíos que emanen del hecho de existir, asegurando para ello todas las condiciones, sancionando según decidan los pueblos y naciones originarias, todo aquello que atente contra este derecho.

3º Cualquier ámbito de la cultura occidental o winca que tenga relación directa o indirecta con la vida, saberes, prácticas e intereses de la Nación Mapuche y demás naciones y pueblos preexistentes, debe recibir el consentimiento de las comunidades y organizaciones representativas e interesadas, las que así también tendrán el derecho de vetar las iniciativas que consideren perjuicio para sí.

4º El deber de cada institución e iniciativa que se vincule con las creaciones colectivas transgeneracionales y su forma única de generar el conocimiento de la Nación Mapuche y demás naciones y pueblos preexistentes, consistirá en velar para que en todo lo relativo al proceso de vinculación con los

diversos cuerpos y sistema de saberes, sean estos consultas, trabajo de campo, entrevistas, creación de obras de cualquiera de las artes, investigaciones científicas, experimentos e investigaciones neurobiológicas, biogenéticas, entre otras, se desarrolle en forma pública a través de medios masivos, tanto la propuesta como sus procedimientos y alcances tangibles, pudiendo evaluar los pueblos y naciones preexistentes su pertinencia y consecuencias epistémicas entregando previamente su consentimiento libre e informado, resguardando el compromiso de nombrarles autores, coautores de lo creado y no como meras fuentes informativas, haciéndoles parte de los beneficios en igualdad de condiciones.

5º Lo establecido en el inciso anterior rige, para el área de investigación científica, académica, industrial, artesanal, artística, económica, histórica, patrimonial, o cualquier otro tipo. Por ello es prioridad reconocer las autorías, co-autorías, es un primer paso, para construir una sociedad, respetuosa, verdaderamente pluricultural, liberada de todo vestigio colonial.

6º El Estado reconoce el epistemicidio histórico naturalizado que relegó los sistemas de saberes de los pueblos y naciones preexistentes al lugar de vulneración estructural de derechos. Este reconocimiento funda el derecho a acceder a los conocimientos propios, escogiendo quienes serán sus kimlefe, kimche, profesores, tutores y referentes, cuales serán sus tratamientos médicos, sus propias metodologías de generación de conocimientos y regulación de los mismos y exige solucionar las tergiversaciones del conocimiento transgeneracional, teniendo como prioridad el disolver toda posibilidad de malinterpretar, falsear o deformar el espíritu colectivo del conocimiento transgeneracional, la estandarización y/o parálisis, estancamiento o atrofia del conocimiento colectivo transgeneracional preexistente, en manos de la academia, cadenas comerciales, slogan institucionales, emprendimientos particulares, etc. Así el Estado se compromete a la repatriación de los objetos, obras y metodologías usurpadas durante los procesos de guerra, genocidio, despojo territoriales y prácticas racistas coloniales que han sufrido el pueblo nación Mapuche y demás naciones y pueblos preexistentes.

Mecanismo de exigibilidad

1º Las Naciones Originarias crearán junto a el Estado Plurinacional de Chile un cuerpo normativo especial para proteger los sistemas de generación de conocimientos, los conocimientos, sus prácticas e innovaciones, con fuertes sanciones a quienes incurran en plagios o piraterías intelectuales, biopiraterías, apropiaciones indebidas y extractivismos epistemológicos, invisibilizaciones de autorías, coautorías, tergiversaciones, bullying, discriminación o trato peyorativo

de las creaciones, las y los creadores, sistemas de generación de conocimientos y conocimientos colectivos transgeneracionales preexistentes.

2º Esta normativa deberá convocar al menos 90 por ciento de personas de naciones preexistentes de las cuales a ninguna se le exigirá tener títulos profesionales de ninguna índole, instancia en la cual no mas del 50 por ciento podrán tener cargos académicos pudiendo estar representadas todas las comunidades e instituciones que hayan hecho usufructo del saber preexistente sin prestar a cambio la valoración y beneficios proporcionales que correspondieron o corresponden a las y los verdaderos autores.

Estas personas e instituciones estarán obligadas y será su responsabilidad participar para ser testigos de la formación de la norma regulatoria de estas relaciones.

3º Este cuerpo normativo deberá disponer de una institución especializada que garantice la protección de estos saberes y que impulse iniciativas de reconocimiento a los epistemicidios históricos y al actual extractivismo intelectual y práctico colectivo mapuche y demás naciones preexistentes.

4º El Estado debe impulsar políticas de reparación e implementar garantías de no repetición de los delitos y vulneraciones de derechos perpetradas en torno a la usurpación de conocimientos y epistemologías.

5º En caso de que los pueblos accedan a compartir sus saberes, las personas que tomen y usen las creaciones deberán emitir informes públicos y compartir todos los beneficios que resulten de aquello con las comunidades de naciones y pueblos preexistentes tal como ellas lo determinen según se establezca en la normativa y a través de las instituciones que han decidido constituir que agrupen a las y los creadores y sostenedores del conocimiento tradicional vivo.

6º Las instituciones educacionales, universidades, liceos , escuelas, pre-centros de enseñanza pre-escolares, museos, centros patrimoniales, etc., deberán y tendrán la responsabilidad de convocar a personas formadas para ello, provenientes de los pueblos y naciones preexistentes, evitando exigir que sean personas tituladas en la academia occidental, de modo de asegurar la no estandarización del conocimiento y la tergiversación por parte de los mecanismos de conocimientos y retórica winca, y la consiguiente consecuencia de instalación de imaginarios que no existen y están basadas en interpretaciones individuales y segadas respecto a las epistemologías colectivas y transgeneracionales preexistentes, de esta forma asegurar la presencia del conocimiento y sabiduría

colectivo transgeneracional preexistente. Estas normas existen en beneficio de las relaciones que emanan entre naciones y pueblos junto al entorno y conocimiento vivo, reconociendo y apreciando la vigencia de su fuente de origen.

7º El Estado generará una institución que otorgará espacios a lo largo y ancho del país plurinacional en donde se establecerá una regla de porcentaje territorial proporcional habitantes / territorio, que concederá los espacios relevantes, dignos y mejor equipados para realizar las actividades que permitirán compartir los conocimientos en forma permanente, constante y perseverante, según cada pueblo determine, durante todos los días del año a través de programas de formación, encuentros, exposiciones y transmisiones, etc, según el sistema propio de regulación que rige cada pueblo nación y territorio preexistente, el Estado preverá de todos los recursos necesarios para la realización plena de lo propuesto.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 147-7, de la que fue aprobados los artículos primero (9 a favor, 5 en contra y una abstención) y décimo (10 a favor, cuatro en contra y una abstención).

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°150-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades y la democratización y acceso a los conocimientos sobre los mismos, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Angélica Tepper, Hernán Larraín, Bernardo Fontaine, Roberto Vega, Cristián Monckeberg, Bernardo de la Maza, Ricardo Neumann, Miguel Ángel Botto, Paulina Veloso, Andrés Cruz, Álvaro Jofre, Adriana Cancino, Manuel José Ossandón y Luis Barceló.

Uno de los principales desafíos para las sociedades afectadas por crisis sociales, políticas y económicas, como las que estamos viviendo, es robustecer o restablecer el compromiso de las personas con el constitucionalismo, con la democracia y con el Estado como modo de organización política idónea para dar respuesta a las necesidades sociales con la urgencia requerida. En efecto, el buen funcionamiento del Estado y la colaboración de la sociedad civil son un motor para el desarrollo de la sociedad y constituyen la herramienta principal para hacer efectivos los derechos civiles, políticos y sociales de las personas.

Lo anterior deja en evidencia que tanto o más importante que la extensión del listado de derechos, es definir un modelo de exigibilidad que trace con claridad el camino que los poderes públicos deberán seguir para producir -en concreto y en el contexto nacional- un acceso efectivo de toda la población a prestaciones esenciales de salud, educación, vivienda, trabajo o seguridad social.

Existen países que cuentan con Constituciones que incorporan un extenso catálogo de derechos. Se trata de un fenómeno creciente y especialmente extendido en países que establecieron o recuperaron sus sistemas democráticos en las últimas décadas del siglo pasado. Este parece que será también el caso del proyecto de Nueva Constitución a la que nos abocamos hoy. En efecto, el artículo 65 del Reglamento contiene una larga enumeración de materias mínimas que la Comisión sobre Derechos Fundamentales debe debatir, complementado por una serie de derechos y libertades encomendadas a otras Comisiones, lo que permite anticipar que el nuevo texto contendrá un catálogo más extenso de derechos, muchos de los cuáles serán una total innovación en nuestra tradición constitucional y serán configurados de manera amplia.

Algunos autores han sostenido que esto es esperable en una sociedad plural, en la que se espera que la Constitución reconozca múltiples demandas y puntos de vista. La tarea de la democracia en una sociedad plural es lograr armonizar la pluralidad de la sociedad en una institucionalidad de la que todos se consideren parte. Una constitución debe facilitar esto, por la doble vía de ampliar el reconocimiento de distintas demandas en igual pie y de habilitar a las instituciones democráticas a lograr soluciones mediadas, acordadas, negociadas entre distintos grupos.

En este punto es que se debe constatar que un catálogo de derechos amplio plantea diversos desafíos:

a. El primero referido a los conflictos entre los derechos y entre derechos y otros bienes de relevancia constitucional. Mientras más amplio es el catálogo, más probable será la existencia de estos conflictos.

b. Un segundo desafío se relaciona con nuestro actual problema constitucional, en cuanto se le reprocha a nuestro orden constitucional el restringir en exceso a la democracia (la “neutraliza”), acusándose un excesivo protagonismo de órganos como el Tribunal Constitucional. Debe advertirse que también un catálogo más amplio de derechos podría el día de mañana ser interpretado como un límite muy amplio a las decisiones de las mayorías.

c. Un tercer desafío aplicable en forma particular a los derechos sociales radica en que, ante necesidades infinitas y recursos limitados, siempre existirá la necesidad de priorizar, lo que puede implicar que determinados derechos y expectativas consagrados en el nuevo texto, queden en segundo plano en cuanto a su exigibilidad material.

Sobre este último reto, vemos con especial preocupación que el derecho de acceso equitativo y la consecuente democratización de los conocimientos, las culturas, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, las artes, los patrimonios y las humanidades que esta Comisión está llamada a impulsar, sean consideradas por el intérprete como declaraciones meramente programáticas que no impulsen un cambio material y sustantivo en el acceso a estos bienes sociales de primera relevancia para que el cambio constitucional logre impulsar la evolución de nuestra sociedad hacia una más justa y libre.

En efecto, es el cambio cultural -y no simplemente un nuevo texto-, lo que permitirá que la Constitución se constituya en un símbolo de unidad que articule la vida política de nuestro país⁶. La cultura y las artes son parte fundamental de la vida de las sociedades y de los individuos, nos permiten desarrollar el pensamiento crítico, el juicio, valorar la diversidad, impresionarnos y movilizarnos ante la desigualdad y ampliar nuestras visiones de la igual dignidad. Las sociedades democráticas han entendido su importancia y su relación intrínseca con la libertad, con la cohesión social y con la participación y contribución de todas y todos a la solución de los problemas públicos.

Así, y siguiendo el modelo de exigibilidad de Constituciones como la Suiza, promovemos que el establecimiento de un acceso equitativo a los conocimientos, las culturas, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, las artes, los patrimonios y las humanidades se instituya como un objetivo social

prioritario para el Estado, entregando su diseño al legislador y su concreción a la administración.

Complementando lo anterior, a través de esta iniciativa promovemos transversalmente la democratización y la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en la cooperación con el Estado en estos bienes sociales fundamentales, entendiendo que una evolución cultural cómo la que nuestra sociedad anhela, debe impulsarse con la participación de las personas en un sentido amplio, reconociendo espacios de participación y la libertad de elección y la posibilidad de emprender e innovar en la satisfacción de necesidades públicas, no solo para que esto ocurra con la urgencia requerida, sino también, en tanto constituye un contrapeso democrático fundamental.

Por último, planteamos la necesidad de que el legislador regule una institucionalidad que impulse y coordine la actuación de los órganos competentes para promover la democratización y el efectivo acceso a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades, cómo un desafío permanente del Estado.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Art. X. Serán objetivos prioritarios del Estado:

1. Promover el acceso libre e igualitario de todas las personas a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades, los saberes y tradiciones ancestrales, locales y territoriales, junto a los saberes y tradiciones populares, rurales y los conocimientos estéticos.

2. Promover de manera descentralizada y diversificada la creación, el desarrollo de la cultura, de la investigación científica, técnica y tecnológica y de la innovación, en beneficio del interés general. Estas actividades serán incentivadas y apoyadas por el Estado.

3. Impulsar un desarrollo armónico y sostenible, mediante la conciliación de los derechos y deberes relacionados con la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad y el patrimonio histórico, cultural y artístico de la nación; con el desarrollo de actividades económicas y el avance en bienestar social y en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.

4. Promover en las condiciones y límites definidos por la ley, el acceso de las personas a la información que posean las autoridades públicas y de participar en la elaboración de las decisiones públicas con incidencia en los sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades, especialmente en el nivel local.

5. Promover la colaboración y las alianzas público privadas para desarrollar estos objetivos, u otras innovaciones que excedan las capacidades del Estado, pudiendo condicionar los apoyos estatales, en particular, a que se garantice la calidad y la coordinación.

Artículo XX. Para cumplir con los objetivos detallados en el artículo anterior el Estado actuará por medio del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley de Presupuesto de la Nación.

La legislación y su posterior aplicación deberán respetar los principios de razonabilidad, progresividad y no discriminación, así como también los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución.

Art. XXX. El legislador deberá crear un Sistema nacional de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades, encargado de promover y coordinar la implementación y evaluación de las políticas públicas, planes y programas encomendadas a los órganos de la Administración del Estado competentes.

El legislador deberá regular este Sistema determinado sus objetivos, integrantes, funciones, atribuciones, criterios de priorización -entre los que se deberán incluir los de descentralización, igualdad de género, interculturalidad e inclusión-, mecanismos de coordinación y colaboración entre entidades e iniciativas estatales, privadas y organizaciones de la sociedad civil y demás obligaciones vinculadas a la transparencia y el acceso a la información del Sistema, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía.

Uno de los objetivos de este Sistema será incentivar que el Estado, las universidades, las empresas y la sociedad civil, desarrollen y coordinen procesos de investigación, innovación, promoción, soporte, financiamiento, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral y sostenible del país, de acuerdo con la ley.

Art. XXXX. Es deber del Estado utilizar las mejores soluciones técnicas y tecnológicas disponibles y la evidencia científica más reciente para que

su funcionamiento sea eficiente, elevar los estándares de los servicios públicos, y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los asuntos de interés público.

Art. XXXXX. Es deber de todas las personas promover y cuidar el desarrollo de los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades.

El Sistema educativo, en todos sus niveles, promoverá el pleno desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, para promover la tolerancia, el pluralismo y la paz social. Corresponderá al Estado y a la comunidad toda, impulsar el desarrollo de la cultura, de la investigación e innovación científica y tecnológica, de la creación artística y promover la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de la nación, en los establecimientos educacionales del país.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 150-7, la que fue aprobada por 12 votos a favor, 1 voto en contra, y 2 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°435-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el ambientes favorecedores del conocimiento , cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Carlos Calvo, Wilfredo Bacion, Eric Quiroga, Tania Madriaga, Isabel Godoy, María Rivera, Bessy Gallardo, Carolina Vílchez, Vanessa Hoppe, Jorge Abarca, Francisco Caamaño (ver firmantes).

La generación de conocimientos diversos, de una ciencia versátil, de una tecnología innovadora, de un arte pleno de sentido y de la puesta en valor del patrimonio, emerge en ambientes favorecedores del vínculo afectivo.

Somos capaces de integrar las experiencias grises con las experiencias violetas, para cocrear un país que sitúe al centro de sus prioridades, de sus determinaciones y acciones, el respeto, la dignidad y el cuidado de todas las formas de vida.

Desde nuestro paradigma, en el Principio Biocéntrico, los sistemas de conocimiento, ciencia, tecnología, arte, cultura y patrimonio son una expresión de potenciales biológicos subyacentes en cualquier persona o manifestación de vida. Sin distinción, la capacidad de conocer, de investigar, de crear soluciones, de llevar a cabo una obra de arte, son parte constitutiva del ser humano y también de la naturaleza. Expresar estas capacidades y desarrollar estos potenciales, dependerá del ambiente. De lo favorable que puedan ser, por un tiempo acotado o prolongado, de manera casual o intencionada, para el aprendizaje y evolución de ese organismo.

El estado se obliga a crear espacios nutricios, abiertos para el desarrollo y expresión de los potenciales genéticos de cualquier persona, en avanzados recursos multimedia educativos, de las últimas investigaciones sobre astronomía, de un poema de Gabriela, de las flautas chinas de Andacollo, de las vasijas diaguitas, de las balsas changas, de un bosque de algarrobos o de los bosques submarinos de la caleta de Chañaral de Aceituno, lo que emerge, en cada uno de estas cúspides culturales y naturales, es producto o resultado de un ambiente propicio y de las interrelaciones que allí se entrelazaron.

Hay suficientes evidencias que demuestran que los ambientes amenazantes, restrictivos, rígidos y controladores, ocasionan la defensa o inhibición del organismo. El despliegue natural de un ser aprendiente, colmado de originarias aptitudes, comienza a replegarse, quedando a la luz, sólo aquellas competencias aceptadas. Aquellas que “interfieren”, “no son importantes”, o están desacreditadas, se guardan, se duermen, o se olvidan...

¿Qué ambientes, entonces, son los óptimos para facilitar aprendizajes amplios, la generación de múltiples competencias, el desarrollo de una diversidad de conocimientos, de una ciencia versátil, de una tecnología innovadora, de un arte pleno de sentido y de la puesta en valor del patrimonio?

Como lo señalaba Rolando Toro (2014, Toro,C), “La afectividad se refiere específicamente a lo que se ama, aquello que se manifiesta subjetivamente como ternura, amistad, altruismo, amor universal, afinidad por la vida. Es una disposición abierta, una inclinación permanente de cuidado y empatía con las personas y con todo aquello que está vivo”.

Nuestra propuesta está orientada a una reestructuración de los valores, capacidades y disciplinas humanas, en función del respeto, cuidado y potenciación de la vida. En esta perspectiva, el objetivo es la conexión con la vida, su metodología implica el desarrollo del vínculo afectivo consigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Las interacciones buscarán facilitar ambientes nutricios

en donde los potenciales de cada organismo puedan expandirse y desarrollarse. A través del vínculo afectivo, es posible lograr una mayor implicancia corporal, emocional, social e intelectual, que estimula la motivación y la perseverancia por aquello que se desea conocer, resolver, investigar, crear, valorar y cuidar.

Crear ambientes nutricios para el desarrollo del vínculo afectivo, en función del respeto, cuidado, donde los potenciales de vida de cada organismo, puedan expandirse y desarrollarse en forma libre, confiada, creativa, segura, de colaboración, fortalecedora, autónoma y valorada.

Avanzamos hacia ambientes que, en vez de oprimir, otorguen libertad; que, en vez de controlar, confíen; que en vez de coartar la creatividad, la exalten. Ambientes que, en vez de suprimir los tiempos de curiosidad y juego, los brinden y los respeten; que, en vez de ocuparse de los resultados, se ocupen de los procesos, que en vez de contagiar miedo, contagien seguridad y en vez de competencia, busquen la colaboración. Ambientes que, en vez de imponer, propongan que en vez de amenazar, transparenten su aprehensiones, que en vez de debilitar la identidad con mecanismos homogeneizantes, la fortalezcan y la celebren en su irrepetible autenticidad. Ambientes que, en vez de la dependencia, forjen autonomía y que en vez de calificar con números, retroalimenten en base a lo que es posible valorar y agradecer.

Como puede apreciarse, la perspectiva que sostiene el Principio Biocéntrico, asume un cambio radical en las formas de relacionarnos que hemos desarrollado durante siglos o milenios de estados patriarcales y mercantiles, y de razón instrumental. Implica un cambio en las formas y los fines de la producción, la investigación, la educación, las relaciones laborales, familiares, etc. Para realizar esta deconstrucción y reestructuración valórica no basta la teoría, sino que, es necesaria la práctica constante y cotidiana en todos los ámbitos de convivencia, avanzando hacia un nuevo proyecto civilizatorio, que trabaje por y para la vida.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Art xx: Será deber del Estado implementar políticas para crear espacios y tiempos nutritivos afectivamente e inclusivos en los cuales se facilite a todas las personas el desarrollo de sus potenciales humanos y de conocimientos respondientes a cada territorio, cultura, comunidad, en las áreas de ciencia, tecnología innovadora, arte y patrimonio cultural y natural.

Un Estado descentralizado, permitirá desarrollar un currículum para cada territorio, conociendo además, su cultura e historia , así como la flora y fauna local. La educación a deberá destinar los recursos necesarios, materiales y humanos, que acompañen estos procesos de generación de conocimiento y asegurarse que los conocimientos en todas las áreas logren una sociedad más culta, que permita participar en todos los procesos de la vida social, política, económica, ecológica y otras, con éxito.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 435-7, la que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°188-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el rol del Estado en materias de culturas, artes y patrimonios y garantías de la participación de los pueblos en ellas , cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Ignacio Achurra, Jorge Baradit, Mario Vargas, Andrés Cruz, María Trinidad Castillo, Loreto Vidal, Adriana Cancino, Ramona Reyes, Francisco Caamaño, Margarita Vargas, Marcos Barraza, Carolina Vilches, Cristina Dorador, Ingrid Villena, Manuela Royo y Gaspar Domínguez.

Estamos viviendo tiempos de grandes transformaciones sociales, económicas, humanas y culturales. Ya sea por el cambio climático, la globalización, el feminismo, la crisis del neoliberalismo, la crisis pandémica, entre otros, se nos presenta un momento para pensar nuevas prácticas concretas para desmontar las hegemonías, las universalidades, las verdades dadas, y, al mismo tiempo, dar pie a una rica dinámica de alternativas horizontales y de creación individual y colectiva del país que somos y seremos. Se trata, ante todo, de proponer nuevas culturas emancipadoras.

Comprender las experiencias sociales que emanan desde prácticas históricamente excluidas amplifica los conocimientos mucho más allá de lo que se ha considerado como realidad social en la tradición científica y filosófica europea. Dichas tradiciones son identificadas como parte de una razón indolente, como señala Boaventura de Sousa Santos, en tanto ellas no reconocen suficientemente la riqueza cultural de los pueblos, e, implícitamente, presuponen teorías que

desperdician la vasta experiencia humana y el entramado de estos pueblos con sus cosmovisiones, espiritualidades, modos de entender la tierra, modos de producción, entre otros.

Esta indolencia se la cuestiona por cuatro rasgos: su carácter impotente (que no se puede hacer nada frente a una necesidad concebida como exterior a ella misma), arrogante (que totaliza desvalorizando la experiencia que nos rodea), metonímico (que reduce el mundo a través de un achatamiento del orden al presente) y proléptico (que concibe el futuro a partir de un tiempo lineal). El desarrollo tiene un horizonte futuro y está definido por la monocultura imperante, por lo que para alcanzar ese estadio hay un camino específico que todos deberíamos seguir.

Cada uno de estos rasgos impone aplastantes pesos a la comprensión de la realidad social. Aquí cabe considerar la noción de una "sociología de las ausencias", aquella que revela la diversidad y la multiplicidad de las experiencias inherentes a las prácticas sociales y las hace creíbles, en contraposición a la credibilidad exclusivista de las prácticas de la globalización hegemónica.

Pero esta sociología de las ausencias necesita complementarse con una "sociología de las emergencias", que expande el campo de las experiencias posibles, contribuyendo a mostrar que la mayor cantidad de ellas permite disponer de más experiencias posibles en el futuro, esto es, un verdadero multiplicador cultural. Esto permite entender que la temporalidad no es unilineal ni monocultural, sino que esta nueva dimensión de la temporalidad posibilita desacelerar el presente, otorgándole un contenido mucho más denso que el instante fugaz entre pasado y futuro.

Así, buscamos adentrarnos en un cambio en las formas en que nos hemos relacionado, por lo que el Estado cultural que proponemos en la Convención Constitucional abre la posibilidad de construir una nueva relación para el país que anhelamos, creativo y profundo, de múltiples manos en su edificación.

Esto es ampara en que las culturas, las artes y los patrimonios nos han permitido poner afuera y convertir en lenguaje, en contenidos, nuestra conciencia que emerge del vínculo que establecemos con la naturaleza, con nuestro territorio, con comunidades, con las otras personas, con nuestro pasado. Y ese espacio vivo, en constante proceso de transformación y conservación, es en el cual, desde todo lo que somos, nos desciframos, nos descubrimos en quienes somos, nos conectamos con nuestra memoria y nos sentimos parte.

Allí es donde surge la posibilidad de transformarnos y de transformar nuestro mundo, es allí donde surge la posibilidad de intercambiar y vincularnos con otros mundos, sin extraviarnos de quienes somos y de la comunidad a la pertenecemos. Y este ejercicio humano se despliega a partir de lo que somos y de lo que hemos construido.

Consagrar un país, un Estado, una sociedad, que reconozca este ejercicio, lo comprenda y garantice como derecho humano colectivo e individual, nos permitirá el buen vivir, la felicidad y la sobrevivencia. Es importante recalcar que las culturas no nacen de las personas como individuos sino en la relación de unos y otros. Las culturas son necesariamente un proceso colectivo.

Las culturas en la Constitución de 1980 y en la experiencia comparada.

Lo expuesto tiene un correlato en que el texto constitucional actualmente vigente sólo menciona a las culturas en cinco puntos, de manera desperdigada e inconexa, generando un grave detrimento en la comprensión de los fenómenos de transformación social. A saber:

1. En el derecho a la educación (artículo 19 N°10, mencionando que son roles del Estado “...estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”);
2. En la libertad de creación y difusión artística (artículo 19 N°25);
3. En el derecho de autor (artículo 19 N°25, señalando que se garantiza el “...derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”);
4. En el objeto del Gobierno Regional (artículo 111, donde “La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región...”), y
5. En las finalidades de las Administraciones comunales (artículo 118, donde “Las municipalidades son corporaciones autónomas (...) cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”).

Es importante destacar que el ingreso de las culturas al mundo constitucional se dio progresivamente a lo largo del siglo XX. Específicamente, fue en la Constitución de Austria de 1920 que se reconoció por primera vez, siguiendo

la Constitución de Letonia de 1922, luego la Constitución de El Líbano de 1926 y la Constitución de Japón de 1947.

Sin embargo, todas estas innovaciones sobre las culturas estuvieron motivadas por diversas razones: mientras austriacos se centraron en la protección de las minorías locales, letones tuvieron como objetivo reafirmar su autonomía tras el proceso de independencia del Imperio Ruso. En tanto, los libaneses la tuvieron en cuenta para impulsar un desarrollo regionalista, así como japoneses lo instalaron post segunda guerra mundial como un derecho para restablecer un nuevo estándar de bienestar económico y social.

Lo anterior lo mencionamos porque las culturas posibilitan diversas expresiones y manifestaciones que curan el alma de los países. Por esa razón es que los países que han alcanzado mejores niveles de desarrollo humano y respeto por los derechos humanos son los que más invierten y fomentan los ámbitos culturales.

De esa manera, podemos citar numerosos casos en que las culturas tienen espacios a nivel constitucional. España hace mención del derecho de acceso a la cultura, así como a la conservación patrimonial; Bolivia se asocia a avances en cultura en tanto expresiones de autonomía de los pueblos y naciones indígenas, interculturalidad y derechos culturales; México suma características interesantes por su declaración de pluriculturalidad, que se concretiza en un derecho a la educación que considera el respeto a las culturas; y así sucesivamente en los más de 150 países que recogen este tema.

Ahora, la irrupción de las culturas en el ámbito constitucional no hace su aparición espontáneamente, sino que va acompañado de un trabajo a nivel internacional, en el cual debemos considerar que hubo avances en el que América como continente fue pionera.

Fue en abril de 1948, cuando se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no sólo se creó el primer catálogo regional de derechos humanos, sino donde además se realizó el primer reconocimiento internacional explícito de los derechos culturales, adelantándose a la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre del mismo año, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En efecto, se proclamó en el artículo XIII de la Declaración Americana el derecho a los beneficios de la cultura, que se despliegan a través de dos derechos culturales básicos: el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, el de gozar de las artes y el de disfrutar de los beneficios del progreso

intelectual; y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales de autores por la creatividad.

A partir de entonces, ese marco normativo inicial de los derechos culturales se ha ido ampliando, a medida que se fueron aprobando nuevos tratados y convenciones. Ejemplos fundamentales fueron la sanción en 1966 en Naciones Unidas de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que contribuyeron a una consolidación y dimensión más profunda de los derechos culturales.

En el caso del PIDCP, dentro de un marco de igualdad ante la ley y de no discriminación, cada Estado se obliga a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio los derechos a la libertad de opinión y de expresión (artículo 19), de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18), de reunión pacífica (artículo 21) y de libre asociación (artículo 22), además del reconocimiento de los derechos culturales de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas (artículo 27).

A su vez, en el caso del PIDESC, los derechos que involucra en general se realizan a través o por medio de la acción del Estado, siendo de ejecución progresiva y de carácter programático. El cumplimiento de tales derechos depende, en buena medida, en cada país, de la utilización de los recursos disponibles y de la realización de ciertos cambios estructurales e institucionales.

Dentro de esta segunda generación de derechos humanos, tenemos que destacar lo dispuesto por el Pacto en cuanto a que, al mismo tiempo que consigna los dos derechos culturales básicos, consagra dos obligaciones importantísimas a cumplir por las políticas públicas de los Estados: primero, el deber de adoptar, a fin de asegurar el pleno ejercicio de tales derechos, las medidas gubernamentales necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura; y, segundo, el compromiso de respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Esto abre dos categorías nuevas para los derechos culturales: la libertad para la actividad creativa y la libertad para la investigación científica/artística.

En definitiva, la creciente protección constitucional de los bienes culturales es una piedra angular viva de la comprensión del Estado cultural, que se expande gracias a la protección preferentemente de los órganos estatales, así como en el rol colaborador y participativo de la sociedad, las comunidades y las organizaciones.

Porque como dice Häberle, “La Constitución no sólo es un texto jurídico o un conjunto de reglas normativas, sino que también es expresión de un determinado nivel de desarrollo cultural, es expresión de la auto representación cultural de un pueblo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas”.

Las culturas son un elemento constitutivo de nuestras identidades en las sociedades. En ese marco, resulta necesaria e imprescindible que en la gestación de la nueva Constitución se aprehenda este tema, puesto que el desarrollo de nuestros pueblos se sostiene en un imbricado vínculo temporal entre el pasado, presente y futuro.

A pesar de que se ha vuelto un lugar común hablar del carácter polisémico del concepto de cultura, precisar sus contornos es necesario para poder hablar del Estado cultural. Para eso tomamos las influencias de la Declaración de México de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, la Observación General N°21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Cultural Iberoamericana, entre otras fuentes.

Planteamos que las culturas son el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, corporales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ellas engloban, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las cosmovisiones, las tradiciones y las creencias.

Como tal, conforma un proceso amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia humana, con un carácter vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro, que abarca el vínculo con la naturaleza, la tierra y los océanos. A través de este las personas, los grupos, las comunidades y la sociedad en su conjunto, manteniendo sus particularidades y sus fines, crean y desarrollan un lenguaje, reflejando y configurando los valores del bienestar y la vida económica, social, espiritual y política de las personas, los grupos y la sociedad.

Comprende, entre otras cosas, las formas de vida, los vínculos, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la artesanía, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, los patrimonios naturales, materiales e inmateriales, costumbres y tradiciones, todas las creaciones, por las cuales las personas, las

comunidades y la sociedad expresan su identidad y el sentido que dan a su existencia.

Las culturas son el alma y el espíritu de la tribu, territorio o nación, y quienes son elegidos y elegidas como representantes del pueblo están designados para defenderla, difundirla así como trasmitirla, manteniendo la continuidad de un corpus fundamental para cimentar nuestros sentidos de vida como de pertenencia, al entramado de sus constructos, símbolos y acciones, que conducen a los conceptos de equidad y del buen vivir.

A partir de lo anterior, la nueva Constitución también es una oportunidad para reconstruir este vínculo entre los aspectos culturales de nuestras sociedades y su relevancia plasmada en la Carta Fundamental. A todo evento, cualquier constitución expresa un tipo de cultura, ya sea de forma evidente o por omisión. De éstas se desprende una cosmovisión y un tipo de sociedad en que se consagran ciertos valores para un modelo de desarrollo en específico, y una forma de relación del individuo con el Estado y viceversa.

En ese sentido, la Constitución de 1980, en aspectos generales, consagró una relación entre el Estado y la sociedad mediada por el mercado, relevando valores individualistas y egoístas por sobre principios como la solidaridad y lo colectivo como comunitario. De esta forma, se impuso un tipo específico de saber, de poder y de seres, subsumiendo la capacidad creativa y creadora de otras identidades presentes en el territorio nacional, las cuales escapan a las reglas del juego y a sus jerarquías.

Paralelamente, no hay que dejar de lado que, dada su relevancia, tanto las culturas como las artes han sido herramientas de ideologías, regímenes o sistemas económicos, para instaurarse desde ese gran pedestal. De ahí que aspiramos que se establezca que es un deber del Estado en el ejercicio de lo público, resguardar y fortalecer su existencia, desde una perspectiva comunitaria y solidaria, fortaleciendo la autonomía, las capacidades y la autogestión.

Por ello, parte importante de la crisis democrática se explica en lo mencionado. En la capacidad representativa reside justamente su calidad. Y la desafección actual se explica en gran medida producto de la ausencia de vastos sectores que han sido excluidos de su capacidad de “hacer (la) política”, por lo cual se hace urgente ampliarla.

No basta con una democracia en que se deleguen sus funciones a representantes. Debemos avanzar hacia una democracia que propenda hacia la mayor visibilidad posible de las identidades existentes, que dé cuenta de la

realidad y no la oculte, y, como fin último, otorgue las condiciones para el ejercicio democrático más pleno posible. Como plantea el historiador francés Pierre Rosanvallon, se trata de construir una democracia que amplíe su capacidad narrativa, puesto que la “democracia también significa atención a todos, consideración explícita de todas las condiciones. Esto implica, por tanto, desarrollar una representación narrativa junto con la clásica representación-delegación”⁶. Con ello, será posible construir una sociedad con individuos plenamente iguales en su dignidad, siendo reconocidos como considerados, y que en los hechos construyan una sociedad común.

Asimismo, en este problema debe cambiar de prisma el vínculo entre Estado y sociedad, por la cual se reproduce esta relación asimétrica y hegemónica del orden social imperante. De su carácter vertical y centralizado, se debe avanzar hacia un nuevo tipo (o carácter) de Estado, desconcentrado y descentralizado, que promueve fuertemente la regionalización y el desarrollo. En ese marco, ese nuevo Estado será también producto de la co-creación que emane de las comunidades y diversas culturas por medio de los diversos mecanismos de participación que contribuyan a la profundización democrática.

En definitiva, propugnamos que los conocimientos se encuentren al servicio de la buena vida de las comunidades y las personas, promoviendo que la participación en las culturas sea un fenómeno libre, que no puede ser jerarquizado. Ello no puede ser realizado por un Estado subsidiario, sino por uno social y democrático de derechos.

Apelamos a que el Estado reconozca la soberanía cultural, la cual es la piedra angular de la obtención de todos estos propósitos, en donde se “incluye todo el patrimonio de las subculturas, e identidades existentes en sus geografías, como las expresiones artísticas, del ayer” y su desarrollo.

En sintonía con lo anterior, que la creación de contenidos culturales y artísticos debieran ser valorados, difundidos, propiciados, promocionados y sean parte de la construcción del país. Las políticas públicas del país deben contar con la participación de los territorios a la hora de tomar acciones y decisiones. La creación artística no queda reducida en libros o composiciones de un autor, su existencia permite la apropiación social de este saber, que luego se manifiesta en todos los ámbitos sociales, permitiendo a su vez el ejercicio de la creación social.

La privatización de la cultura como política es tan grave para nuestro porvenir como la liberalización de la salud, la educación o el agua. Las artes nacen del alma y cómo se construyan las artes de hoy será determinante en la democracia del mañana.

Ideas Matrices

En cuanto al rol del Estado en culturas, recogemos la experiencia constitucional boliviana, abordando en primer lugar la necesidad de lograr valorar la existencia de una diversidad cultural en Chile, algo que va de la mano con el objetivo de la cohesión y convivencia pacífica de los pueblos y primeras naciones a través de la interculturalidad.

El pacto social hegemónico hasta la actualidad en nuestro país generó una dimensión cultural específica centrada en los modos de ser de una sociedad, en cuanto a sus visiones del pasado, presente y futuro, así como la elaboración de los sentidos comunes sobre el tiempo, la naturaleza y las formas de convivencia. Lo anterior redundó en la ética, los conocimientos, los lenguajes, la comunicación y la transmisión de la herencia cultural. Por ende, intentar fraguar un cimiento común para Chile, que vaya de la mano con la diversidad cultural, es un valor que se inserta en el sustrato popular como semilla del buen vivir y la búsqueda de la felicidad.

Luego, nos proponemos abrir el debate sobre el reconocimiento de las culturas, las artes y los patrimonios como parte fundamental del desarrollo integral del país.

Elas son una dimensión que atraviesa el conjunto de la vida social, apareciendo como un campo específico de acción del Estado que se debe vigorizar, con su propia densidad y autonomía. Las culturas requieren estar a la misma altura de prioridades para el Estado que lo económico y lo social, para de esa manera, superar las consideraciones de un gobierno o gestión ministerial. Debemos abarcar al conjunto de instancias, agentes, instituciones, organizaciones, comunidades, entre otras, que hacen política cultural, porque ella no se agota en lo público, sino que se expresa con especial ahínco en la sociedad.

En tercer punto, siendo Chile un país tan largo, nos parece interesante insertar la deliberación sobre la soberanía cultural, asociada a la multiplicidad de identidades en nuestro país. Ese trabajo, en un constante diálogo y participación con las comunidades y las personas, debe tener por delante la igualdad de trato y de dignidad en sus expresiones.

Consideramos que el poder de mercado quebranta y minimiza nuestras identidades y expresiones culturales, considerando, lo inequitativa de esta relación del centro con las regiones, con lo local, rural, zonas aisladas y/o rezagadas. Esto demandaría al Estado ejercer políticas culturales en pro del resguardo de las identidades.

Posterior, tomamos una materia que se ha ido desarrollando fuertemente en los últimos 30 años, como es la regionalización y el respeto a las localidades. Lo que anteriormente hablábamos, sobre las identidades culturales, tienen una manifestación a nivel comunal y regional, como también en zonas urbanas, rurales, insulares, entre otras.

Este es un punto que se comunica con el trabajo de la Constitución sobre el Estado regional y el Gobierno local, que debe engarzarse para generar los instrumentos adecuados para un desarrollo integral en esos niveles. Por ello, el traspaso de competencia desde la centralidad hacia las periferias es esencial, en particular en los ámbitos culturales, de manera que se concrete el espíritu en favor de las comunidades.

Finalmente, sumamos la garantía de que el Estado debe promover la participación incidente y vinculante de toda esta diversidad en la construcción colectiva del devenir. Esto implica permitir la incorporación más amplia de los pueblos y las primeras naciones en las decisiones públicas para ámbitos culturales, previniendo que no sólo se trata de poner a disposición los mecanismos, sino también las condiciones para la sustentabilidad de la participación en todo el país.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo 1°.- La diversidad cultural constituye la base y riqueza primordial de nuestro país.

La interculturalidad es dinámica y transformadora, siendo un principio fundamental para lograr la cohesión y la convivencia pacífica de los pueblos y primeras naciones que cohabitan en Chile. Ella es esencial para la generación de las condiciones de respeto mutuo entre las distintas identidades que se desarrollan a través del tiempo en nuestro país.

Artículo 2°.- El Estado reconoce que las culturas, las artes y los patrimonios son parte sustancial para el desarrollo integral del país, de sus comunidades y las personas.

Artículo 3°.- El Estado reconoce la soberanía cultural, promoviendo la existencia de múltiples identidades en Chile, otorgando igualdad de trato y dignidad a sus expresiones.

Es su obligación preservar, promover, resguardar, propiciar y difundir las diferentes identidades culturales en el país, en un constante diálogo y participación con las comunidades y las personas. Esto se hará de manera equitativa, resguardando el enfoque de género, la plurinacionalidad, la inclusión, el pluralismo, la pertinencia territorial, los conocimientos y los saberes ancestrales y populares.

Lo anterior se hará con arreglo a las obligaciones en materia de derechos humanos que emanen de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Artículo 4°.- Las identidades culturales se expresan a nivel comunal y regional, como también en zonas urbanas, rurales, insulares, entre otras.

El Estado promoverá y fomentará estas identidades, fortaleciendo el traspaso de competencias y recursos necesarios para el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas en los ámbitos culturales a nivel regional y comunal. Se crearán los instrumentos adecuados para un desarrollo integral del país, sus territorios y zonas.

El Estado Regional, así como los Gobiernos Municipales, deberán asegurar, fomentar y proteger a las culturas, las artes y los patrimonios, así como la investigación y la formación artística en sus territorios.

Artículo 5°.- El Estado garantizará la participación popular de los pueblos y primeras naciones con carácter incidente y vinculante en los ámbitos culturales.

Corresponderá a los órganos del Estado permitir, asegurar y fomentar la participación popular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas, planes y programas culturales, así como desarrollar medidas en favor del fortalecimiento de las comunidades, generando las condiciones para la sustentabilidad de la participación en todo el país.

Ellos deberán considerar procesos de cooperación en los cuales se identifiquen y deliberen conjuntamente acerca de los problemas y soluciones en el marco de las culturas, por medio de herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivo, que permitan la incorporación más amplia de los pueblos y las primeras naciones en las decisiones públicas.

El Estado cautelará que cualquier actividad económica se deba realizar sin detrimento de la identidad cultural de las comunidades y las personas,

debiendo la Administración realizar participación incidente y vinculante para evaluar autorizaciones, siendo estos mecanismos definidos por la ley.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 188-7, la que fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°416-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la protección de datos de carácter personal, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Francisco Caamaño, Carolina Videla, Ignacio Achurra, Alexis Caiguán, Paulina Valenzuela, Loreto Vidal, Malucha Pinto, Ingrid Villena, Francisca Arauna, Daniel Bravo y Hugo Gutiérrez.

La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos de carácter personal. El intercambio de datos y la magnitud de la recolección de información personal de parte de empresas privadas y autoridades públicas se ha multiplicado significativamente, lo que supone altos riesgos para las personas y la consecuente vulneración a la protección de sus datos. Esto plantea además un reto al ejercicio de otros derechos, como el derecho a la intimidad, a la vida privada, a la salud, educación y otros.

Los diversos tipos de tratamiento de datos que están en auge en sectores como el sanitario, farmacéutico, bancario, laboral, comercial, retail, seguros, educación, las plataformas digitales y marketplaces. Además, las diversas tecnologías o soluciones como la biometría, el internet de las cosas, smart cities y nuevas técnicas de big data e inteligencia artificial, así como la capacidad de los algoritmos de predecir y moldear el comportamiento de personas con altos grados de precisión, hacen necesario consagrar el derecho a la protección de los datos con carácter de autónomo. Por lo que es importante impulsar un rol más activo de las autoridades públicas, asimismo establecer una autoridad independiente y especializada que lleve a cabo sus tareas de manera libre de influencias externas para garantizar debidamente la eficacia y fiabilidad de la supervisión, fiscalización y sanción a las infracciones a este derecho y los demás derechos que les puedan ser adscritos.

En un mundo donde ya casi no existen acciones cotidianas, compras, movimientos, decisiones y hábitos personales que no queden registrados en alguna base de datos, nuestro desafío es garantizar que la libre circulación de la información en ningún caso justifique una reducción al nivel de protección de los datos de las personas.

Si bien, la protección de datos de carácter personal está consagrada en la actual Constitución Política, la vulneración de este derecho fundamental es sistemática, por lo que se propone un modelo global de protección de datos para afrontar los desafíos relativos a su protección efectiva.

La información relativa a las personas no está sujeta al derecho de propiedad. El derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental relativamente nuevo, vinculado con anterioridad de manera estrecha al derecho a la vida privada, pero que luego emerge como un derecho fundamental autónomo seguido del derecho de acceso a Internet⁸ más amplio⁹ y con características propias. Esto sucedió gracias al reconocimiento jurisprudencial internacional por parte del Tribunal Constitucional Federal Alemán (1983) y del Tribunal Constitucional Español (1978). La autoridad alemana declaró que, a partir del derecho general de la personalidad, “existe para el individuo, derivada de la autodeterminación, [el derecho] de decidir básicamente por sí mismo, cuándo y dentro de qué límites, procede revelar situaciones referentes a la vida propia”. Por su parte, la autoridad española consideró que “la protección de datos personales es un derecho distinto de la intimidad, tanto en su función como en su objeto y contenido”.

En vista de la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el refuerzo de la seguridad y la tutela de los derechos humanos y después de años de debate, en 1981 la Comunidad Europea aprobó el Convenio para la Protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108). Este instrumento legislativo, junto con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos y otros a nivel internacional, han establecido las bases para la protección de la información personal, pues han sido diseñados para reforzar los derechos de las personas en cuanto a la protección de su información.

Uno de los Protocolos adicionales al referido Convenio 108, abierto a la firma desde noviembre de 2021, obliga a las partes a crear autoridades de control que ejerzan sus funciones con total independencia y que constituyan un elemento de la protección efectiva de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal. Estos instrumentos, y los basados en ellos, exigen que los datos sean obtenidos de manera lícita y justa, que éstos sean

utilizados únicamente para los propósitos declarados, sean adecuados y no excesivos a dichos fines, veraces y actualizados, accesibles a la persona titular de la información, almacenados de manera segura y destruida una vez que haya cumplido dicha finalidad.

Por otro lado, en base a la investigación académica sobre lo que se ha denominado el “trabajo digital”, cuya tesis principal es que cada clic que hacemos en la red es una huella que vale dinero, se ha propuesto considerar los datos de carácter personal como una característica indisoluble del patrimonio y la propiedad privada como vehículo jurídico apropiado para el ejercicio de los derechos asociados a su protección, mediante su monetización individual y colectiva. No obstante, esta idea es incompatible con el pleno ejercicio de los derechos fundamentales ya que los datos de carácter personal, una vez considerados como informaciones relativas a la persona, no pueden ser libremente transferibles ni sujetos a las posibilidades de transferencia y expropiación intrínsecas al concepto de propiedad. Una persona no sería libre de elegir cómo utilizar sus datos una vez que los haya vendido puesto que ya no podría revocar su consentimiento. En resumen, introducir la propiedad como vehículo jurídico para la protección de los datos de carácter personal mermaría gravemente la capacidad real de las personas de hacerlo.

En la actual Constitución Política chilena, el derecho a la protección de datos de carácter personal se encuentra reconocido de manera autónoma desde 2018 por una reforma constitucional a través de la Ley N° 21.096, que establece:

Artículo 19.4°. “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos de carácter personal. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.”

En materia de ley, este derecho se encuentra contenido en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, promulgada en 1999, después de seis años de discusión parlamentaria, bajo un contexto radicalmente diferente:

Artículo 1°. “El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política.

Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos de carácter personal, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.”

En términos generales, este marco legal es insuficiente para la defensa de los derechos de las personas y desde el año 2007 se han realizado diversos esfuerzos legislativos para modificarlo y adaptarse a los nuevos estándares. El último de estos se encuentra contenido en los Boletines N°11.144-0 y N° 11.092-07, refundidos, en actual tramitación.

La Ley N°20.285 sobre el acceso a la información pública, de 2008, crea un órgano especializado en materia de transparencia y acceso, el Consejo para la Transparencia, a quien le entrega la facultad de: “Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

Conforme a su redacción, esta norma no permite a esta entidad la investigación, fiscalización o sanción en materia de protección de datos, como tampoco de instruir a los órganos de la Administración del Estado; por ello, solo se reconoce la dictación de recomendaciones.

Además, Chile ha ratificado tratados y acuerdos internacionales con diferentes organismos donde se compromete a proteger los datos de carácter personal:

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): directrices relativas a la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos de carácter personal.
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): marco de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.
- Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA).

La legislación chilena ha tenido un lento avance en los últimos 14 años, y no se ha perfeccionado la protección de datos de carácter personal. La OCDE realizó una advertencia a Chile, pues junto con Turquía, son los únicos países que están incumpliendo los acuerdos adoptados referidos a la materia, sin haber mejorado en nada su legislación.

En la región latinoamericana, Chile fue pionero en dictar una normativa sobre protección de datos en el año 1999, luego Argentina en el año

2000 y con posterioridad otros países avanzaron en sus regulaciones. No obstante, el país es de los pocos que no cuenta con una institucionalidad que regule la materia, junto con Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba. En términos generales, la región cuenta con marcos legales y autoridades de control, que han actualizado estos conforme a los estándares del Reglamento General de Protección de Datos europeo, adherido al Convenio 108 de Europa, entre otros, por lo que se recomienda seguir el camino de México, Uruguay y de la Unión Europea, pues se plantea la protección de los datos de carácter personal como un derecho humano fundamental que han incluido en sus constituciones.

La Ley N°19.628 no permite proteger el derecho a la protección de los datos de carácter personal, no considera un sistema de fiscalización adecuado y ha sido sobrepasada por los avances tecnológicos, pues no protege adecuadamente el consentimiento informado de las personas, debido a que regula la comercialización y no la protección de los datos de carácter personal, entre otras fallas. Según los expertos, las principales falencias dicen relación con la poca efectividad en la protección de las personas, la ausencia de una autoridad de control, el concepto y aplicación indiscriminada de fuente de acceso público; la falta de un catálogo de infracciones y sanciones poco efectivas; la falta de precisión por el concepto de datos sensibles; así como su obsolescencia, entendida como la falta de adaptación a las normativas internacionales, incapacidad de adaptación a los nuevos escenarios tecnológicos, entre otros.

Cabe destacar además, desde un punto de vista práctico, que esta falta de un catálogo de infracciones, de sanciones efectivas y de precisión de los conceptos de datos de carácter personal y sensibles, dificulta la determinación efectiva de responsabilidad. Si a esta complejidad le sumamos la probabilidad acotada de un fallo positivo y los costos elevados asociados a una causa de esta naturaleza, lo que se observa es una aplicación marginal de la normativa actual puesto que es poco atractiva y de difícil acceso para las potenciales partes demandantes.

Finalmente, observando lo señalado por la Ley 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos, así como el actual proyecto de ley en discusión que se inspira de manera importante en la actual legislación europea, se ha hecho la observación que hacer recaer la carga de la responsabilidad de la protección de los datos de carácter personal, de manera exclusiva en los responsables de tratamiento de datos. Esto podría tener como resultado, más que proteger efectivamente los datos de carácter personal, el generalizar la legitimidad de su tratamiento.

Una normativa de protección de datos de carácter personal vaga e incompleta crea una ilusión de protección en las personas cuyo efecto perverso es producir exactamente lo contrario.

Existen ejemplos claros de la necesidad de que Chile cuente con una regulación que garantice de manera efectiva la protección de los datos de carácter personal:

- En 2008, se comprometieron los datos de carácter personal de 6 millones de personas en una filtración las bases de datos del Servicio Electoral, de la Dirección General de Movilización Nacional (los encargados del reclutamiento militar y control de armas), del Ministerio de Educación (toda la información de los pases escolares), de las y los inscritos en la PSU el año 2005 y de una guía telefónica comercial de Santiago con 2 millones de nombres, direcciones y teléfonos. Todos, exceptuando la última, son responsabilidad del Gobierno.

- Hasta marzo del año 2016 hubo al menos 3 millones de archivos desprotegidos desde la plataforma computacional del Ministerio de Salud, de pacientes con VIH, mujeres que pidieron la píldora del día después, personas con enfermedades mentales, todas con nombre, RUT y domicilio estaban totalmente vulnerables en la red. Cerca de 100 mil funcionarias y funcionarios del MINSAL, e incluso personas externas, podían acceder a esa información privada. Se trata de la peor vulneración de seguridad informática en el ámbito de la salud.

- En 2016, la Fundación Datos Protegidos, Derechos Digitales y Corporación Fundamental presentaron un recurso de protección en contra de las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea por la implementación de un sistema de vigilancia en espacios públicos consistente en globos aerostáticos con cámaras de alta tecnología. El caso fue fallado por la Corte Suprema y constituye el primer antecedente de discusión sobre privacidad en espacios públicos y videovigilancia. Luego fue el turno de los drones de vigilancia en la comuna de Las Condes.

- En mayo de 2020 el medio digital Interferencia publicó un artículo que entregaba información georreferenciada de las personas que resultaron positivo al examen de COVID-19. Consistía de una serie de mapas de distintas comunas de la Región Metropolitana, y de otras regiones, con información actualizada del Ministerio de Salud (MINSAL). Estos mapas señalaban la ubicación de quienes tenían o tuvieron la enfermedad.

- En 2021 se tuvo conocimiento de la explotación de una vulnerabilidad en los sistemas de Facebook que permitía ver el número de teléfono vinculado a cada cuenta de los usuarios, creando una base de datos que contenía la información de 533 millones de usuarios en todos los países, 7 millones corresponden a usuarios chilenos.

Definiciones, principios, rol del Estado y nueva institucionalidad

Entenderemos por datos de carácter personal toda información relativa a una persona natural que permita su identificación directa o indirecta, es decir, que permita su identificación ya sea por la naturaleza de las informaciones, el modo en que estas hayan sido recolectadas o mediante algún tipo de operación más o menos complejo, incluso algorítmico, cuando este establezca un vínculo entre la información y la persona. La identidad puede ser física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Esto incluye, pero no se limita, a los nombres, apellidos, firma, foto, número de identificación personal, número de pasaporte, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección IP, trazadores de navegación en Internet (cookies), hábitos personales como de desplazamiento, de consumo, de alimentación, etc.

Entenderemos por datos sensibles una categoría especial de datos de carácter personal, relativos a características, hechos o circunstancias de la vida privada de una persona o que puedan hacerla objeto de algún tipo de discriminación. Tales como el supuesto origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas, filosóficas, la pertenencia a un sindicato, los datos genéticos y/o biométricos, los estados de salud, la vida sexual o el género. Esto incluye pero no se limita al número de hoja médica, condición genética o médica, o toda información a disposición de un profesional de la salud, de un laboratorio, de un hospital, de una clínica, u otro establecimiento de salud. Así también, huellas dactilares, código genético, iris de los ojos, mapas de venas, cadencia al caminar, reconocimiento facial, etc.

Se entiende por algoritmo a un conjunto de reglas de funcionamiento, cuya aplicación permite resolver un problema planteado mediante un número finito de operaciones. Un algoritmo es independiente de un tratamiento informático: una hoja de cálculos en papel puede considerarse como un algoritmo. Por inteligencia artificial, se entiende un tipo de algoritmo. Los algoritmos públicos son los utilizados por las autoridades públicas, que operan al servicio del interés general, se utilizan para ejecutar o hacer cumplir la ley y suelen ser inevitables. Los algoritmos públicos son una forma de acto administrativo y las autoridades públicas que los utilizan están sujetas a la “responsabilidad administrativa”.

Primero, puesto que los datos de carácter personal son informaciones relativas a la persona, cuya protección debe estar garantizada por un conjunto de derechos vinculados a esta y al respeto que se le debe, el nuevo modelo global de protección de datos parte de la base que la protección de los datos de carácter personal es un principio desde el diseño y por defecto. Además, que su recolección y tratamiento es una excepción concreta, explícita, realizada de manera transparente, que permite en todo momento la intervención humana y bajo estricto control democrático. Los datos sensibles requieren una protección acentuada y suplementaria, su recolección debe ser realizada por autoridades públicas y su tratamiento debe estar circunscrito a la estadística pública realizada por autoridades públicas y a la investigación científica e histórica.

Segundo, considerando la responsabilidad del Estado respecto de la promoción del interés general y observando el proyecto de Ley de Gobernanza de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo⁴¹ se propone que el Estado participe y promueva activamente el desarrollo e implementación de las infraestructuras que permitan un tratamiento seguro y auditable de los datos de carácter personal, los que podrá imponer, si su protección, así como también, los derechos fundamentales y las libertades públicas se vean amenazadas y que tenga la responsabilidad exclusiva en cuanto a la recolección de los datos sensibles de las personas.

Algunas infraestructuras son esenciales, ya que sin ellas el Estado no puede cumplir con su misión de interés general; y críticas, ya que su malfuncionamiento, intencional o no, «trae como consecuencia el riesgo de paralización de los servicios del Estado, lo que se puede traducir en la cesación de muchas prestaciones públicas, desde los servicios básicos hasta la gestión de información en la entrega de prestaciones sociales».

Tercero, puesto que se hace necesario vigilar al vigilante y en coherencia con las obligaciones establecidas por el Convenio 108, se propone establecer una autoridad independiente, especializada y autónoma que lleve a cabo sus tareas de manera libre de influencias externas para garantizar debidamente la eficacia y fiabilidad de la supervisión, fiscalización y sanción a las infracciones al derecho a la protección de los datos de carácter personal.

Los principales desafíos que representa el tratamiento de la información y su interconexión con los algoritmos y la inteligencia artificial, vienen dados por: los sesgos, discriminación y exclusión de personas y grupos; el perfilado algorítmico, que aumenta las amenazas por la personalización; el reto de la selección de datos, donde debe buscarse la cantidad, precisión y la ausencia de sesgos; las máquinas autónomas, su responsabilidad y la amenaza a libertad por

la toma de decisiones de carácter automatizado. Todos estos tópicos han sido planteados por las autoridades de datos en Europa.

Además, el Ethics Advisory Group del Supervisor Europeo de Protección de Datos⁴⁶, redactó un informe en el que recogen los desafíos que plantea el tratamiento de la información: digitalización de las personas; de la gobernanza de las instituciones a la gobernabilidad a través de los datos; de una sociedad de riesgo a una sociedad punteada; de la autonomía humana y su convergencia con las máquinas; y de la justicia penal a la justicia preventiva.

Estos tópicos dicen relación con la triangularización de los datos a través de múltiples fuentes, la observación del comportamiento mediante perfiles algorítmicos que transforman gradualmente la forma en que se puede gobernar, evaluaciones de riesgo más individualizadas que hacen necesaria la transparencia de los algoritmos y la posibilidad de impugnar las decisiones por parte de las personas que son clasificadas, una nueva ética digital para intentar predecir el comportamiento criminal de antemano utilizando el resultado del análisis basado en big data y algoritmos. Por último, el papel del consentimiento de las personas, conocido como consentimiento informado, donde estas no siempre leen ni entienden completamente las condiciones y términos que acepta y la posibilidad de que sus datos sean reutilizados posteriormente para finalidades que inicialmente no estaban previstas.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X1. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, a saber qué información se conserva respecto a ella así como a decidir y controlar su uso y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que afecte sus derechos.

Artículo X2. Toda recolección y tratamiento de datos de carácter personal se realiza de manera excepcional según las condiciones que disponga la ley, siempre conforme a los principios de licitud, lealtad, transparencia, seguridad y limitación de la finalidad.

Artículo X3. Toda recolección y tratamiento de datos sensibles está prohibido, salvo en los casos específicos que disponga la ley.

Artículo X4. Los organismos públicos, dentro del marco de sus competencias legales, podrán operar y desarrollar infraestructuras de recolección,

tratamiento, acceso y reutilización de datos de carácter personal que garanticen el respeto de los derechos fundamentales.

Artículo X5. Una ley creará una entidad jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autónoma, especializada e independiente.

Esta entidad tendrá como misión proteger los datos de carácter personal, garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas naturales en lo que respecta a la recolección y tratamiento de estos, facilitar la libre circulación de la información, participar al debate social sobre gestión ética de datos, dialogar con los ecosistemas de innovación, promover el desarrollo de tecnologías respetuosas de las personas y asesorar a quienes las desarrollen para que integren la privacidad desde el diseño.

Esta institución estará dotada de las facultades necesarias para controlar a todo organismo público y privado que recolecte o trate datos de carácter personal, así como para investigar, fiscalizar, aplicar sanciones administrativas cuando corresponda, y demás facultades que le pueda conferir la ley.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 416-7, la que fue aprobada por 12 votos a favor y 3 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°599-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a la información en la era digital, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Francisco Caamaño, Carolina Videla, Loreto Vidal, Margarita Vargas, Malucha Pinto, Paulina Valenzuela, Alexis Caiguán, Cesar Uribe, Marco Arellano, Ingrid Villena, Cristóbal Andrade, Camila Zárate, Loreto Vallejos, Ericka Portilla, Hugo Gutiérrez y Francisca Arauna.

La invención y la adopción a nivel mundial de Internet han sido el escenario de nuevas formas de expresión política, social, y cultural como también de una recrudescencia de una supervigilancia del Estado sobre la ciudadanía y la vulneración de los derechos humanos, cuando en realidad debe estar al servicio de la ciudadanía para velar por un buen gobierno democrático.

En este sentido, la consagración del I) derecho a la información es instrumental al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Mientras que A) en el mundo y en latinoamérica se avanza en este sentido, B) Chile denota un importante atraso.

Asimismo, II) la actual regulación en Chile permite que este derecho se vulnere sistemáticamente, A) ya que su ejercicio pleno no está garantizado. Esto conlleva además un costo de oportunidad democrático, por lo que B) se hace necesario avanzar hacia un reconocimiento y protección real de este derecho.

Se propone III) reconocer la información como una infraestructura, creando A) un marco jurídico que garantice el acceso y reutilización de la información pública y B) las condiciones que promuevan este acceso y reutilización en el respeto de los derechos de las personas y en pos del interés general.

El Derecho A La Información Es Instrumental Al Ejercicio De Los Derechos Fundamentales Y Libertades Públicas

A) En el mundo y en latinoamérica, el reconocimiento del derecho a la información es importante. B) En Chile, sin embargo, denota un importante atraso en este sentido.

A. En el mundo y en latinoamérica, el reconocimiento del derecho a la información es importante

El proyecto Constituyente registra que 33 Constituciones del mundo actualmente vigentes consagran este derecho. España, Grecia, Noruega, Sudáfrica y otros países lo consideran en su Constitución. Francia lo consagra en su «bloque constitucional» señalando que «la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público.» Asimismo, este país ha desarrollado un marco jurídico de vanguardia para el acceso y reutilización de la información pública, estableciendo la apertura gratuita, abierta y por defecto de todos los datos cuya publicación represente un interés económico, social, sanitario o medioambiental.

En cuanto a Latinoamérica, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela lo han incorporado en sus constituciones. Buena parte de las disposiciones que algunas Constituciones de la región incorporan sobre acceso a la información pública se encuentran contenidas en la Ley Modelo Americana de Acceso a la Información Pública 2.09, desarrollada por la Organización de Estados Americanos, publicada el año 2021, estableciendo que

las personas tienen derecho a que la información recibida sea veraz y exacta, así como a acceder a ella de manera gratuita. Además, teniendo en cuenta la tendencia internacional a ampliar el rango de organizaciones que deben transparentar su información más allá del Estado, la OEA propone ampliar el alcance de la información pública, incorporando información producida por organismos privados, como empresas, gremios, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Estableciendo que estas organizaciones deberán publicar información y responder a las solicitudes realizadas en este marco cuando aquella tenga relación con la utilización de fondos públicos o con el desempeño de funciones públicas.

En este sentido, tanto México como Ecuador amplían el concepto de información pública para incluir aquella producida con recursos públicos y la recibida y producida por privados que realicen funciones públicas. La Constitución mexicana establece en su artículo 6° que «toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna». Para el ejercicio de este derecho, la Constitución establece que toda la información en poder de organismos del Estado es pública por defecto. Además, establece que la información que manejen organizaciones privadas o individuos es también pública cuando la entidad «reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.» La Constitución ecuatoriana, por su parte, define en su artículo 18 que es un derecho de todas las personas «acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.» En este país se incorporan las mismas condiciones para hacer pública información en manos de organismos privados que en el caso mexicano.

B. Chile denota un importante atraso en este sentido

El derecho de acceder a la información pública se ha consagrado como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico internacional a través de su incorporación en diversos tratados ratificados por Chile. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». El derecho de «investigar y recibir informaciones y opiniones» establece el deber de los Estados de garantizar el acceso a la información de sus ciudadanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado de Chile en 1972 establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección». La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) ratificada por el Estado de Chile en el año 1990 establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.» Finalmente, este derecho hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, adoptados por los Estados miembros en el año 2015, y se establece que los Estados miembros deberán «garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.»

Aún contando con todos estos antecedentes, el derecho a la información y libertad de acceso a la información pública no está contemplado como una garantía constitucional en el actual ordenamiento jurídico chileno. A partir de la reforma del año 2005 la Constitución incorpora el principio de publicidad: «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.» Sin embargo, no se establece de manera explícita un derecho fundamental, que obligue al Estado a crear las condiciones para garantizar su ejercicio.

Tan solo en 2008 se promulgó la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública¹⁸, la cual obliga al Estado a dar respuesta a las solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía. Estableciendo que el acceso a la información comprende «el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.» Esta establece asimismo la obligación de los órganos de la administración Estado de publicar en sus sitios electrónicos, al menos una vez al mes, determinada información sobre su estructura, facultades, personal, actividades y presupuesto. Sin embargo, hoy el derecho a acceder a información de interés público no goza de la misma protección que otros derechos, aún cuando este derecho es parte de los tratados internacionales ratificados por Chile.

La actual regulación hace que en Chile se vulnere sistemáticamente este derecho, lo que conlleva un costo de oportunidad democrático

A) En Chile el ejercicio pleno del derecho a acceder a información pública no se encuentra garantizado, por lo que B) se hace necesario avanzar hacia un reconocimiento y protección real de este derecho.

A. En Chile el ejercicio pleno del derecho a acceder a información pública no se encuentra garantizado

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que el principio de publicidad es limitado en cuanto a la información que queda sujeta a él, impidiendo que se garantice el ejercicio del derecho establecido en la ley en términos amplios. Mientras que la ley de transparencia asegura que la ciudadanía tendrá acceso «a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga» (Artículo 10, inciso segundo, Ley 20.28519), el Tribunal Constitucional ha establecido que «el artículo 8° constitucional establece un límite a la publicidad [...]. En efecto, dicha norma sólo ordena la publicidad de actos, resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos atinentes y no de toda información que obre en poder de la Administración del Estado.»

El conflicto entre la Constitución y la ley ha llevado al Tribunal a fallar en diversas oportunidades en contra de ciudadanas y ciudadanos buscando ejercer su derecho a la información, pues su solicitud entra en conflicto con las disposiciones de la Constitución. El ejercicio libre y pleno del derecho a acceder a información pública no se encuentra garantizado, como demuestran los fallos del Tribunal Constitucional que declaran inconstitucionales diversas disposiciones de la ley de transparencia.

Esto es especialmente relevante si se considera que el Estado de Chile ya ha sido condenado por no garantizar este derecho. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado a «la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías» y a «adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado.»

Dicho fallo estableció una obligación en materia de acceso a la información: «El Tribunal considera necesario reiterar que el deber general comprendido en el artículo 2 de la Convención implica la supresión tanto de las normas como de las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el

desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías (supra párr. 64). Por ello, Chile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados.»

Si bien la ley de transparencia fue un importante avance en ese sentido, Chile todavía no ha logrado asegurar la «efectiva observancia» de las garantías que la ciudadanía tiene como fruto de la ratificación de diversos tratados internacionales de derechos humanos por parte del Estado.

Esta situación se mantendrá si la futura Constitución no considera las normas que permitan el ejercicio del derecho en los términos establecidos en la propia ley de acceso a la información.

B. Se hace necesario avanzar hacia un reconocimiento y protección real de este derecho

El reconocimiento y protección del derecho a la información responde, por una parte, a una obligación de transparencia de la vida pública, de rendición sincera de cuentas, de eficiencia de la acción pública y de responsabilidad democrática de cara a la ciudadanía. Acceder a la información pública permite a las personas conocer las garantías, derechos y beneficios con los que cuentan, conocer el estado de ellas y exigirlos, tanto frente a la administración como a los tribunales de justicia. El acceso a la información pública, además, permite el control por parte de las personas, combate la corrupción, contribuye a una participación ciudadana más informada e incidente y disminuye inequidades sociales.

Esto permitirá fortalecer la labor de control de la ciudadanía frente a posibles abusos o irregularidades cometidas por organismos del Estado u organizaciones privadas, que juegan un papel fundamental en la provisión de bienes públicos o vulneran el acceso a estos. Asimismo, es fundamental que el Estado sea capaz de aprovechar todo el potencial de los datos para mejorar la eficiencia de la acción pública y procurarse de los medios necesarios para controlar y transparentar la ejecución del gasto público.

Por otra parte, es una condición para el buen ejercicio de la libertad de opinión y de expresión así como para el diálogo de la ciudadanía, la deliberación democrática y la participación vinculante. La mayor vigilancia social y

la exigencia de salvaguardar la privacidad han llevado a renovar la normativa europea en materia de protección de datos personales.

Al mismo tiempo, ha surgido la conciencia respecto a la necesidad de establecer una gobernanza que enmarque el uso de los algoritmos y que garantice que sus capacidades cumplan con los requisitos de la democracia actual: ¿qué datos, por tanto, qué modelo cultural, se utilizará para educar a las inteligencias artificiales destinadas a desempeñar un papel económico y social crítico? Además, ya que el acceso a la información pública a la ciudadanía «seguir la toma de decisiones del gobierno, participar en la toma de mejores decisiones y hacer que el gobierno rinda cuentas, (...) los gobiernos deben movilizar a los ciudadanos para que participen en el debate público y contribuyan al desarrollo de una gobernanza más responsiva, (...) innovadora y efectiva.» Por último, la transparencia acerca el Estado a la ciudadanía y «esta transparencia es el mejor remedio para la desconfianza y las teorías conspirativas.»

Finalmente, es un poderoso vector de colaboración entre órganos del Estado, de mejora de los servicios públicos, de innovación tecnológica y de investigación y acceso al conocimiento en pos del interés general. A pesar de que el espacio digital sigue una lógica crecientemente colaborativa y desconcentrada, el Estado continúa publicando su información con una lógica vertical y cerrada. Para implicar a los reutilizadores, el Estado deberá abrir, publicar y poner a disposición de estos toda la información pública: datos, métodos de innovación, de gestión, códigos fuentes, algoritmos públicos, servicios públicos digitales, y todo lo que pueda ser utilizado, reutilizado, mezclado, transformado, para innovar, proveer nuevos servicios, crear más conocimientos y bienestar. Además, se debe acelerar la puesta en común de informaciones entre administraciones y el intercambio seguro con las y los investigadores, que es una garantía esencial de la eficacia de la acción pública. Por último, dado el extraordinario poder de los estándares abiertos para estimular la innovación el uso de software de código abierto «debería ser el principio mismo de una política de innovación interna de la acción pública.»

Reconocer la información como infraestructura pública esencial

A) Creando un marco jurídico que garantice el acceso a la información y B) condiciones materiales e institucionales que promuevan su reutilización.

A. Se propone un marco jurídico que garantice el acceso a la información pública y de interés general en el respeto de los derechos de las personas y las empresas

Proponemos reconocer como información pública aquella producida o recibida por toda entidad encargada de una misión de servicio público, independientemente de su personalidad jurídica. Esta obligación de transparencia eliminará espacios que podrían encubrir actos de corrupción y mal uso de recursos públicos y fortalecerá la capacidad de la ciudadanía de ejercer sus derechos. Esto incluye datos, códigos fuente y algoritmos públicos. Lo que permitirá mejorar el análisis de política pública, alimentar el debate democrático y crear una obligación, por parte del Estado, de comunicar y publicar los algoritmos públicos y también notificar y justificar sus usos, explicar sus efectos y garantizar a toda la ciudadanía el derecho a apelar. Proponemos además el derecho a reutilizar y difundir sin restricciones y por todo medio la información pública, fortaleciendo la libertad de expresión y de prensa.

Proponemos además el paso de una apertura «reactiva» a una «por defecto», otorgando a toda persona que esté en poder de una información pública el derecho de comunicarla de manera espontánea y proactiva, incluyendo funcionarias y funcionarios. El libre acceso y reutilización de la información pública se convierte así en la norma y las excepciones deberán estar reguladas y justificadas —se reconoce en particular un deber de reciprocidad en el uso de ciertas informaciones por motivos de interés general.

Proponemos que no se pueda denegar la comunicación de una información solo por su «naturaleza»: si su comunicación es susceptible de vulnerar un derecho, será obligación de quien detenga esta información de ocultar lo estrictamente necesario para la protección del derecho en cuestión y comunicarla. Sin embargo, algunas informaciones —como los datos de carácter personal— no pueden comunicarse a toda la ciudadanía. Se reconoce esta necesidad y se otorga un mandato constitucional para determinar quién está excluido de acceso, en qué condiciones, quién tiene derecho a saber y cómo gestionar este acceso.

Además, la comunicación de ciertas informaciones debe ser rechazada, de manera excepcional, cuando pueda ser perjudicial para el ejercicio de las actividades soberanas del Estado, el interés general y demás regímenes de reserva. No obstante, siguiendo las recomendaciones de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública 2.038, se consagra una «excepción a la excepción de las reservas de información» para las informaciones que «impactan ampliamente en la sociedad» cuya comunicación no es susceptible de ser limitada: las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción.

Por último, se introducen las «informaciones de interés general» para cuando el uso de informaciones producidas por empresas privadas por parte del

Estado se justifique por motivos de interés general, el que solo puede contemplarse en un marco de respeto a la libertad de emprendimiento y el derecho de propiedad de estas informaciones y que garantice la transparencia de su reutilización por parte del Estado.

B. Se propone una política pública de flujo de la información que promueva su acceso, reutilización, mejora así como la innovación tecnológica, investigación científica y participación ciudadana

El acceso a la información pública, de interés público y a los datos de carácter personal es además una cuestión social, económica y democrática así como de confianza, seguridad y respeto de derechos y libertades. Una política de flujo de la información debe ser prioridad estratégica para el Estado. Estas están en el centro de la acción pública y deben ser consideradas como infraestructura esencial para el funcionamiento de la sociedad. El Estado «debe ser el catalizador, animando al resto de la sociedad».

Para garantizar el uso óptimo y respetuoso de la información se requiere de informaciones de alta calidad, interfaces de acceso y reutilización que integren herramientas de gestión de derechos, mecanismos de interoperabilidad, identificación, seguridad y participación de la ciudadanía en la mejora de estas. Nuestra propuesta incorpora un componente inédito que «permite» a funcionarias y funcionarios para buscar la mejor circulación posible de la información, en formatos libres, abiertos y reutilizables.

Reconocemos la necesidad por parte del Estado de producir y promover informaciones de alta calidad que son críticas para el funcionamiento de la sociedad. La creación de un «servicio público del dato» permitirá asegurar la disponibilidad gratuita e ininterrumpida de informaciones que tienen un rol especial en la creación de valor económico y social, la evaluación de políticas públicas y la mejora de los servicios públicos. Un aspecto crítico de este servicio es que quienes reutilizan estas informaciones y datos puedan participar en la gobernanza y en la mejora de estos notificando errores y sugiriendo actualizaciones.

Asimismo, reconocemos la importancia de la responsabilidad, transparencia y coherencia entre la ley y las tecnologías de la información. Debemos asegurarnos, como sociedad, de que tenemos los medios para garantizar nuestra autonomía democrática frente a la inteligencia artificial, o nos arriesgamos a que nuestras vidas sean dictadas por algoritmos entrenados sobre datos que no reflejan nuestros valores.

Además, la apertura sui generis de datos durante los períodos más álgidos de la pandemia demostró la importancia de poner a disposición de la sociedad civil informaciones y datos para promover la emergencia de ecosistemas de creación de valor social que habilitan su «utilización espontánea» para la mejora de los servicios públicos, la innovación, el emprendimiento y la participación ciudadana.

Si esta apertura fuese una política de Estado, la publicación regular de estas informaciones permitiría equipar tanto a las administraciones como a la sociedad civil para crear servicios útiles como gráficos de seguimiento nacional y territorial, simuladores de impacto de la vacunación, servicios de optimización de horarios de vacunación disponibles en cada comuna, que mejoren la vida de todas y todos.

La publicación de algoritmos públicos permitiría crear una «ventanilla única de derechos sociales» que permita a las personas acceder a todos sus derechos con una solicitud única y a las cooperativas y MyPymes acceder a financiamientos públicos de manera expedita y transparente. El acceso seguro remoto a informaciones y datos permitiría potenciar la investigación científica, que necesita utilizar informaciones de actores privados de interés general y datos de carácter personal no anonimizados.

El trabajo de diálogo, vigilancia y promoción en este sentido debe ser tarea de un órgano permanente.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Preámbulo

Considerando que el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales y libertades públicas a lo largo y ancho del país no puede excluir nuestro espacio común digital ni prescindir del control soberano de los medios tecnológicos que garanticen su ejercicio pleno.

Artículo X1 — Información pública: Es información pública la producida o recibida por todo órgano del Estado o persona jurídica de derecho público en el ejercicio de sus funciones, o que obre en poder de estos; la elaborada con recursos públicos o aquella producida o recibida por personas de derecho privado en el ejercicio de una función pública encomendada por el Estado; y todo algoritmo público, entendido como una sucesión de actos o procedimientos, informatizada o no, cuya finalidad sea producir un acto administrativo.

Artículo X2 — Información de interés general: Es información de interés general la producida por toda persona jurídica de derecho privado, independientemente del ejercicio de una función pública, cuya reutilización excepcional, por parte del Estado, pueda estar justificada por motivos de interés general y de manera proporcional.

Artículo X3 — Acceso, reutilización y reciprocidad de la información pública: Toda persona tiene derecho a acceder libremente y sin costo a la información pública y reutilizarla a través de cualquier medio a título eterno, gratuito, no exclusivo e irrestricto. Se podrá establecer un deber excepcional de reciprocidad en su uso, por motivos de interés general y de manera proporcional.

Artículo X4 — Responsabilidad algorítmica y debido proceso: Toda persona objeto de una decisión que afecte sus derechos, basada en un algoritmo, tiene derecho a ser notificada de su uso, acceder a una copia de este y una explicación de su lógica, obtener intervención de quien pueda revisar e impugnar la decisión y apelar ante autoridad competente.

Artículo X5 — Derecho a comunicar la información pública: Toda persona que, en el ejercicio de sus funciones, produzca, reciba o esté en poder de información pública, tiene el derecho de comunicarla a quien la pida y a publicarla por iniciativa propia.

Artículo X6 — Excepción al acceso de la información: Toda información pública amparada por un régimen de reserva, o cuya publicación vulneraría el derecho a la protección de los datos de carácter personal o colectiva, es comunicable solamente a la persona o personas titulares de esta, al igual que aquellos datos relacionados a conocimientos, saberes y patrimonios de los pueblos o naciones pre existentes que, en base a su autodeterminación, deseen mantener en secreto y fuera del acceso de personas o instituciones ajenas a su pueblo, al igual que toda persona o entidad que determine la ley.

Artículo X7 — Excepción a la excepción al acceso de la información: No podrán ser sometidas a régimen de reserva las informaciones que, según lo establezca la ley y a juicio de autoridad competente, permitan esclarecer y sancionar violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción pública así como garantizar la protección del patrimonio común de la humanidad.

Artículo X8 — Publicidad y reutilización de la información pública: El Estado deberá tomar las medidas que garanticen la publicidad de la información pública; promuevan su comunicación proactiva y periódica en formatos abiertos

que faciliten su reutilización, informatizada o no; y permitan a toda persona participar activamente en la corrección y mejora de esta.

Artículo X9 — Infraestructura información pública y datos críticos: El Estado deberá operar y desarrollar una infraestructura abierta que facilite la apertura, publicidad, reutilización, corrección y mejora de la información pública y que garantice la disponibilidad ininterrumpida de la información esencial y crítica al funcionamiento de la sociedad.

Artículo X10 — Infraestructuras de acceso seguro a datos por motivos de interés general: Los organismos públicos, dentro del marco de sus competencias legales y resguardando los derechos de las personas, podrán operar y desarrollar infraestructuras descentralizadas de acceso seguro a datos que faciliten su reutilización sin fines de lucro, por motivos de interés general y de manera proporcional.

Artículo X11 — Institucionalidad vigilante: Una ley creará una autoridad administrativa autónoma, especializada e independiente del Estado para proteger el interés general en el marco del derecho a la información. Tendrá las atribuciones que garanticen el ejercicio de este y podrá actuar colegialmente con la autoridad de protección de los datos de carácter personal.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 599-7. Esta se llevo a cabo por separado votandose cada uno de los articulos: Artículo X1: 10 a favor y tres en contra; Artículo X2 9 a favor y cinco en contra; Artículo X3:12 a favor y 2 abstenciones; Artículo X4 11 a favor, uno en conta y dos abstenciones ; Artículo X5: 9 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones; Artículo X6 10 a favor y 4 en contra; Artículo X7: 11 a favor y 3 en contra; Artículo X8: 12 a favor y una abstención; Artículo X9: 12 a favor y 2 abstenciones; Artículo X10: 12 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones; Artículo X11 10 a favor, 4 en contra y una abstención.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°945-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a una atención de calidad en la era digital, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Carolina Videla, Francisco Caamaño, Ericka Portilla, Hugo Gutiérrez, Camila Zárate, Loreto Vallejos, Francisca Arauna, Cesar Uribe, Marco Arellano y Cristobal Andrade.

En la actualidad, habitamos un mundo en el cual Internet y su capacidad de conectarnos progresivamente se integra a la vida social. Esto, con una cualidad clave: la capacidad de esta red informática para proveernos de información y conexiones en un tiempo que se acerca a la noción de inmediatez.

Esta cualidad de Internet ha sido incorporada exitosamente por las plataformas y los servicios digitales del sector privado con lo cual han modificado radicalmente las relaciones sociales y la naturaleza de lo que se comprende por realidad.

Sin embargo, desde el Estado este proceso se ha producido lentamente y no carente de falencias.

¿Por qué no podemos reservar con la misma facilidad una hora en un consultorio? ¿O acceder a todos los programas sociales a los cuales somos elegibles? Esta disparidad tiene efectos concretos.

A. Los servicios públicos deben promover nuestro bienestar y emancipación.

Por una parte, las innovaciones privadas han abarcado la vida cotidiana de las personas y han producido plataformas monopólicas, que concentran los datos emanados de la población. Las personas se encuentran hoy más expuestas que nunca a la vigilancia por parte del Estado e influencia de las plataformas digitales.

Por otra parte, el rezago del Estado en esta materia afecta a la población que utiliza los servicios públicos, pues pese a la implementación de diferentes políticas públicas, existe un problema de acceso y calidad en torno a la prestación de servicios. Valenzuela Levi reporta “desventajas de conectividad creadas institucionalmente”.

Estas “desventajas de conectividad creadas institucionalmente” se manifiestan en las zonas rojas, los asentamientos informales, la segregación espacial socioeconómica y la provisión dispareja de servicios públicos que restringen el acceso a estos, incluso para personas que pueden pagar una conexión fija de Internet.

Para aquellas y aquellos que no contamos con Internet o que vivimos en lugares donde la presencia física del Estado es escasa, ¿por qué no poder hacerlo por mensaje de texto? En la práctica nos vemos confrontados a la compleja, confusa y a veces conflictiva jungla de normas del Estado y a su importante burocracia.

B. La necesidad de integrar las tecnologías como vector de bienestar y emancipación

Mirado en perspectiva, estos antecedentes nos deben hacer pensar en cómo integrar las tecnologías digitales a los diferentes servicios del Estado para uso de las y los funcionarios, lo cual tiene como consecuencia inmediata una mejora significativa en la atención a la población.

Nuestro país cuenta con una ley de modernización del Estado y de mejora de la calidad de atención a la ciudadanía gracias a la tecnología. Ella estipula que la relación entre el Estado y la ciudadanía deberá realizarse «por norma» por medios digitales, y «por excepción» de manera presencial.

Nuestros avances han sido destacados mundialmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con ejemplos importantes como la ClaveÚnica, ChileAtiende, el Servicio de Impuestos Internos, ChileCompras y el Laboratorio de Gobierno.

Sin embargo, estos avances han sufrido también varios retrocesos, particularmente durante la pandemia y en los períodos de confinamiento. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina, alrededor del 50% de las personas hicieron su último trámite de manera presencial durante los períodos de confinamiento.

Así mismo, cerca del 50% de las personas que trabajan en la administración pública no han podido realizar tareas críticas durante la pandemia, muchas de las cuales se podrían realizar fácilmente con herramientas digitales. ¿Por qué sucede esto?

La digitalización del estado se ha focalizado en un enfoque presupuestario y no en la mejora de la calidad de la atención

Para que una transformación digital del Estado pueda mejorar nuestra calidad de vida, disminuir la burocracia y modernizar los servicios públicos se requiere que la ciudadanía pueda utilizar las soluciones propuestas. Debemos hacer uso de las tecnologías cuando estas sean realmente útiles para mejorar nuestra calidad de vida.

Sin embargo, en Chile casi 9 de cada 10 personas tiene acceso a Internet pero solo el 52% de la población cuenta con habilidades en tecnologías de la información básicas. Además, el 84% de los usuarios de ChileAtiende declaró que volvería a realizar trámites en la sucursal, aun con la opción de otros canales.

En Chile al 2018 existían 1.495 localidades en el país que no poseían acceso a Internet ni telefonía móvil. La mayoría en la Araucanía (312 localidades, casi 49 mil personas) y Metropolitana (29 localidades, casi 17 mil personas); 55 comunas en Chile tienen una conectividad menor al 1%⁸, lo que se traduce en que 60 mil personas, en 55 comuna, presentan conectividad inferior al 1%⁹.

Finalmente, según el BID un 18% de los hogares (900 mil personas) no tienen ningún tipo de internet; 78% del quintil más rico tienen banda ancha fija mientras en el quintil más pobre es 32%. Los antecedentes anteriores se complementan con los diferentes usos que las personas realizan con esos dispositivos y las competencias con que cuentan para realizar estas actividades.

Enfatiza el BID que un enfoque debería no solo apuntar a las competencias de la población, sino que, también, a las formas de diseño de las herramientas digitales y la disposición de los actores involucrados para colaborar con la inclusión y participación de la población en los servicios digitales.

Esta nueva cultura exige a las instituciones despojarse de la noción de «buena voluntad» de los servidores públicos para instalar una dinámica de colaboración con los sujetos beneficiados. Con ello se espera garantizar que las soluciones resulten pertinentes para los usuarios, además de asegurar que los mensajes involucrados.

A. Una transformación digital enfocada en «digitalizar la burocracia»

La ciudadanía tiene derecho a esperar del Estado y de los servicios públicos calidad en los procesos de atención. Las plataformas y servicios digitales son una buena oportunidad. Sin embargo, en la práctica, las y los usuarios se enfrentan a herramientas tecnológicas que dificultan y oscurecen la interacción con el servicio.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la situación de ingreso de migrantes al país. En términos simplificados, la legislación vigente exige que toda persona extranjera que ingresa a Chile debe inscribirse en un registro especial de extranjero que está a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) mediante la denominada “tarjeta de turismo”. Este paso constituye la primera fase en la recolección y almacenamiento de datos a la cual es sometido todo extranjero que ingresa al territorio nacional.

En el caso de los extranjeros que ingresan irregularmente, y si se les concede una visación, están obligados a realizar un nuevo registro. Junto a esto deben solicitar una cédula de identidad. Finalmente, la actual regulación entrega al

Departamento de Extranjería y Migración (DEM), dependiente del Ministerio del Interior, aplicar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas.

Asimismo, es la entidad encargada de ejecutar los decretos, resoluciones, órdenes e instrucciones que dicte el Ministerio del Interior en conformidad a la ley. El Reglamento de Extranjería (D.S. N°597) otorga operatividad al D.L. N°1094, que establece en términos generales las normativas de ingreso al país, entre las que se cuenta el deber de entregar información a las autoridades migratorias sobre los empleadores de extranjeros, lo cual obliga a las empresas, servicios o personas que tengan extranjeros sujeto a su dependencia o concedan albergue a proporcionar información de toda clase a las autoridades que se las soliciten. Esto último con el propósito de acreditar la condición de residencia en Chile de la persona extranjera.

Este engorroso proceso, que involucra diferentes organismos y circulación de los datos de las personas, experimentó un importante avance en el contexto del Covid-19 y las medidas sanitarias que se implementaron. Esto debido a la necesidad de avanzar en la digitalización y automatización de los procesos migratorios.

Lamentablemente, esta es más bien la excepción y el panorama general ha devenido en mayor desigualdad y burocracia y servicios públicos deficientes. Todo esto no contribuye al involucramiento de la ciudadanía y a la retroalimentación necesaria para mejorar el diseño e implementación de servicios públicos digitales.

Esto es el resultado de una política de «desmaterialización», es decir, la mera reproducción de la burocracia, inspirada en la doctrina neoliberal de la acción pública, la «nueva gestión pública», que ve en las tecnologías un arma formidable para controlar aún más al funcionariado y dismantelar aún más los servicios públicos.

Esta ha contribuido a debilitar la capacidad del Estado de solucionar problemas y ha tenido consecuencias en cadena: tercerización a ultranza, malas condiciones laborales, usuarios perdidos, atendidos por call centers privados y en el extranjero, funcionarios sin ya ningún sentido del servicio público.

B. Una estrategia de modernización basada en el «control» y la «racionalización»

Las tecnologías y los servicios digitales son fiel reflejo de una organización: silos, conflictos, duplicidades, desajustes estratégicos, individualismo o la ausencia de un objetivo común crean bases de datos dispersas

y de mala calidad, aplicaciones inútiles, interfaces complicadas, herramientas inútiles o inadecuadas.

La actual «modernización del Estado» cristaliza en la cuestión de los medios, dejando en el punto ciego: la eficacia real de estos servicios para alcanzar un impacto social real. La reforma sigue centrada en la reducción de costos, maltratando al funcionariado e intentando crear «economías de escala».

Por una parte, esta verticalidad no induce a la responsabilidad real de las políticas públicas, fragmentadas en su ejecución en silos administrativos responsables de los óptimos locales (informar, consultar archivos, pagar, controlar, etc.) sin ser responsables del impacto global sobre el terreno.

Por otro lado, este control excesivo sobre el funcionariado reduce aún más su margen de maniobra para resolver los problemas de las personas, lo que lleva a las y los funcionarios a priorizar el cumplimiento de los nuevos procesos impuestos por la «desmaterialización» sobre el impacto real de tu trabajo en la vida de la gente.

Es aquí cuando nos enfrentamos frente a frente fábrica misma de la burocracia: codificamos en nuestros algoritmos la inmadurez de la organización. Este paternalismo autoritario impide que la energía de las y los funcionarios puedan liberarse, creando en estas y estos una pérdida de sentido y desconexión.

Además, la paradoja de la «desmaterialización» es que, además de exclusión digital, induce un «impuesto al acceso a los derechos», como lo muestra la experiencia francesa, puesto que conlleva la aparición de actores privados que ofrecen a las y los usuarios servicios de pago para poder acceder a sus derechos.

Por último, este frenesí «neoliberal-autoritario» por el control se declina en la famosa «mutualización» de las tecnologías, que no es más que un reflejo del viejo pensamiento que si algo es centralizado, es bueno y más barato. Esta tendencia a la centralización administrativa está ampliamente descrita por Tocqueville.

Lejos de los usuarios, los grandes planes ambiciosos, a menudo fallan y no se concretan. Y cuando rara vez lo hacen, no funcionan, puesto que son soluciones uniformes que terminan por degradar aún más la calidad de los servicios públicos, sin reducir la suma de los costes que se suponía que debían reducir.

Por último, esto despoja a las y los funcionarios de toda capacidad de solucionar los problemas de la gente.

Se hace necesario reconstruir el servicio público desde la base

¿Cómo puede el servicio público cumplir su función si usuarias y funcionarios no tienen ningún poder de iniciativa, autonomía o participación?

La «transformación digital» no se trata de la desmaterialización de procedimientos sino de una capacidad de crear políticas públicas de manera diferente, en un mundo donde escribir un gran plan no garantiza su implementación, y que mejoren realmente la calidad de la atención a las personas.

Por esto, proponemos otorgar un mandato constitucional a funcionarias y funcionarios para que puedan experimentar con tecnologías para resolver problemas reales de política pública en perímetros reducidos, en plazos más cortos, reuniendo «convenciones ciudadanas» en torno a proyectos políticos concretos.

No basta lanzar encantamientos para cambiar patrones de pensamiento arraigados, se requiere una elección que se refleje en la práctica. La «transformación digital» debe ser una nueva manera de «hacer Estado» en la cual son las y los funcionarios los que reconstruyen de manera orgánica y en terreno los servicios públicos.

A. Reconstrucción «de abajo hacia arriba»: sentido, autonomía y mejora continua

Proponemos permitir que cualquier funcionario público asuma un problema recurrente en el servicio público y ofrecerle autonomía y ayuda para solucionarlo. Para esto, deben ser protegidos y se les debe permitir suficiente libertad para evaluar la forma en que deben prestarse los servicios públicos.

En primer lugar, esto es un vector de sentido: los funcionarios podrán formar equipos autónomos, experimentar en terreno, adoptar prácticas de autogestión, desarrollar soluciones sencillas paso a paso y en contacto directo con las y los personas con el fin de maximizar la utilidad social para los usuarios del servicio público.

Aquí, como lo señaló Ivan Illich, «la herramienta simple, pobre, transparente, es un servidor humilde; la herramienta elaborada, compleja, secreta, es un amo arrogante.» Las soluciones deben ser co-construidas de forma iterativa para responder a los problemas reales de la vida cotidiana, y ofrecerlas de manera opcional.

En segundo lugar, esto es un vector de autonomía: los equipos tendrán plena libertad para tomar las decisiones necesarias para el éxito del

servicio público digital, tendrán control sobre las decisiones operativas y un espacio de libertad para innovar, a cambio de la mayor transparencia posible de su trabajo (código fuente abierto, medición del impacto público, demostraciones frecuentes, documentación de fácil acceso...).

En este sentido, las herramientas tecnológicas serán «justas» ya que responderán serán generadores de eficiencia sin degradar la autonomía de las personas. Al contrario, permitirán expandir el radio de acción personal. Necesitamos tecnologías que saquen el mejor partido de la imaginación de las personas, no que la avasallen.

Por último, esto es un vector de mejora continua: los equipos no solo estarán encargados de «levantar requerimientos» o «desarrollar requerimientos de acuerdo a un plan». Los equipos están a cargo de la política pública y tendrán toda la latitud para mejorar continuamente los servicios públicos digitales.

La elección de las prioridades de desarrollo del servicio estará guiada por la retroalimentación de sus usuarios y no por las necesidades de la administración. Los equipos trabajarán sin prejuzgar el resultado final de antemano y tomarán sus decisiones de manera democrática y basadas en la mejora real de la calidad de atención.³⁰

B. Reconstrucción «horizontal»: descentralización, desconcentración y convivencialidad

Finalmente, el crecimiento y la diversificación de los servicios públicos digitales exigirán su descentralización y desconcentración. Se deberá garantizar la autonomía de acción de los funcionarios públicos, para que estos puedan resolver los problemas en conjunto con los usuarios, con un enfoque local y comunitario.

El Estado deberá gestionar la coordinación de los servicios públicos digitales y velar por el cumplimiento de la ley, pero también deberá acompañar a cada administración y autoridad regional y local, y permitir que estas desarrollen y operen estos servicios públicos digitales ellas mismas.

Esta es una nueva forma de concebir la acción pública. Su enfoque asegura que los servicios digitales que producimos siempre serán útiles para alguien, utilizables y utilizados, porque responden a un problema real, con un enfoque de participación local en la gestión.

Esto último es fundamental para elaborar políticas para beneficiarios reales y enfocadas en sus necesidades. Lo cierto es que la falta de énfasis en la

ciudadanía y sus reales competencias necesarias para participar de forma activa en la relación con las herramientas de las tecnologías digitales es un obstáculo para la modernización del Estado y la mejora de la atención de los servicios públicos.

El objetivo final es construir una sociedad en la cual las herramientas tecnológicas estén al servicio de las personas, que resuelvan efectivamente sus problemas y que faciliten su trabajo.

Una sociedad convivencial, es la cual las personas están libres de la tutela impuesta por la tecnología.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Preámbulo

Considerando que el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales y libertades públicas a lo largo y ancho del país no puede excluir nuestro espacio común digital ni prescindir del control soberano de los medios tecnológicos que garanticen su ejercicio pleno.

Artículo X1 — Alternativa a los servicios digitales.

Toda persona tiene derecho a una alternativa a los procedimientos digitales en sus relaciones con la administración pública.

Artículo X2 — Principio de finalidad de la tecnología en el ámbito público.

El estado deberá garantizar que toda persona tenga acceso a servicios públicos gratuitos y de calidad, a través de todos los medios que faciliten el acceso real de las personas a los servicios públicos.

Artículo x3 — Participación del funcionariado en la gestión de los servicios públicos.

Toda funcionaria y funcionario tiene derecho a participar del diseño, desarrollo, gestión de los servicios públicos, así como a incidir activamente, en conjunto con usuarias y usuarios, en su adaptabilidad en el tiempo.

Artículo X4 — Derecho y deber de impacto.

Toda funcionaria y funcionario tiene el derecho y el deber de orientar el diseño, desarrollo, gestión y adaptabilidad de los servicios públicos hacia la mejora continua de la calidad de la atención a las personas.

Artículo X4 — Gestión democrática y descentralización.

Es deber del estado favorecer la gestión democrática y pluralista de los servicios públicos, así como las condiciones que permitan su gestión desconcentrada y descentralizada.

Artículo X5 — Innovación local y derecho a la experimentación.

Las autoridades públicas deberán participar activamente en la constitución de modelos de gestión e innovación locales y comunitarios, garantizando el derecho al error y a la experimentación.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 945-7. Esta fue votada de manera separada por cada uno de sus artículos resultando aprobados: Artículo X1 por trece votos a favor y 2 abstenciones; Artículo X2 once votos a favor y cuatro en contra; Artículo X3 por ocho votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones y Artículo X4.1 por diez votos a favor y cinco abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°585-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho de y a la memoria, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Malucha Pinto, Carolina Sepúlveda, Yarela Gómez, Mario Vargas, Giovanna Roa, Loreto Vidal, Andrés Cruz, Jorge Baradit, Nicolás Núñez, Jorge Abarca, Isabel Godoy, César Uribe, Giovanna Grandón, Matías Orellana, Tatiana Urrutia y Marcos Barraza.

Estamos viviendo tiempos de grandes transformaciones sociales, económicas, humanas y culturales. Ya sea por el cambio climático, la globalización, el feminismo, la deconstrucción del neoliberalismo, la crisis pandémica, entre otros, se nos presenta un momento para pensar nuevas prácticas concretas para desmontar las hegemonías, las universalidades, las verdades dadas, y, al mismo tiempo, dar pie a una rica dinámica de alternativas horizontales y de creación individual y colectiva del país que somos y seremos. Se trata, ante todo, de proponer una nueva cultura emancipadora.

Comprender las experiencias sociales que emanan desde prácticas históricamente excluidas amplifica los conocimientos mucho más allá de lo que se ha considerado como realidad social en la tradición científica y filosófica europea. Dichas tradiciones son identificadas como parte de una razón indolente, como señala Boaventura de Sousa Santos¹, en tanto ellas no reconocen suficientemente la riqueza cultural de los pueblos, e, implícitamente, presuponen teorías que desperdician la vasta experiencia humana y el entramado de estos pueblos con sus cosmovisiones, espiritualidades, modos de entender la tierra, modos de producción, entre otros.

Esta indolencia se la cuestiona por cuatro rasgos: su carácter impotente (que no se puede hacer nada frente a una necesidad concebida como exterior a ella misma), arrogante (que totaliza desvalorizando la experiencia que nos rodea), metonímico (que reduce el mundo a través de un achatamiento del orden al presente) y proléptico (que concibe el futuro a partir de un tiempo lineal). El desarrollo tiene un horizonte futuro y está definido por la monocultura imperante, por lo que para alcanzar ese estadio hay un camino específico que todos deberíamos seguir.

Cada uno de estos rasgos impone aplastantes pesos a la comprensión de la realidad social. Aquí cabe considerar la noción de una "sociología de las ausencias", aquella que revela la diversidad y la multiplicidad de las experiencias inherentes a las prácticas sociales y las hace creíbles, en contraposición a la credibilidad exclusivista de las prácticas de la globalización hegemónica.

Pero esta sociología de las ausencias necesita complementarse con una "sociología de las emergencias", que expande el campo de las experiencias posibles, contribuyendo a mostrar que la mayor cantidad de ellas permite disponer de más experiencias posibles en el futuro, esto es, un verdadero multiplicador cultural. Esto permite entender que la temporalidad no es unilineal ni monocultural, sino que esta nueva dimensión de la temporalidad posibilita desacelerar el presente, otorgándole un contenido mucho más denso que el instante fugaz entre pasado y futuro.

Así, buscamos adentrarnos en un cambio en las formas que nos hemos relacionado, por lo que el Estado cultural que proponemos en la Convención Constitucional permite construir una nueva relación para el país que anhelamos, creativo y profundo, de múltiples manos en su edificación.

Esto lo sustentamos en que el texto constitucional actualmente vigente sólo hace mención a la cultura en cinco puntos, de manera desperdigada e

inconexa, generando un grave detrimento en la comprensión de los fenómenos de transformación social. A saber:

1. En el derecho a la educación (artículo 19 N°10, mencionando que son roles del Estado “...estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”);
2. En la libertad de creación y difusión artística (artículo 19 N°25);
3. En el derecho de autor (artículo 19 N°25, señalando que se garantiza el “...derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”);
4. En el objeto del Gobierno Regional (artículo 111, donde “La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región...”), y
5. En las finalidades de las Administraciones comunales (artículo 118, donde “Las municipalidades son corporaciones autónomas (...) cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”).

Es importante destacar que el ingreso de la cultura al mundo constitucional se dio progresivamente a lo largo del siglo XX. Específicamente, fue en la Constitución de Austria de 1920 que se reconoció por primera vez, siguiendo la Constitución de Letonia de 1922, luego la Constitución de El Líbano de 1926 y la Constitución de Japón de 1947.

Sin embargo, todas estas innovaciones sobre la cultura estuvieron motivadas por diversas razones: mientras austriacos se centraron en la protección de las minorías locales, letones tuvieron como objetivo reafirmar su autonomía tras el proceso de independencia del Imperio Ruso. En tanto, libaneses la tuvieron en cuenta para impulsar un desarrollo regionalista, así como japoneses lo instalaron post guerra mundial como un derecho para restablecer un nuevo estándar de bienestar económico y social.

Lo anterior lo mencionamos porque la cultura tiene diversas expresiones y manifestaciones que curan el alma de los países. Por esa razón es que los países que tienen mejores niveles de desarrollo humano y respeto por los derechos humanos son los que más invierten y fomentan los ámbitos culturales.

De esa manera, podemos citar numerosos casos en que la cultura tiene espacio a nivel constitucional. España hace mención al derecho de acceso a la cultura, así como a la conservación patrimonial; Bolivia se asocia a avances en cultura en tanto expresiones de autonomía de los pueblos y naciones indígenas, interculturalidad y derechos culturales; México suma características interesantes por su declaración de pluriculturalidad, que se concretiza en un derecho a la educación que considera el respeto a las culturas; entre otros.

Ahora, la irrupción de la cultura en el ámbito constitucional no hace su aparición de la nada, sino que va acompañado de un trabajo a nivel internacional, en el cual debemos considerar que hubo avances regionales en el que América fue pionera.

Fue en abril de 1948, cuando se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no sólo se creó el primer catálogo regional de derechos humanos, sino donde además se realizó el primer reconocimiento internacional explícito de los derechos culturales, adelantándose a la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre del mismo año, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En efecto, se proclamó en el artículo XIII de la Declaración Americana el derecho a los beneficios de la cultura, que se despliegan a través de dos derechos culturales básicos: el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, el de gozar de las artes y el de disfrutar de los beneficios del progreso intelectual; y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales de autores por la creatividad.

A partir de entonces, ese marco normativo inicial de los derechos culturales se ha ido ampliando, a medida que se fueron aprobando nuevos tratados y convenciones. Ejemplos fundamentales fueron la sanción en 1966 en Naciones Unidas de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que contribuyeron a una consolidación y dimensión más profunda de los derechos culturales.

En el caso del PIDCP, dentro de un marco de igualdad ante la ley y de no discriminación, cada Estado se obliga a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio los derechos a la libertad de opinión y de expresión (artículo 19), de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18), de reunión pacífica (artículo 21) y de libre asociación (artículo 22), además del reconocimiento de los derechos culturales de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas (artículo 27).

A su vez, en el caso del PIDESC, los derechos que involucra en general se realizan a través o por medio de la acción del Estado, siendo de ejecución progresiva y de carácter programático. El cumplimiento de tales derechos depende, en buena medida, en cada país, de la utilización de los recursos disponibles y de la realización de ciertos cambios estructurales e institucionales.

Dentro de esta segunda generación de derechos humanos, tenemos que destacar lo dispuesto por el Pacto en cuanto a que, al mismo tiempo que consigna los dos derechos culturales básicos, consagra dos obligaciones importantísimas a cumplir por las políticas públicas de los Estados: primero, el deber de adoptar, a fin de asegurar el pleno ejercicio de tales derechos, las medidas gubernamentales necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura; y, segundo, el compromiso de respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Esto abre dos categorías nuevas para los derechos culturales: la libertad para la actividad creativa y la libertad para la investigación científica/artística.

En definitiva, la creciente protección constitucional de los bienes culturales es una piedra angular viva de la comprensión del Estado cultural, que se expande gracias a la protección preferentemente de los órganos estatales, así como en el rol colaborador y participativo de la sociedad, las comunidades y las organizaciones.

Porque como dice Häberle, “La Constitución no sólo es un texto jurídico o un conjunto de reglas normativas, sino que también es expresión de un determinado nivel de desarrollo cultural, es expresión de la auto representación cultural de un pueblo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas”.

La cultura es un principio constitutivo de nuestras naciones e identidades. En ese marco, resulta necesaria e imprescindible en la gestación de la nueva Constitución, puesto que el desarrollo de nuestros pueblos se sostiene en un imbricado vínculo temporal entre el pasado, presente y futuro.

A pesar de que se ha vuelto un lugar común hablar del carácter polisémico del concepto de cultura, precisar sus contornos es necesario para poder hablar del Estado cultural. Para eso tomamos las influencias de la Declaración de México de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, la Observación General N°21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Cultural Iberoamericana, entre otras fuentes.

Ensayamos que la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, corporales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las cosmovisiones, las tradiciones y las creencias.

Como tal, conforma un proceso amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia humana, con un carácter vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro, que abarca el vínculo con la naturaleza, la tierra y los océanos. A través de estas personas, los grupos, las comunidades y la sociedad en su conjunto, manteniendo sus particularidades y sus fines, crean y desarrollan un lenguaje, reflejando y configurando los valores del bienestar y la vida económica, social, espiritual y política de las personas, los grupos y la sociedad.

Comprende, entre otras cosas, las formas de vida, los vínculos, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la artesanía, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, los patrimonios naturales, materiales e inmateriales, costumbres y tradiciones, todas las creaciones, por las cuales las personas, las comunidades y la sociedad expresan su identidad y el sentido que dan a su existencia.

A partir de lo anterior, la nueva Constitución también es una oportunidad para reconstruir este vínculo entre los aspectos culturales de nuestras sociedades y su relevancia plasmada en la Carta Fundamental. A todo evento, cualquier constitución expresa un tipo de cultura, ya sea de forma evidente o por omisión. De éstas se desprende una cosmovisión y un tipo de sociedad en que se consagran ciertos valores para un modelo de desarrollo en específico, y una forma de relación del individuo con el Estado y viceversa. En ese sentido, la Constitución de 1980, en aspectos generales, consagró una relación entre el Estado y la sociedad mediada por el mercado, relevando valores individualistas y egoístas por sobre principios como la solidaridad y lo colectivo/comunitario. De esta forma, se impuso un tipo específico de saber, de poder y de seres, subsumiendo la capacidad creativa y creadora de otras identidades presentes en el territorio nacional, las cuales escapan a las reglas del juego y a sus jerarquías.

Parte importante de la crisis democrática se explica en lo mencionado. En su capacidad representativa reside justamente su calidad. Y la desafección actual se explica en gran medida producto de la ausencia de vastos

sectores que han sido excluidos de su capacidad de “hacer (la) política”, por lo cual se hace urgente ampliarla. No basta con una democracia de delegación, sino más bien avanzar hacia una que propenda hacia la mayor visibilidad posible de las identidades existentes, que dé cuenta de la realidad y no la oculte, y, como fin último, otorgue las condiciones para el ejercicio democrático más pleno posible. Como plantea el historiador francés Pierre Rosanvallon, se trata de construir una democracia que amplíe su capacidad narrativa, puesto que la “democracia también significa atención a todos, consideración explícita de todas las condiciones. Esto implica, por tanto, desarrollar una representación narrativa junto con la clásica representación-delegación”. Con ello, será posible construir una sociedad con individuos plenamente iguales en su dignidad, siendo reconocidos como considerados, y que en los hechos construyan una sociedad común.

Asimismo, en este problema debe cambiar de prisma el vínculo entre Estado y sociedad, por la cual se reproduce esta relación asimétrica y hegemónica del orden social imperante. De carácter vertical y centralizada, se debe avanzar hacia un nuevo tipo (o carácter) de Estado, desconcentrado y descentralizado, que promueve fuertemente la regionalización y el desarrollo. En ese marco, ese nuevo Estado será también producto de la co-creación que emane de las comunidades y diversas culturas por medio de los diversos mecanismos de participación que contribuyan a la profundización democrática.

En definitiva, propugnamos el buen vivir. Que el conocimiento y la cultura se encuentren al servicio de la buena vida de las comunidades, promoviendo que la participación en las culturas sea un fenómeno libre, que no puede ser jerarquizado. Apelamos a que el Estado propicie una soberanía cultural, la cual “incluye todo el patrimonio de las subculturas, e identidades existentes en sus geografías, como las expresiones artísticas, del ayer y a desarrollarse”. En sintonía con lo anterior, que la creación de contenidos culturales, científicos y artísticos debieran ser valorados, difundidos, propiciados, promocionados y sean parte de la construcción del país. Que las políticas públicas del país debieran contar con la participación de los territorios y personas a la hora de tomar acciones y decisiones.

Ideas matrices

Como señala el prof. Eric Millard, hay distintas y variadas razones para conducir a un legislador, en sentido amplísimo -desde el constituyente hasta el juez de base-, a realizar sus facultades normativas o jurisdiccionales para actuar sobre cuestiones históricas y memoriales.

De manera más frecuente, se trata de responder a una situación histórica y política que facilite una salida a situaciones de conflicto armado, violaciones a derechos humanos o dictaduras. Por ello, hay Leyes sobre memoria histórica o verdad y reconciliación, que proponen una respuesta al pedido de justicia y de reparación de tales agravios, al mismo tiempo que permite la reconstrucción de la cohesión social en las sociedades afectadas.

Así, tenemos en cuenta el derecho a la verdad sobre los hechos ocurridos, el derecho a la reparación de los daños sufridos y la búsqueda de una garantía de no repetición, que se han materializado transversalmente en América Latina, Costa de Marfil, Sudáfrica y España.

Sin embargo, tenemos que hacer evolucionar este derecho, como garantía que permita desde las perspectivas de las personas, familias, así como de lo comunitario y lo social, asociarla a sus propias vidas, barrios, construyendo un puente que conecte aprendizajes y valoraciones del pasado con la creación del futuro.

Toda comunidad y toda persona tienen zonas oscuras, eventos, traumas, que permanecen en el espacio de lo manifestado, de lo no integrado, el territorio de “la sombra”, como lo describe Jung. El ejercicio de la memoria permite reparar, sanar, restaurar esos espacios que obstaculizan el desarrollo y la convivencia armónica y fraterna de las personas, las comunidades y los países.

Por ello, se ha hablado de una distinción entre el derecho de la memoria y a la memoria. Mientras el primero va de la mano con una construcción política de la sociedad, por ende, es colectivo, el segundo se entiende como un proceso jurídico de reparación de daños sufridos, por lo que es individual. El giro entre ambos es usual, tanto desde el punto de vista de las víctimas en su singularidad como desde el punto de vista político y moral.

El sincretismo entre ambas perspectivas nos va a llevar a proponer un tema relevante para nuestro país. La memoria ha sido tratada históricamente en relación a las causas de violaciones a los derechos humanos. Junto con ello debemos construir un nuevo vínculo con la memoria, entendiendo esta como un principio fundamental para la sociedad. Si esta vive desvinculada de su pasado, no tendrá posibilidad efectiva de desarrollo.

Asimismo, se debe avanzar en una política de promoción de la memoria entendida ésta como garantía de no repetición, justicia, verdad y reparación de violaciones a los derechos humanos y de sustentabilidad del futuro. En ese punto, el rescate y cuidado de los sitios de memoria como lugares donde la

cultura y el arte tienen un rol importante, es fundamental como testimonios de un pasado que no puede volverse a repetir.

También la educación debe promover la cultura de los derechos humanos, como también la valoración y promoción de la diferencia, de la tolerancia y empatía, de la capacidad de vivir juntos, en un ambiente libre de violencia, particularmente del Estado sobre las comunidades.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo 1°.- La memoria es un pilar fundamental de la construcción del país.

Se reconocerá el derecho individual y colectivo de la memoria personal, familiar, ancestral y comunitaria, cuya regulación estará reservada para la ley.

El Estado deberá fortalecer la conciencia histórica de las comunidades, con el objeto de recuperar la memoria y el fortalecimiento de las múltiples identidades locales como indígenas, y sus trayectorias colectivas e individuales. Lo anterior se realizará mediante la conservación de sus culturas, la creación de archivos locales y la preservación de los bienes culturales documentales, de manera de resguardar las fuentes de información histórica, jurídica, sociológica, económica, política, religiosa o cultural.

Artículo 2°.- Será un objetivo de los órganos del Estado contribuir con la preservación, recuperación y conservación de la memoria, los testimonios y las vivencias, articulando los vínculos entre las instituciones públicas, las agrupaciones de derechos humanos y las comunidades, a fin de impulsar el diálogo, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, coherentes con el permanente respeto a los derechos humanos, la democracia, la interculturalidad, la empatía y el Estado de Derecho.

Lo anterior, debe ser garantizado por el Estado, entre otras, mediante medidas simbólicas de reparación, en donde las expresiones artísticas cumplan un rol fundamental, cuyo objetivo sea el reconocimiento público de los hechos y la dignidad de las víctimas, la cual permita construir una cultura que valore socialmente el respeto de los derechos humanos.

Existirá una especial protección para los sitios de memoria y memoriales. El Estado deberá identificar, recuperar y preservar financiera, administrativa y legalmente los sitios de memoria, con el objeto de darles

sostenibilidad y garantizar su funcionamiento como lugares de interés público, patrimonial, cultural y de libre acceso para la sociedad en general.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 585-7. Se votaron de manera sus artículos resultando aprobados el artículo primero de forma unánime por los integrantes de la Comisión y el artículo segundo por once votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°187-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la protección de los patrimonios culturales en sus diversas formas y en especial la del patrimonio lingüístico, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Ignacio Achurra, Jorge Baradit, Mario Vargas, Andrés Cruz, María Trinidad Castillo, Loreto Vidal, Adriana Cancino, Ramona Reyes, Francisco Caamaño, Margarita Vargas, Marcos Barraza, Carolina Vilches, Cristina Dorador, Manuela Royo, Gaspar Domínguez y, Carolina Videla.

Las culturas son un elemento constitutivo de nuestras identidades en las sociedades. En ese marco, resulta necesaria e imprescindible que en la gestación de la nueva Constitución se aprehenda este tema, puesto que el desarrollo de nuestros pueblos se sostiene en un imbricado vínculo temporal entre el pasado, presente y futuro.

A pesar de que se ha vuelto un lugar común hablar del carácter polisémico del concepto de cultura, precisar sus contornos es necesario para poder hablar del Estado cultural. Para eso tomamos las influencias de la Declaración de México de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, la Observación General N°21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Cultural Iberoamericana⁵, entre otras fuentes.

Planteamos que las culturas son el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, corporales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ellas engloban, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las cosmovisiones, las tradiciones y las creencias.

Como tal, conforma un proceso amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia humana, con un carácter vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro, que abarca el

vínculo con la naturaleza, la tierra y los océanos. A través de este las personas, los grupos, las comunidades y la sociedad en su conjunto, manteniendo sus particularidades y sus fines, crean y desarrollan un lenguaje, reflejando y configurando los valores del bienestar y la vida económica, social, espiritual y política de las personas, los grupos y la sociedad.

Comprende, entre otras cosas, las formas de vida, los vínculos, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la artesanía, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, los patrimonios naturales, materiales e inmateriales, costumbres y tradiciones, todas las creaciones, por las cuales las personas, las comunidades y la sociedad expresan su identidad y el sentido que dan a su existencia.

Las culturas son el alma y el espíritu de la tribu, territorio o nación, y quienes son elegidos y elegidas como representantes del pueblo están designados para defenderla, difundirla así como trasmitirla, manteniendo la continuidad de un corpus fundamental para cimentar nuestros sentidos de vida como de pertenencia, al entramado de sus constructos, símbolos y acciones, que conducen a los conceptos de equidad y del buen vivir.

A partir de lo anterior, la nueva Constitución también es una oportunidad para reconstruir este vínculo entre los aspectos culturales de nuestras sociedades y su relevancia plasmada en la Carta Fundamental. A todo evento, cualquier constitución expresa un tipo de cultura, ya sea de forma evidente o por omisión. De éstas se desprende una cosmovisión y un tipo de sociedad en que se consagran ciertos valores para un modelo de desarrollo en específico, y una forma de relación del individuo con el Estado y viceversa.

En ese sentido, la Constitución de 1980, en aspectos generales, consagró una relación entre el Estado y la sociedad mediada por el mercado, relevando valores individualistas y egoístas por sobre principios como la solidaridad y lo colectivo como comunitario. De esta forma, se impuso un tipo específico de saber, de poder y de seres, subsumiendo la capacidad creativa y creadora de otras identidades presentes en el territorio nacional, las cuales escapan a las reglas del juego y a sus jerarquías.

Paralelamente, no hay que dejar de lado que, dada su relevancia, tanto las culturas como las artes han sido herramientas de ideologías, regímenes o sistemas económicos, para instaurarse desde ese gran pedestal. De ahí que

aspiramos que se establezca que es un deber del Estado en el ejercicio de lo público, resguardar y fortalecer su existencia, desde una perspectiva comunitaria y solidaria, fortaleciendo la autonomía, las capacidades y la autogestión.

Por ello, parte importante de la crisis democrática se explica en lo mencionado. En la capacidad representativa reside justamente su calidad. Y la desafección actual se explica en gran medida producto de la ausencia de vastos sectores que han sido excluidos de su capacidad de “hacer (la) política”, por lo cual se hace urgente ampliarla.

No basta con una democracia en que se deleguen sus funciones a representantes. Debemos avanzar hacia una democracia que propenda hacia la mayor visibilidad posible de las identidades existentes, que dé cuenta de la realidad y no la oculte, y, como fin último, otorgue las condiciones para el ejercicio democrático más pleno posible. Como plantea el historiador francés Pierre Rosanvallon, se trata de construir una democracia que amplíe su capacidad narrativa, puesto que la “democracia también significa atención a todos, consideración explícita de todas las condiciones. Esto implica, por tanto, desarrollar una representación narrativa junto con la clásica representación-delegación”⁶. Con ello, será posible construir una sociedad con individuos plenamente iguales en su dignidad, siendo reconocidos como considerados, y que en los hechos construyan una sociedad común.

Asimismo, en este problema debe cambiar de prisma el vínculo entre Estado y sociedad, por la cual se reproduce esta relación asimétrica y hegemónica del orden social imperante. De su carácter vertical y centralizado, se debe avanzar hacia un nuevo tipo (o carácter) de Estado, desconcentrado y descentralizado, que promueve fuertemente la regionalización y el desarrollo. En ese marco, ese nuevo Estado será también producto de la co-creación que emane de las comunidades y diversas culturas por medio de los diversos mecanismos de participación que contribuyan a la profundización democrática.

En definitiva, propugnamos que los conocimientos se encuentren al servicio de la buena vida de las comunidades y las personas, promoviendo que la participación en las culturas sea un fenómeno libre, que no puede ser jerarquizado. Ello no puede ser realizado por un Estado subsidiario, sino por uno social y democrático de derechos.

Apelamos a que el Estado reconozca la soberanía cultural, la cual es la piedra angular de la obtención de todos estos propósitos, en donde se “incluye todo el patrimonio de las subculturas, e identidades existentes en sus geografías, como las expresiones artísticas, del ayer” y su desarrollo.

En sintonía con lo anterior, que la creación de contenidos culturales y artísticos debieran ser valorados, difundidos, propiciados, promocionados y sean parte de la construcción del país. Las políticas públicas del país deben contar con la participación de los territorios a la hora de tomar acciones y decisiones. La creación artística no queda reducida en libros o composiciones de un autor, su existencia permite la apropiación social de este saber, que luego se manifiesta en todos los ámbitos sociales, permitiendo a su vez el ejercicio de la creación social.

La privatización de la cultura como política es tan grave para nuestro porvenir como la liberalización de la salud, la educación o el agua. Las artes nacen del alma y cómo se construyan las artes de hoy será determinante en la democracia del mañana.

Ideas matrices

Queremos proponer un nuevo marco para la conservación, protección y preservación de los patrimonios culturales de los pueblos y primeras naciones, que influya en la discusión de los proyectos de ley sobre esta materia.

Tomando como influencia el texto constitucional colombiano, la responsabilidad recae tanto en el Estado como en la sociedad y las personas, ya que ésta debe ser extendida de manera horizontal y transversal.

Junto a contemplar que los patrimonios van desde su valoración histórica hasta aquellos de carácter inmaterial, su definición debe ser ante todo realizada en conjunto con los pueblos y primeras naciones por intermedio de procesos de participación.

En ese sentido, planteamos que el Estado deberá generar la institucionalidad que permita cuidar y preservar los patrimonios culturales, independiente del régimen jurídico y titularidad de los bienes, de manera de cerrar el debate abierto en 2002 con la sentencia del Pleno de la Corte Suprema por el recurso de inaplicabilidad de la Ley N°17.288, en el caso “Inmobiliaria Maullín Ltda. con Fisco de Chile”, que consideró la inconstitucionalidad de la expropiación regulatoria en situaciones de bienes declarados monumentos nacionales. Los costos de las políticas de patrimonios las deben asumir tanto el Estado como los propietarios de manera solidaria, respetando el principio de igualdad ante las cargas públicas.

De especial interés para esta propuesta recae en el patrimonio de las lenguas de Chile, el cual se propone como objeto de especial fortalecimiento y protección por el Estado, en donde los sistemas educacionales deberán cumplir un rol esencial en su preservación, desarrollo y divulgación.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo 1°.- Los patrimonios culturales de los pueblos y de las primeras naciones de Chile deben ser conservados, protegidos y preservados por el Estado, la sociedad y las personas, atendiendo su función social.

Esto contempla los patrimonios históricos, artísticos, artesanales, monumentales, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos, industriales, naturales, vivos e inmateriales, entre otros, los cuales forman parte de prácticas sociales a las cuales se le atribuyen valores y principios a ser transmitidos y heredados de una época o generación a otra.

La definición por parte del Estado de qué bienes tangibles, intangibles y naturales constituyen patrimonios culturales deberán ser realizadas en conjunto con los pueblos y las primeras naciones, mediante mecanismos de participación incidentes y vinculantes que definirá la ley.

Artículo 2°.- El Estado desarrollará la institucionalidad para el registro, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción, archivo y difusión de los patrimonios culturales, cualquiera que sea el régimen jurídico y titularidad de los bienes.

Ella tendrá las competencias para la protección de los patrimonios culturales, mediante la imposición y ejecución de medidas conservativas, decomisos y sanciones administrativas ante infracciones, entre otras facultades que considere pertinentes la ley.

Artículo 3°.- La ley podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de bienes que formen parte de los patrimonios culturales, así como derechos reales de conservación, velando siempre por el interés general, y resguardando el derecho a indemnización de las y los propietarios en la forma y casos que se determinen.

Los patrimonios arqueológicos pertenecen a los pueblos y las primeras naciones de Chile, siendo inalienables, inembargables e imprescriptibles. Podrá tener la misma calidad cualquier otro bien que se identifique como patrimonio cultural y que así lo declare una ley.

Artículo 4°.- Lenguas. La riqueza plurilingüe de Chile es un patrimonio que será objeto de especial fortalecimiento y protección por el Estado.

Las lenguas indígenas son parte de la herencia común de la humanidad. Éstas tienen un rol en el pensamiento de los pueblos y primeras naciones desde la concepción del lugar que ocupan en el universo, de su identidad y valores éticos. Asimismo, por medio de las lenguas los pueblos y primeras naciones expresan los sistemas de conocimientos por los cuales se relacionan con la naturaleza, siendo fundamental para su desarrollo.

Los sistemas educacionales deberán implementar programas para la protección, revitalización, recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas del país y sus comunidades.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 187-7, la que fue aprobada por 14 votos a favor, y 1 abstención.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°189-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el reconocimiento y protección de los patrimonios culturales y garantiza el acceso a ellos, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Ignacio Achurra, Malucha Pinto, Cristina Dorador, Francisco Caamaño, Constanza Schonhaut, Jaime Bassa, Christian Viera, Giovanna Roa, Damaris Abarca y, Tatiana Urrutia.

En Chile existe una demanda histórica por la efectiva puesta en valor y democratización de los patrimonios. Esta fue una de las grandes necesidades que condujeron, en 2003, a la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el cual contempló atribuciones legales en el ámbito del patrimonio cultural.

Ya en 2018, con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se buscó reunir bajo una misma estructura la institucionalidad cultural y patrimonial existente en Chile, a nivel ministerial. De dicha cartera depende la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, la que a su vez, tiene a su cargo el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

La ley N° 21.045, que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, considera al patrimonio cultural en dos de sus principios. Primero, a través del reconocimiento del patrimonio cultural como bien público, el que constituye un espacio de reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción de las identidades y de la identidad nacional. Y en segundo lugar, mediante el

principio de la memoria histórica, reconociéndola como pilar fundamental de la cultura y del patrimonio intangible del país.

A pesar de dichos cambios a nivel institucional, como país aún no contamos con una legislación que reconozca adecuadamente el valor cultural que los patrimonios tienen en nuestra sociedad. Muestra de ello es que aún sigue en vigencia la centenaria ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, recién habiendo iniciado su tramitación en el año 2018, el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que busca reemplazarla (el cual no ha estado exento de críticas en cuanto a su tramitación y a sus contenidos).

Este vacío se comienza a explicar, en nuestro sistema jurídico, desde la carta fundamental misma. La Constitución de 1980, en materia de patrimonios, se limita a disponer en su artículo 19 N° 10 que “al Estado le corresponde la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”, a propósito del derecho a la educación.

Como se señalaba, dicha disposición es la piedra angular de lo insuficiente y desactualizada que sigue siendo nuestra legislación en la materia. Tal como sucede con el conjunto de derechos culturales, invisibilizados en nuestra historia constitucional, no se contempla ningún derecho asociado a los patrimonios.

Sumado a ello, la única mención que hace la Constitución al respecto, instala al Estado como agente patrimonializador, encargado de protegerlo e incrementarlo, visión ampliamente superada por las concepciones modernas de patrimonios, que instalan la necesidad de democratización en su acceso, goce y participación; el reconocimiento de un enfoque descentralizador y grados de autonomías a las comunidades y pueblos indígenas; una mirada plurinacional e intercultural; su dimensión colectiva y la apertura del concepto mismo a los patrimonios intangibles, tales como las memorias, herencias culturales y simbólicas.

Es objeto de la presente propuesta de norma, consagrar en nuestra futura Constitución los diversos derechos de las personas y comunidades asociados a los patrimonios culturales, los cuales presentan una larga trayectoria en el Derecho Internacional, las diversas legislaciones, las prácticas sociales y culturales, y la literatura sobre la materia.

El derecho a los patrimonios culturales y su desarrollo

El Derecho Internacional, así como nuestra legislación interna, comenzó a abordar los patrimonios a inicios del siglo pasado, con una impronta

monumentalista y de visión del patrimonio como protección del pasado, bajo discursos hegemónicos de lo que se entendía como fundante del Estado-Nación.

Es a partir de los años noventa, que se comienza a evidenciar una apertura progresiva de este concepto, articulada en distintos acuerdos sostenidos por la comunidad internacional, sobre todo en instancias Unesco. Así, el concepto contemporáneo de patrimonio cultural ha avanzado en reconocer especificidades e implicancias derivadas de la distinción entre patrimonio material e inmaterial, incorporando los saberes y prácticas culturales en él, e hilvanándose con el desarrollo del derecho a participar en la vida cultural, que reconoce como fundante a la diversidad cultural.

Recientemente, se ha entendido el patrimonio cultural como “un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien -individuo o colectividad-, afirma su nueva condición”.

Así, los patrimonios abarcan tanto bienes como manifestaciones culturales, y sitúan a las personas y comunidades no como meros receptores pasivos, sino sujetos que conocen y transforman esa realidad, posibilitando el surgimiento de nuevas interpretaciones y usos patrimoniales.

Por otro lado, en la Política Nacional de Cultura de los años 2017-2022, se sostiene que “el patrimonio en el marco del modelo de desarrollo del país, debe ponerse al servicio del reconocimiento de la diversidad cultural y de un desarrollo económico y social inclusivo; buscando superar brechas de inequidad y propiciando la sustentabilidad de las expresiones, los bienes y los grupos humanos involucrados, siendo estos últimos agentes protagónicos del foco de cualquier política pública al respecto”.

A continuación, se expondrán los principales instrumentos internacionales que abordan esta materia, para tenerlos a la vista como estándar mínimo que debiese integrar nuestra nueva Constitución y que han sido recogidos en la presente propuesta de norma.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1966, ratificado por Chile en 1989, dispone en su artículo 27, a propósito del derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones y a la protección de los intereses morales y

materiales producto de las obras, que “Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”.

La Declaración de Friburgo sobre Derechos culturales, del año 2007, señala en su artículo 3, que toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a “acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la educación y a la información, a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas, así como recursos para las generaciones presentes y futuras”.

El Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, dispone en su artículo 31 que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas”.

La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de la Unesco, del año 1972, en su artículo 4 establece la obligación para los Estados de “identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio”. Asimismo, de acuerdo al artículo 5 deberán procurar “a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general” e “b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban”.

Por su parte, la Recomendación sobre la Protección de los Bienes Culturales Muebles, de la Unesco, del año 1978, en su artículo 17 aporta en relación al deber educación e información que tienen los Estados en relación a los patrimonios, señalando que “para conseguir que las poblaciones tomen conciencia del valor de los bienes culturales y de la necesidad de protegerlos, especialmente para conservar su identidad cultural, los Estados Miembros deberían alentar a las autoridades nacionales, regionales o locales competentes a fin de que: (a) pongan a la disposición de los niños, jóvenes y adultos los medios de dar a conocer y hacer respetar los bienes culturales muebles, utilizando todos los recursos

posibles de educación e información; (b) señalen a la atención del público, por todos los medios posibles: i) el significado y la importancia de los bienes culturales, evitando insistir en el valor puramente comercial de esos bienes; ii) las posibilidades que se le ofrecen de participar en las actividades realizadas por las autoridades competentes con miras a la protección de esos bienes”.

La Recomendación relativa a la Condición del Artista de la Unesco, del año 1980, respecto a las políticas culturales y participación, invita a los Estados Miembros a que tomen las medidas necesarias para que los artistas y sus organizaciones participen en las políticas encaminadas a: “b) fomentar la cultura y las artes en la comunidad, por ejemplo, mediante medidas relativas al desarrollo cultural, a la protección y revalorización del patrimonio cultural (comprendido el folklore y las otras actividades de los artistas tradicionales), la identidad cultural, ciertos aspectos de los problemas del medio ambiente y de la utilización del tiempo libre, y el lugar de la cultura y las artes en la educación”

A su turno, la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, de la Unesco, del año 1989, define la Cultura Tradicional y Popular como “el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes”.

Dicha Recomendación, ha aportado en el ámbito del Derecho Internacional, a esclarecer las obligaciones de los Estados en relación a los patrimonios, ya que insta a estos a actuar en pos de la identificación conservación, salvaguarda, protección y difusión de la Cultura Tradicional y Popular. Dichos deberes se entienden de la siguiente manera:

- Identificación: “La cultura tradicional y popular, en cuanto expresión cultural, debe ser salvaguardada por y para el grupo (familiar, profesional, nacional, regional, religioso, étnico, etc.) cuya identidad expresa”.

- Conservación: “se refiere a la documentación relativa a las tradiciones vinculadas a la cultura tradicional y popular, y su objetivo, en caso de no utilización o de evolución de dichas tradiciones, consiste en que los investigadores y los portadores de la tradición puedan disponer de datos que les permitan comprender el proceso de modificación de la tradición. Aunque la cultura tradicional y popular viva, dado su carácter evolutivo, no siempre permite una

protección directa, la cultura que haya sido fijada debería ser protegida con eficacia”.

- Salvaguarda: “se refiere a la protección de las tradiciones vinculadas a la cultura tradicional y popular y de sus portadores, en el entendimiento de que cada pueblo posee derechos sobre su propia cultura y de que su adhesión a esa cultura suele perder vigor bajo la influencia de la cultura industrializada que difunden los medios de comunicación de masas. Por lo tanto, es necesario tomar medidas para garantizar el estado y el apoyo económico de las tradiciones vinculadas a la cultura tradicional y popular tanto dentro de las colectividades de las que proceden como fuera de ellas”.

- Difusión: “Se debe sensibilizar a la población respecto de la importancia de la cultura tradicional y popular como elemento de la identidad cultural. Para que se tome conciencia del valor de la cultura tradicional y popular y de la necesidad de conservarla, es esencial proceder a una amplia difusión de los elementos que constituyen ese patrimonio cultural. Sin embargo, en una difusión de esta índole se debe evitar toda deformación a fin de salvaguardar la integridad de las tradiciones”.

- Protección: “La cultura tradicional popular, en la medida en que se plasma en manifestaciones de la creatividad intelectual individual o colectiva, merece una protección análoga a la que se otorga a las producciones intelectuales. Una protección de esta índole es indispensable para desarrollar, perpetuar y difundir en mayor medida este patrimonio, tanto en el país como en el extranjero, sin atentar contra los intereses legítimos. Además de los aspectos de “propiedad intelectual” de la “protección de las expresiones del folklore”, hay varias categorías de derechos que ya están protegidos, y que deberían seguir estándolo en el futuro en los centros de documentación y los servicios de archivo dedicados a la cultura tradicional y popular”.

En el año 2001, se adoptó la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, la que en su artículo primero, establece que la diversidad cultural constituye patrimonio común de la humanidad, en el siguiente sentido: “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.

El artículo séptimo de la misma Declaración, es enfático al señalar que “Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas”.

Especial relevancia tiene la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de la Unesco, de 2003, por la gran apertura del concepto mismo de patrimonio que representa, al incorporar a éste su dimensión inmaterial. De acuerdo a ésta, el patrimonio cultural inmaterial contempla: “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Dicha Convención, agrega en el mismo artículo 2 que el “patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.

Además, la Convención conceptualiza la salvaguardia, la que comprende “las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”.

En particular, el artículo 15 de la misma Convención dispone que será deber de los Estados, en el marco de su obligación de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, “lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo”.

A propósito del derecho a participar en la vida cultural, la Observación General N° 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de Naciones Unidas, del año 2010, señala que la vida cultural hace referencia al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro.

De acuerdo a dicha Observación, el derecho a participar en la vida cultural tiene tres componentes principales, relacionados entre sí: la participación en la vida cultural propiamente tal; el acceso a la vida cultural, y la contribución a la vida cultural. Éste último, se asocia directamente con el patrimonio cultural, toda vez que consiste en el “derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad”.

En relación a los pueblos indígenas, la misma Observación dispone que “La fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a actuar colectivamente para que se respete su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural”.

Es dicha evolución normativa, respecto al concepto mismo de patrimonio, así como en la comprensión de su papel crucial en la revalorización continua de las culturas y las identidades, la que motiva la presente propuesta de norma, que viene a reconocer los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas en la materia, así como los deberes del Estado al respecto, bajo un enfoque plurinacional, descentralizador e intercultural.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Art. X: El Estado reconoce y garantiza:

1º El derecho a acceder y gozar de los bienes, servicios, información e institucionalidad relativa a los patrimonios culturales, sean estos materiales o inmateriales.

2º El derecho de participación de las comunidades y personas que crean, mantienen y transmiten los patrimonios culturales, así como el derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural.

Será deber del Estado velar por el respeto, protección, resguardo, conservación, salvaguardia, rehabilitación, revitalización y difusión de los

patrimonios culturales, memorias, herencias culturales y simbólicas en todas sus formas.

El Estado garantizará los recursos para hacer efectiva la autonomía de decisiones de las regiones, entidades territoriales y pueblos indígenas en relación a sus patrimonios culturales, memorias, herencias culturales y simbólicas, reconociendo su identidad y diversidad territorial.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N°189-7, la que fue aprobada por 13 votos a favor, y 1 abstención.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°254-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre protección del patrimonio biocultural y reservas patrimoniales, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Cristina Dorador, Vanessa Hoppe, Janis Meneses, Alejandra Flores, Bastián Labbé, Loreto Vidal, Alexis Caiguán, Manuela Royo y Francisco Caamaño.

Para lograr una adecuada protección del patrimonio ecológico y cultural de un país, es necesario identificar aquellos ecosistemas que tengan una alta riqueza biocultural, entendida como la interfase entre los ecosistemas y la sociedad humana, y que estén bajo un inminente riesgo de degradación por diversos factores tanto antrópicos como naturales.

Estas zonas priorizadas pueden luego ser clasificadas y nombradas como reservas bioculturales de manera que permitan la conservación del ecosistema y la cultura local asociada, incluyendo el acervo ancestral y de comunidades indígenas y el conocimiento indígena y local que es la base de la sustentación de estas comunidades y contiene las herramientas para adaptarse a un mundo cambiante.

Uno de los mecanismos más utilizados a nivel mundial para esta conservación son las reservas de la biósfera (sensu UNESCO) que protegen áreas más amplias que las tradicionales unidades de áreas protegidas. Dentro de estas reservas de las biosferas se puede realizar una adecuada planificación del territorio identificando áreas con diversos niveles de protección y por lo tanto, con diversos niveles de intervención humana. El involucramiento de las comunidades

locales en la gobernanza de estas unidades es crítico para lograr sus objetivos que no sólo consideran el patrimonio ecológico natural sino también el componente cultural y humano.

En Chile, actualmente si bien existen reservas de las biósfera, estos mecanismos de reservas bioculturales no son adecuadamente respaldados por la legislación dejando vacíos importantes en la capacidad de estas áreas de cumplir con sus objetivos. Incluir explícitamente las reservas bioculturales en la nueva constitución es una manera concreta de lograr conservar el patrimonio natural y social a nivel local con una mirada integradora y establecer las bases para un desarrollo sustentable del territorio en el largo plazo más allá de las variaciones de la contingencia de las políticas locales y nacionales. Por último, resulta crucial establecer mecanismos de gestión (e.g. incentivos, regulaciones) y evaluación de cumplimiento de las metas de estas reservas, para evitar así que se transformen en simples declaraciones de buenas intenciones.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XXX. El patrimonio biocultural de Chile está constituido por todos los ecosistemas que son parte del territorio nacional y que conforman la base de la vida y del desarrollo de todas las actividades sociales, y las adaptaciones e interrelaciones de la cultura local con estos ecosistemas que le dan identidad a los pueblos y las naciones de Chile.

La Constitución asegura la protección del patrimonio biocultural de Chile, en concordancia con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Para ello, el Estado, además de administrar las áreas protegidas y cumplir con las obligaciones que le mandata la Constitución y las leyes, deberá declarar como reservas patrimoniales al menos un 30% de los territorios en que existan cada uno de los ecosistemas representativos. Las reservas patrimoniales no admitirán actividad industrial alguna, podrán coincidir espacialmente con otras áreas protegidas y se regularán, en lo demás, por lo que se establezca en la ley. Las reservas patrimoniales serán gestionadas por el Estado en conjunto con las comunidades locales y con especial atención de los derechos de los pueblos indígenas cuando corresponda.

Las reservas patrimoniales deberán ser representativas de los ecosistemas de Chile, incluyendo a lo menos: el mar, el desierto, los salares, las zonas costeras, la alta montaña, los valles transversales, el secano costero, el bosque esclerófilo, el bosque andino patagónico, la estepa patagónica, los archipiélagos, las turberas y la tundra magallánica.

El Estado deberá hacer la declaración de reservas patrimoniales en el plazo de 4 años, pasado dicho plazo y en caso de que uno o más ecosistemas representativos no cuente aún con reserva patrimonial, no podrá otorgarse ningún tipo de concesión o permiso de funcionamiento que afecte dichos ecosistemas, hasta que se establezca la reserva patrimonial respectiva.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 254-7, la que fue aprobada por 11 votos a favor, y 3 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°298-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a los patrimonios culturales, materiales, inmateriales y naturales, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Carolina Videla, Hugo Gutiérrez, Erick Chinga, Isabel Godoy, Ivanna Olivares, Alejandra Flores, Francisco Caamaño, Manuel Woldarsky y Jennifer Mella.

La presente propuesta de norma ha sido desarrollada por la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales con el propósito de incluir en el nuevo texto constitucional una norma que consagre y garantice la protección, conservación, gestión y educación de los patrimonios culturales y naturales de Chile en toda su diversidad y profundidad, tanto material como inmaterial, reconociendo su carácter de herencia colectiva. Entendiendo de esta manera, que el patrimonio cultural y natural, debe ser considerado como un derecho de todas y todos los habitantes y pueblos de Chile.

Nuestro país se encuentra en un proceso histórico de construir una nueva constitución a través de un proceso democrático y de participación ciudadana. En el ámbito de la cultura, uno de los temas que debe consagrar la nueva constitución es el patrimonio cultural y natural, el cual debe ser considerado como un derecho de todos los habitantes y pueblos de Chile.

La definición de Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO permite conceptualizar, los patrimonios y su significancia en la vida de quienes habitan los territorios.

“El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Con la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural la UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un “valor universal excepcional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad, como la selva de Serenguetien en África oriental, las pirámides de Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia y las catedrales barrocas de América Latina. Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.

Para la UNESCO Santiago la noción de patrimonio es importante para la cultura y el futuro porque constituye el “potencial cultural” de las sociedades contemporáneas, contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Además, el patrimonio es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que generan productos culturales contemporáneos y futuros. El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia, individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo en muchos países. Esto también genera nuevos retos para su conservación.”

Es importante señalar que lo argumentado aquí, se basa en la revisión de distintas convenciones y tratados internacionales en materia de patrimonios, culturas y medioambiente. Acuerdo de París De la Convención Marco sobre el Cambio Climático, (ONU) 2015/ Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 2005/ Convención sobre la Salvaguardia del Patrimonio del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003 / Convenio sobre la Diversidad Biológica, (ONU) 1992/ Protocolo de enmienda de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 1982. / Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 1975 / Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Unesco, 1972 / entre otros.

El objetivo de esta propuesta es incluir un conjunto de normas para que la nueva Constitución garantice la protección, conservación, gestión y educación de los patrimonios culturales y naturales de Chile en toda su diversidad y profundidad, tanto material como inmaterial, reconociendo su carácter de herencias colectivas.

Hasta ahora la responsabilidad del Estado entorno al patrimonio ha sido la de fomentar su identificación, incremento y protección, pero sin establecerlo como un derecho garantizado, así como tampoco ha definido el rol del Estado y de los pueblos en su conservación y gestión. La actual constitución en su Artículo 19 n°10, señala que “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.”

Para formular la propuesta se realizaron cabildos, asambleas y reuniones virtuales y presenciales a nivel local, regional y nacional durante los años 2020 y 2021, que permitieron un enriquecedor debate de construcción colectiva. El trabajo realizado por las comunidades en la discusión y elaboración para el contenido de esta propuesta, se sustenta en una amplia participación popular que se nutre de la experiencia de muchos años de lucha por la protección de sus patrimonios y culturas, donde se han configurado los elementos conceptuales y los principios que deben guiar una nueva forma de comprender y de actuar sobre los patrimonios y acervos culturales, considerando la actuación del Estado en conjunto con las comunidades, y otros grupos involucrados.

Entre tales principios y orientaciones se identifican como construcción colectiva:

1.- El patrimonio en todas sus dimensiones debe ser comprendido como herencias colectivas, que cumplen una función social y cultural identitaria fundamental en la formación y sentido de pertenencia de los pueblos con sus historias y territorios.

2.- Los patrimonios poseen un conjunto de significados contruidos en el tiempo y significados por descubrir, siendo su valoración diversa y no pocas veces contradictoria por distintos grupos sociales y por las nuevas generaciones. A pesar de ello, su conservación es de gran importancia para comprender la historia, las formas de vivir en un territorio, de aprovechar de manera sustentable sus recursos y transitar hacia el buen vivir.

3.- A lo largo de nuestra historia, el accionar del Estado respecto del patrimonio se ha centrado principalmente en relevar la protección patrimonial de algunos bienes que sustentan la ideología, cultura y valores de los grupos que administran el poder, no reconociendo las diferentes memorias e historias que nutren la historia milenaria de los pueblos de Chile hasta la actualidad.

4.- El Derecho a los Patrimonios en la nueva constitución debe estar garantizado para toda la población, estableciéndose en ella la responsabilidad del Estado como garante de tal derecho, así como también la responsabilidad de la sociedad en su conjunto de identificar, conocer, respetar, proteger y gestionar acciones afirmativas de los patrimonios como bienes comunes para todas y todos.

5. La Cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo y destacan a los Pueblos, permitiendo una convivencia en comunidad Plurinacional. Todas las Culturas de acuerdo con su relación con la Naturaleza, tienen su propia comprensión de ella, manifestada en una Cosmovisión.

6.- El Estado de Chile y los Pueblos que lo conforman tienen una responsabilidad colectiva de elaborar y consensuar nuevas políticas, programas y planes que rescaten, conserven y difundan con respeto, todos los patrimonios; garantizando mecanismos de participación ciudadana vinculante; que permitan a las actuales y futuras generaciones construir una visión más diversa e integral de los procesos históricos que las han conformado como sociedad.

7. Todo lo anterior, considerando que la Convención Constitucional posee como marco referencial y fuentes normativas, todas aquellas cartas, acuerdos, tratados, convenios y convenciones internacionales en los ámbitos de los Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos indígenas de Naciones Unidas, las culturas, las artes y los patrimonios, emanadas desde la UNESCO y de otras entidades que, a la fecha, el Estado de Chile ya ha ratificado e implementado total o parcialmente.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X1: El Estado de Chile, plurinacional e intercultural, reconoce los patrimonios culturales materiales e inmateriales y de la naturaleza. Garantiza a los pueblos y comunidades que habitan el territorio del país, su protección, preservación y conservación integral, generando mecanismos y

recursos para su implementación, e incorporando la gestión participativa, la educación formal y la educación popular de los patrimonios culturales y naturales.

Los patrimonios culturales y naturales comprenden todos los bienes materiales e inmateriales, lugares, territorios, naturaleza, semillas, inmuebles y conjuntos arquitectónicos urbanos y rurales, objetos y sitios arqueológicos, memorias, prácticas culturales, tradiciones y festividades, ya sea que ellos existan o lleguen a existir en virtud de su significación histórica, social, científica y simbólica y que las comunidades han construido y las que se construyen en el presente.

Artículo X2: El Estado de Chile protege, promueve, garantiza los patrimonios culturales materiales, inmateriales y de la naturaleza, y cautela el respeto y la educación de y hacia las identidades y patrimonios culturales de cada pueblo y comunidades que habitan en el territorio del país, con pleno respeto y apego al derecho internacional de derechos humanos y a su particular visión respecto de la conservación y la gestión de sus patrimonios culturales y naturales, con especial observación y protección de la flora y fauna contra acciones que amenacen su bienestar y preservación, respetando la sustentabilidad ambiental, y la participación ciudadana vinculante conducente al buen vivir y la felicidad de la sociedad en su conjunto.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 298-7, la que fue aprobada por 12 votos a favor, y 3 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°335-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el reconocimiento constitucional de la artesanía como patrimonio cultural inmaterial y a sus cultores y cultoras como artesanas y artesanos titulares de dicho reconocimiento, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Carolina Videla, Bárbara Sepúlveda, Hugo Gutiérrez, María Magdalena, Dayana González, Cristóbal Andrade, Isabel Godoy, Francisco Caamaño, Marcos Barraza, Bessy Gallardo, Valentina Miranda, Manuela Royo, Malucha Pinto y Nicolás Núñez.

Han sido diversos esfuerzos de personas, organizaciones y organismos, nacionales e internacionales los que han ido consagrando la idea de Patrimonio Cultural Inmaterial. Así, la Unesco ha señalado que, “El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.”

La UNESCO define Artesanía como “Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.”

Destacamos que esta iniciativa es el resultado de un trabajo arduo, laborioso y extendido en el tiempo, realizado por artesanas y artesanos de distintos territorios, quienes además de hacer propia las definiciones de la UNESCO, establecen la artesanía tradicional y la artesanía contemporánea para efectos de su reconocimiento.

La definición de Artesanía Contemporánea es un concepto que tiene matices a nivel nacional e internacional. Así, Alejandra Bobadilla define “La artesanía contemporánea colinda también con las industrias creativas: dada la apertura de la sociedad a adquirir objetos de valor simbólico, la artesanía ha logrado adaptarse a nuevas formas, creando innovadores productos que reflejan a cabalidad la creatividad y el patrimonio cultural de sus creadores.”

En España se plantea la Artesanía Contemporánea como. “La artesanía contemporánea se ha convertido, de esta forma, en un campo de reflexión y experimentación sensorial, formal y simbólica a través de la confrontación y el diálogo entre la tradición y la innovación, entre los materiales naturales y los materiales inteligentes, entre las técnicas manuales y las nuevas tecnologías, entre la identidad local y el desarrollo global, erigiéndose en la vanguardia de las nuevas tendencias culturales y del mercado.”

La definición anteriormente anotada da cuenta de un concepto vivo que va avanzando a medida en que se tiene la capacidad de identificar y reconocer, más allá del patrimonio cultural asociado a obras materiales, un conjunto de costumbres, prácticas, técnicas y saberes practicados por comunidades, grupos o individuos. Más precisamente la “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial” (en adelante La convención) la entiende como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.”

Así, el literal e) de La convención señala que, las “técnicas artesanales tradicionales” constituyen una manifestación particular del Patrimonio Cultural inmaterial, y sin embargo, no existe ley específica que directa o indirectamente salvaguarde la labor de las y los artesanos⁶, resultando insuficiente hasta la fecha el marco normativo con el que se protege la actividad artesanal, a saber, la Política Nacional de Artesanía.

Derivado de lo anterior es que se manifiesta uno de los principales problemas para la artesanía en Chile, esto es, la inexistente protección que existe ante producciones industriales y masivas, las que no son fiscalizadas, por lo cual no es posible diferenciar a artesanos/as y comerciantes en ferias y muestras comunales⁸ poniendo en riesgo la preservación y salvaguarda de la actividad artesanal y el bienestar y protección social de sus cultores y cultoras.

La Constitución vigente establece como un deber del Estado «la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación» (Artículo 19, n° 10), y en la práctica se traduce principalmente la Ley de Monumentos Nacionales 17.288 que reconoce o dota de categoría de monumento histórico a objetos de interés histórico o artístico por su calidad o antigüedad. A su vez, el numeral 25 del artículo 19 de la CPR, establece la libertad de crear y difundir las artes, y el derecho de autor. Al respecto, la Ley n° 17.336, de Propiedad Intelectual, y la Ley n° 19.039, de Propiedad Industrial “...al abordar los diseños y dibujos industriales y las denominaciones de origen—, desarrollan dicha garantía y permiten a los artesanos y artesanas poner en valor y beneficiarse de sus obras mediante herramientas jurídicas concretas”.

Resulta relevante también referirse estadísticamente respecto de la artesanía y la percepción de la sociedad al respecto, en los ámbitos productivos, sociales, culturales, artísticos, lo cual no es posible de manera exacta puesto que desde los distintos espacios institucionales, aun se identifican diferencias conceptuales en la materia. Existe por ejemplo, en Estadísticas Culturales y su

informe anual 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y el otrora Consejo Nacional de la Cultura, la cifra de 7.096 artesanos y artesanas registrados en los distintos territorios del país, pero tal como señala la Política Nacional de Artesanía, esto no responde o no se puede considerar como una cifra total “dado que existen diferencias sustantivas en las metodologías y los conceptos utilizados en cada uno de los registros”.

Chile cuenta con 3 instituciones que tiene registros de artesanos y artesanas, Chile Artesanía del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, Artesanías Chile y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP.

Chile Artesanía, de acuerdo a lo registrado en la Política Nacional de Artesanía, indica que: “un 32% de los artesanos y artesanas registrados pertenecen a alguno de los pueblos originarios, esa cifra podría estar sesgada a la baja; en dichas comunidades los oficios son propiedad de un colectivo y forman parte de la construcción y revitalización de saberes. Cabe destacar, además, que la mitad de los artesanos y artesanas declara pertenecer al pueblo mapuche y un 31% al pueblo aymara.”

En relación a las mujeres y su participación y contribución desde el oficio de artesanas al desarrollo productivo, social, cultural, artístico y económico del país, el mismo documento refleja, de acuerdo a los datos disponibles: “el 64% de los inscritos en los registros de Chile Artesanía corresponde a mujeres, información que se ajusta con otras fuentes sobre la materia, como la Fundación Artesanías de Chile, en la que el porcentaje sube a un 84%, y el Instituto de la Mujer, el que reconoce que: Así como existen sectores mayormente dominados por los hombres como las industrias audiovisuales, de producción musical y las industrias de los nuevos medios y las digitales [...] al mismo tiempo que existen industrias altamente feminizadas como la artesanía, justamente porque no alteraría el equilibrio cultural y social del hogar o la comunidad y como industria es altamente hogareña (cnca & Instituto de la Mujer, 2016, p.19).”

Del planteamiento anterior se desprende que, a pesar del esfuerzo de las comunidades a nivel nacional e internacional para resguardar la artesanía, no ha sido efectivo su resguardo o salvaguarda, existiendo antecedentes suficientes para determinar con precisión qué se entiende por artesanía y por artesano o artesana. Lo anterior se evidencia en la citada “Política Nacional de Artesanía” que, en su glosario, define de la siguiente manera ambos conceptos:

Artesanía: Es la elaboración de objetos o productos realizados individual o colectivamente para los cuales pueden utilizarse herramientas y/o implementos, predominando la ejecución manual. Este dominio de la técnica y la

transformación de las materias primas involucran, a su vez, habilidad, sentido de pertenencia y creatividad en la elaboración de productos pertenecientes a una determinada cultura. Tales aptitudes se despliegan mediante distintas formas de combinar la memoria, la reflexión y el conocimiento experto que sustentan el proceso del trabajo artesanal.

Artesano, Artesana: Cultor(a) y/o Creador(a) que desarrolla la actividad artesanal de manera individual o colectiva, con permanencia en el tiempo. Elabora objetos o productos útiles, simbólicos, rituales o artísticos, con destreza, memoria, reflexión, conocimiento y creatividad.

A lo anterior, integramos lo definido por artesanas y artesanos de distintos territorios de Chile, en razón de que las prácticas y técnicas artesanales tradicionales y contemporáneas, cumplen una función social, cultural, artística y productiva en el desarrollo del país, y sitúan a este grupo humano que representa el noble oficio de artesano y artesana, como los únicos que producen con materia prima, con identidad territorial, contribuyendo al desarrollo productivo económico, ecológico, a escala humana, responsable y sostenible.

En el Simposio Internacional sobre la Artesanía y el Mercado Internacional: Comercio y codificación aduanera, Unesco/Centro de Comercio Internacional (Manila, Filipinas, 1997) se adopta la definición de productos artesanales de la siguiente forma: Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.

Con estos antecedentes es que nos asiste la convicción de que es necesario resguardar constitucionalmente la artesanía, a las y los artesanos en orden a preservar dicha actividad protegiendo su trabajo, sus conocimientos, la transmisión de esos conocimientos, su seguridad social y su intercambio económico.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X.: El Estado reconoce la artesanía como patrimonio cultural inmaterial, y su función social, cultural, artística, económica contributiva al desarrollo del país, y a las artesanas y artesanos en tanto sus cultores y cultoras, como Tesoros Humanos Vivos. En consecuencia, la artesanía y sus cultores y cultoras representan un valor en sí mismos, son un aporte a la transmisión de conocimientos, al desarrollo social, artístico y cultural, al desarrollo y producción económica del país, y son parte insustituible para la conservación, preservación y divulgación de las tradiciones, identidades, memorias y herencias culturales de los territorios.

Artículo XX: El Estado protege, fomenta y garantiza la actividad artesanal tradicional y contemporánea en los ámbitos productivos, culturales y de transmisión de conocimientos, y genera las condiciones materiales y económicas para el pleno desarrollo del oficio de los artesanos y artesanas y su protección social en cualquier parte del territorio. La ley determinará todas las medidas que garanticen dicha protección en el marco de los tratados y convenios suscritos y ratificados por Chile.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 335-7, la que fue aprobada por 14 votos a favor.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°483-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el deber del Estado en la protección de patrimonios de la humanidad ubicados en Chile, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Jorge Abarca, Carolina Videla, Luis Jiménez, Agustín Squella, Camila Zárate, Tiare Aguilera, Adriana Ampuero, Paulina Valenzuela, Carolina Sepúlveda, Juan José Martín Bravo, Carlos Calvo, Gaspar Domínguez, Ignacio Achurra, Malucha Pinto, Álvaro Jofre y María Angélica Tepper.

Actualmente, el Estado de Chile cuenta con siete sitios en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los cuales presentan un valor universal excepcional. Esto significa que tienen una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra relevancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad, justificando de esta

manera su inscripción al listado UNESCO. Estos Bienes universales son variados y representan diversos aspectos de la creatividad, logros de la humanidad en diferentes partes del mundo y momentos de la prehistoria e historia universal. Lo anterior, se ha materializado a través de distintos tipos manifestaciones y expresiones del genio humano, visualizados en construcciones, sitios, edificaciones y monumentos, por nombrar algunos tipos.

Los sitios chilenos declarados como Patrimonio Mundial UNESCO son los siguientes:

1. El parque nacional Rapa Nui (1995).
2. Las iglesias de Chiloé (2000).
3. El barrio histórico de la ciudad de Valparaíso (2003).
4. Las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura (2005).
5. La ciudad minera de Sewel (2006).
6. El sistema vial andino Qhapac Ñan (2014).
7. Los asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro (2021).

Es importante destacar que estas nominaciones incluyen un territorio específico con áreas nucleares y sectores aledaños de amortiguación (zona buffer). Por ende, los sitios UNESCO declarados implican un área geográfica delimitada en componentes tanto urbanos como rurales y sus paisajes naturales protegidos y no protegidos.

Los siete sitios chilenos ante la UNESCO se encuentran en distintas regiones del territorio nacional, tanto continental como insular, abarcando desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Estos sitios tienen componentes tanto arqueológicos como históricos de características monumentales y no monumentales, y son testimonios de importantes procesos culturales ocurridos durante la prehistoria e historia en nuestro país. Estos tienen relevancia internacional por su belleza arquitectónica, paisajista, su valor patrimonial y desarrollo económicos involucrados.

Son un orgullo de Chile ante el mundo al reflejar parte de nuestra esencia y de nuestro desarrollo como sociedad desde tiempos ancestrales y que abarcan hasta el presente. Son iconos que dan testimonio de hechos y de la naturaleza creativa del ser humano desde tiempos remotos como la Cultura

Chinchorro en el norte de Chile hasta momentos históricos como Valparaíso que se proyectan desde Chile hacia el mundo y que tienen importancia universal por sus particularidades, bellezas, su aporte cultural, artístico, económico y social.

Pertenecer al listado de Patrimonio Mundial UNESCO es el máximo reconocimiento que un país puede obtener a nivel internacional para los Bienes culturales materiales y/o tangibles que posee, lo cual permite a las comunidades y al país exhibirse ante el mundo por sus logros culturales. Ejemplo de estos patrimonios mundiales son las ruinas de Machu Pichu y la ciudad de Cuzco en Perú, Tiahuanaco en Bolivia, la zona arqueológica de Teotihuacán en México, las pirámides egipcias y la muralla China, entre otros. Lo anterior, ha permitido a estos países continuar protegiendo estos Bienes culturales y además fomentar su turismo de intereses especiales sustentable. En nuestro país contamos con los siete sitios ya señalados.

Los países que presentan Bienes UNESCO deben velar por la adecuada protección de estos, lo cual se realiza a través de la implementación de planes de manejo y continuo cuidado y protección del Bien. Su inadecuada protección, que cause deterioro, degradación de sus componentes, pérdida de su integridad y autenticidad, puede llevar a que la UNESCO los incorpore a la lista de sitios patrimoniales en peligro y, en caso que el Estado parte no subsane las observaciones y recomendaciones de UNESCO, esta organización internacional puede retirar la categoría de Patrimonio Mundial. Por ende, el Estado parte tiene la obligación de mantener, proteger, promover y velar por la preservación del valor universal excepcional de sus sitios que han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad.

Cabe señalar que si bien es el Estado de Chile quien presenta estos Bienes ante UNESCO, dichos Bienes culturales son por lo general, administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y/o universidades públicas bajo la supervisión del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial, unidad técnica de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile.

A pesar de la importancia de este reconocimiento mundial, los sitios UNESCO de Chile no tienen un presupuesto basal anual del Estado para su operación, mantención, conservación, vinculación con la comunidad, ejecución de sus planes de manejo, puesta en valor y cuidado de su valor cultural universal y excepcional. Los administradores de los siete sitios mencionados deben buscar por su cuenta los recursos operativos y de mantención de los sitios con diversos grados de éxito. Peor aún, desafortunadamente los sitios UNESCO de Chile

deben competir entre ellos por la búsqueda de fondos institucionales para su mantención. Estos fondos, como, por ejemplo, la convocatoria anual nacional del Subsidio para Sitios de Patrimonio Mundial, son concursables entre los sitios UNESCO y tienen un bajo monto presupuestario. Para el año 2021, el presupuesto para este fondo ascendía solo a 286 millones de pesos para los siete sitios chilenos UNESCO ya mencionados. Lo anterior, pone a las “siete maravillas chilenas” en un estado precario de presupuesto y un riesgo latente de ser eliminados de la categoría de Patrimonio Mundial UNESCO por no contar con recursos basales y solo con recursos concursables extremadamente reducidos destinados para su cuidado continuo y permanente.

Todo este proceso de patrimonialización requiere de fondos basales o estructurales para la mantención del valor universal excepcional de los sitios chilenos ante la UNESCO. Una adecuada protección y cuidado, además de mantener la integridad del sitio, fortalece la imagen de Chile como un país que valora, protege, conserva y proyecta su legado cultural ancestral e histórico con sello UNESCO para la humanidad.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo 1. El Estado debe adoptar políticas públicas para la preservación del patrimonio natural y cultural, material e inmaterial, en sus diversos niveles, incluyendo los sitios reconocidos por organismos internacionales como Patrimonio de la Humanidad, atendido su valor único y excepcional.

La Ley de Presupuestos deberá considerar partidas con fondos suficientes para llevar en forma eficaz la conservación, protección, mantención, manejo, vinculación con la comunidad y puesta en valor de los sitios patrimonio mundial reconocidos en Chile.

Se entenderá por eficaz un nivel de financiamiento que permita que estos sitios mantengan su categoría permanente ante los organismos internacionales sin menoscabar su integridad ni arriesgar su pérdida de categoría.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 483-7, la que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°663-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre protección del patrimonio de la biodiversidad, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Margarita Vargas López, Alexis Caiguan, Luis Jiménez Cáceres, Ramona Reyes Painequeo, Isabel Godoy Monardez, Carlos Calvo Muñoz, Carolina Videla Osorio y Adriana Cancino Meneses.

La siguiente propuesta tiene por objeto incorporar en el texto de la nueva Constitución una normativa general, que tenga por finalidad resguardar al sistema jurídico con una protección y garantía a la diversidad genética y alimentaria, acceso a medicinas ancestrales, amenazadas por monocultivos a gran escala. Por ello, busca dotar de una protección frente a todas aquellas actividades ya sean públicas, privadas o mixtas que busquen el acaparamiento y despojo de tierras de vastas extensiones. Todo lo anterior, con especial relación a los Pueblos Indígenas, naciones preexistentes y a pequeños agricultores no indígenas.

Garantizar seguridad alimentaria de Pueblos Indígenas

La preservación de la diversidad genética en la agricultura, la seguridad alimentaria y el acceso a medicinas ancestrales de los Pueblos Indígenas, son tres tópicos que se encuentran en una relación de interdependencia. La diversidad genética aparece además como la “herramienta secreta” contra el cambio climático, por su capacidad para reducir las temperaturas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desarrollo los llamados los Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios del Comité de Seguridad Alimentaria, hace recomendaciones a los Estados miembros, evitando la propagación desmedida de monocultivos.

El reconocimiento de la diversidad genética y conocimientos tradicionales como patrimonio cultural, aparece reconocido en los Principios, de la siguiente manera, velando por su protección desde la perspectiva de cualquier inversión responsable e innovación. Para ello, recomienda el respeto de “los lugares y sistemas del patrimonio cultural, incluidos los conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales, y reconociendo la función que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades locales en la agricultura y los sistemas alimentarios (...)”(énfasis añadido).

La biodiversidad aparece como un elemento indispensable a perseverar, y el rol que han desempeñado tanto los Pueblos Indígenas como de los pequeños agricultores en su mantención es reconocida. Así los Principios prescriben que para: “la conservación, la mejora y la disponibilidad de los recursos genéticos, incluidas las semillas”, se debe proteger y respetar los derechos de Pueblos Indígenas y pequeños agricultores.

La consagración de estos principios es indispensable a nivel nacional, de esta forma esta propuesta extrae los temas centrales y se enfoca en crear una norma que permita garantizar a nivel Constitucional, la diversidad genética alimentaria, la seguridad alimentaria y el acceso a medicinas ancestrales.

Acaparamiento, despojo de tierras o land grabbing

El acaparamiento, despojo de tierras o también conocido en inglés, “land grabbing”, entendido como la adquisición de grandes extensiones de tierra, preferentemente rural, a través de la compra, arrendamiento u otro mecanismo, por parte de actores públicos y/o privados, para múltiples fines a largo plazo, tales como alimentarios, energéticos, extractivos, turísticos, conservación ecológica, políticos, ideológicos, por medios legítimos como ilegítimos.

La dificultad que plantea la adquisición de enormes extensiones de tierras en los países radica en que la forma en que multinacionales adquieren o compran estos derechos, en muchas ocasiones no es de acuerdo a la ley, y es consecuencia de violaciones a los derechos humanos, derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, derechos ambientales y de la Naturaleza. La gran capacidad económica de multinacionales y conglomerados que aparecen detrás de estas actividades, dificultad la protección del Estado en términos genéricos, existiendo riesgo de criminalización de aquellos opositores a dichos proyectos.

Los factores que desencadenan acaparamiento de tierras, como indica el Consejo Económico y Social Europeo, son: “i. Un mundo cada vez más globalizado y los principios de libre circulación de capitales que le son inherentes; ii. El crecimiento de la población y la urbanización; iii. El aumento sostenido de la demanda de alimentos y de bioenergía; iv. La creciente demanda de materias primas naturales (fibras textiles y derivados de la madera); v. Las vertientes negativas de la política medioambiental y la política agrícola; vi. La oportunidad de especular con el incremento del valor de las tierras agrícolas y con los productos alimenticios en el mercado internacional, y; vii. El deseo de los grandes inversores de invertir el capital liberado de las crisis financieras en superficies agrícolas como una inversión más segura”.

A la fecha diversas son las organizaciones que han combatido e intentado frenar este tipo de actividades. A modo de exposición, destacan las siguientes:

i. Manuales y Directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura⁶;

ii. Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios del Comité de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura⁷.

Actualmente estos instrumentos no son vinculantes para nuestra legislación ya que se incardinan en el orden de aquello que se denomina “soft law”, es decir, directrices que no son vinculantes pero que por su técnica buscan generar una adopción en la legislación. Esta propuesta busca, luego de una relectura, y habiendo delimitado, y visibilizado el problema del despojo, adoptar una serie de normas Constitucionales que busquen el resguardo a este tipo de situaciones. Nuestro fundamento, se sustenta en estos contenedores del derecho internacional, sin perjuicio de la existencia de alguna otra normativa que se alinee al respecto.

Por medio de esta propuesta, se pretende dar un marco normativo para proteger el patrimonio genético cultural del territorio y de los Pueblos Indígenas y pequeños agricultores para mantener la biodiversidad en nuestro país.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X. Protección a la biodiversidad en la agricultura. Se fomentarán inversiones sostenibles, sancionando las vulneraciones en territorios y maritorios de los pueblos, especialmente, por despojo para monocultivos, acuicultura u otras actividades que atenten la biodiversidad.

El Estado protegerá a los Pueblos Indígenas y Tribales, garantizando la biodiversidad genética en la agricultura, su seguridad alimentaria y acceso a medicinas ancestrales, todo ello considerado patrimonio cultural.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 663-7, la que fue aprobada por 9 votos a favor, y 4 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°153-7

La siguiente iniciativa convencional indígena que abordó la Comisión sobre el derecho de patrimonio cultural , ingresada por Andrea Santibáñez, Arcenio Llancamil de la Comunidad Llancamil, Orfa Pañicu de la Comunidad Erasmo Pañicu Vejar, Osvaldo Pinto de la Comunidad Eulalio Cañulef, Leonor Pañicu de la Comunidad Newen-che, Margarita Garcés de la Comunidad Antiñir Ormero, Carolina Sandoval de la Comunidad Román Millapan, Felicita Curimilla de la Comunidad Luminado Chapuco, Berta Martínez de la Comunidad José Santos Curumilla, Verónica Henríquez de la Asociación Indígena Paillako Futa Trawun, Luisa Hueitra de la Comunidad La Luma Mapuche Kimun, Samuel Díaz Linco de la Comunidad Estero de la Plata, María Calviu de la Comunidad José Calviu, Rosa Almonacid de la Comunidad José Guillermo Almonacid, Otilia Huentrutripai de la Asociación Indígena Rayenko y Judith Reyes de la Comunidad Reyes Curinao.

Esta norma ha sido construida mediante un trawun de introducción a la normativa y redacción de estas, para luego convocar un trawun con las comunidades aledañas a la comuna de Paillaco, desde donde se tomó la iniciativa de norma en base a lo que se ha conversado a lo largo de años tras el inicio de los movimientos de pueblos originarios en la zona.

Esta norma encuentra sus bases en:

Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, por ser un instrumento ratificado por el Estado Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Declaración universal sobre la diversidad cultural

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003.

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 1972; debido a las definiciones primigenias en torno a los tipos de patrimonio

La convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales; debido a la adopción de medidas para la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales.

III Mesa redonda de ministros de cultura “el patrimonio cultural inmaterial, espejo de la diversidad cultural” Estambul, 16-17 de septiembre 2002 declaración de Estambul.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen el derecho a salvaguardar su identidad cultural. También tendrán derecho a desarrollar, revitalizar, preservar, mantener, administrar, controlar, proteger, recuperar, fomentar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus artes, artesanías, ciencias, técnicas, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos, genéticos y fitogenéticos, las semillas, las plantas, las prácticas y formas de cultivo, las medicinas tradicionales, el conocimiento tradicional sobre la flora, la fauna y otros elementos de la naturaleza, las tradiciones orales, la filosofía y la cosmovisión, las literaturas, sistemas de escrituras, la lengua, los diseños, las danzas, los deportes, juegos tradicionales, prácticas espirituales y festividades, espacios culturalmente relevantes y otros que se deriven de su producción cultural. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual colectiva de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales y sus innovaciones.

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado, establecerán las medidas eficaces para resguardar, fomentar, reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos que debe adoptar el Estado.

Nada de lo contenido en estos derechos será susceptible de apropiación pública o privada por ser parte de la herencia cultural de los pueblos y naciones preexistentes al Estado.

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 153-7, la que fue aprobada por 8 votos a favor, 4 votos en contra, y 3 abstenciones.

INICIATIVA POPULAR N°59-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho a la privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad, cuyos autores son el Centro de Estudios Informáticos de la Universidad de Chile.

Hoy, más que nunca, la privacidad, los datos personales y la ciberseguridad, recobran especial importancia frente a las tecnologías digitales pero también frente a las amenazas tradicionales que provienen del Estado y de particulares. La recolección —muchas veces indebida— de grandes volúmenes de datos personales en cada una de las interacciones digitales, hace que su abordaje deba ser analizado no solo desde el impacto en el individuo, sino también desde sus repercusiones políticas, sociales, comunitarias y, en última línea, considerando los efectos en la democracia.

Las constituciones chilenas han protegido desde los comienzos de la vida republicana aquellos ámbitos de la vida de las personas que deben quedar fuera del conocimiento de los demás. Así, desde el Reglamento Constitucional de 1812 se han protegido los papeles, los efectos personales, la correspondencia y el hogar. A partir de 1980, se incluyó la protección de la vida privada de las personas y su familia, y en el año 2018 se incorporó la protección constitucional de los datos personales.

Esta tradición de largo aliento debe mantenerse en el futuro texto constitucional pero se deben superar las limitaciones formales y adaptarse a los cambios sociales que las tecnologías digitales han supuesto en la vida cotidiana de las personas.

La Constitución hoy consagra el «respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y de su familia». Este derecho, que tradicionalmente ha sido concebido como un derecho de carácter individual, está evolucionando hacia una dimensión colectiva. La protección individual de esta dimensión de las personas resulta parcialmente eficaz para una vida análoga y crecientemente ineficaz a la luz del uso intensivo de tecnologías digitales. Por ello, en el articulado se propone la protección de los derechos de las personas, su familia y la comunidad.

Otra dimensión de la privacidad es su concepción como expresión de autonomía y autodeterminación personal, en especial, en el ámbito de las decisiones sobre su propio cuerpo y su identidad. Este es un aspecto que en Chile ha tenido escaso desarrollo doctrinario y jurisprudencial y que debiera ser incorporado en el debate constitucional.

El conjunto de normas propuestas permitirá a Chile contar con un sistema constitucional de protección de la privacidad, la autodeterminación personal y la seguridad informática, donde confluyen elementos tradicionales del derecho constitucional con aquellas innovaciones necesarias para una sociedad en constante digitalización como la chilena.

Qué debe contemplar la nueva constitución

Se propone un artículo inicial que protege tres ámbitos determinados de la privacidad:

Una cláusula general de protección cuyo contenido específico será determinado por la ley y la jurisprudencia, pero que inicialmente se refiere a aquellos ámbitos de la vida de las personas que deben quedar fuera del conocimiento público y aquel ámbito de decisiones que las personas pueden tomar sin injerencia de terceros ni del Estado. Una regla de protección de los recintos privados superando la expresión “hogar” que actualmente utiliza el texto constitucional por un concepto más amplio como “recinto privado”, el que puede incluir servidores, servicios en la nube u otros espacios de la vida digital. Y, el tercer ámbito protege las comunicaciones y documentos privados, incluyendo los metadatos. En los tres ámbitos se establecen las formas de restricción legítima de cada derecho, donde se observan los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, contenido

Luego, en el numeral 2, se propone mantener en el texto constitucional el derecho a la autodeterminación informativa de los individuos de manera separada del derecho a la privacidad. El desarrollo de este derecho requerirá de implementación legal y de una autoridad autónoma constitucional que se preocupe de su protección efectiva, tal como existe en diversos países de Europa y América Latina.

Finalmente, atendido los riesgos y amenazas que supone el uso intensivo de tecnologías digitales para la seguridad digital de las personas, se propone crear un nuevo derecho constitucional que tenga por objeto promover, proteger y respetar la seguridad informática de las personas, sus familias y comunidades, incluyendo una mención expresa al derecho general de

encriptación, como un medio jurídico y técnico de protección de la seguridad digital.

Argumentos para respaldar la propuesta

Evolucionar desde la historia constitucional permite recoger la experiencia de más de doscientos años de protección de ámbitos específicos de la privacidad, como los papeles, los efectos personales, la correspondencia y el hogar.

Nuestra propuesta permite ampliar la forma de comprender y proteger este conjunto de derechos. No basta con que se realicen acciones individuales para gestionar la privacidad cuando el sistema completo no está diseñado o estructurado ni organizado para proteger la privacidad como un todo. Esto, por supuesto, supone cambiar la posición desde la que se piensa el derecho a la privacidad, ya no como una manifestación de autonomía privada, sino como un sistema de intromisiones y accesos indebidos que generan impactos en el colectivo. La privacidad es importante tanto para el individuo como para la sociedad y los arreglos institucionales a través de los cuales se proteja deben estar culturalmente ligados al lugar desde donde se hace esta reflexión. De ahí que la nueva constitución puede ser el espacio ideal para expresar estas nuevas comprensiones.

También la privacidad debe ser analizada como respuesta a la vigilancia estatal. Como es bien sabido, el desarrollo tecnológico ha impactado en los sistemas de vigilancia y ha hecho proliferar la instalación de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de reconocimiento facial, controles automatizados en las vías públicas, todo ello con finalidades declaradas de seguridad pública y, supuestamente, de mejora en la persecución penal. En este sentido, se debe comprender el derecho a la privacidad como límite al ejercicio de las facultades punitivas y de control social del Estado.

Finalmente, la creación de un derecho fundamental a la seguridad informática (ciberseguridad) busca proteger de mejor manera el ejercicio de otros derechos fundamentales, porque la seguridad informática suele operar como habilitante o fortalecedor ya que permite crear un espacio seguro para ese individuo

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX. La Constitución asegura:

1. La protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, sus familias y comunidades. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio del derecho a la privacidad salvo en los casos y formas que determine la ley.

Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento sólo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley.

La correspondencia y los documentos privados son inviolables, incluyendo sus metadatos. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión sólo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley.

2. La protección, promoción y respeto del derecho a la autodeterminación informativa de los individuos, incluido el derecho a la protección de sus datos personales.

El tratamiento de datos personales sólo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, el que en todo caso deberá ser lícito, leal, transparente y para fines determinados, explícitos y legítimos.

Toda persona tiene derecho a ser informada cuando los datos que la conciernen son objeto de tratamiento y los fines del mismo, acceder a dichos datos y a solicitar su rectificación, en su caso.

Un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica velará por el respeto efectivo de este derecho, en la forma que determine la ley.

3. La protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas, sus familias y comunidades. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos que administren.

Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias, como el cifrado o la encriptación. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho.

Un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica velará por el respeto efectivo de este derecho, en la forma que determine la ley.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 59-7, la que fue aprobada por unanimidad de la comisión.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°393-7 (parcial)

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el rol del Estado en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes, patrimonios y humanidades, cuyos autores son los convencionales constituyentes señoras y señores Alfredo Moreno, Manuel Ossandon, Ricardo Neumann, Jorge Arancibia, Marcela Cubillos, Barbara Rebolledo, Eduardo Cretton y Martín Arrau.

El concepto de patrimonio cultural se ha expandido constantemente durante el siglo pasado. Esta noción más moderna y ampliada de lo que compone el universo patrimonial responde a una nueva concepción derivada de los estudios centrados en la etnografía, la antropología y la percepción social de estas otras manifestaciones de la cultura. Este proceso puede por tanto resumirse en la proposición doctrinal de la transición del entendimiento de la cultura como un bien material al entendimiento de lo que compone el patrimonio cultural, lo que involucra bienes invisibles.

Todos los bienes culturales tienen componentes simbólicos no tangibles y materiales entretejidos en una estructura integrada. El hecho de que el patrimonio cultural se manifieste de una forma que es perceptible por los sentidos de las personas es lo que permite evidenciar lo material y lo intangible como cuestiones distintas. Esto tiene un impacto en cuanto a protección del patrimonio cultural. Pues, mientras que el aspecto material nos obliga a preservar la cosa en su forma original y en su condición territorial, aquellos elementos no tangibles obligan a proteger las costumbres, prácticas, actividades y a las comunidades que las portan para mantener las condiciones que favorecerán su transmisión interna e intergeneracional.

El proceso de aparición del patrimonio cultural inmaterial tiene lugar durante un largo período de tiempo. Los estudios etnográficos y antropológicos desde que alcanzaron la categoría de científicos, en los últimos años del Siglo XIX, han despertado una ola de interés por las formas de expresión de la cultura tradicional.

Uno de los impulsores más decisivos del patrimonio cultural inmaterial ha sido la UNESCO, organismo rector de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003. Esta zanjó la ambigüedad sobre el patrimonio inmaterial que quedó en la Convención de 1972 sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; instrumento que se centra principalmente en los temas del patrimonio cultural material.

Entre las acciones emprendidas en el marco del orden internacional especialmente por la UNESCO hay que recordar la Conferencia de Accra de 1975 que se re1rió a la región africana que destacó el valor de la diversidad la diversidad cultural y la necesidad de proteger la lengua, la tradición oral y promoción de las artes tradicionales y populares.

Poco tiempo después la Conferencia celebrada en Bogotá en 1978 adoptó una declaración que enfatiza la preservación y protección del patrimonio vinculado a la identidad de los pueblos y su autenticidad en su recomendación 31 señaló que la música y la danza eran esenciales.

Otro hito importante se encuentra en la Conferencia Intergubernamental organizada por la UNESCO en la Ciudad de México en 1982. El aporte de esta reunión sistematizó las recomendaciones recogidas en declaraciones anteriores. En dicha Conferencia se abordó todos los campos de la cultura y se hizo hincapié en que el patrimonio cultural está compuesto por "obras tangibles e intangibles que expresan la creatividad de un pueblo".

Una nueva Conferencia de la UNESCO en 1988 incluyó una recomendación a los Estados Miembros sobre "Protección del Folklore". Esto será tenido en cuenta por la Conferencia celebrada en París en 1989 que especi1ca que de1nía el "folclore" e incluya como patrimonio inmaterial el lenguaje, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los rituales, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras manifestaciones.

A raíz de la anterior conferencia de toma de decisiones durante la próxima década se realizarán diversos talleres para evaluar la aplicación de las Recomendaciones que indicarán un cambio de terminología reflejada específicamente en la Conferencia de Washington de 1999. Habiendo esclarecido la terminología pertinente, se obtiene como resultado la Declaración de Estambul de 2002 donde se termina de acuñar el término de "patrimonio cultural inmaterial".

Todo lo anterior, dio pie a que el 17 de octubre de 2003 en París la Asamblea General de la UNESCO aprobara la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, instrumento que fue rati1cado por Chile el 10 de

diciembre de 2008. En su Artículo 2, define al patrimonio cultural inmaterial de la forma que consta a continuación:

“Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

El "patrimonio cultural inmaterial", según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

- a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
- b) artes del espectáculo;
- c) usos sociales, rituales y actos festivos;
- d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
- e) técnicas artesanales tradicionales”.

Dicho todo lo anterior, se estima de imperiosa relevancia, el reconocimiento a nivel constitucional del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación y por consecuencia la consagración de la obligación de preservación y protección de sus manifestaciones.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo XX.- El patrimonio cultural del país se compone de manifestaciones y expresiones materiales e inmateriales.

Para el Estado es obligatorio proteger, preservar y promover el incremento de las manifestaciones y expresiones artísticas, culturales, lingüísticas y deportivas que conforman el patrimonio cultural material e inmaterial y que tengan origen en las costumbres y tradiciones del país.

Las leyes y políticas públicas que afecten al patrimonio cultural material e inmaterial del país deberán respetar el principio de diferenciación territorial de las expresiones y manifestaciones que lo componen.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 393-7. Debido a una solicitud de votación separada solo fue aprobado el inciso primero del articulado por 13 votos a favor 2 votos en contra y 5 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°108-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre derechos individuales y colectivos indígenas y tribales, ingresada por Erwin Ojeda, y Lissette Hidalgo de la Comunidad Indígena Quechua territorial de Quipisca.

Este texto fue acordado por la comunidad quechua de Quipisca en tres talleres y asambleas de información deliberación y acuerdos, uno de manera presencial en el marco del Congreso Quechua, celebrado el 3 y 4 de enero de 2022 en la Universidad Arturo Prat; una reunión vía remota en la plataforma Zoom el día 10 de enero de 2022 y; un encuentro en modalidad híbrida el día jueves 13 de enero de 2022. Estos dos últimos desde la sede de la Comunidad Indígena de Quipisca, en la ciudad de Iquique

El estándar internacional de derechos de los pueblos indígenas reconoce y protege la cultura indígena diferenciada, y en consecuencia, reconoce la identidad indígena, tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual, y establece la obligación estatal de protegerla. En esta materia, la autonomía indígena y autoidentificación cobran un rol central, en tanto la identidad indígena no puede imponerse contra la voluntad del grupo ni el pueblo al que pertenece.

El diccionario de la Real Academia Española ofrece como una de las definiciones de la voz identidad al “conjunto de rasgos propios de una persona o colectividad que los caracterizan frente a los demás”. Diversos autores han

relevado el estrecho vínculo entre la dimensión individual de la identidad, referida a la persona, y su dimensión colectiva, relativa a grupos humanos. Por una parte, se ha sostenido que el sentido de pertenencia a un colectivo permite al individuo situarse existencialmente y orientar así su propia vida. Dicho de otra manera, la pertenencia a una cultura societal, ofrece a la persona un contexto para que sus decisiones individuales sean significativas.

Por otra parte, el ejercicio individual de esta pertenencia, depende de la capacidad colectiva del grupo para mantener su propia identidad cultural. Esto explica por qué tanto la cuestión de la pertenencia a minorías étnicas y/o culturales como la identidad individual, han sido objeto de protección del derecho internacional de los derechos humanos.

La protección de la pertenencia de las personas a grupos culturalmente diferenciados ha estado presente en el derecho internacional de los derechos humanos desde la adopción, en 1966, del primer tratado sobre la materia: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Chile en 1972. Este reconoce el derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a mantener y practicar su propia vida cultural, religión y lengua “en común con los demás miembros de su grupo”.

Si bien se trata de un derecho individual, esto es, un derecho reconocido a las personas, el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar la aplicación del Pacto, ha reconocido su dimensión colectiva, al afirmar que su ejercicio depende de la capacidad del grupo de mantener su cultura, religión o idioma, lo que exige que el Estado adopte medidas para proteger la identidad cultural del grupo.

Con la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT (C169), se reconocieron derechos colectivos a los pueblos indígenas y tribales, reforzando así la protección de su identidad cultural. En efecto, su artículo 2.1. establece explícitamente la obligación de los Estados en orden a garantizar el respeto de la integridad de los pueblos indígenas. En este sentido, se ha sostenido que la protección de la integridad cultural es uno de los principios fundamentales del Convenio 169 de la OIT, lo que se manifiesta en diversas disposiciones.

También la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007, con la firma concurrente de Chile, establece la obligación estatal de prevenir y resarcir todo acto que prive a los pueblos indígenas de su integridad como pueblos diferenciados. La reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas (DADPI), adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 2016, con la concurrencia de Chile, reconoce explícitamente el derecho de los pueblos indígenas a la identidad e integridad cultural y a mantenerla.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

ARTÍCULO XX1: Los pueblos indígenas, preexistentes al Estado de Chile, son reconocidos como custodios de sus conocimientos, cultura e identidad. Tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a preservar, desarrollar, administrar y transmitir a las futuras generaciones, su patrimonio cultural e histórico, tangible e intangible, que constituye la base de su continuidad colectiva e individual.

Los pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad; sus usos, costumbres, normas y tradiciones; las formas de organización social, económica, política y jurídica; las formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas; y la interrelación que existe entre manifestaciones culturales.

A los individuos a quienes se les reconozca su calidad indígena, como a las comunidades de un determinado pueblo nación preexistente, se les reconoce la titularidad de tales derechos ancestrales.

ARTÍCULO XX2: El Estado Chileno reconoce la propiedad intelectual de los pueblos naciones preexistentes sobre sus sistemas de conocimientos tradicionales, expresiones culturales, el patrimonio genético existente en la biodiversidad de los territorios indígenas, sus saberes y tradición oral, su medicina ancestral, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos, vestimentas, cosmovisiones, mitos, danzas, prácticas culturales, y sus tecnologías tradicionales.

ARTÍCULO XX3: Corresponderá a cada pueblo determinar, resguardar y administrar la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de su respectivo acervo, incluidas las nuevas obras, inventos, descubrimientos, marcas comerciales y demás bienes intelectuales susceptibles de protección.

ARTÍCULO XX4: El Estado tendrá el deber de prohibir la constitución de derechos de propiedad industrial, intelectual y similares sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, deberá anular cualquier registro o derecho que se haya constituido sobre aquellos y sin el consentimiento del respectivo pueblo.

ARTÍCULO XX5: Es deber del Estado realizar todas las acciones necesarias para obtener la restitución de los objetos pertenecientes al patrimonio material de los pueblos y naciones preexistentes que, sin el consentimiento de éstos, se encuentren fuera del territorio nacional, debiendo financiar y suministrar el presupuesto necesario para la consecución de estos fines, incluyendo las gestiones diplomáticas y la litigación ante tribunales internacionales.

ARTÍCULO XX6: Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción frente a actos que tienen por objeto o consecuencia desposeer a los Pueblos de sus tierras, territorios y recursos, menoscabar sus derechos, incitar a la discriminación racial o etnia o promover una asimilación e integración forzada.

ARTÍCULO XX7: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a su identidad cultural, creencias religiosas, espirituales, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión; a la recuperación, protección y promoción de sus lenguas, lugares sagrados y de su ritualidades, así como plantas, el material genético de estos cultivos desarrollados a través de generaciones, no sea susceptible de apropiación por ninguna empresa privada, nacional o extranjera y se protegerán de la contaminación que pudiera producir plantas genéticamente modificadas, protección de animales, minerales y ecosistemas dentro de su territorios. A mantener preservar, administrar, reconocer, proteger, desarrollar, los valores y practicas sociales, culturales, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnologías, su religiosidad y espiritualidad los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, y el patrimonio subacuático propio de dichos pueblos. El Estado garantizará con acuerdo a las leyes, la tutela y resguardo de estos derechos.

ARTÍCULO XX8: Los pueblos y naciones preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales.

El Estado asegurará la permanencia de a lo menos un colegio o liceo al interior de una comuna declarada como indígena, garantizando la continuidad de estudios para niñas y niños, adolescentes en los conocimientos y lenguas

propios del pueblo. Para su revitalización y fortalecimiento, se favorecerán planes de estudio y enseñanza dirigido a todos los individuos, lo que implicará incluir formación de adultos en sus propias culturas, conocimientos, creencias y lenguas.

ARTÍCULO XX9: En el territorio chileno quedará prohibido el uso de los conocimientos de los ancianos y sabios de los pueblos y comunidades sin el debido permiso y consentimiento de la propia comunidad a la que se acude.

En cualquier caso, toda publicación digital, impresa, manuscrita, sonora o audiovisual obtenida con motivo de una investigación realizada en terreno indígena o por vía remota con miembros de una determinada comunidad, deberá siempre priorizar la entrega de registros de respaldo a la comunidad como soporte para las generaciones futuras. No se permitirán publicaciones que no incluyan la definición exacta del proveedor de conocimientos en el trabajo de campo, a qué comunidad pertenece, el cargo o título ancestral que detente y la comunidad y pueblo al que pertenece, quedando prohibida la utilización de imágenes y registros de cualquier tipo que se hayan obtenido sin su consentimiento.

ARTÍCULO TRANSITORIO: El Estado chileno ordenará a todas las instituciones públicas o que cuenten con financiamiento público y que hubieren sustraído, resguardado bajo cualquier forma o soporte registros, instrumentos, objetos o cualquier tipo de elementos pertenecientes a un determinado pueblo, para que en el transcurso de un año contados desde la publicación de la presente constitución, hagan entrega formal y pública de un catálogo íntegro de dichos elementos o soportes y propenderá a alcanzar un acuerdo de custodia, para continuar manteniéndolos.

Si transcurridos 12 meses adicionales al tiempo de entrega del catálogo de dichos objetos o registros no se ha alcanzado un acuerdo con el pueblo respectivo y la mayoría de sus comunidades, los objetos, soportes y registros antes señalados, serán entregados a la custodia de la institución, organismo o comunidad que el propio pueblo determine.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N°108-7, la que fue aprobada por 7 votos a favor, 4 votos en contra, y 4 abstenciones.

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre autonomías territoriales e indígenas, ingresada por Alan Marchant y el Pueblo Aymara.

Protección a las tradiciones y costumbres indígenas al patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos ancestrales y que la ejecución de ceremonias, ritos, costumbres y la ocupación de elementos de significación espiritual o cosmogónico, no puedan ser ocupadas en actividades comerciales, o en cualquiera otra que distorsione el significado originario.

Problema a solucionar: Desde la creación de CONADI, como institución, ha sido insuficiente en cuanto al cuidado de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, es por ello que, se han dado varias situaciones que ha evidenciado una mercantilización de la cultura, de parte de personas no indígenas, lo que ha conllevado a distorsiones, malas interpretaciones e inclusive ha provocado un menoscabo producto de esta usurpación cultural e intelectual.

Queremos dar un enfoque netamente dirigido a las tradiciones y costumbres, en lo simbólico de la cosmovisión indígena, no obstante, se hace presente que la producción cultural y artística con elementos indígenas, es materia de otra discusión.

Es en ese sentido que se hace necesario velar por las interpretaciones de los “elementos indígenas de significación espiritual y cultural”, entendiendo que las costumbres como patrimonio de una nación originaria tienen distintas formas de ejecución y trasfondo, dependiendo de la localidad en que se practique, es por ello que, se debe proteger el sentido y enfoque de la tradición.

Situación ideal: En el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, cada nación originaria pueda defender sus costumbres, ceremonias y elementos tradicionales, reconociéndoles facultades a autoridades ceremoniales y/o políticas, para tomar las medidas más adecuadas que impidan la mala ejecución o interpretación distorsionada de sus costumbres, así mismo, que las comunidades que quieran transmitir sus tradiciones lo puedan hacer sin obstáculo legal y por el contrario, se les permita libremente su promoción y ejecución.

Llamamos obstáculo legal a la expresión “cuanto lo tradicional se vuelve clandestino”, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el pueblo Aymara, quien históricamente ha consumido la hoja de coca tanto para ritos ceremoniales, como con fines medicinales o simplemente como consumo

cotidiano. El obstáculo legal por décadas ha sido la ley 20.000 que cataloga la hoja de coca como una sustancia ilegal. Es por ello que, por años muchos Aymaras fueron detenidos y otros expulsados del país, por transportar hoja de coca, lo que produjo recurrir a la clandestinidad para conseguir hoja de coca y su consumo se convirtiese en algo hermético.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo xx: Las naciones originarias tienen el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones, por lo que también se les reconoce la facultad para protegerlas frente a personas que puedan mal utilizar sus elementos materiales, o distorsionar su sentido cosmogónico.

Para ello, las naciones originarias pueden establecer instituciones autónomamente, con el fin que la comunidad pueda alinear a un propio connacional, o bien, la comunidad puede concurrir ante los tribunales del estado para que se tomen medidas respecto de una persona ajena a su comunidad o nación originaria, que mal utilice sus elementos culturales, pudiendo inclusive acarrear penas punitivas si las distorsiones conllevaran delitos.

Artículo xx: Las naciones originarias tienen el derecho para administrar sus elementos materiales, tanto bienes muebles como inmuebles, en consecuencia, se delega a las naciones, comunidades y asociaciones originarias la protección, mantención y cuidado de ellas, además, es deber del estado entregar los recursos económicos para dichas funciones sobre todo en los centros ceremoniales tanto, rurales como urbanos.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 121-7, la que fue rechazada por 4 votos a favor y 11 en contra.

INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE N°156-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho al resguardo de la propiedad intelectual, industrial y saberes ancestrales, ingresado por Margarita Vargas y la Comunidad Indígena Kawésqat Jetarkte.

El pueblo fueguino que asumía por su presencia la soberanía humana en los canales australes y cuyo territorio se extendía desde la desembocadura occidental del estrecho, en el Sur, hasta el Golfo de Penas en el Norte, son los Kawésqar. En este espacio los Kawésqar practicaban un nomadismo marítimo habiendo desarrollado una sabia cultura de adaptación digna de admiración para cada persona sensible a los mensajes ecológicos. José Emperaire, el antropólogo y arqueólogo francés quien estuvo viviendo 22 meses junto a los Kawésqar en Puerto Edén, entre los años 1946-48, y a quien se debe el estudio mas completo acerca de su vida los bautizó Nómades del Mar en su libro que lleva el mismo título.

El primer testimonio escrito sobre la lengua de los Kawésqar se debe al filibustero francés louhan de la Guilbaudière quien después del naufragio de su nave en el año 1698 en el Estrecho de Magallanes, en los alrededores de Puerto Galand, recopiló un vocabulario de 225 palabras.

Hacia el siglo XIX la población Kawésqar estaba considerada en aproximadamente de unos 4000 individuos, para fines del mismo siglo la población disminuyó de forma drástica, alcanzando el número de 500 personas. Para el año 1925, la población habría disminuido a 150 personas. Para el año 1940 se impulsó la idea de protección de este pueblo mediante la dictación de la Ley de protección indígena, lo que se tradujo en la instalación de todos ellos en la Isla Wellington, en Puerto Edén. Es aquí donde se observa el fin al nomadismo Kawésqar, por un lado, y por otro, un exacerbado asistencialismo estatal que derivó en una transculturación mal planteada por parte del gobierno de la época. Así, para el año 1946 la población siguió en descenso, sumando solo 100 personas. José Emperaire señala « Hace cincuenta años, los alacalufes eran por lo menos un millar y tal vez mucho más. » Para 1953, 60 eran la cifra y 47 y algunas personas más según el censo efectuado por Christos Clairis en 1971.

Información del pueblo Kawésqar

Los Kawésqar hasta la década de los años setenta han sido conocidos en la bibliografía y en todos los medios bajo el nombre Alakaluf y sus variantes. Hubo que esperar hasta el VI. Congreso de Arqueología Chilena que se realizó en octubre 1971 en Santiago. En este congreso el lingüista Christos Clairis, quien había iniciado este mismo año sus investigaciones sobre la lengua en Puerto Edén propuso, «reconociendo el derecho de los pueblos de autodenominarse reemplazar ese término por su verdadero nombre Qawasqar ». Clairis manifestaba además «la esperanza de que el prestigio de ese evento ayude a establecer en la bibliografía internacional este vocablo. » Qawasqar o Kawésqar es un término genérico para designar la persona que pertenece al

pueblo y su lengua. Para nombrar un «hombre» se usa la palabra aksanas y para nombrar una «mujer» la palabra asatap. Además, los Kawésqar designan el «chileno» como yema, el «extranjero» como pescewe y el «chilote» como kstapón.

Entre otras denominaciones que se han usado en la bibliografía para designar el pueblo y la lengua kawésqar se mencionan: Enoo, Pecheré, Huemul, Aksanas, Hekaine, Caucawe, Taijataf, Adwiplin, Lecheyel, etc.

Pueblo nómade y canoero, su cultural, hábitos y costumbres

Los Kawésqar destacaron en su historia por ser un pueblo auto reconocido nómade debido al constante movimiento al que se sometían, en particular, para recolectar alimentos y conseguir abrigo. Destaca para esta labor su medio de movilización la canoa o qajef, la que les otorgó el título en la historiografía como los “nómadas del mar”, ya que, gracias a este medio de transporte, lograron recorrer los estrechos canales de las zonas más australes de Chile.

Se destaca, dentro de las diversas herramientas y costumbres que los Kawésqar implementan para su subsistencia y supervivencia el uso de la canoa hecha con madera, principalmente con coigüe. La confección de arpones de hueso para la caza de animales marinos, en especial, la caza del lobo marino y la pesca mediante buceo. La confección de diversas herramientas hechas principalmente de hueso (punzones, cajas de madera con cortezas, flechas, etc.). La confección de redes hechas de tendones o de hebras de cuero utilizadas para la caza.

Junto a esta gran variedad de instrumentos, se destaca la presencia de talleres líticos dónde elaboraron los diversos instrumentos que se presentan, distribuidos en las costas de los canales por donde se desplazaban. La presencia de conchales entendidos como sitios compuestos por la acumulación de valvas y moluscos, y de vestigios que antaño fueron campamentos y que datan de más 2000 años de antigüedad.

La presencia de su vivienda tradicional o bien conocidas como at, donde los Kawésqar se refugiaban ante las adversas condiciones climáticas. Con sus estructuras de base elíptica, cúpula aplastada y recubiertas con pieles de focas y lobos marinos para protegerse del viento y del frío.

Los denominados lugares de tabú, dónde los Kawésqar daban sepultura a sus difuntos. Consistentes en espacios en que se daba envoltura a los cadáveres en pieles de lobos para luego ser rodeados de piedras con la finalidad de evitar el deterioro por las aves. Por costumbre, este tipo de ritualidad se llevaba

a cabo, cerca de los “at”, o de los mismos conchales que los Kawésqar frecuentaban al estar en constante desplazamiento.

Necesidad de contar con una norma constitucional que garantice la protección del patrimonio cultural Indígena y Tribal.

En la actualidad, nuestra Constitución Política de la República, no dispone de una normativa general que haga alusión a los pueblos originarios. Menos aún, en su parte dogmática, tampoco hace alusión al respeto o protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

Es así como nuestro ordenamiento jurídico ha dejado la regulación de las más diversas materias indígenas, a manos y en parte, de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, de los convenios internacionales, de la ley, entre otros.

Evidencia de lo ya expuesto queda en los diversos tratados internacionales suscritos y ratificados, siendo de relevancia mencionar: Declaración de Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas (DNU DPI) de 2007, la que en su artículo primero hace vinculante el reconocimiento a los Pueblos Indígenas, al disfrute pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos Humanos; el Convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo del año 1989; y otros tratados especializados del sistema interamericano y universal de derechos humanos.

Todos estos contenedores normativos que dotan de sentido y alcance a las más diversas materias relacionadas al Derecho indígena, pero que ninguno finalmente logra con satisfacción suplir la ausencia que esta necesidad Constitucional auspicia.

Urge así la necesidad de consagrar y dotar a nuestra Carta Magna, con un contenido jurídico que le de un sustento constitucional al menos dogmático, a aquellos que, de antaño fueron, y son hoy considerados nuestros pueblos originarios. Esta propuesta viene en presentar normas de rango Constitucional que garanticen y otorguen reconocimiento al patrimonio cultural indígena, a sus hábitos, usos y costumbres y en particular al pueblo Kawésqar, que junto

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

Artículo X1. La libertad de idiomas y lenguas será garantizada.

Las lenguas Indígenas son parte del patrimonio vivo e inmaterial de dichos pueblos, su uso es un derecho imprescriptible de estos pueblos y cuya existencia se hace necesaria para la supervivencia y transmisión de su cultura y cosmovisión, por lo que el Estado en conjunto con los mismos pueblos deberá elaborar planes y medidas para que estas se sigan hablando y evitar su desaparición.

El Estado reconocerá la calidad de Tesoro Humano Vivo de los escasos hablantes de las lenguas indígenas que, en el territorio nacional, estén amenazadas de desaparecer. Para ello generará mecanismos de protección y documentación de dichas lenguas como parte del patrimonio cultural del país y de los mismos Pueblos Indígenas.

Artículo X2. La libertad de medios de comunicación Indígena será garantizada. Medios de comunicación escritos, audiovisuales, análogos, digitales u otros, serán indispensables para el fomento de las lenguas Indígenas y Tribales, cuya oferta será considerada un servicio público garantizado por el Estado de manera directa o subsidiaria. Se prohíbe todo tipo de censura y o intervención, previa o posterior. En todo caso se deberá velar por la pluralidad de opiniones.

Artículo X3. La libertad de las expresiones artísticas de los Pueblos Indígenas será garantizada. Se considerarán expresiones artísticas, aquellas costumbres ancestrales de los Pueblos Indígenas, como confección la de indumentaria, como botes de corteza de árbol y de cuero de lobo, cestería de junquillo realizada por medio de la técnica de aduja anudada, entre otras.

Las materias primas para la confección de las expresiones artísticas de los Pueblos Indígenas serán especies protegidas y fomentadas.

Artículo X4. El patrimonio arqueológico en el territorio nacional será protegido y su exhibición es un derecho de todos los ciudadanos. Los hallazgos de indumentaria y vestigios de su existencia, de origen orgánico como inorgánico, pertenecen al patrimonio arqueológico material cuyos titulares son dichos pueblos.

El Estado velará por el resguardo del patrimonio arqueológico de los Pueblos Indígenas, declarando a los mismos como los titulares de sus derechos. Además, tomara medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición, las deberán ser tomadas en consenso con los Pueblos Indígenas.

Artículo X5. La libertad de ejercicio de costumbres y tradiciones será garantizada. La caza tradicional de especies terrestres y marinas, como la recolección de moluscos con fines ancestrales, y con el objeto de mantener viva la

cultura de los pueblos canoeros y su alimentación originaria no será obstaculizada, siempre que ella respete además los derechos humanos, derechos ambientales y de la Naturaleza.

Artículo X6. Derecho al consentimiento libre previo e informado de los Pueblos Indígenas y Tribales. Los Pueblos Indígenas deberán consentir de manera previa, libre e informada respecto de todas aquellas decisiones que repercutan en ellos mismo y su territorio, especialmente su patrimonio cultural material e inmaterial. Dicho consentimiento se puede llevar a cabo por medio de los siguientes mecanismos:

a) Consulta previa de acuerdo con los estándares de los derechos humanos internacionales en materia de Pueblos Indígenas.

b) Referéndum comunal, municipal o local en que de manera informada se sufragará para adoptar o rechazar alguna medida determinada.

En el caso de la letra a) y b), el Estado sancionara las prácticas que pudieran dañar el tejido social de los Pueblos Indígenas y Tribales por malas prácticas, destinadas a forzar un determinado acuerdo.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 156-7. Esta se realizó de manera separada por cada uno de los artículos que la componen, resultando aprobados Artículo X1 por 10 votos a favor y 5 abstenciones; Artículo X2 por 8 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones; Artículo X4 por 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones; Artículo X6 por 9 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Rechazados los artículos Artículo X3 por 5 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones; y Artículo X5 por 5 a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°167-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre el derecho al resguardo de la propiedad intelectual, industrial y saberes ancestrales, ingresada por Rudencindo Espíndola de la Comunidad Atacameña de Toconan y apoyada por el convencional Félix Galleguillos, Patricia Ayala y Carlos Aguilar de la comunidad de San Pedro de Atacama.

Esta iniciativa de norma, nace desde un trabajo investigativo relacionado principalmente con el respeto a nuestras y nuestros ancestros, trabajo investigativo que se realiza junto a la Dra. Patricia Ayala (Arqueóloga), Carlos Aguilar (Dirigente y cultor atacameño), Ulises Cárdenas (Arqueólogo) y Rudecindo Espíndola Araya (Agricultor e investigador Atacameño), trabajo que fue difundido a diferentes comunidades de la Lickana (Toconao, Cucuter, Tulo), como también al Consejo de Pueblos Atacameños y difundido en radioemisoras locales y regionales. Todos los antecedentes obtenidos en este trabajo fueron obtenidos y cuidadosamente seleccionados desde universidades, museos tanto a nivel regional, nacional e internacional.

Desde hace bastante tiempo como pueblo Lickanantay venimos cuestionando estas prácticas científicas colonizadoras y patriarcales por parte de algunas y algunos investigadoras e investigadores, arqueólogos y arqueólogas que han desarrollado este trabajo en nuestro territorio, estas manifestaciones de desacuerdos se han manifestado en evidentes luchas sociales, reuniones internas dentro de la Lickana, congresos Atacameños y en instancias a nivel central de este país. El tema de excavación de los cuerpos de nuestros ancestros se convierte en un tema doloroso en nuestra Lickana que abarca Atacama la grande, atacama la baja y el oasis de Calama, donde los cuerpos de nuestros "abuelos" fueron vendidos, regalados y donados, donde el estado chileno no ha tenido gesto de reparación y pedir disculpas a la extirpación masiva de cuerpos desde los sitios sagrados de entierro.

Esta norma tiene por objetivo, terminar definitivamente con las excavaciones de cuerpos humanos en nuestro territorio, exigir derechamente la repatriación de los cuerpos y elementos de entierro de nuestras y nuestros abuelos que se encuentran en diferentes partes de Chile y el mundo, que todo trabajo asociados a esta actividad tiene que ser obligadamente consultadas a nosotros como habitantes milenarios de estos territorios, respetando tratados de derechos indígenas internacionales, que el estado chileno tenga el gesto de apoyar a la repatriación de los cuerpos que se encuentran en museos, instituciones, colecciones privadas y universidades a nivel nacional e internacional.

Legislación Nacional en Chile no existen normativas que aborden el tratamiento ético y devolución de los cuerpos indígenas exhumados de sus lugares de descanso con fines coleccionistas o científicos. Si bien existen disposiciones del CMN el "Guía instructiva para el reentierro de restos humanos de contextos arqueológicos, a solicitud de comunidades y organizaciones", la legislación y política nacional no cuenta con mecanismos que faciliten los procesos de

repatriación, reentierro o consulta indígena a la hora de excavar, exhibir o estudiar cuerpos y/o restos humanos provenientes de cementerios arqueológicos localizados en nuestro territorio. En un futuro, se requiere una legislación que trate el tema del tratamiento ético de los cuerpos de nuestros ancestros, su repatriación y el reentierro.

El estado tiene el deber de reconocer a los pueblos y naciones indígenas su propia identidad cultural en reconocimiento de sus derechos colectivos, diferenciándolos de sus derechos individuales de los cuales ya son titulares. El Estado Chileno se debe obligar a respetar su propia identidad colectiva por sobre la organización comunitaria administrativa forzada. Esto es: autodeterminación en el destino que de manera colectiva deseen otorgar a sus territorios y legado, elevando a la categoría de Constitucional el Derecho Real de Conservación que estos mismos determinen para sus bienes, territorios y legado.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

ARTICULO X1: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener, practicar, revitalizar, fiscalizar y acceder a todo espacio sagrado, ancestral, patrimonial, arqueológico, antropológico material e inmaterial en ejercicio de sus tradiciones, costumbres, ceremonias culturales y espirituales conforme a su propia identidad.

ARTICULO X2: El estado tiene la obligación de prevenir, proteger, preservar y restaurar todo acto que tenga por consecuencia privar, vulnerar o afectar a los pueblos y naciones indígenas de su identidad, sitios sagrados, costumbres, instituciones tradicionales propias.

ARTICULO X3: El estado en consulta con los pueblos y naciones indígenas debe garantizar mecanismos eficaces a través de acciones afirmativas con el propósito de colaborar suscribiendo acuerdos, convenios, protocolos, o cualquier otro instrumento pertinente a nivel nacional e internacional, unilateral o bilateral para efectos de localizar, catastrar, recuperar, repatriar y reenterrar objetos, ajuares o restos óseos humanos, sin perjuicio de la facultad de los propios pueblos y naciones indígenas de suscribir acuerdos sobre las materias señaladas.

ARTICULO X4: No podrán realizar investigaciones científicas que puedan afectar la identidad cultural de los pueblos o naciones indígenas sea a través de excavaciones, extracciones y exhibiciones de objetos, ajuares o restos óseos humanos, salvo acuerdo expreso en contrario con previo consentimiento del o los pueblos y naciones respectivas. Todo agente de investigación tiene la

obligación de registrar los derechos de coautor de los cultores que contribuyan a su resultado, en el catastro respectivo.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 167-7. Respecto de la cual fue votado de forma separada su Artículo X4 resultando aprobado por 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. El resto del articulado que la compone fue rechazado por 5 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.

INICIATIVA CONVENCIONAL INDÍGENA N°17-7

La siguiente iniciativa convencional constituyente que abordó la Comisión sobre la protección de saberes colectivos, territoriales y comunitarios, ingresada por Aldo Cárdenas y el pueblo Mapuche.

La Identidad Territorial Lafkenche es una coordinación de comunidades mapuche que comienza a articularse en la década de 1990, a raíz de la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura que no considera a los trabajadores del mar pertenecientes al pueblo mapuche. Desde ahí, las organizaciones que integramos el Territorio Lafkenche (borde costero de Arauco a Chiloé-Palena) comenzamos un proceso de articulación y reconstrucción del territorio con el fin de proteger el borde costero.

En ese contexto, conseguimos que en 2008 se promulgara la Ley 20.249 (Ley Lafkenche) que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, que constituye una iniciativa única en la forma de hacer leyes en Chile, resultado de la participación de una contraparte político – técnica desde nuestra organización, en conjunto con el Parlamento.

Otras iniciativas legales que hemos impulsado son: durante el año 2008 presentamos 24 indicaciones a la “Ley General de Educación” relacionadas con la enseñanza del mapudungun en escuelas con alta población indígena, de las cuales se aprobaron ocho. Durante el año 2012 planteamos al parlamento el reconocimiento de los pueblos indígenas como titulares de cuotas de pesca durante la tramitación de la “Ley Longueira”; el año 2018, presentamos indicaciones en la “Ley que Moderniza el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”, logrando junto a organizaciones de pescadores artesanales, el reconocimiento de la pesca de subsistencia; el año 2019, impulsamos con otras 50 organizaciones la ley para contar con escaños reservados en la Convención Constitucional.

La organización se ha reunido de manera sistemática desde el año 2016 y ha elaborado un relato político en donde los conceptos de la plurinacionalidad e interculturalidad y el itrofill mongen han estado en el centro de la discusión. Para elaborar las normas presentadas a la Convención, nos reunimos los días 10, 11 y 12 de diciembre en nuestro 8° Congreso Lafkenche 400 alrededor de 400 dirigentes provenientes del territorio lafkenche entre Arauco y Chiloé – Palena y establecimos los temas prioritarios para la discusión. Luego de la discusión y conclusiones generales, un grupo de 15 representantes quedó mandatado para reunirse con un equipo técnico y trabajar el articulado específico. Este trabajo se realizó en varias jornadas de trabajo, completando un total de 12 conjunto de normas.

De manera paralela las comunidades se organizaron e hicieron reuniones algunas de ellas en donde hicieron un acta de apoyo a todas las iniciativas bajo el concepto de “Derechos de los pueblos originarios” y en muy pocos casos, algunas decidieron apoyar solo una específica. Quienes no pudieron reunir a sus comunidades, los representantes firmaron apoyando estas iniciativas.

Para la fundamentación de las iniciativas, se utilizó bibliografía temática, histórica, documentos del derecho internacional referida a derechos humanos y pueblos indígenas y antecedentes de otras constituciones.

Objetivo de la norma

Reconocimiento y protección de los saberes ancestrales, conocimientos tradicionales, expresiones culturales y propiedad intelectual de los pueblos indígenas

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la iniciativa propone aprobar los siguientes textos:

ARTÍCULO: “Se reconoce la propiedad intelectual del pueblo mapuche sobre sus sistemas de conocimientos tradicionales, expresiones culturales, el patrimonio genético existente en la biodiversidad de los territorios indígenas, sus saberes y tradición oral, su medicina ancestral, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos, vestimentas, cosmovisiones, mitos, danzas, prácticas culturales, y sus tecnologías tradicionales;

ARTÍCULO: Corresponderá al pueblo mapuche determinar, resguardar y administrar la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de su respectivo acervo, incluidas las nuevas obras, inventos, descubrimientos, marcas comerciales y demás bienes intelectuales susceptibles de protección.

ARTÍCULO: Es deber del Estado realizar todas las acciones necesarias para obtener la restitución de los objetos pertenecientes al patrimonio material de los pueblos y naciones preexistentes que, sin el consentimiento de éstos, se encuentren fuera del territorio nacional, debiendo financiar y suministrar el presupuesto necesario para la consecución de estos fines, incluyendo las gestiones diplomáticas y la litigación ante tribunales internacionales.

ARTÍCULO: El Estado será responsable de promover, fomentar y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional mapuche, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales a partir del kimün y rakizuam. Asimismo, es deber del Estado proteger los saberes y los conocimientos mapuche mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde las prerrogativas intangibles de este pueblo, especialmente respecto a sus derechos intelectuales colectivos que detenta sobre su acervo cultural en el ámbito de los recursos genéticos, medicina tradicional y agricultura.

ARTÍCULO: Asimismo, será deber del Estado la defensa, anulación, recuperación, protección y repatriación del material bioantropológico de las personas mapuche, y biológico proveniente de los recursos naturales.

ARTÍCULO: El Estado tendrá el deber de prohibir la constitución de derechos de propiedad industrial, intelectual y similares sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, deberá anular cualquier registro o derecho que se haya constituido sobre aquellos y sin el consentimiento del respectivo pueblo.

En definitiva, la Coordinación puso en votación en general esta iniciativa convencional constituyente N° 17-7, la que fue aprobada por 10 votos a favor, 1 voto en contra, y 4 abstenciones.

E.- TEXTO SISTEMATIZADO

De conformidad con los acuerdos previamente reseñados y las votaciones descritas, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 91 del Reglamento General de la Convención Constitucional, la Coordinación presentó el siguiente texto sistematizado de normas aprobadas por esta Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios:

Este documento recoge todas las iniciativas aprobadas en general por la Comisión en algunas de las materias que corresponden al primer bloque de asuntos que acordó estudiar la Comisión en su primera fase de trabajo.

En concreto, se trata de las iniciativas referidas a:

- Derecho al Conocimiento.
- Derecho a la Comunicación Científica.
- Beneficios del conocimiento y protección contra usos indebidos y nocivos.
- Derechos de autor.
- Derecho de propiedad intelectual Indígena.
- Rol del Estado
- Protección de Datos
- .-Derecho a la Memoria
- .-Patrimonios

Estas normas aprobadas en general se han ordenado de manera de contar con un texto completo, coherente y que, al mismo tiempo, sea de fácil comprensión.

En aquellos temas en que se aprobaron más de una iniciativa, se numeró un artículo que encabeza el conjunto- y a los siguientes se les dio el mismo numeral, pero seguido de otro número, para destacar que se trata de redacciones alternativas contenidas entre todas las iniciativas aprobadas en general.

Las normas son las siguientes:

A) DERECHO AL CONOCIMIENTO

Artículo 1. El Estado asegura el derecho de todas las personas y comunidades a participar libremente de los procesos de creación, desarrollo, transmisión, conservación y enriquecimiento de los diversos sistemas de

conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios, sin discriminación arbitraria alguna y de forma equitativa y descentralizada. **(ICC N° 24-7 Artículo XX1 Inciso primero).**

El Estado garantiza activamente la conservación, el desarrollo, la promoción, la difusión, las iniciativas de divulgación y la educación científica de los conocimientos y sus aplicaciones en diferentes contextos culturales, sociales y territoriales, poniendo especial atención a su acceso abierto y de calidad. **(ICC N° 24-7 Artículo XX1 inciso tercero).**

La formulación de normas jurídicas, planes, proyectos, políticas y programas deberá considerar las mejores evidencias científicas y de otros sistemas de conocimientos pertinentes, que se encuentren disponibles. **(ICC N° 24-7 XX1 inciso cuarto).**

Artículo 1.1. Entre los sistemas de conocimientos que se reconocen en esta constitución se encuentran: las ciencias, las artes, las humanidades, los saberes ancestrales, los saberes locales y territoriales, los saberes populares y los conocimientos estéticos. El Estado reconoce la autonomía y libre determinación de los pueblos en estos sistemas. **(ICC N° 24-7 Artículo XX1 inciso segundo).**

Artículo 1.2. La constitución reconoce y reivindica el valor gnoseológico del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y naciones preexistentes. **(ICI N°97-7 Artículo X1 Inciso primero)**

Los pueblos y naciones preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, proteger, desarrollar, enseñar, compartir y difundir sus conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. **(ICI N°155-7 Artículo X Inciso primero)**

Conjuntamente con los pueblos y naciones preexistentes, se adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. **(ICI N°155-7 Artículo X inciso segundo)**

Artículo 1.3. La constitución asegura el derecho a la creación, fiscalización y restauración de todo aquel instrumento pertinente para el desarrollo del conocimiento, biocultura, ciencia, tecnología y artes generados por los pueblos y naciones indígena, permitiendo cuantificar, salvaguardar su derecho propio y patrimonio material e inmaterial de significación gnoseológica indígena. **(ICI N°97-7 Artículo X2 Inciso primero)**

La producción de bienes inmateriales, como aquellos propios del campo del conocimiento (científico, artístico, ancestral, patrimonial, tecnológico, etc.), debe estar protegida por un estatuto que garantice su orientación hacia el Bien Común. **(ICC N° 583-7 Artículo 1°)**

El Estado promueve y garantiza la libertad de creación e investigación y difunde los resultados de esta, fomentando el intercambio de datos e ideas y producción de conocimientos de manera descentralizada, con equidad de género y territorial. **(ICC N° 24-7 Artículo XX2Inciso primero).**

La libertad creativa y su libre ejercicio como un elemento esencial de la naturaleza, individualidad y expresividad humana. El Estado reconoce la función que esta libertad cumple para la realización de la persona en sociedad y el desarrollo de la comunidad política en su conjunto. **(ICC N° 295-07 Artículo XInciso primero).**

La Constitución garantiza libertad de producción, y creación artística, literaria, científica y técnica. La cual tendrá como límite el bien común y el respeto por los principios bioéticos. **(ICC N° 428-7 Artículo XXX)**

La libertad creativa se promoverá de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil. Para ello, la ley generará mecanismos de soporte que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa, respetando la autonomía de las comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural que derivan de ella. En la realización de dichos fines, la ley establecerá un tratamiento tributario especial que incentive la promoción de organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la ejecución de la libertad creativa, sea ésta científica o cultural, y les definirá un sistema de conformación, registro, transparencia y rendición de cuentas que garantice su colaboración efectiva con el bien común. **(ICC N° 295-07 Artículo X inciso segundo)**

El sistema de producción de conocimiento debe fundarse en la democracia y basarse en los principios de horizontalidad y pertinencia territorial. Asimismo, debe resguardar y promover la iniciativa de las comunidades involucradas para definir su estrategia de desarrollo mediante procesos participativos. **(ICC N° 583-7 Artículo 3°)**

Artículo 1.4. Las personas y los colectivos que desarrollan labores de investigación relacionadas con los sistemas de conocimientos podrán organizarse y establecer instituciones autónomas, definiendo previamente los fines, objetivos y métodos para la investigación. Podrán cuestionar libre y abiertamente la ética de los proyectos y podrán retirarse por razones de conciencia **(ICC N° 24-7 Artículo XX2 inciso segundo).**

Se entiende por investigación todos los estudios sistemáticos que se realicen con el fin de descubrir el misterio de la humanidad, de la historia, manifestaciones artísticas, culturales en su más amplio sentido, del hábitat a través de los milenios, de los animales no humanos, de las especies, mares y

cielos. Y que tiene como finalidad el desarrollo integral de las personas y pueblos que habitan el territorio. **(ICC N° 428-7 Artículo X inciso segundo)**

Artículo 1.5. En la realización de los fines perseguidos por el presente derecho, el Estado desarrollará políticas, planes, programas e infraestructura que promuevan un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento. **(ICC N° 295-07 Artículo X inciso cuarto).**

Se reconoce a todas las personas la libertad de investigación, creación y difusión del conocimiento y sus aplicaciones. **(ICC N° 392-7 Artículo XX1Inciso primero).**

El ejercicio de esta libertad reconocerá como límite el resguardo a los Derechos Fundamentales consagrados en esta Constitución y Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile. **(ICC N° 392-7 Artículo XX1 inciso segundo).**

Es deber del Estado promover y respetar el ejercicio de esta libertad. Para ello fomentará la creación de entidades que generen conocimiento y establecerá mecanismos y alianzas que incentiven la inversión en artes, cultura, ciencia, tecnología educación e innovación, especialmente en aquellos campos que contribuyan al bienestar de los y las habitantes de Chile y la Naturaleza, e involucren al desarrollo de las comunidades y el país. **(ICC N° 392-7 Artículo XX1 inciso tercero).**

Por su carácter colectivo y simbólico, los conocimientos son patrimonio de todas las personas que participan de su proceso de creación. En el caso de los conocimientos nacidos al alero de la acción del Estado, serán patrimonio de toda la sociedad, la cual tendrá derecho a beneficiarse y acceder a ellos. **(ICC N° 583-7 Artículo 2°)**

Garantías específicas del derecho al conocimiento científico y tecnológico. **(ICC N° 392-7 Artículo XX3 Título).**

Artículo 1.6. Es deber del Estado velar que la elaboración de políticas públicas, planes de gestión, instrumentos de planificación, programas, leyes u otros instrumentos públicos consideren el conocimiento científico generalmente aceptado y el desarrollo tecnológico, y, en caso que afecten a comunidades indígenas, sus saberes ancestrales. **(ICC N° 392-7 Artículo XX3Inciso primero).**

El Estado promoverá el fortalecimiento de la educación científica y la actividad científica y tecnológica en todas las regiones del país, fomentando un desarrollo equitativo entre ellas y sus localidades, de modo de incentivar la

participación activa de las personas y comunidades. **(ICC N° 392-7 Artículo XX3 inciso segundo).**

El Estado deberá establecer políticas con enfoque de género tanto en los procesos de creación y comunicación del conocimiento científico y tecnológico como en el goce de sus beneficios. **(ICC N° 392-7 Artículo XX3 inciso tercero).**

Artículo 1.7.: Los Pueblos-Naciones indígenas tienen derecho a una protección especial de su territorio, lugares, pictografías, petrograbados, arquitectura y objetos que consideren sagrados. **(ICI N°193-7 Artículo XX1)**

Los Pueblos-Naciones indígenas tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura y formas sociales tradicionales. Y a la a la consulta libre, previa e informada sobre investigaciones científicas. **(ICI N°193-7 Artículo XX6)**

Los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas sistematizados en comunidad y otros conexos, que aportan al desarrollo humano y/o al cuidado de la vida y/o al buen vivir de la comunidad, no pueden ser usados para fines comerciales, sin la autorización de dichas comunidades. **(ICC N° 497-7 Artículo XX3).**

Los pueblos y naciones preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. **(ICI N°240-7 Artículo XX8Inciso primero).**

B) DERECHO A LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Artículo 1. El derecho a la comunicación científica. **(ICC N° 832-7 Artículo XX)**

El Estado reconoce la comunicación científica como un mecanismo fundamental para el desarrollo de la ciencia, cuyo vínculo con la sociedad, a través de la divulgación, debe asegurar la implementación de políticas públicas que promuevan la educación y valoración de la ciencia y tecnología, en la población con un alcance territorial, teniendo especial consideración a grupos vulnerables y criterios de segmentación etaria, diversidad social, plurinacional, de género y capacidades especiales. **(ICC N° 832-7 Artículo XX inciso segundo).**

Es deber del Estado garantizar las condiciones para el desarrollo de la comunicación científica, a través de la implementación de políticas públicas conducentes a salvaguardar la disponibilidad y articulación de capacidades para la elaboración de contenidos, la comunicación efectiva y la ejecución de iniciativas

de divulgación y difusión científica con enfoque de identidad regional, asegurando la generación de espacios e infraestructura pública con adaptaciones inclusivas disponibles para la realización de actividades interactivas con contenidos científicos, artísticos y culturales que permitan a todas las personas y comunidades, informarse acerca de los avances científicos a lo largo del territorio nacional. **(ICC N° 832-7 Artículo XX inciso tercero)**

C) BENEFICIOS DEL CONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA USOS INDEBIDOS Y NOCIVOS

Artículo 1: Derecho a beneficiarse del conocimiento y sus aplicaciones. **(ICC N° 392-7 Artículo XX2 Título).**

Todas las personas tienen derecho al libre acceso al conocimiento y al goce de sus beneficios. **(ICC N° 392-7 Artículo XX2Inciso primero).**

La Ley establecerá la forma en que esta libertad se ejercerá con respeto al resguardo a los derechos de quienes hayan generado dicho conocimiento **(ICC N° 392-7 Artículo XX2 inciso segundo).**

El Estado tiene el deber de promover la conservación, difusión, socialización y acceso equitativo al conocimiento, así como a sus aplicaciones, por medio de políticas públicas en el ámbito de la educación, la cultura, el medio ambiente, la comunicación y otras que determine la Ley. **(ICC N° 392-7 Artículo XX2 inciso tercero).**

Artículo 1.2. Toda participación individual y colectiva en la creación, desarrollo, transmisión, resguardo y enriquecimiento de los conocimientos y la tecnología deberán tener como límites el respeto a derechos fundamentales, las fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y garantías de las personas, las comunidades y la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad. **(ICC N° 24-7 Artículo XX3Inciso primero).**

En relación con el desarrollo científico y tecnológico, las personas tienen derecho a que se respete su vida privada, dignidad, integridad física y psíquica, y los derechos fundamentales. El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para la protección de este derecho. **(ICC N° 24-7 Artículo XX3 inciso segundo).**

Artículo 1.3. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la protección de su dignidad e integridad física y psíquica, y otras fuentes aplicables dentro del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo su identidad genética y del microbioma humano, frente a cualquier tipo de intervención tendiente a la creación, desarrollo y uso de las tecnologías, la experimentación científica, intervenciones biomédicas y otros similares. Asimismo,

toda persona que participe en este tipo de intervenciones tiene derecho al acceso a sus propios datos, expedientes médicos y documentos de investigación conducidos por personas e instituciones públicas o privadas **(ICC N° 24-7 Artículo XX4)**.

El Estado reconoce el valor esencial que tienen los sistemas de conocimientos y sus aplicaciones para el bien común, el buen vivir, la definición y despliegue de todo modelo de desarrollo del país, y la toma de decisiones informadas. El Estado garantizará y promoverá el trato equitativo, el diálogo y la ponderación en las decisiones públicas de todos los sistemas de conocimientos. **(ICC N° 24-7 Artículo XX5)**.

Artículo 1.4. Toda persona que ejerza funciones públicas o sea candidata a ejercerlas, deberá abstenerse de divulgar información falsa o desactualizada entre la población, especialmente cuando produzca efectos perjudiciales o tendientes a vulnerar otros derechos fundamentales. Una ley regulará los requisitos, procedimientos y sanciones en caso de incumplimiento de este deber, sin perjuicio de la aplicación directa que los Tribunales de Justicia puedan hacer de esta norma, de acuerdo con las demás disposiciones constitucionales. **(ICC N° 24-7 Artículo XX3 inciso tercero)**.

Artículo 1.5. La Constitución garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, síquica y mental de toda persona humana. **(ICC N° 429-7 Artículo X inciso primero)**

El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. **(ICC N° 429-7 Artículo X inciso segundo)**

La Constitución garantizará a todas las personas sin distinción el derecho a negarse o participar en las investigaciones científicas en especial sobre sus necesidades y patologías. Este derecho también comprende gozar de sus beneficios y de la tecnología. **(ICC N° 428-7 Artículo XXXX)**

A) DERECHOS DE AUTOR

Artículo 1. Derecho a la libertad de creación artística. Toda persona tiene derecho a la libertad de creación y producción artística y a la propiedad sobre su creación por un tiempo no inferior a la vida del titular, conforme a la ley. **(ICC N° 262-4 Artículo XX2 inciso primero)**.

Artículo 1.1. La Constitución asegura y garantiza a todas las personas o comunidades: **(ICC N° 195-07 Artículo 1 inciso primero).**

El derecho a la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales, de cualquier especie, del que sea autor o intérprete, en conformidad a la ley **(ICC N° 195-07 Artículo 1 inciso segundo).**

Esta protección comprende el aprovechamiento o uso de la obra o interpretación, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular, así como los derechos de paternidad, divulgación e integridad de éstas, lo que será determinado por la ley **(ICC N° 195-07 Artículo 1 inciso tercero).**

Artículo 1.2. La Constitución, a través de los órganos y autoridades en ellas establecidos, asegura y garantiza a todas las personas como derecho directamente aplicable: **(ICC N°339-07 Artículo [...]** La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor y de intérprete sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior a la vida del titular **(ICC N°339-07 Artículo [...]) inciso primero).**

El derecho de autor y el derecho de intérprete comprenden la propiedad de la obra o prestación artística, derecho de paternidad, divulgación e integridad de ellas, en conformidad a la ley. **(ICC N°339-07 Artículo [...]) inciso segundo).**

Será aplicable a la propiedad de creaciones e interpretaciones intelectuales y artísticas las garantías y limitaciones, que derivan de su función social, que esta Constitución establece a la propiedad en general. **(ICC N°339-07 Artículo X inciso tercero).**

Artículo 1.3: La ley deberá regular su función social, la que contemplará, entre otros, la participación en la vida cultural y la protección de los patrimonios culturales, así como el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del progreso científico y de los beneficios que de él resulte. Dicha regulación deberá contribuir al fomento de la creación cultural y artística, en beneficio tanto de los creadores y artistas como de la comunidad en general **(ICC N° 195-07 Artículo 1 inciso cuarto).**

Artículo 1.4: El Estado garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos y las obligaciones de los investigadores científicos, y otras partes interesadas, acorde a las fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos. **(ICC N° 255-07 Artículo XX1).**

El Estado promueve el acceso a los resultados de las investigaciones científicas de los sistemas de conocimientos y el intercambio de estos

conocimientos entre investigadores, encargados de formular políticas públicas y todas las personas y comunidades de forma descentralizada. **(ICC N° 255-07 Artículo XX2).**

El Estado promueve que el acceso a los conocimientos sea lo más abierto posible, estableciendo un equilibrio entre la protección de los intereses materiales y morales que les correspondan a sus autores, su acceso abierto y su intercambio, así como sus alcances y dimensión internacional. **(ICC N° 255-07 Artículo XX2 inciso segundo).**

Cualquier restricción de acceso en esta materia ha de ser proporcionada y justificada únicamente por motivos de protección de las garantías fundamentales y fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos, la seguridad nacional, el orden público y los procesos judiciales. **(ICC N° 255-07 Artículo XX2 inciso tercero).**

Las personas e instituciones que emplean, financian, rigen u orientan a los investigadores o la investigación deberán respetar plenamente los intereses morales y materiales que correspondan a los investigadores en razón de sus producciones científicas. **(ICC N° 255-07 Artículo XX2 inciso cuarto).**

Artículo 1.5 Toda persona, colectivo o comunidad tiene el derecho a: **(ICC N° 420-7 Artículo X1.1 Inciso primero)**

- La protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales, así como también hacer uso justo de otras creaciones. Los requisitos, límites y condiciones para esa protección quedarán establecidas por ley. **(ICC N° 420-7 Artículo X1.1 párrafo primero)**

- Organizarse de manera colectiva para fortalecer sus procesos creativos y la gestión de su trabajo de conformidad con el bien común. **(ICC N° 420-7 Artículo X1.1 párrafo segundo).**

- Exigir la protección de las obras en dominio público y el acceso a estas, promoviendo un uso ético de ellas. **(ICC N° 420-7 Artículo X1.1 párrafo tercero).**

- Un reconocimiento moral de la autoría de sus obras independiente de la licencia u estatus legal que tenga la obra. **(ICC N° 420-7 Artículo X1.1 párrafo cuarto).**

- Que sus creaciones sean resguardadas, como archivo, en un espacio digital patrimonial de administración pública y participación comunitaria. Las condiciones quedarán establecidas por ley. **(ICC N° 420-7 Artículo X1.1 párrafo quinto).**

B) DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL INDIGENA

Artículo 1. Los Pueblos-Naciones indígenas tienen derecho a la propiedad intelectual sobre su conocimiento tradicional, el cual incluye diversas materias como, ADN, lengua, medicina, alimentación y control de la producción científico literaria **(ICI N°193-7 Artículo XX7).**

Artículo 1.2. Los pueblos y naciones indígenas tienen derechos a preservar y controlar las creaciones artísticas de carácter colectivo propias, las que solo pueden ser compartidas por la expresa voluntad de la comunidad o de los pueblos que así lo decidan de acuerdo a sus costumbres e instituciones propias. Toda expresión artística o arte colectivo, en sus más diversas manifestaciones, no puede ser objeto de apropiación individual o con fines académicos o de entretenimiento o de naturaleza comercial sin el consentimiento previo, libre e informado del pueblo o nación indígena al que pertenece, sin perjuicio de lo anterior el consentimiento se debe entender siempre como provisional y revocable. **(ICC N° 262-4 Artículo XX2 inciso segundo).**

Artículo 1.3. La propiedad intelectual colectiva de los pueblos y naciones preexistentes comprende, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales entre los cuales se encuentran los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, los diseños y procedimientos ancestrales, las manifestaciones culturales, artísticas, espirituales, tecnológicas y científicas, su herencia cultural y memoria, el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los conocimientos y desarrollos propios relacionados con la biodiversidad y la utilidad y cualidades de semillas, las plantas medicinales, la flora y la fauna. **(ICC N°245-7 Artículo X1Inciso primero, número 3).**

Para el pleno ejercicio de estos derechos se reconoce la autodeterminación de los pueblos, la relación con la tierra y el territorio, sus sistemas de conocimientos e instituciones propias. El patrimonio cultural y propiedad intelectual de los pueblos es inviolable, inembargable, indelegable e imprescriptible, respetando siempre su derecho e instituciones propias. Esta protección podrá incluir la adopción de medidas para reconocer, registrar y proteger la autoría individual o colectiva de los pueblos y naciones dentro de la regulación que se les brinde y debe impedir el uso no autorizado de las producciones científicas, literarias y artísticas de los pueblos y naciones por terceros. **(ICC N°245-7 Artículo X1Inciso primero, número 4).**

Artículo 2. Los pueblos indígenas, preexistentes al Estado de Chile, son reconocidos como custodios de sus conocimientos, cultura e identidad. Tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a preservar, desarrollar, administrar y transmitir a las futuras generaciones, su patrimonio cultural e histórico, tangible e

intangible, que constituye la base de su continuidad colectiva e individual. **(ICI N°240-7 Artículo XX1).**

Los pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad; sus usos, costumbres, normas y tradiciones; las formas de organización social, económica, política y jurídica; las formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas; y la interrelación que existe entre manifestaciones culturales. **(ICI N°240-7 Artículo XX1 inciso segundo).**

A los individuos a quienes se les reconozca su calidad indígena, como a las comunidades de un determinado pueblo nación preexistente, se les reconoce la titularidad de tales derechos ancestrales. **(ICI N°240-7 Artículo XX1 inciso tercero).**

Artículo 3. Corresponderá a cada pueblo determinar, resguardar y administrar la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de su respectivo acervo, incluidas las nuevas obras, inventos, descubrimientos, marcas comerciales y demás bienes intelectuales susceptibles de protección. **(ICI N°240-7 Artículo XX3).**

Artículo 3.1. Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a su identidad cultural, creencias religiosas, espirituales, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión; a la recuperación, protección y promoción de sus lenguas, lugares sagrados y de su ritualidades, así como plantas, el material genético de estos cultivos desarrollados a través de generaciones, no sea susceptible de apropiación por ninguna empresa privada, nacional o extranjera y se protegerán de la contaminación que pudiera producir plantas genéticamente modificadas, protección de animales, minerales y ecosistemas dentro de su territorios. **(ICI N°240-7 Artículo XX7Inciso primero).**

A mantener preservar, administrar, reconocer, proteger, desarrollar, los valores y prácticas sociales, culturales, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnologías, su religiosidad y espiritualidad los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, y el patrimonio subacuático propio de dichos pueblos. El Estado garantizará con acuerdo a las leyes, la tutela y resguardo de estos derechos. **(ICI N°240-7 Artículo XX7 inciso segundo).**

Artículo 3.2.- Se reconoce la propiedad intelectual del pueblo mapuche sobre sus sistemas de conocimientos tradicionales, expresiones culturales, el patrimonio genético existente en la biodiversidad de los territorios indígenas, sus saberes y tradición oral, su medicina ancestral, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos, vestimentas, cosmovisiones, mitos, danzas, prácticas culturales, y sus tecnologías tradicionales **(ICI 17-7 Artículo X1).**

Corresponderá al pueblo mapuche determinar, resguardar y administrar la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de su respectivo acervo, incluidas las nuevas obras, inventos, descubrimientos, marcas comerciales y demás bienes intelectuales susceptibles de protección. **(ICI 17-7 Artículo X2).**

Artículo 3.3: El Estado tendrá el deber de prohibir la constitución de derechos de propiedades industriales, intelectuales y similares sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, deberá anular cualquier registro o derecho que se haya constituido sobre aquellos y sin el consentimiento del respectivo pueblo. **(ICI 17-7 Artículo X6).**

C) ROL DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

Artículo 1. Los derechos de propiedad intelectual son derechos que deben armonizar con el interés o bien público. **(ICC N° 420-7 Artículo X1 Inciso primero).**

Es deber del Estado reconocer y garantizar el uso justo a todas las personas que hacen uso de las creaciones protegidas de conformidad, con un objetivo de bien común. **(ICC N° 420-7 Artículo X1 inciso segundo).**

Es deber del Estado priorizar aquellas iniciativas creativas que promuevan el desarrollo social equitativo, en concordancia con los derechos humanos y la naturaleza. **(ICC N° 420-7 Artículo X1 inciso tercero).**

Artículo 1.1 El Estado garantiza la preservación digital de la memoria como también el patrimonio histórico, mediante espacios digitales de administración pública. Además de la protección y del acceso a las creaciones que se encuentren en dominio público. **(ICC N° 420-7 Artículo X4).**

Artículo 1.2. El Estado garantiza que las creaciones desarrolladas con su colaboración sean liberadas bajo licencias que permitan su libre uso, modificación y distribución para todos los habitantes del territorio, sin perjuicio de los derechos de protección de datos sensibles. También será admisible su liberación al dominio público conforme a la voluntad de sus autores. Las condiciones quedarán establecidas por ley. **(ICC N° 420-7 Artículo X5).**

El Estado, con la participación plena y efectiva de los pueblos y naciones, adoptará las medidas necesarias para que los acuerdos y regímenes nacionales o internacionales provean el reconocimiento y la protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual asociada a dicho patrimonio de los pueblos indígenas. En la adopción de estas medidas, se realizarán consultas

vinculantes, encaminadas a obtener el consentimiento libre, previo, informado y fundado de los pueblos indígenas. **(ICC N°245-7 Artículo X1Inciso primero, número 5).**

Artículo 2.1. El Estado Plurinacional de Chile, reconoce y garantiza la protección de todas las creaciones colectivas transgeneracionales preexistentes que han emanado de la estrecha relación entre las naciones y pueblos originarios con su territorio y todas las existencias, desde sus epistemologías, filosofía y religión construyendo con ello su propio sistema de conocimiento y generación de los mismos. Consecuencia de esto es que el Estado reconoce el derecho propio mapuche Ad Mapu como vehículo para el entendimiento como puentes comunicantes para ambas sociedades, para el digno respeto de la filosofía Ad mapu, la política Kollang y Parlamento, el Arte Textilería Nren mapuche entre otras artes y ciencias, y así mismo con el cuerpo de conocimientos y epsistemas de cada uno de los pueblos y naciones preexistentes que han resistido y sobrevivido al genocidio y epistemicidio hasta hoy perpetrados. **(ICI N°147-7 Artículo 1).**

El Estado debe impulsar políticas de reparación e implementar garantías de no repetición de los delitos y vulneraciones de derechos perpetradas en torno a la usurpación de conocimientos y epistemologías. **(ICI N°147-7 Artículo 10).**

Artículo 2.2. El Estado Chileno reconoce la propiedad intelectual de los pueblos naciones preexistentes sobre sus sistemas de conocimientos tradicionales, expresiones culturales, el patrimonio genético existente en la biodiversidad de los territorios indígenas, sus saberes y tradición oral, su medicina ancestral, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos, vestimentas, cosmovisiones, mitos, danzas, prácticas culturales, y sus tecnologías tradicionales. **(ICI N°240-7 Artículo XX2).**

El Estado tendrá el deber de prohibir la constitución de derechos de propiedad industrial, intelectual y similares sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, deberá anular cualquier registro o derecho que se haya constituido sobre aquellos y sin el consentimiento del respectivo pueblo. **(ICI N°240-7 Artículo XX4).**

Es deber del Estado realizar todas las acciones necesarias para obtener la restitución de los objetos pertenecientes al patrimonio material de los pueblos y naciones preexistentes que, sin el consentimiento de éstos, se encuentren fuera del territorio nacional, debiendo financiar y suministrar el presupuesto necesario para la consecución de estos fines, incluyendo las gestiones diplomáticas y la litigación ante tribunales internacionales. **(ICI N°240-7 Artículo XX5).**

Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción frente a actos que tienen por objeto o consecuencia desposeer a los Pueblos de sus tierras, territorios y recursos, menoscabar sus derechos, incitar a la discriminación racial o etnia o promover una asimilación e integración forzada. **(ICI N°240-7 Artículo XX6).**

ROL DEL ESTADO

Artículo 1: Serán objetivos prioritarios del Estado: **(ICC N° 150-7 Artículo X).**

1.Promover el acceso libre e igualitario de todas las personas a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades, los saberes y tradiciones ancestrales, locales y territoriales, junto a los saberes y tradiciones populares, rurales y los conocimientos estéticos. **(ICC N° 150-7 Artículo X numeral primero).**

2.Promover de manera descentralizada y diversificada la creación, el desarrollo de la cultura, de la investigación científica, técnica y tecnológica y de la innovación, en beneficio del interés general. Estas actividades serán incentivadas y apoyadas por el Estado. **(ICC N° 150-7 Artículo X numeral segundo).**

3.Impulsar un desarrollo armónico y sostenible, mediante la conciliación de los derechos y deberes relacionados con la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad y el patrimonio histórico, cultural y artístico de la nación; con el desarrollo de actividades económicas y el avance en bienestar social y en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. **(ICC N° 150-7 Artículo X numeral tercero).**

4.Promover en las condiciones y límites definidos por la ley, el acceso de las personas a la información que posean las autoridades públicas y de participar en la elaboración de las decisiones públicas con incidencia en los sistemas de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades, especialmente en el nivel local. **(ICC N° 150-7 Artículo X numeral cuarto).**

5.Promover la colaboración y las alianzas público privadas para desarrollar estos objetivos, u otras innovaciones que excedan las capacidades del Estado, pudiendo condicionar los apoyos estatales, en particular, a que se garantice la calidad y la coordinación. **(ICC N° 150-7 Artículo X numeral quinto).**

Artículo 2. Para cumplir con los objetivos detallados en el artículo anterior el Estado actuará por medio del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley de Presupuesto de la Nación. **(ICC N° 150-7 Artículo XX).**

La legislación y su posterior aplicación deberán respetar los principios de razonabilidad, progresividad y no discriminación, así como también los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. **(ICC N° 150-7 Artículo XX inciso segundo).**

Artículo 3. Es deber del Estado utilizar las mejores soluciones técnicas y tecnológicas disponibles y la evidencia científica más reciente para que su funcionamiento sea eficiente, elevar los estándares de los servicios públicos, y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los asuntos de interés público. **(ICC N° 150-7 Artículo XXXX).**

Será deber del Estado implementar políticas para crear espacios y tiempos nutritivos afectivamente e inclusivos en los cuales se facilite a todas las personas el desarrollo de sus potenciales humanos y de conocimientos respondientes a cada territorio, cultura, comunidad, en las áreas de ciencia, tecnología innovadora, arte y patrimonio cultural y natural. **(ICC N° 435-7 Artículo XXInciso primero).**

Un Estado descentralizado, permitirá desarrollar un currículum para cada territorio, conociendo además, su cultura e historia, así como la flora y fauna local. La educación a deberá destinar los recursos necesarios, materiales y humanos, que acompañen estos procesos de generación de conocimiento y asegurarse que los conocimientos en todas las áreas logren una sociedad más culta, que permita participar en todos los procesos de la vida social, política, económica, ecológica y otras, con éxito. **(ICC N° 435-7 Artículo XX inciso segundo).**

Artículo 4: Es deber de todas las personas promover y cuidar el desarrollo de los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades. **(ICC N° 150-7 Artículo XXXXX).**

Artículo 5: El Estado debe garantizar el derecho a las ciencias, destinando recursos para el desarrollo de la investigación científica y artística, con criterios de descentralización y el resguardo de los saberes ancestrales. El Estado debe promover la educación científica y artística en los distintos niveles educativos, la formación de investigadores e investigadoras, títulos, acreditaciones e infraestructura para tales efectos. **(ICC N° 428-7 Artículo XInciso primero).**

Artículo 6: El Estado garantiza a todas las personas el derecho a acceder, investigar, modificar, compartir y crear la información y los conocimientos, para las materias, estudios y/o creaciones que estime conveniente de acuerdo a su desarrollo personal o colectivo. **(ICC N° 420-7 Artículo X2).**

Artículo 7:. Es deber del Estado velar por la igualdad de acceso a los conocimientos, utilizar y promover recursos y herramientas de libre acceso y

distribución; así como aquellas que permitan la innovación por medio de su modificación. **(ICC N° 420-7 Artículo X3).**

Artículo 8: El Estado implementará el desarrollo de tecnologías, equipamiento, profesionales especializados en la investigación científica, para la creación de medicinas, procedimientos, para el desarrollo humano y/o al cuidado de la vida, y/o al buen vivir de la comunidad, para asegurar la soberanía de la salud de toda la población. **(ICC N° 497-7 Artículo XX5).**

Artículo 9: La Constitución reconoce la función pública de las universidades reconocidas por el Estado las que deben tener el bien común como fin principal y les garantiza autonomía académica, administrativa y económica a fin de cumplir su cometido educacional y de investigación. **(ICC N° 428-7 Artículo XX).**

Artículo 10: El Sistema educativo, en todos sus niveles, promoverá el pleno desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, para promover la tolerancia, el pluralismo y la paz social. Corresponderá al Estado y a la comunidad toda, impulsar el desarrollo de la cultura, de la investigación e innovación científica y tecnológica, de la creación artística y promover la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de la nación, en los establecimientos educacionales del país. **(ICC N° 150-7 Artículo XXXXX inciso segundo).**

Artículo 11: La diversidad cultural constituye la base y riqueza primordial de nuestro país. **(ICC N° 188-7 Artículo 1°).**

La interculturalidad es dinámica y transformadora, siendo un principio fundamental para lograr la cohesión y la convivencia pacífica de los pueblos y primeras naciones que cohabitan en Chile. Ella es esencial para la generación de las condiciones de respeto mutuo entre las distintas identidades que se desarrollan a través del tiempo en nuestro país. **(ICC N° 188-7 Artículo 1° inciso segundo).**

Artículo 12: El Estado reconoce que las culturas, las artes y los patrimonios son parte sustancial para el desarrollo integral del país, de sus comunidades y las personas. **(ICC N° 188-7 Artículo 2°).**

Artículo 13 El Estado reconoce la soberanía cultural, promoviendo la existencia de múltiples identidades en Chile, otorgando igualdad de trato y dignidad a sus expresiones. **(ICC N° 188-7 Artículo 3° inciso primero).**

Es su obligación preservar, promover, resguardar, propiciar y difundir las diferentes identidades culturales en el país, en un constante diálogo y participación con las comunidades y las personas. Esto se hará de manera equitativa, resguardando el enfoque de género, la plurinacionalidad, la inclusión, el

pluralismo, la pertinencia territorial, los conocimientos y los saberes ancestrales y populares. **(ICC N° 188-7 Artículo 3° inciso segundo).**

Lo anterior se hará con arreglo a las obligaciones en materia de derechos humanos que emanen de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes. **(ICC N° 188-7 Artículo 3° inciso tercero).**

Artículo 14: Las identidades culturales se expresan a nivel comunal y regional, como también en zonas urbanas, rurales, insulares, entre otras. **(ICC N° 188-7 Artículo 4°, Inciso primero).**

El Estado promoverá y fomentará estas identidades, fortaleciendo el traspaso de competencias y recursos necesarios para el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas en los ámbitos culturales a nivel regional y comunal. Se crearán los instrumentos adecuados para un desarrollo integral del país, sus territorios y zonas. **(ICC N° 188-7 Artículo 4°, inciso segundo).**

El Estado Regional, así como los Gobiernos Municipales, deberán asegurar, fomentar y proteger a las culturas, las artes y los patrimonios, así como la investigación y la formación artística en sus territorios. **(ICC N° 188-7 Artículo 4° inciso tercero).**

Artículo 15: El Estado promoverá y garantizará reivindicación y descolonización de las tradiciones, interpretaciones y filosofías de los pueblos indígenas. **(ICI N°193-7 Artículo XX2)**

Artículo 16. El Estado promoverá y garantizará el conocimiento tradicional indígena como un conocimiento válido en las relaciones pueblos indígenas-Estado-institutos de investigación. **(ICI N°193-7 Artículo XX4)**

Artículo 17. El Estado promoverá y garantizará el respeto y conciencia sobre los ancestros y miembros de los Pueblos-Naciones indígenas con el fin erradicar formas de racismo ya sea social, intelectual, cultural y que estos Pueblos ya no solo sean objetos de estudio, sino que principalmente sean sujetos de derecho. **(ICI N°193-7 Artículo XX5)**

Artículo 18. El Estado garantizará la participación popular de los pueblos y primeras naciones con carácter incidente y vinculante en los ámbitos culturales. **(ICC N° 188-7 Artículo 5°, Inciso primero).**

Corresponderá a los órganos del Estado permitir, asegurar y fomentar la participación popular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas, planes y programas culturales, así como desarrollar medidas en favor del fortalecimiento de las comunidades, generando las condiciones para la

sustentabilidad de la participación en todo el país. **(ICC N° 188-7 Artículo 5° inciso segundo).**

Artículo 19. Ellos deberán considerar procesos de cooperación en los cuales se identifiquen y deliberen conjuntamente acerca de los problemas y soluciones en el marco de las culturas, por medio de herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivo, que permitan la incorporación más amplia de los pueblos y las primeras naciones en las decisiones públicas. **(ICC N° 188-7 Artículo 5° inciso tercero).**

Artículo 20. El Estado cautelará que cualquier actividad económica se deba realizar sin detrimento de la identidad cultural de las comunidades y las personas, debiendo la Administración realizar participación incidente y vinculante para evaluar autorizaciones, siendo estos mecanismos definidos por la ley. **(ICC N° 188-7 Artículo 5° inciso cuarto).**

Artículo 21. Para asegurar la accesibilidad de todas las personas a los productos del conocimiento, el Estado debe implementar espacios de encuentro social para la difusión del conocimiento, sin discriminación epistémica. Esto implica que el Estado debe crear y sostener estos espacios, asegurando su representatividad, descentralización y capacidad de conservación. **(ICC N° 583-7 Artículo 6°).**

A) PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 1. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, a saber qué información se conserva respecto a ella así como a decidir y controlar su uso y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que afecte sus derechos. **(ICC N° 416-7 Artículo X1).**

Toda recolección y tratamiento de datos de carácter personal se realiza de manera excepcional según las condiciones que disponga la ley, siempre conforme a los principios de licitud, lealtad, transparencia, seguridad y limitación de la finalidad. **(ICC N° 416-7 Artículo X2).**

Toda recolección y tratamiento de datos sensibles está prohibido, salvo en los casos específicos que disponga la ley. **(ICC N° 416-7 Artículo X3)**
Los organismos públicos, dentro del marco de sus competencias legales, podrán operar y desarrollar infraestructuras de recolección, tratamiento, acceso y reutilización de datos de carácter personal que garanticen el respeto de los derechos fundamentales. **(ICC N° 416-7 Artículo X4).**

Artículo 1.1. La Constitución asegura: **(IPC N°59-4 Artículo XX)**

1. La protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, sus familias y comunidades. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio del derecho a la privacidad salvo en los casos y formas que determine la ley. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 1, párrafo primero).**

Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento sólo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 1 párrafo segunda).**

La correspondencia y los documentos privados son inviolables, incluyendo sus metadatos. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 1 párrafo tercero)** La interceptación, captura, apertura, registro o revisión sólo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 1 párrafo primero párrafo cuarto).**

2. La protección, promoción y respeto del derecho a la autodeterminación informativa de los individuos, incluido el derecho a la protección de sus datos personales. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 2 párrafo primero).**

El tratamiento de datos personales sólo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, el que en todo caso deberá ser lícito, leal, transparente y para fines determinados, explícitos y legítimos. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 2 párrafo segundo)**

Toda persona tiene derecho a ser informada cuando los datos que la conciernen son objeto de tratamiento y los fines del mismo, acceder a dichos datos y a solicitar su rectificación, en su caso. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 2 párrafo tercero).**

Un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica velará por el respeto efectivo de este derecho, en la forma que determine la ley. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 2 párrafo cuarto).**

3. La protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas, sus familias y comunidades. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos que administren. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 3).**

Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias, como el cifrado o la encriptación. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho. **(IPC N°59-4 Artículo XX número 3 inciso segundo).**

Artículo 2: La recolección y uso de datos e información de carácter personal indígena y los datos sobre los recursos ancestrales de los territorios indígenas, deben contar con el consentimiento previo, informado y afirmativo claro del titular o representantes territoriales indígenas para poder procesar sus datos, sea por organismos públicos, privados o particulares. **(ICI N°75-7 Artículo B inciso primero).**

Los pueblos y naciones indígenas tienen soberanía plena sobre sus datos e información de carácter personal, comunitario y/o territorial, siendo potestad de un organismo autónomo indígena con facultades técnicas y administrativas, la que podrá dar tratamiento y procesar dicha información, regulando y certificando el cumplimiento de esta norma y sus procedimientos, podrá además coordinar acciones con organismos nacionales e internacionales quienes se deben regir por esta normativa y responder ante los tribunales respectivos. **(ICI N°75-7 Artículo B inciso segundo).**

Artículo 3: Un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica velará por el respeto efectivo de este derecho, en la forma que determine la ley **(IPC N°59-4 Artículo XX número 3 inciso tercero).**

Artículo 3.1.: Una ley creará una entidad jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autónoma, especializada e independiente. **(ICC N° 416-7 Artículo X5).**

B) DERECHO A LA INFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 1: Información pública: Es información pública la producida o recibida por todo órgano del Estado o persona jurídica de derecho público en el ejercicio de sus funciones, o que obre en poder de estos; la elaborada con recursos públicos o aquella producida o recibida por personas de derecho privado en el ejercicio de una función pública encomendada por el Estado; y todo algoritmo público, entendido como una sucesión de actos o procedimientos, informatizada o no, cuya finalidad sea producir un acto administrativo. **(ICC N° 599-7 Artículo X1).**

Artículo 2: Información de interés general: Es información de interés general la producida por toda persona jurídica de derecho privado, independientemente del ejercicio de una función pública, cuya reutilización excepcional, por parte del Estado, pueda estar justificada por motivos de interés general y de manera proporcional. **(ICC N° 599-7 Artículo X2).**

Artículo 3: Acceso, reutilización y reciprocidad de la información pública: Toda persona tiene derecho a acceder libremente y sin costo a la información pública y reutilizarla a través de cualquier medio a título eterno,

gratuito, no exclusivo e irrestricto. Se podrá establecer un deber excepcional de reciprocidad en su uso, por motivos de interés general y de manera proporcional. **(ICC N° 599-7 Artículo X3).**

Artículo 4: Responsabilidad algorítmica y debido proceso: Toda persona objeto de una decisión que afecte sus derechos, basada en un algoritmo, tiene derecho a ser notificada de su uso, acceder a una copia de este y una explicación de su lógica, obtener intervención de quien pueda revisar e impugnar la decisión y apelar ante autoridad competente. **(ICC N° 599-7 Artículo X4).**

Artículo 5: Derecho a comunicar la información pública: Toda persona que, en el ejercicio de sus funciones, produzca, reciba o esté en poder de información pública, tiene el derecho de comunicarla a quien la pida y a publicarla por iniciativa propia. **(ICC N° 599-7 Artículo X5).**

Artículo 6: Excepción al acceso de la información: Toda información pública amparada por un régimen de reserva, o cuya publicación vulneraría el derecho a la protección de los datos de carácter personal o colectiva, es comunicable solamente a la persona o personas titulares de esta, al igual que aquellos datos relacionados a conocimientos, saberes y patrimonios de los pueblos o naciones pre existentes que, en base a su autodeterminación, deseen mantener en secreto y fuera del acceso de personas o instituciones ajenas a su pueblo, al igual que toda persona o entidad que determine la ley. **(ICC N° 599-7 Artículo X6).**

Artículo 7: Excepción a la excepción al acceso de la información: No podrán ser sometidas a régimen de reserva las informaciones que, según lo establezca la ley y a juicio de autoridad competente, permitan esclarecer y sancionar violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción pública así como garantizar la protección del patrimonio común de la humanidad. **(ICC N° 599-7 Artículo X7).**

Artículo 8: Publicidad y reutilización de la información pública: El Estado deberá tomar las medidas que garanticen la publicidad de la información pública; promuevan su comunicación proactiva y periódica en formatos abiertos que faciliten su reutilización, informatizada o no; y permitan a toda persona participar activamente en la corrección y mejora de esta. **(ICC N° 599-7 Artículo X8).**

Artículo 9: Infraestructura información pública y datos críticos: El Estado **deberá** operar y desarrollar una infraestructura abierta que facilite la apertura, publicidad, reutilización, corrección y mejora de la información pública y que garantice la disponibilidad ininterrumpida de la información esencial y crítica al funcionamiento de la sociedad. **(ICC N° 599-7 Artículo X9).**

Artículo 10: Infraestructuras de acceso seguro a datos por motivos de interés general: Los organismos públicos, dentro del marco de sus competencias legales y resguardando los derechos de las personas, podrán operar y desarrollar infraestructuras descentralizadas de acceso seguro a datos que faciliten su reutilización sin fines de lucro, por motivos de interés general y de manera proporcional. **(ICC N° 599-7 Artículo X10).**

Artículo 11: Institucionalidad vigilante: Una ley creará una autoridad administrativa autónoma, especializada e independiente del Estado para proteger el interés general en el marco del derecho a la información. Tendrá las atribuciones que garanticen el ejercicio de este y podrá actuar colegialmente con la autoridad de protección de los datos de carácter personal. **(ICC N° 599-7 Artículo X11).**

C) DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGITAL DE CALIDAD

Artículo 1: Alternativa a los servicios digitales. Toda persona tiene derecho a una alternativa a los procedimientos digitales en sus relaciones con la administración pública. **(ICC N° 945-7 Artículo X1).**

Artículo 2: Principio de finalidad de la tecnología en el ámbito público. El estado deberá garantizar que toda persona tenga acceso a servicios públicos gratuitos y de calidad, a través de todos los medios que faciliten el acceso real de las personas a los servicios públicos. **(ICC N° 945-7 Artículo X2).**

Artículo 3: Participación del funcionariado en la gestión de los servicios públicos. Toda funcionaria y funcionario tiene derecho a participar del diseño, desarrollo, gestión de los servicios públicos, así como a incidir activamente, en conjunto con usuarias y usuarios, en su adaptabilidad en el tiempo. **(ICC N° 945-7 Artículo X3).**

Artículo 4: Gestión democrática y descentralización. Es deber del estado favorecer la gestión democrática y pluralista de los servicios públicos, así como las condiciones que permitan su gestión desconcentrada y descentralizada. **(ICC N° 945-7 Artículo X4.1).**

DERECHO A LA MEMORIA

Artículo 1: La memoria es un pilar fundamental de la construcción del país. **(ICC N° 585-7 Artículo 1°).**

Se reconocerá el derecho individual y colectivo de la memoria personal, familiar, ancestral y comunitaria, cuya regulación estará reservada para la ley. **(ICC N° 585-7 Artículo 1° inciso segundo).**

El Estado deberá fortalecer la conciencia histórica de las comunidades, con el objeto de recuperar la memoria y el fortalecimiento de las múltiples identidades locales como indígenas, y sus trayectorias colectivas e individuales. Lo anterior se realizará mediante la conservación de sus culturas, la creación de archivos locales y la preservación de los bienes culturales documentales, de manera de resguardar las fuentes de información histórica, jurídica, sociológica, económica, política, religiosa o cultural. **(ICC N° 585-7 Artículo 1° inciso tercero).**

Artículo 2: Será un objetivo de los órganos del Estado contribuir con la preservación, recuperación y conservación de la memoria, los testimonios y las vivencias, articulando los vínculos entre las instituciones públicas, las agrupaciones de derechos humanos y las comunidades, a fin de impulsar el diálogo, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, coherentes con el permanente respeto a los derechos humanos, la democracia, la interculturalidad, la empatía y el Estado de Derecho. **(ICC N° 585-7 Artículo 2°).**

Lo anterior, debe ser garantizado por el Estado, entre otras, mediante medidas simbólicas de reparación, en donde las expresiones artísticas cumplan un rol fundamental, cuyo objetivo sea el reconocimiento público de los hechos y la dignidad de las víctimas, la cual permita construir una cultura que valore socialmente el respeto de los derechos humanos. **(ICC N° 585-7 Artículo 2° inciso segundo).**

Existirá una especial protección para los sitios de memoria y memoriales. El Estado deberá identificar, recuperar y preservar financiera, administrativa y legalmente los sitios de memoria, con el objeto de darles sostenibilidad y garantizar su funcionamiento como lugares de interés público, patrimonial, cultural y de libre acceso para la sociedad en general. **(ICC N° 585-7 Artículo 2° inciso tercero).**

A) DEFINICIONES GENERALES PATRIMONIOS

Artículo 1.- El patrimonio cultural del país se compone de manifestaciones y expresiones materiales e inmateriales. **(ICC N° 393-7Inciso primero).**

Artículo 2.- El patrimonio indígena consiste en sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, prácticas agropecuarias, formas de construcción y edificación, sistemas de comunicación y transporte, formas de intercambio y economía, gastronomía, las tradiciones orales, las literaturas, danzas, música, los diseños,

los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas, y otros elementos de su cultura. **(ICI N° 106-7 Artículo X inciso segundo).**

B) DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Artículo 2.- Las naciones originarias tienen el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones, por lo que también se les reconoce la facultad para protegerlas frente a personas que puedan mal utilizar sus elementos materiales, o distorsionar su sentido cosmogónico. **(ICI 121-7 Artículo XX 1,Inciso primero).**

Artículo 3.- Las naciones originarias tienen el derecho para administrar sus elementos materiales, tanto bienes muebles como inmuebles; en consecuencia, se delega a las naciones, comunidades y asociaciones originarias la protección, mantención y cuidado de ellas. Además, es deber del estado entregar los recursos económicos para dichas funciones, sobre todo en los centros ceremoniales, tanto rurales como urbanos. **(ICI 121-7 Artículo XX 2).**

Artículo 4.- Los pueblos indígenas, en el ejercicio de su auto determinación y derecho de propiedad ancestral, tienen derecho a mantener, controlar, decidir, disponer, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, de acuerdo a su derecho propio, costumbres y espiritualidad. **(ICI N° 106-7 Artículo X inciso tercero).**

Artículo 5.- Los patrimonios arqueológicos pertenecen a los pueblos y las primeras naciones de Chile, siendo inalienables, inembargables e imprescriptibles. Podrá tener la misma calidad cualquier otro bien que se identifique como patrimonio cultural y que así lo declare una ley. **(ICC N° 187-7 Artículo 3° inciso segundo).**

La ley podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de bienes que formen parte de los patrimonios culturales, así como derechos reales de conservación, velando siempre por el interés general, y resguardando el derecho a indemnización de las y los propietarios en la forma y casos que se determinen. **(ICC N° 187-7 Artículo 3°Inciso primero).**

Artículo 6.- El Estado reconoce y garantiza:

1º El derecho a acceder y gozar de los bienes, servicios, información e institucionalidad relativa a los patrimonios culturales, sean estos materiales o inmateriales. **(ICC 189-7 Artículo XInciso primero número 1º).**

2º El derecho de participación de las comunidades y personas que crean, mantienen y transmiten los patrimonios culturales, así como el derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural. **(ICC 189-7 Artículo XInciso primero número 2º).**

Artículo 7.- Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho al pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, comprendiendo su patrimonio natural, genético, humano, y propiedad intelectual, considerando la naturaleza colectiva de los mismos, que ha sido transmitido de generación en generación. **(ICC N° 245-7 Artículo X1 número 1°).**

Tienen derecho, además, a continuar transmitiendo este patrimonio cultural material e inmaterial de generación en generación, dado que constituyen la base de su existencia y garantiza su continuidad colectiva e individual, al formar parte de la expresión e identidad de cada pueblo y nación. Dentro de este patrimonio cultural se ha de considerar los diversos elementos que lo configuran, tales como la flora y fauna, su tierra y territorio, mar y maritorio, sus sitios sagrados y arqueológicos, los materiales producto de sus técnicas, tecnologías, arquitectura, artes y ciencias, su escritura y literatura, expresiones orales, cantos y otras expresiones orales, diseños, sus ceremonias y ritos, su lengua y, especialmente, sus restos humanos. **(ICC N° 245-7 Artículo X1 número 2°).**

Artículo 8.- Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen el derecho a salvaguardar su identidad cultural. También tendrán derecho a desarrollar, revitalizar, preservar, mantener, administrar, controlar, proteger, recuperar, fomentar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus artes, artesanías, ciencias, técnicas, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos, genéticos y fitogenéticos, las semillas, las plantas, las prácticas y formas de cultivo, las medicinas tradicionales, el conocimiento tradicional sobre la flora, la fauna y otros elementos de la naturaleza, las tradiciones orales, la filosofía y la cosmovisión, las literaturas, sistemas de escrituras, la lengua, los diseños, las danzas, los deportes, juegos tradicionales, prácticas espirituales y festividades, espacios culturalmente relevantes y otros que se deriven de su producción cultural. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual colectiva de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales y Iniciativas de Pueblos Originarios sus innovaciones. **(ICI 153-7Inciso primero).**

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado establecerán las medidas eficaces para resguardar, fomentar, reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos que debe adoptar el Estado. (ICI 153-7 inciso segundo). Nada de lo contenido en estos derechos será susceptible de apropiación pública o privada por ser parte de la herencia cultural de los pueblos y naciones preexistentes al Estado. **(ICI 153-7 inciso tercero).**

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin

consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo. **(ICI 153-7 inciso cuarto).**

C) DEBERES DEL ESTADO

Artículo 9.- El Estado desarrollará la institucionalidad para el registro, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción, archivo y difusión de los patrimonios culturales, cualquiera que sea el régimen jurídico y titularidad de los bienes. **(ICC N° 187-7 Artículo 2°Inciso primero).**

Artículo 10.- Ella tendrá las competencias para la protección de los patrimonios culturales, mediante la imposición y ejecución de medidas conservativas, decomisos y sanciones administrativas ante infracciones, entre otras facultades que considere pertinentes la ley. **(ICC N° 187-7 Artículo 2° inciso segundo).**

Artículo 11.- Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción frente a actos que tienen por objeto o consecuencia desposeer a los Pueblos de sus tierras, territorios y recursos, menoscabar sus derechos, incitar a la discriminación racial o étnica o promover una asimilación e integración forzada. **(ICI 108-7 Artículo XX6).**

Artículo 12.- El patrimonio arqueológico en el territorio nacional será protegido y su exhibición es un derecho de todos los ciudadanos. Los hallazgos de indumentaria y vestigios de su existencia, de origen orgánico como inorgánico, pertenecen al patrimonio arqueológico material cuyos titulares son dichos pueblos. El Estado velará por el resguardo del patrimonio arqueológico de los Pueblos Indígenas, declarando a los mismos como los titulares de sus derechos. Además, tomara medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición, las deberán ser tomadas en consenso con los Pueblos Indígenas. **(ICI 156-7 Artículo X4).**

Artículo 13.- Los patrimonios culturales de los pueblos y de las primeras naciones de Chile deben ser conservados, protegidos y preservados por el Estado, la sociedad y las personas, atendiendo su función social. **(ICC N° 187-7 Artículo 1°Inciso primero).**

Esto contempla los patrimonios históricos, artísticos, artesanales, monumentales, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos, industriales, naturales, vivos e inmateriales, entre otros, los cuales forman parte de prácticas sociales a las cuales se le atribuyen valores y principios a ser transmitidos y heredados de una época o generación a otra. **(ICC N° 187-7 Artículo 1° inciso segundo).**

La definición por parte del Estado de qué bienes tangibles, intangibles y naturales constituyen patrimonios culturales deberán ser realizadas en conjunto con los pueblos y las primeras naciones, mediante mecanismos de participación incidentes y vinculantes que definirá la ley. **(ICC N° 187-7 Artículo 1° inciso tercero).**

Artículo 14.- Será deber del Estado velar por el respeto, protección, resguardo, conservación, salvaguardia, rehabilitación, revitalización y difusión de los patrimonios culturales, memorias, herencias culturales y simbólicas en todas sus formas. **(ICC 189-7 Artículo X inciso segundo).**

Artículo 15.- El Estado de Chile, plurinacional e intercultural, reconoce los patrimonios culturales materiales e inmateriales y de la naturaleza. Garantiza a los pueblos y comunidades que habitan el territorio del país, su protección, preservación y conservación integral, generando mecanismos y recursos para su implementación, e incorporando la gestión participativa, la educación formal y la educación popular de los patrimonios culturales y naturales. Los patrimonios culturales y naturales comprenden todos los bienes materiales e inmateriales, lugares, territorios, naturaleza, semillas, inmuebles y conjuntos arquitectónicos urbanos y rurales, objetos y sitios arqueológicos, memorias, prácticas culturales, tradiciones y festividades, ya sea que ellos existan o lleguen a existir en virtud de su significación histórica, social, científica y simbólica y que las comunidades han construido y las que se construyen en el presente. **(ICC N° 298-7 Artículo X1).**

Artículo 16.- El Estado de Chile protege, promueve, garantiza los patrimonios culturales materiales, inmateriales y de la naturaleza, y cautela el respeto y la educación de y hacia las identidades y patrimonios culturales de cada pueblo y comunidades que habitan en el territorio del país, con pleno respeto y apego al derecho internacional de derechos humanos y a su particular visión respecto de la conservación y la gestión de sus patrimonios culturales y naturales, con especial observación y protección de la flora y fauna contra acciones que amenacen su bienestar y preservación, respetando la sustentabilidad ambiental, y la participación ciudadana vinculante conducente al buen vivir y la felicidad de la sociedad en su conjunto. **(ICC N° 298-7 Artículo X2).**

Artículo 17.- Asimismo, será deber del Estado la defensa, anulación, recuperación, protección y repatriación del material bioantropológico de las personas mapuche, y biológico proveniente de los recursos naturales. **(ICI 17-7 Artículo X5).**

Artículo 18.- El Estado debe adoptar políticas públicas para la preservación del patrimonio material e inmaterial, en sus diversos niveles, incluyendo los sitios reconocidos por organismos internacionales como

Patrimonio de la Humanidad, atendido su valor único y excepcional. **(ICC N° 483 Artículo 1° Inciso primero).**

Artículo 19.- Los cuerpos prehispánicos que sean considerados por los Pueblos-Naciones indígenas como sagrados recibirán un trato especial de acuerdo a las tradiciones propias de estos pueblos. Así pues, pueden demandar repatriación, reentierro, restitución y/o redignificación de los que consideren sus ancestros. El Estado está obligado a cooperar, ayudar y garantizar que se den estos procesos de manera segura, y respetando el querer y la tradición de los Pueblos-Indígenas. **(ICI N° 193-7 Artículo XX3).**

Artículo 20.- Es deber del Estado realizar todas las acciones necesarias para obtener la restitución de los objetos pertenecientes al patrimonio material de los pueblos y naciones preexistentes que, sin el consentimiento de éstos, se encuentren fuera del territorio nacional, debiendo financiar y suministrar el presupuesto necesario para la consecución de estos fines, incluyendo las gestiones diplomáticas y la litigación ante tribunales internacionales. **(ICI 17-7 Artículo X3).**

D) RECHAZO A LA ASIMILACIÓN

Artículo 21.- Los pueblos y naciones preexistentes y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento externo de asimilación. **(ICC N° 245-7 Artículo X2 número 1°).**

El Estado no deberá desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política alguna de asimilación de los pueblos y naciones preexistentes y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, ni de destrucción de sus culturas. **(ICC N° 245-7 Artículo X2 número 2°).**

E) MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 22.- La libertad de medios de comunicación Indígena será garantizada. Medios de comunicación escritos, audiovisuales, análogos, digitales u otros, serán indispensables para el fomento de las lenguas Indígenas y Tribales, cuya oferta será considerada un servicio público garantizado por el Estado de manera directa o subsidiaria. Se prohíbe todo tipo de censura y o intervención, previa o posterior. En todo caso se deberá velar por la pluralidad de opiniones. **(ICI 156-7 Artículo X2).**

Artículo 23.- Los pueblos y naciones, tienen derecho a promover, mantener y desarrollar todos sus sistemas y medios de comunicación, incluidos sus propios programas de radio y televisión, y acceder en pie de igualdad a todos los demás medios de comunicación e información. El Estado tomará medidas para

promover y asegurar la transmisión de programas de radio y televisión en sus propias lenguas, particularmente en sus territorios y donde tengan presencia. El Estado apoyará y facilitará la creación de radioemisoras, televisoras y canales digitales, así como otros medios de información y comunicación libres, asegurando el espacio igualitario para la transmisión eficaz de estos. **(ICC N° 245-7 Artículo X3 número 3°).**

F) LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Artículo 24.- La libertad de idiomas y lenguas será garantizada. Las lenguas Indígenas son parte del patrimonio vivo inmaterial de dichos pueblos, su uso es un derecho imprescriptible de estos pueblos y cuya existencia se hace necesaria para la supervivencia y transmisión de su cultura y cosmovisión, por lo que el Estado en conjunto con los mismos pueblos deberá elaborar planes y medidas para que estas se sigan hablando y evitar su desaparición. El Estado reconocerá la calidad de Tesoro Humano Vivo de los escasos hablantes de las lenguas indígenas que, en el territorio nacional, estén amenazadas de desaparecer. Para ello generará mecanismos de protección y documentación de dichas lenguas como parte del patrimonio cultural del país y de los mismos Pueblos Indígenas. **(ICI 156-7 Artículo X1).**

Artículo 25.- Lenguas. La riqueza plurilingüe de Chile es un patrimonio que será objeto de especial fortalecimiento y protección por el Estado. **(ICC N° 187-7 Artículo 4° Inciso primero).**

Las lenguas indígenas son parte de la herencia común de la humanidad. Éstas tienen un rol en el pensamiento de los pueblos y primeras naciones desde la concepción del lugar que ocupan en el universo, de su identidad y valores éticos. Asimismo, por medio de las lenguas los pueblos y primeras naciones relacionan con la naturaleza, siendo fundamental expresan los sistemas de conocimientos por los cuales para su desarrollo. **(ICC N° 187-7 Artículo 4° inciso segundo).**

Los sistemas educacionales deberán implementar programas para la protección, revitalización, recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas del país y sus comunidades. **(ICC N° 187-7 Artículo 4° inciso tercero).**

Artículo 26.- Los pueblos y naciones preexistentes al Estado y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, tienen el derecho a rescatar, preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias costumbres, cosmovisiones, formas de alimentación, historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura, y a

designar y mantener sus propios nombres para la denominación de sus comunidades, individuos y lugares. **(ICC N° 245-7 Artículo X3 número 1°).**

El Estado deberá adoptar medidas adecuadas y eficaces para proteger el ejercicio de este derecho con la participación plena y efectiva de los pueblos y naciones preexistentes **(ICC N° 245-7 Artículo X3 número 2°).**

Artículo 27.- El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones, garantizará que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. **(ICC N° 245-7 Artículo X3 número 4°).**

G) CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Artículo 28.- No podrán realizar investigaciones científicas que puedan afectar la identidad cultural de los pueblos o naciones indígenas sea a través de excavaciones, extracciones y exhibiciones de objetos, ajuares o restos óseos humanos, salvo acuerdo expreso en contrario con previo consentimiento del o los pueblos y naciones respectivas. Todo agente de investigación tiene la obligación de registrar los derechos de coautor de los cultores que contribuyan a su resultado, en el catastro respectivo **(ICI 167-7).**

Artículo 29.- Derecho al consentimiento libre previo e informado de los Pueblos Indígenas y Tribales. Los Pueblos Indígenas deberán consentir de manera previa, libre e informada respecto de todas aquellas decisiones que repercutan en ellos mismos y su territorio, especialmente su patrimonio cultural material e inmaterial. Dicho consentimiento se puede llevar a cabo por medio de los siguientes mecanismos: a) Consulta previa de acuerdo con los estándares de los derechos humanos internacionales en materia de Pueblos Indígenas. b) Referéndum comunal, municipal o local en que de manera informada se sufragará para adoptar o rechazar alguna medida determinada. En el caso de la letra a) y b), el Estado sancionara las prácticas que pudieran dañar el tejido social de los Pueblos Indígenas y Tribales por malas prácticas, destinadas a forzar un determinado acuerdo. **(ICI 156-7 Artículo X6)**

H) PRESUPUESTO

Artículo 30.- El Estado deberá proveer los presupuestos necesarios para obtener la repatriación o restitución de los elementos de la cultura de los pueblos que hayan sido separados injustamente de su territorio **(ICI N° 106-7 Artículo X inciso quinto).**

El Estado garantizará los recursos para hacer efectiva la autonomía de decisiones de las regiones, entidades territoriales y pueblos indígenas en relación a sus patrimonios culturales, memorias, herencias culturales y simbólicas,

reconociendo su identidad y diversidad territorial. **(ICC 189-7 Artículo X inciso tercero).**

Artículo 31.- La Ley de Presupuestos deberá considerar partidas con fondos suficientes para llevar en forma eficaz la conservación, protección, mantención, manejo, vinculación con la comunidad y puesta en valor de los sitios patrimonio mundial reconocidos en Chile. **(ICC N° 483 Artículo 1° inciso segundo).**

Se entenderá por eficaz un nivel de financiamiento que permita que estos sitios mantengan su categoría permanente ante los organismos internacionales sin menoscabar su integridad ni arriesgar su pérdida de categoría. **(ICC N° 483 Artículo 1° inciso tercero).**

I) PATRIMONIO BIOCULTURAL, ARTESANIA Y MEDICINA INDÍGENA

Artículo 32.- El patrimonio biocultural de Chile está constituido por todos los ecosistemas que son parte del territorio nacional y que conforman la base de la vida y del desarrollo de todas las actividades sociales, y las adaptaciones e interrelaciones de la cultura local con estos ecosistemas que le dan identidad a los pueblos y las naciones de Chile. **(ICC N° 254-7 Artículo XXX Inciso primero).**

La Constitución asegura la protección del patrimonio biocultural de Chile, en concordancia con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Para ello, el Estado, además de administrar las áreas protegidas y cumplir con las obligaciones que le mandata la Constitución y las leyes, deberá declarar como reservas patrimoniales al menos un 30% de los territorios en que existan cada uno de los ecosistemas representativos. Las reservas patrimoniales no admitirán actividad industrial alguna, podrán coincidir espacialmente con otras áreas protegidas y se regularán, en lo demás, por lo que se establezca en la ley. Las reservas patrimoniales serán gestionadas por el Estado en conjunto con las comunidades locales y con especial atención de los derechos de los pueblos indígenas cuando corresponda. **(ICC N° 254-7 Artículo XXX inciso segundo).**

Las reservas patrimoniales deberán ser representativas de los ecosistemas de Chile, incluyendo a lo menos: el mar, el desierto, los salares, las zonas costeras, la alta montaña, los valles transversales, el secano costero, el bosque esclerófilo, el bosque andino patagónico, la estepa patagónica, los archipiélagos, las turberas y la tundra magallánica. **(ICC N° 254-7 Artículo XXX inciso tercero).**

El Estado deberá hacer la declaración de reservas patrimoniales en el plazo de 4 años, pasado dicho plazo y en caso de que uno o más ecosistemas representativos no cuente aún con reserva patrimonial, no podrá otorgarse ningún tipo de concesión o permiso de funcionamiento que afecte dichos ecosistemas,

hasta que se establezca la reserva patrimonial respectiva. **(ICC N° 254-7 Artículo XXX inciso cuarto).**

Artículo 33.- El Estado reconoce la artesanía como patrimonio cultural inmaterial social, cultural, artística, económica contributiva al desarrollo del país, y su función y a las artesanas y artesanos en tanto sus cultores y cultoras, como Tesoros Humanos Vivos artesanía y sus cultores y cultoras representan un valor en sí mismos, En consecuencia, la son un aporte a la transmisión de conocimientos, al desarrollo social, artístico y cultural, al desarrollo y producción económica del país, y son parte insustituible para la conservación, preservación y divulgación de las tradiciones, identidades, memorias y herencias culturales de los territorios. **(ICC N°335-7 Artículo –X).**

Artículo 34.- El Estado protege, fomenta y garantiza la actividad artesanal tradicional y contemporánea en los ámbitos productivos, culturales y de transmisión de conocimientos, y genera las condiciones materiales y económicas para el pleno desarrollo del oficio de los artesanos y artesanas y su protección social en cualquier parte del territorio. La ley determinará todas las medidas que garanticen dicha protección en el marco de los tratados y suscritos y ratificados por Chile. **(ICC N°335-7 Artículo –XX).**

Artículo 35.- Protección a la biodiversidad en la agricultura. Se fomentarán inversiones sostenibles, sancionando las vulneraciones en territorios y maritorios de los pueblos, especialmente, por despojo para monocultivos, acuicultura u otras actividades que atenten la biodiversidad. **(ICC N° 663-7 Artículo X Inciso primero).**

El Estado protegerá a los Pueblos Indígenas y Tribales, garantizando la biodiversidad genética en la agricultura, su seguridad alimentaria y acceso a medicinas ancestrales, todo ello considerado patrimonio cultural. **(ICC N° 663-7 Artículo X inciso segundo).**

Artículo 36.- El Estado será responsable de promover, fomentar y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional mapuche, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales a partir del kimün y rakizuam. Asimismo, es deber del Estado proteger los saberes y los conocimientos mapuche mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde las prerrogativas intangibles de este pueblo, especialmente respecto a sus derechos intelectuales colectivos que detenta sobre su acervo cultural en el ámbito de los recursos genéticos, medicina tradicional y agricultura. **(ICI 17-7 Artículo X4).**

V.- DISCUSIÓN EN PARTICULAR.

En la sesión número 59, celebrada el día sábado 19 de marzo de 2022, la Comisión se abocó al conocimiento y votación de cada una de las indicaciones formuladas a las normas de las iniciativas aprobadas en general. Estas indicaciones conocidas durante la discusión en particular, así como las votaciones y demás acuerdos recaídos en relación con ellas son los siguientes:

A) DERECHO AL CONOCIMIENTO

Artículo 1

1.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación número 1, fue rechazada por 4 votos a favor, de los señores De la Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.; 10 votos en contra y 1 abstención.

Votaron negativamente, las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo, y las señoras Dorador, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo la convencional señora Malucha Pinto.

2.- De los convencionales señora Dorador y otros, para sustituir el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1. Derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios.

El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes a controlar, preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio.”.

Puesta en votación la indicación número 2, fue aprobada por 11 votos a favor y 3 votos en contra.

Votaron a favor, las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Votaron en contra los y las convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

3.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para sustituir el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1. Libertad de creación e investigación. El Estado garantiza el ejercicio de la libertad de creación e investigación de los conocimientos, como actividades esenciales que contribuyan a la sociedad y al bienestar de las personas, comunidades y naturaleza.

Para ello, el Estado fomentará la creación de entidades públicas que generen conocimiento y establecerá acciones que incentiven su desarrollo.”

4.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas la libertad creativa y su libre ejercicio como un elemento esencial de la naturaleza, individualidad y expresividad humana. El Estado reconoce la función que esta libertad cumple para la realización de la persona en sociedad y el desarrollo de la comunidad política en su conjunto, y promoverá el acceso a los conocimientos y beneficios que dicha libertad genere, con pleno respeto de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y la ley.

La libertad creativa se promoverá de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil. Para ello, la ley generará mecanismos de soporte que permitan la participación autónoma y efectiva de las personas, sus familias y comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural que derivan los conocimientos, las ciencias y las culturas.”

5.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo, por el siguiente:

“El Estado asegura el derecho a participar de los procesos de creación, desarrollo, transmisión y conservación de los sistemas de conocimientos, y a gozar de sus beneficios y de sus aplicaciones.”

Inciso primero

6.- De la convencional señora San Juan, para sustituir su inciso primero, por el siguiente:

“Todas las personas y comunidades tienen derecho a participar de la creación, desarrollo, transmisión y conservación de los diversos sistemas de conocimientos y sus aplicaciones.”.

7.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “creación, desarrollo, transmisión, conservación y enriquecimiento de los diversos sistemas de conocimientos” por “creación, desarrollo, transmisión y conservación de los sistemas de conocimientos”.

8.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “sin discriminación arbitraria alguna y de forma equitativa y descentralizada”.

Inciso segundo

9.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 10 de los convencionales señora Villena y señor Bravo para suprimirlo.

11.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la palabra “activamente”.

12.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “la promoción, la difusión, las iniciativas de divulgación y la educación científica” por “la promoción, la divulgación y la educación científica”.

13.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “en diferentes contextos culturales, sociales y territoriales, poniendo especial atención a su acceso abierto y de calidad”.

Inciso tercero

14.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Incisos nuevos

15.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado promoverá en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

Puesta en votación la indicación número 15, fue rechazada por 6 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones.

Votaron afirmativamente, las y los convencionales señor Botto, Calvo, De la Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper..

Votaron negativamente, las y los convencionales señores Achurra, , Caiguan, y las señoras Dorador, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron el convencional señor Caamaño y las convencionales señoras Pinto y Valenzuela.

16.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El ejercicio de estos derechos deberá realizarse con pleno respeto de los derechos y deberes que establecen esta Constitución y las leyes.”

Puesta en votación la indicación número 16, fue rechazada por 4 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones.

Votaron afirmativamente, las y los convencionales señor De la Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

Votaron negativamente, las y los convencionales señores Achurra, , Caiguan Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron el convencional señor Caamaño y las convencionales señoras Botto, Caamaño y Valenzuela.

Artículo 1.1.

17.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y 18.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Puestas en votación las indicaciones **número 17 y 18**, fueron rechazadas por 3 votos a favor, 11 votos en contra y 1 abstenciones.

Votaron a favor, las y los convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper..

Votaron en contra, las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el convencional señor De La Maza.

19.- De los convencionales señora Dorador y otros, para sustituir el artículo 1.1., por el siguiente:

“Artículo 2. Deberes del Estado. El Estado reconoce los diversos sistemas de conocimientos, comprendiendo ciencias, artes, humanidades, saberes ancestrales, territoriales y populares y conocimientos estéticos, entre otros. Además, se promueve su creación, desarrollo y conservación en diferentes contextos culturales, sociales y territoriales.

El Estado fomenta el acceso abierto e intercambio de conocimientos y el derecho a beneficiarse de ellos, respetando la protección de los intereses morales y materiales de sus autores, la propiedad intelectual indígena y los saberes ancestrales. Corresponderá a la ley establecer las condiciones y restricciones sobre esta materia.

El Estado reconoce que la comunicación de los sistemas de conocimientos es un medio fundamental para su desarrollo, promoviendo las condiciones para su divulgación y difusión.

El Estado considera las mejores evidencias científicas, complementadas con los sistemas de conocimientos, para sustentar la toma de decisiones informadas, especialmente en la formulación de normas jurídicas, planes, proyectos y políticas públicas.”.

A solicitud del convencional señor Neumann, se procedió a votar separadamente cada uno de los incisos que componen el articulado propuesto en la indicación.

Puesta en votación **el inciso primero** de la indicación **número 19**, el convencional señora Neumann, solicitó votación separada de cada uno de los incisos del articulado que componen esta iniciativa.

Fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención.

Votaron afirmativamente, las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo, , y Neumann y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el convencional señor De La Maza.

Puesto en votación **el inciso segundo** de la indicación **número 19**, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo, y De la Maza y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y por tres votos en contra.

Votaron negativamente los y las convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

Puesto en votación **el inciso tercero** de la indicación **número 19**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y cuatro abstenciones.

Se abstuvieron los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper.

Puesto en votación **el inciso cuarto** de la indicación **número 19**, fue aprobada por 15 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo, De la Maza y Neumann y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

20.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2. Derecho a participar y a beneficiarse de los conocimientos. Todas las personas tienen derecho a participar libremente de los sistemas de conocimientos y a gozar de sus beneficios.

El Estado debe promover el desarrollo, conservación, innovación, transferencia, socialización y acceso equitativo a los sistemas de conocimientos, así como a sus aplicaciones.

El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes a controlar, preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio.”

21.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Es deber del Estado promover, la creación, desarrollo, conservación y acceso de los conocimientos a través de un marco colaborativo entre el sector público, el

privado y la sociedad civil, con pleno respeto de los derechos que sus autores u otras personas pudieran tener sobre ellos.”

22.-De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para agregar, después de la frase “los conocimientos estéticos”, la frase “, entre otros”.

Las indicaciones número 20, 21 y 22, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión

Incisos nuevos

23.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado promoverá en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

Puesta en votación la indicación número 23, fue rechazada por 6 votos a favor de las y los convencionales señores Botto, Calvo, De la Maza y Neumann y las señoras Letelier y Tepper, seis votos en contra y tres abstenciones.

Votaron negativamente los y las convencionales señores Achurra, Caiguan y las señoras Dorador, Pinto, Vidal y Videla

Se abstuvieron los y las convencionales señores Caamaño, y las señoras Valenzuela y Vargas.

24.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.”

La indicación numero 24 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.2.

25.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, N° 26 .-De los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 27.- De los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones números 25, 26 y 27, fueron aprobadas de manera unánime por la Comisión.

28.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a desarrollar, enseñar, y difundir sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías y saberes, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.

El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos y saberes.

Asimismo, el Estado reconoce y ampara a las asociaciones humanas como espacios comunitarios de construcción de conocimientos, saberes e identidades culturales y les reconoce su adecuada autonomía para cumplir con los fines legítimos que sus miembros se han dado. Para ello, la ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva de las personas en la vida cultural.”

29.- De la Convencional señora Paulina Valenzuela, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3. Límites al derecho a beneficiarse de los conocimientos y la libertad de investigación. El ejercicio de estos derechos y libertades tiene como límite el respeto a los principios de la bioética, además de otros principios y derechos establecidos en esta Constitución y tratados e instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos.”

Inciso segundo

30. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “mantener, controlar, proteger, desarrollar, enseñar, compartir y difundir” por la frase “difundir y proteger”.

Inciso tercero

31. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso nuevo

32.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce y ampara a las asociaciones humanas como espacios comunitarios de construcción de conocimientos, saberes e identidades culturales y les reconoce su adecuada autonomía para cumplir con los fines legítimos que sus miembros se han dado. Para ello, la ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva de las personas en la vida cultura, a través de un marco de colaboración armónica entre el sector público, privado y la sociedad civil.”

Inciso final, nuevo

33.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Para ello, el Estado fomentará la creación de entidades públicas que generen conocimiento y establecerá acciones que incentiven su desarrollo.”

Las indicaciones 28, 29, 30, 31, 32 y 33 fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

Artículo 1.3.

34.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 35. De los convencionales señora Villena y señor Bravo**, para suprimirlo.

Puestas en votación las indicaciones **números 34 y 35**, fueron rechazadas por 3 votos de los y las convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper, 11 votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el convencional señor De la Maza.

36.- De los convencionales señora Dorador y otros, para sustituir el artículo 1.3., por el siguiente:

“Artículo 3. Libertad de Investigación. La Constitución garantiza el ejercicio de la libertad de investigación, la que comprende, entre otros aspectos, la protección de la indebida influencia del juicio independiente, el cuestionamiento libre y abierto de

la ética de los proyectos y el retiro por razones de conciencia de quienes desarrollan labores de investigación.

El Estado reconoce la contribución social de esta libertad para el bienestar de las personas, comunidades y naturaleza.”.

Puesta en votación la indicación número 36, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De la Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y tres abstenciones.

Se abstuvieron los y las convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper

37.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4. Deberes del Estado. El Estado garantiza el acceso a los conocimientos y a su intercambio, protegiendo los derechos morales y patrimoniales de los autores, propiedad intelectual y saberes ancestrales. Corresponderá a la ley establecer las condiciones y restricciones sobre esta materia.

Es deber del Estado promover la comunicación de los sistemas de conocimientos reconociéndola como un medio fundamental para el desarrollo de estos.

Para la toma de decisiones públicas, el Estado considera el conocimiento científicamente afianzado de los distintos sistemas de conocimientos.

El Estado debe resguardar a las personas y a la naturaleza de los usos indebidos de los conocimientos, tecnologías y sus aplicaciones, protegiendo la dignidad e integridad de las personas.”.

38.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

Estado promueve y garantiza la libertad de creación e investigación, fomentando el intercambio de datos, ideas y producción de conocimientos de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada, mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil.

La ley generará mecanismos de soporte a la creación e investigación científica y cultural que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa, respetando la autonomía de sus comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso que de ellas deriven”

Inciso primero

39. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

40. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la frase “creación, fiscalización y restauración” por “creación, resguardo y restauración”.

41. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la frase “aquel instrumento pertinente para el desarrollo del conocimiento, biocultura, ciencia, tecnología y artes” por “los instrumentos pertinentes para el desarrollo del conocimiento, cultura, ciencia, artes y tecnología”.

Las indicaciones número 37, 38, 39, 40 y 41, fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

42.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, a continuación del punto, que pasa a ser una coma (,), la siguiente frase:

“con pleno respeto de los derechos y deberes que establecen esta Constitución y las leyes.”

Puesta en votación la indicación **número 42**, fue rechazada por 5 votos de los y las convencionales señor Neumann, Calvo y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, 8 votos en contra y dos abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Caamaño y Caiguan, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron el convencional señor Botto y la convencional señora Valenzuela.

Inciso segundo

43. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

44. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “(científico, artístico, ancestral, patrimonial, tecnológico, etc.)”.

Las indicaciones numero 43 y 44, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

45.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, a continuación del punto, que pasa a ser una coma (,), la siguiente frase:

“Asimismo, se les reconoce a estas asociaciones y las personas que lo integran el derecho a objeción de conciencia, tanto personal como institucional.”.

Puesta en votación la indicación **número 45**, fue rechazada por 5 votos a favor de los y las convencionales señores Botto, Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, y 10 votos en contra.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Inciso tercero

46. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

47. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “promueve y”.

48. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “de manera descentralizada, con equidad de género y territorial”.

Inciso cuarto

49. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

50. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la palabra “política”.

Inciso quinto

51. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

52. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo “El Estado garantiza la libertad de producción y de creación, con los límites establecidos en la ley”.

Inciso sexto

53. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso séptimo

54. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Incisos nuevos

55.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley generará mecanismos de descentralización territorial y diversificación financiera que den soporte efectivo a la creación e investigación científica y cultural, a través de un marco colaborativo entre el sector público, privado y la sociedad civil.”.

Puesta en votación la indicación **número 55**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, 9 votos en contra y dos abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron el convencional Caamaño, y la convencional señora Valenzuela.

56.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado, sus instituciones y organismos, deberán respetar la autonomía de las personas, sus familias, comunidades y asociaciones en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes”.

Puesta en votación la indicación **número 56**, fue rechazada por 4 votos de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, 9 votos en contra y dos abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron el convencional señor Botto, y la convencional señora Valenzuela.

57.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación científica y cultural, así como su relación intercultural con otras cosmovisiones y saberes.”

La indicación número 57 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.4.

N° 58.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, N° 58.1 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 58.2.- De los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 58, 58.1 y 58.2, fueron aprobados de manera unánime por la Comisión.

59.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas la libertad creativa y su libre ejercicio La ley generará mecanismos de soporte a la creación e investigación científica y cultural que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa, respetando la autonomía de sus comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso que de ellas deriven.”

Inciso primero

60. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

61.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir, en el **Inciso primero**, la oración “y los colectivos que desarrollan labores de investigación relacionadas con los sistemas de conocimientos podrán organizarse y establecer instituciones autónomas” por “, en el ejercicio de su libertad creativa, podrán desarrollar labores de investigación a través de asociaciones autónomas”.

62.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar al final, luego del punto que pasa a ser una coma, la siguiente frase “con pleno respeto de los derechos y deberes que establecen esta Constitución y las leyes.”.

Inciso segundo

63. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

64. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:
“La investigación tiene por finalidad el desarrollo integral de las personas y pueblos que habitan el territorio.”.

65.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar al final, luego del punto, lo siguiente: “Asimismo, se les reconoce a estas asociaciones y las personas que lo integran el derecho a objeción de conciencia, tanto personal como institucional.”

Incisos nuevos

66.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación científica y cultural, así como su relación intercultural con otras cosmovisiones y saberes.”

67.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado, sus instituciones y organismos, deberán respetar la autonomía de las personas, sus familias, comunidades y asociaciones en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes”

68.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley generará mecanismos de descentralización territorial y diversificación financiera que den soporte efectivo y plural, entre los diversos actores de la sociedad, a la creación e investigación científica y cultural.”.

Las indicaciones número 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.5.

N° 69. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 70 de los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones numero 69 y 70, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

71.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimir todos sus incisos, salvo el primero.

72.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado desarrollará políticas, planes, programas e infraestructura que promuevan y faciliten la creación de entidades que generen conocimiento y establecerá mecanismos y alianzas que incentiven la inversión en artes, cultura, ciencia, tecnología, educación e innovación a través de una colaboración armónica entre el sector público, privado y la sociedad civil.

El Estado desarrollará planes, políticas y programas que desarrollen en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

73. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado promoverá un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

Inciso primero

74. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso segundo

75. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso tercero

76.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

77- De la convencional señora Vergara, para agregar, después de “tratados internacionales”, la frase “de Derechos Humanos y de la Naturaleza”.

Inciso cuarto

78. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso quinto

79. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso sexto

80. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Incisos nuevos

81.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Se reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación científica y cultural, así como su relación intercultural con otras cosmovisiones y saberes”.

82.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado promoverá la creación de entidades que generen conocimiento en sus diversos campos, a través de un marco colaborativo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.”

Las iniciativas número 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.6.

83. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 84.- de los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 83 y 84 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

85.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.6.- Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.”.

86. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“En la elaboración de políticas públicas y de normas legales o reglamentarias, el Estado deberá considerar el conocimiento científico generalmente aceptado y el desarrollo tecnológico, y, en caso que afecten a comunidades indígenas, sus saberes ancestrales.”.

Inciso primero

87. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso segundo

88.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 89. de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

90. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para agregar, luego del punto final, que pasa a ser coma, lo siguiente: “con enfoque de género en la creación, comunicación y goce de sus beneficios.”.

Inciso tercero

91.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 92 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso final, nuevo

93.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como inciso final, el siguiente:

“El Estado desarrollará políticas, planes, programas e infraestructura que promuevan, en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

Las indicaciones numero 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.7.

94.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, N° 95. de los convencionales señora Villena y señor Bravo, N° 96.- de los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 94, 95 y 96, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

97.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.7.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, culturas, memorias y formas sociales tradicionales en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.

El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos y saberes.

Asimismo, el Estado reconoce y ampara a las asociaciones humanas como espacios comunitarios de construcción de conocimientos, saberes e identidades culturales, y les reconoce su adecuada autonomía para cumplir con los fines legítimos que sus miembros se han dado. Para ello, la ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva, democrática y pluralista de las personas en la vida cultural.”.

98. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Los Pueblos y Naciones indígenas tienen derecho a una protección especial de su territorio, lugares, arquitectura, pictografías, petrograbados y demás objetos que consideren sagrados, y el derecho a mantener, resguardar y desarrollar sus conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales los cuales no podrán ser usados para fines comerciales, sin la autorización de dichas comunidades.”.

Inciso segundo

99. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Incisos primero y segundo

100. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la frase “Pueblos-Naciones” por “Pueblos y Naciones”.

Inciso tercero

101. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso cuarto

102. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso final, nuevo

103.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como inciso final, el siguiente:

“La ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva y descentralizada de las personas en la vida

cultural, a través de un marco de colaboración armónica entre el sector público, privado y la sociedad civil.”

Las indicaciones número 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

B) DERECHO A LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Artículo 1

104.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 105 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, 105.1.- de los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 104, 105 y 105.1 fueron aprobadas de manera unánime en la Comisión.

106.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado promueve y garantiza la libertad de creación, investigación, y divulgación de la ciencia y la tecnología, fomentando el intercambio de datos, ideas y producción de conocimientos de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil.

La ley generará mecanismos de soporte a la creación e investigación científica y cultural que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa.

Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible.”

Inciso primero

107.- De la convencional señora San Juan, para sustituir su inciso primero, por el siguiente:

“El Estado reconoce la comunicación científica como un mecanismo fundamental para el desarrollo de la ciencia y su vínculo con la sociedad, por lo que debe asegurar la implementación de políticas públicas que promuevan la educación y valoración de la ciencia y tecnología entre la población, teniendo especial consideración con los grupos vulnerables y los criterios de segmentación etaria,

diversidad social, identidad regional, plurinacionalidad, enfoque de género e inclusión.”.

Incisos nuevos

108.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos y saberes.”.

109.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado, sus instituciones y organismos, deberán respetar la autonomía de las personas, sus familias, comunidades y asociaciones en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes.”.

110.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley generará mecanismos de descentralización territorial y diversificación financiera que den un soporte efectivo y plural a la creación e investigación científica y cultural, a través de un marco colaborativo entre el sector público, privado y la sociedad civil.”.

Las indicaciones número 106, 107, 108, 109 y 110, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

C) BENEFICIOS DEL CONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA USOS INDEBIDOS Y NOCIVOS

Artículo 1

111.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 112 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, N° 113.- de los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 111, 112 y 113, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

114.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas el derecho a acceder a los conocimientos, y a beneficiarse de estos y sus aplicaciones. Este derecho se ejercerá con pleno respeto a la dignidad humana, la protección sustentable del medioambiente, y a los derechos y garantías que la Constitución y las leyes establecen.”

Inciso nuevo

115.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El progreso científico y cultural reconoce como límite la dignidad humana y la protección sustentable del medioambiente, con pleno respeto a los derechos que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Las indicaciones 114 y 115, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.2.

116.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 117 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Puestas en votación las indicaciones **número 116 y 117**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, y 11 votos en contra.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Puesta en votación la indicación **número N° A-118**, fue rechazada por 5 votos de los y las convencionales señores Botto, Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, 8 votos en contra y dos abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla. Se abstuvieron el convencional señor Caamaño, y la convencional señora

118.- De los convencionales señora Dorador y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5. Límites al derecho a los conocimientos y la libertad de investigación. El ejercicio del derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos y la libertad de investigación tienen como límite el respeto a los principios de la bioética, además de otros principios y derechos establecidos en esta Constitución y tratados e instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos.”.

Puesta en votación la indicación **número 118**, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De la Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y tres abstenciones.

Se abstuvieron los y las convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

119.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.2.- El progreso científico y cultural reconoce como límite la dignidad humana y la protección sustentable del medioambiente, con pleno respeto a los derechos que esta Constitución y las leyes establecen.”.

120.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente: “Las personas tienen derecho a que, en el marco del desarrollo científico y tecnológico, se respete su vida privada, integridad física y psíquica, y demás derechos fundamentales.”.

Inciso primero

121.- De convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

122.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la expresión “las fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y garantías de las personas, las comunidades y la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad”, por lo que sigue:

“la dignidad humana y el desarrollo sustentable del medioambiente, con pleno respeto a la Constitución, las leyes, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

Inciso segundo

123.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 124 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones numero 119, 120, 121, 122, 123 y 124, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.3.

125.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 126 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 127. de los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 125, 126 y 127, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

128.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado asegura a todas las personas la protección de la identidad genética y del microbioma humano, frente a cualquier tipo de intervención tendiente a la creación, desarrollo y uso de las tecnologías, la experimentación científica, intervenciones biomédicas y otros similares.”

Inciso primero

129.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

130.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.3.- El Estado reconoce la función que la libertad creativa cumple para la realización de la persona en sociedad y el desarrollo de la comunidad política en su conjunto, y promoverá el acceso a los conocimientos que dicha libertad genere, con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Inciso segundo

131.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 128, 129, 130 y 131, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.4.

132.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 133 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 134 de los convencionales señora Dorador y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 132, 133 y 134, se aprobaron por la unanimidad de la Comisión.

135.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “o sea candidata a ejercerlas”.

136.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “, sin perjuicio de la aplicación directa que los Tribunales de Justicia puedan hacer de esta norma, de acuerdo con las demás disposiciones constitucionales”.

137.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la oración “Una ley regulará los requisitos, procedimientos y sanciones en caso de incumplimiento de este deber” por “Una ley regulará los procedimientos y sanciones en caso de infracción de este artículo”.

138.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La ley desarrollará mecanismos de formación y promoción plural y diversa de las ciencias, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad ciudadana de identificar fenómenos de desinformación en la divulgación y comunicación de los diversos sistemas de conocimiento.”.

Inciso nuevo

139.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley desarrollará mecanismos de formación y promoción plural y diversa de las ciencias, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad ciudadana de identificar fenómenos de desinformación en la divulgación y comunicación de los diversos sistemas de conocimiento”.

Las indicaciones 135, 136, 137, 138 y 139, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.5.

140.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 140**, fue rechazada por 1 voto a favor, del convencional De la Maza, y 14 votos en contra.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y Neumann y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

141.- De los convencionales señora Dorador y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4. Protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología. El Estado resguarda a las personas, individual y colectivamente, y a la naturaleza frente a los usos indebidos de los conocimientos, tecnologías y sus aplicaciones, y protege la dignidad e integridad física, psíquica y mental de las personas, incluyendo su identidad genética y microbioma humano.”.

Puesto en votación la indicación **número 141**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De la Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela Vidal y Videla, un voto en contra y tres abstenciones.

Votó negativamente el convencional señora Vargas.

Se abstuvieron los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper.

142.- De la convencional señora Vergara, para suprimir la frase “a la vida y”.

Inciso primero

143.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

144.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y mental de todo ser humano. El progreso científico y cultural reconoce como límite la dignidad humana y el desarrollo sustentable del medioambiente, con pleno

respeto a los principios de la bioética y los derechos que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Inciso segundo

145.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

146.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “a la vida y”..

Inciso segundo, nuevo

147.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como inciso segundo, nuevo, lo siguiente:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que protejan la vida del que está por nacer, y la integridad física, psíquica y mental de las personas gestantes”.

Inciso tercero

148.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

149.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la oración “Este derecho también comprende gozar de sus beneficios y de la tecnología.”

Las indicaciones numero 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 149, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Inciso nuevo

150.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso el siguiente:

“La Constitución garantiza a todas las personas naturales o jurídicas sin distinción, el derecho de objeción de conciencia personal e institucional.”.

Puesto en votación el **Inciso primero** de la indicación **número 157**, fue rechazada por 5 votos a favor de las y los convencionales Botto De la Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper, 9 votos en contra y una abstención.

Votaron en contra los convencionales señores Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vidal y Videla.

Se abstuvo la convencional señora Vargas.

A) DERECHOS DE AUTOR

151.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 152 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 151 y 152, fueron aprobada por la mayoría de los presentes miembros de la Comisión.

153.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Inciso primero, nuevo

154.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo**Inciso primero**, el siguiente:

“Artículo 1. La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”.

Incisos nuevos

155.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”.

156.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Las indicaciones numero 153, 154, 155 y 156, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.1.

157 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. Derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales. Todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones culturales, científicas, artísticas y otras relativas a los conocimientos en general, de las que sean autoras o intérpretes.

Estos derechos comprenden el aprovechamiento y el uso de la obra o interpretación, por un tiempo que no será inferior al de la vida del titular, así como el reconocimiento a la creación, divulgación e integridad de éstas, conforme a lo que establezca la ley.

El derecho material de autores o intérpretes estará sujeto a las disposiciones del derecho de propiedad establecidas por esta Constitución, en cuanto a sus garantías, limitaciones y función social, debiendo la ley velar tanto por su protección con la de los demás derechos culturales, el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del beneficio de los conocimientos.”.

A continuación, el convencional señor Neumann pidió votación separada de cada uno de los incisos que componen al articulado que compone la indicación.

Puesto en votación el **inciso primero** de la indicación **número 157**, fue aprobada por 9 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y De la Maza, y las señoras Dorador, Vargas, Vidal y Videla, un voto en contra y una abstención.

Votó negativamente el convencional señor Neumann.

Se abstuvo la convencional señora Valenzuela.

Puesto en votación el **inciso segundo** de la indicación **número 157**, fue aprobada por 10 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y De la Maza, y las señoras Dorador, Vargas, Vidal y Videla, dos votos en contra y dos abstenciones.

Votaron negativamente las convencionales señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvieron el convencional señor Neumann y la convencional señora Valenzuela.

Puesto en votación el **inciso tercero** de la indicación **número 157**, fue aprobada por 10 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y De la Maza, y las señoras Dorador, Vargas, Vidal y Videla, y cuatro abstenciones.

Se abstuvieron el convencional señor Neumann y la convencional señoras Letelier, Tepper y Valenzuela.

158.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por

resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

159.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

160.- De los convencionales señora Valenzuela, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. Derechos de autor. La Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras literarias, artísticas o científicas, comprendiendo los derechos morales y los derechos patrimoniales sobre la obra, por un tiempo que no será inferior al de la vida del titular, conforme a lo que establezca la ley. Asimismo, la Constitución asegura, como derechos conexos a los derechos de autor, y sin perjuicio de estos, los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes respecto de la difusión de sus producciones en conformidad a la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor están sujetos a las disposiciones establecidas por esta Constitución para el derecho de propiedad, en cuanto a sus garantías, limitaciones y función social, debiendo la ley velar tanto por su protección con la de los demás derechos culturales, el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del beneficio de los conocimientos.

Corresponderá a la ley regular las limitaciones y excepciones de este derecho.”

Las indicaciones número 158, 159 y 160, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Inciso primero, nuevo

161.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo **Inciso primero**, el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Puesta en votación la indicación **número 161**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, 10 votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo la convencional señora Valenzuela

Incisos primero y segundo

162.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlos por el siguiente:

“La Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales, de cualquier especie, del que sea autor o intérprete, en conformidad a la ley.”.

Inciso tercero

163.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la siguiente frase “así como los derechos de paternidad, divulgación e integridad de éstas, lo que será determinado por la ley”.

Las indicaciones numero 162 y 163, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Inciso nuevo

164.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

Puesta en votación la indicación **número 164**, fue rechazada por 3 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y la señora Tepper, 10 votos en contra y dos abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron las convencionales señoras Valenzuela y Letelier.

Artículo 1.2.

165.- De los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

La indicación número 165 fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.

166.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

167.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer procedimientos de concesión de licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos

procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que se fijará de común acuerdo y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares previamente indicados”

Inciso primero, nuevo

168.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Inciso primero

169.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“La Constitución garantiza a todas las personas la libertad de crear y difundir la cultura y las artes, así como también hacer uso justo de las obras literarias, artísticas o culturales.”.

Inciso segundo

170.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

171.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso nuevo

172.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

Las indicaciones número 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.3.

173.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 174 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 173 y 174, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

175.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

176.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”

Inciso primero, nuevo

177.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.3.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Inciso primero, nuevo

178.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

Las indicaciones número 175, 176, 177 y 178, fueron rechazadas por la unanimidad.

Artículo 1.4.

179.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 180 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 179 y 180, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

181.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.4.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por

resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero, nuevo

182.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.4.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Inciso primero

183.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

Inciso segundo

184.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

185.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Estado promoverá el acceso a los resultados de las investigaciones científicas y el intercambio de estos conocimientos entre investigadores encargados de formular políticas públicas y a todas las personas y comunidades.”.

Inciso tercero

186.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

187.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Estado promoverá un equilibrio entre la protección de los intereses materiales y morales que les correspondan a los autores, y el acceso abierto a los conocimientos y a la cultura.”.

Inciso cuarto

188.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

Inciso quinto

189.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

Inciso nuevo

190.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”.

Las indicaciones número 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 y 190, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.5.

191.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

Puesta en votación la indicación **número 191**, fue rechazada por 1 voto del convencional señor Calvo, 11 votos en contra y tres abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y De la Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron las convencionales señoras Letelier y Tepper, y del convencional señor Neumann.

192.- De los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Uso justo. El Estado promoverá a través de una ley el uso justo de las obras, con un objetivo de bien común, resguardando los derechos morales de sus autores o intérpretes.”

Puesta en votación la indicación **número 192**, fue rechazada por 2 votos a favor de los convencionales señores Caamaño y Caiguan, 9 votos en contra y cuatro abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Calvo, De la Maza y Neumann y las señoras Dorador, Letelier, Tepper, Vidal y Videla.

Se abstuvieron las convencionales señoras Pinto, Vargas y Valenzuela y del señor convencional Botto.

193.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.5.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Asimismo, asegura a todas las personas la protección patrimonial y moral a autores e intérpretes sobre la creación y difusión de sus obras. Esta protección comprende la propiedad sobre sus producciones científicas, artísticas y literarias de cualquier especie, por un tiempo que no podrá ser inferior a la vida del titular, y otros derechos, como la paternidad, edición, e integridad de sus creaciones, en las condiciones que establezca la ley.

Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

La indicación número 193 fue retirada por sus autores.

194.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1.5.- Toda persona tiene derecho a que sus creaciones sean resguardadas, como archivo, en un espacio digital patrimonial de administración pública y participación comunitaria, cuyas condiciones serán establecidas por la ley.”

Puesta en votación la indicación **número 194**, fue rechazada por 2 votos a favor de los convencionales señores Caamaño y De la Maza, 8 votos en contra y cinco abstenciones.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Calvo y Caiguan y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron las convencionales señoras Letelier, Teppper, y Valenzuela y los señores convencionales Botto y Neumann.

Inciso primero, nuevo

195.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.5.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Puesta en votación la indicación **número 195**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Teppper, 10 votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo la convencional señora Valenzuela.

196.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminar su párrafo primero.

Puesto en votación la indicación **número 196**, fue aprobada por 9 votos a favor de las y los convencionales Botto, Caamaño, Calvo y De la Maza, y las señoras Dorador, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, uno en contra y cinco abstenciones.

Votó en contra el convencional señor Achurra.

Se abstuvieron el convencional señor Neumann y el señor Caiguan, y las convencionales señoras Letelier, Tepper y Valenzuela.

197.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminar su párrafo segundo.

198.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminar su párrafo tercero.

199.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminar su párrafo cuarto.

200.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminar su párrafo quinto.

Puestas en votación las indicaciones **números 197, 198, 199 y 200**, fueron aprobadas por 14 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y Neumann y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y una abstención.

Se abstuvo el señor convencional De la Maza.

Inciso nuevo

201.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

Puesta en votación la indicación **número 201**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, 10 votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el convencional señor Caamaño.

Inciso final, nuevo

202.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como inciso final, nuevo, los siguientes:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer procedimientos de concesión de licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que se fijará de común acuerdo y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares previamente indicados.”.

Puesta en votación la indicación **número 202**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, 10 votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el convencional señor Caamaño.

B) DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL INDIGENA

203.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 204 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones numero 203 y 204, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

205.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado reconoce, dentro de la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico y patrimonial de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de los pueblos indígenas y garantiza la adecuada protección intelectual de los bienes que componen su patrimonio cultural, cuya titularidad se ejercerá de acuerdo la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La indicación número 205 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.2.

206.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **N° 207 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros**, para suprimirlo.

Las indicaciones número 206 y 207, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

208.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

"La Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, garantizando su adecuada protección patrimonial y moral, de acuerdo a las condiciones consagradas en la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

209.- De la convencional señora San Juan, para agregarle la palabra “utilizada”, tras la frase “apropiación individual o”.

Las indicaciones numero 208 y209 fueron rechazadas por la unanimidad.

Artículo 1.3.

210.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 211 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 210 y 211, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 2.

212.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 213 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 212 y 213, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

214.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- El legislador establecerá los mecanismos para que las manifestaciones culturales propias de los pueblos indígenas no sean objeto de apropiación individual, sin consentimiento previo del pueblo indígena a que dicha manifestación pertenezca en el ejercicio de la titularidad que la ley le confiera.

La indicación número 214 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 3.

215.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 216 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 215 y 216, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

217.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3.- El Estado reconoce y protege el derecho de los pueblos indígenas a definir libremente sus sistemas de conocimientos culturales y científicos, su cosmovisión e identidad, y garantiza la propiedad intelectual sobre los bienes que componen su patrimonio cultural, de acuerdo a las condiciones consagradas en la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

El legislador establecerá los mecanismos para que las manifestaciones culturales propias de los pueblos indígenas no sean objeto de apropiación individual, sin

consentimiento previo del pueblo indígena a que dicha manifestación pertenezca en el ejercicio de la titularidad que la ley le confiera”.

La indicación número 217 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 3.1.

218.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 219 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 218 y 219, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 3.2.

220.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 221 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 220 y 221, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 3.3.

222.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 223 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 222 y 223, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

C) ROL DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

Artículo 1.

224.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 225 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 224 y 225, fueron aprobadas por los miembros de la Comisión.

226.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero, nuevo

227.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones”.

Inciso primero

228.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Los derechos de propiedad intelectual deben tener por objetivo el bien común y en concordancia con los derechos humanos y la naturaleza”.

Inciso segundo

229.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Una ley reconocerá el uso justo de las creaciones literarias, artísticas y culturales.”.

Inciso tercero

230.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Incisos nuevos

231.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

232.- De los convencionales señor Bravo y otros, para agregar, como nuevos incisos, los siguientes:

“Las obras literarias, artísticas y científicas de cualquier naturaleza, producidas por el Estado, o por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos, pertenecen al patrimonio cultural común y podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se reconozca la autoría y la integridad de la obra.

Lo anterior no será aplicable a las obras desarrolladas en el contexto de la actividad propia de las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación, cuando la obra tenga un sentido estratégico para sus fines o cuando la ley así lo establezca.”.

Las indicaciones número 226, 227, 228, 229, 230, 231 y 232, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 1.1.

233.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 234 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 235 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 233, 234 y 235, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

236.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.1.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero, nuevo

237.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.1.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones”.

Inciso nuevo

238.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la

explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Las indicaciones número 236, 237 y 238, fueron rechazadas de manera unánime.

Artículo 1.2.

239.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 240 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 239 y 240, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

241.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.2.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Inciso primero, nuevo

242.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.2.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones”.

Inciso nuevo

243.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Las indicaciones número 241, 242, y 243 fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 2

244. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 244**, fue aprobada por 13 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Neumann y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y una abstención.

Se abstuvo el señor convencional De la Maza.

Inciso primero

245. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

246. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 245 y 246 fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

247.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 248 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 249 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 247, 248 y 249, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

250.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.1.-El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Inciso primero

251. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

252. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso primero, nuevo

253.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“**Artículo 2.1.**-El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.”.

Inciso nuevo

254.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Las indicaciones número 250, 251, 252, 253 y 254, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 2.2.

255.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 256 de los convencionales señora Villena y señor Bravo**, y **Nº 257 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros**, para suprimirlo.

Las indicaciones número 255, 256 y 257, fueron aprobadas por la mayoría de los presentes miembros de la Comisión.

258.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“**Artículo 2.2.-** El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno

respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero

259. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

260. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

261. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado prohibirá la constitución de derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, sin el consentimiento del respectivo pueblo.”.

Inciso tercero

262. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso cuarto

263. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso primero, nuevo

264.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 2.2.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.”.

Inciso nuevo

265.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Las indicaciones número 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 y 265, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

266.- De los convencionales señor Bravo y otros, para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 2.3. Obras del Estado en Patrimonio Cultural Común. Las obras literarias, artísticas y científicas de cualquier naturaleza, producidas por el Estado, o por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos, pertenecen al patrimonio cultural común y podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se reconozca la autoría y la integridad de la obra.

Lo anterior no será aplicable no será aplicable a las obras desarrolladas en el contexto de la actividad propia de las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación, cuando la obra tenga un sentido estratégico para sus fines o cuando la ley así lo establezca.”.

Puesta en votación la indicación **número 266**, fue rechazada por 1 voto a favor del convencional señor Caamaño, 13 votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Calvo, Caiguan, De la Maza y Neumann y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron la convencional señora Valenzuela.

D) ROL DEL ESTADO

Artículo 1

267.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 268 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo

Las indicaciones número 267 y 268, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

269.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado incentivará la creación e investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo cultural, promoviendo para ello la participación activa de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, en estos objetivos.”.

270. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. El Estado impulsará un desarrollo armónico y sostenible, mediante la conciliación de los derechos y deberes relacionados con la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad y el patrimonio histórico, cultural y artístico de la nación; con el desarrollo de actividades económicas y el avance en bienestar social y en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.”.

Inciso primero

271. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “Serán objetivos prioritarios del Estado” por “El Estado propenderá a:”.

Numeral 1

272. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Numeral 2

273. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Numeral 3

274. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Numeral 4

275. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Numeral 5

276. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 y 276, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 2.

277.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 278 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 279 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 277, 278 y 279, fueron aprobadas de manera unánime por la Comisión.

Inciso primero

280. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

281. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Artículo 3

282.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 283 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 284 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 282, 283 y 284, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

285. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado deberá utilizar las mejores soluciones técnicas y tecnológicas disponibles, para que su funcionamiento sea eficiente, eleve los estándares de los servicios públicos, y mejore la transparencia y rendición de cuentas.”.

Inciso segundo

286. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

287. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

288.- De la convencional señora San Juan, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Estado deberá destinar los recursos materiales y humanos necesarios para que la educación permita a la sociedad participar informada y exitosamente en todos los procesos de la vida social, política, económica y ecológica, la que se basará preferentemente en las culturas, historias y diversidad natural de cada territorio y región.”.

Las indicaciones número 285, 286, 287 y 288, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 4.

289.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 290 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 291 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 289, 290 y 291, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 5.

292.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 293 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 294 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 292, 293 y 294, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

295. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir su primera oración, que dice: “El Estado debe garantizar el derecho a las ciencias, destinando recursos para el desarrollo de la investigación científica y artística, con criterios de descentralización y el resguardo de los saberes ancestrales.”

La indicación número 295 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 6.

296.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 297 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 297.1 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 296, 297 y 297.1, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 7.

298.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 299 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 300, de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 298, 299 y 300, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 8.

301.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 302 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 303 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 301, 302 y 303, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

304. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8. El Estado promoverá el desarrollo de tecnologías, equipamiento y profesionales especializados en la investigación científica, para el cuidado de la vida, el buen vivir de la comunidad y asegurar la salud de toda la población.”.

La indicación número 304 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 9.

305.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 306 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 307 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 305, 306 y 307, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 10.

308.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 309 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 310 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 308, 309 y 310, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 11

311.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 312 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 313 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 311, 312 y 313, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

314.- De los convencionales señor Caamaño y señora Malucha Pinto, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 11.- La diversidad cultural constituye una base fundamental del Estado.

Chile es un Estado intercultural, siendo un principio fundamental para lograr la cohesión y la convivencia pacífica de los pueblos y naciones indígenas preexistentes que cohabitan el país, así como para la generación de las condiciones de respeto mutuo entre las distintas identidades culturales.”.

315.- De la convencional señora Malucha Pinto, para intercalar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“El Estado protegerá y promoverá la diversidad de nuestras expresiones culturales. A tal efecto, debe desarrollar, conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas necesarias. Estas favorecerán especialmente un entorno que incentive a las personas y a las comunidades a crear, contribuir, producir, difundir y distribuir la diversidad de nuestras expresiones culturales, y tener igual acceso a ellas.”.

316.- De la convencional señora Labraña, para intercalar un inciso segundo del siguiente tenor:

“El Estado protegerá y promoverá la diversidad de nuestras expresiones culturales. A tal efecto, deberá desarrollar, conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas necesarias. Ésas favorecerán especialmente un entorno que incentive a las personas y a las comunidades a crear, contribuir, producir, difundir y distribuir la diversidad de nuestras expresiones culturales, y tener igual acceso a ellas.”.

Las indicaciones número 314, 315 y 316, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 12.

317.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 318 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 317 y 318 fueron retiradas por su autor.

333.- De los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo X.- Reconocimiento del aporte de las culturas, artes y patrimonios. El Estado reconoce el aporte fundamental de las culturas, las artes y los patrimonios para el desarrollo integral de las personas, las comunidades, los pueblos y naciones indígenas preexistentes.”

Puesta en votación la indicación **número 333**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De la Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas y Videla, 2 votos en contra y una abstención.

Votaron en contra las señoras convencionales Letelier y Tepper.

Se abstuvo el convencional señor Neumann.

Artículo 13.

319.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 320 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 321 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 319, 320 y 321, fueron aprobadas de manera unánime por la Comisión.

322.- De los convencionales señor Caamaño y señora Malucha Pinto, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 13.- Es obligación del Estado reconocer y resguardar las diferentes identidades culturales del país, en un constante diálogo y participación con las personas, comunidades, pueblos y naciones indígenas preexistentes, otorgando igualdad de trato y dignidad a sus expresiones y manifestaciones.”.

Inciso primero

323. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

324. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

325. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 322, 323, 324 y 325, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 14.

326.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 327 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 328 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 326, 327 y 328 fueron, aprobadas de forma unánime por la Comisión.

Inciso primero

329. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

330. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

331. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 329, 330 y 331, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 15.

332.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 332**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, y 10 votos en contra.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas y Videla.

334.- Del convencional señor Caiguan, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 15: Rol del Estado en el patrimonio cultural indígena. El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena”

Puesta en votación el inciso segundo de la indicación **número 334**, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo, y De la Maza y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y por tres votos en contra.

Votaron negativamente los y las convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

Artículo 16.

335.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 336 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 335 y 336, fueron aprobadas de manera unánime en la Comisión.

Artículo 17.

337.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 338 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 337 y 338, fueron aprobadas de manera unánime en la Comisión.

Artículo 18.

339.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 340 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 341, de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 339, 340 y 341, fueron aprobadas de manera unánime en la Comisión.

342. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 18.- Los órganos del Estado deberán fomentar y asegurar la participación popular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas culturales.”.

Inciso primero

343. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

344. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Las indicaciones número 342, 343 y 344, fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

Artículo 19.

345.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 346 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 347 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 345, 346 y 347, fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

Artículo 20.

348.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 349 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 350 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 348, 349 y 350, fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

Artículo 21.

351.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 352 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, y N° 353 de los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 351, 352 y 353, fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

A) PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 1.

354.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 1.- Derecho a la Protección de Datos Personales. Todas las personas tienen derecho a la protección de los datos de carácter personal, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que les conciernen.

Ninguna persona podrá ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos, salvo en los casos que expresamente lo señala la ley.

La recolección y tratamiento de datos de carácter personal se realizará de manera excepcional según las condiciones que disponga la ley. Respecto a los datos sensibles, estará prohibido, salvo los casos específicos que disponga la ley.

Los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen derecho al control, acceso y posesión de los datos que proceden de ellos y que se refieren a sus miembros, sistemas de conocimientos, costumbres, territorios, entre otros.”

Puesta en votación el inciso segundo de la indicación **número 354**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, dos votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente las convencionales señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvo el convencional señor Neumann.

355.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 1.- La Constitución reconoce y asegura a todas las personas el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de su persona y de su familia.

Asimismo, asegura la protección de sus datos personales, cuyo tratamiento y protección se efectuarán en la forma y bajo las condiciones que determine la ley”.

Inciso segundo

356.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Inciso tercero

357.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Las indicaciones número 355, 356 y 357 fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

358.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, luego de “datos sensibles”, lo siguiente:

“,claramente definidos por la ley,”.]

Puesta en votación la indicación **número 358**, fue rechazada por 6 votos a favor de las y los convencionales señor Botto, Calvo, De la Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper, 8 votos en contra y 3 abstenciones.

Votaron negativamente, las y los convencionales señores Achurra, Caamaño, Caiguan, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron la convencional señora Valenzuela.

Inciso nuevo

359.- De los convencionales señores Caamaño y Caiguan, y señora Malucha Pinto, para agregar el siguiente inciso final:

“La ley establecerá los límites del tratamiento de datos de carácter personal que tenga por objeto inducir, de cualquier forma, el comportamiento de las personas.”.

Puesta en votación el inciso tercero de la indicación **número 359**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, un voto en contra y 3 abstenciones.

Votó en contra el convencional señor De la Maza.

Se abstuvieron los y las convencionales señores Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

Artículo 1.1.

360.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución reconoce y asegura a todas las personas el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de su persona y de su familia.

Asimismo, asegura la protección de sus datos personales, cuyo tratamiento y protección se efectuarán en la forma y bajo las condiciones que determine la ley”.

Puesta en votación la indicación **número 360**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, y 11 votos en contra.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

361.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimir su epígrafe.

Puesta en votación la indicación **número 361**, fue aprobada por 11 votos de los y las convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y cuatro abstenciones.

Se abstuvieron los convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, y 11 votos en contra.

Numeral 1.

362.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 362**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y un voto en contra y tres abstenciones.

Votó en contra el señor convencional De la Maza.

Se abstuvieron los y las convencionales señores Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

Párrafo primero

363.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimir la palabra “comunidades”

Párrafo segundo

364.- De la convencional señora San Juan, para suprimirlo.

365.- Del convencional señor Harboe, para sustituirlo por el siguiente:

“Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento sólo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley, salvo en caso de flagrancia.”

366.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por los siguientes:

“La inviolabilidad de todo recinto privado y de toda forma de comunicación privada.

Dichos lugares sólo podrán allanarse, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y en la forma determinados por ley”.

Párrafos tercero y cuarto

367.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlos.

368.- Del convencional señor Harboe, para sustituirlos por el siguiente:

“Las comunicaciones y los documentos privados son inviolables, incluyendo sus metadatos. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión sólo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley.”

Las indicaciones número 369, 364, 365, 366, 367 y 368, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Numeral 2

369.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y de los convencionales señor Calvo y otros para suprimirlo.

La indicación número 369 fue aprobada de forma unánime en la comisión.

370.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para reemplazar la palabra “leal” por “fiel”.

Párrafo tercero

371.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona titular de datos, tiene derecho a ser informada, derecho a solicitar y recibir del responsable una copia de los datos personales que le conciernen de manera estructurada, en un formato estándar, abierto, que sea interoperable entre distintos sistemas y de uso común, a comunicarlos o transmitirlos o transferirlos a otro responsable al que los hubiera facilitado, en la manera que concurran los requisitos legales y condiciones establecidas por la ley”

Párrafo cuarto

372.- Del convencional señor Harboe, para sustituir su párrafo cuarto por el siguiente:

“La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica que velará por el respeto efectivo de este derecho.”

373.- Del convencional señor Harboe, para incorporar el siguiente párrafo:

“Toda persona tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, inferencia y otros que establezca la ley.”

Las indicaciones número 370, 371, 372 y 373, fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

Numeral 3

374.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

375.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente artículo 2:

Artículo 2.- Derecho a la Seguridad Informática. La Constitución asegura la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas, individual y colectivamente. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad que contengan los sistemas informáticos que administren, salvo en los casos expresamente señalados por la ley.”.

Las indicaciones número 374 y 375 fueron retiradas por sus autores.

376.- Del convencional señor Caamaño, para sustituirlo por el siguiente artículo:

“Artículo 2.- Derecho a la seguridad informática. La Constitución asegura la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas, individual y colectivamente. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos que administren, salvo los casos expresamente señalados por la ley.”.

Puesta en votación la indicación **número 376**, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De la Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y tres abstenciones.

Se abstuvieron los y las convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

377.- Del convencional señor Harboe, para sustituirlo por el siguiente artículo:

“Art. x.- Derecho a la seguridad informática.

Toda persona tiene derecho a la seguridad informática.

El Estado, los particulares y los responsables de los sistemas de información automatizados deberán adoptar las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, continuidad, resiliencia y autenticidad de la información que contengan los sistemas informáticos que administren y la disponibilidad de los servicios prestados.

Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias según la criticidad de la información. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho.

La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica y patrimonio propio que velará por el respeto efectivo y promoción de este derecho.”

La indicación número 377 fue rechazada de forma unánime.

Artículo 2

378.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 379 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 378 y 379, fueron aprobadas de forma unánime en la Comisión.

Artículo 3

380.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 381 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

382.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar después del punto aparte que pasa a ser una coma, lo siguiente:

“velando siempre por la salvaguarda de los demás derechos, deberes y garantías que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Las indicaciones número 380 y 381, fueron rechazadas por unanimidad.

Artículo 3.1.

383.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 384, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 383 y 384, fueron aprobadas de forma unánime en la Comisión.

B) DERECHO A LA INFORMACIÓN DIGITAL

Artículo 1

385.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 385**, fue rechazada por 4 votos a favor de los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper, y 11 votos en contra.

Votaron negativamente las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

386.- De los convencionales señor señor Calvo y otros, para sustituirlo por uno nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 1.- Derecho al Acceso Abierto a la Información Pública. Las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso abierto y uso gratuito por medios digitales u otros, a la información que esté en poder del Estado, de sus empresas o en las que este tenga participación, y la recibida o producida por instituciones privadas en el ejercicio de una función pública encomendada por el Estado, según lo establezca la ley.

La ley determinará la forma en que se podrá establecer la reserva o secreto, por razones de seguridad del país, la protección de los derechos de las personas y comunidades o cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de las instituciones respectivas.

No podrá ser sometida a régimen de reserva la información que, a juicio de los tribunales competentes, permita esclarecer y sancionar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y a la Naturaleza.”

Puesta en votación el inciso tercero de la indicación **número 386**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, tres votos en contra y una abstención.

Votaron negativamente los y las convencionales señores Neumann y De la Maza, y las señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvo el convencional señor De la Maza.

Artículo 2

387.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 387.1 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 387 y 387.1 fueron aprobados de manera unánimes.

Artículo 3

388.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicación número 388 fue aprobada de manera unánime.

389.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir el término “sin costo” por de forma “de forma gratuita”, y “a título eterno, gratuito, no exclusivo e irrestricto” por “ en un formato estándar, interoperable entre distintos sistemas, y de uso común”

Las indicaciones número 389 fue rechazada de manera unánime.

Artículo 4

390.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 391 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 390 y 391 fueron aprobadas de manera unánime.

392.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimir la frase “obtener intervención de quien pueda revisar e impugnar la decisión”.

Las indicaciones número 392 fue rechazada de manera unánime.

Artículo 5

393.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 394, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 393 y 394 fueron aprobadas de manera unánime.

Artículo 6

395.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 396, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 395 y 396 fueron aprobadas de manera unánime.

Artículo 7

397.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 398, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 397 y 398 fueron aprobadas de manera unánime.

Artículo 8

399.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por un nuevo artículo 2, del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Reutilización de la información pública. Es deber del Estado promover la reutilización de la información pública, creando las condiciones para una comunicación y publicación oportuna, periódica, proactiva, comprensible y en formatos abiertos.”

Puesta en votación la indicación **número 399**, fue aprobada por 10 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y cinco abstenciones.

Se abstuvieron los convencionales señores Botto, Neumann, De la Maza y las convencionales señoras Letelier y Tepper.

400.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la frase “participar activamente en la corrección y mejora de esta” por “reclamar su rectificación, complementación y cancelación de la información, con arreglo a lo establecido por la ley”.

La indicación número 400 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 9

401.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 402 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 401 y 402 fueron aprobadas de manera unánime.

403.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la frase “esencial y crítica al funcionamiento de la sociedad” por “pública”.

Las indicación número 403 fue rechazada de manera unánime.

Artículo 10

404.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 405, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 404 y 405 fueron aprobadas de manera unánime.

Artículo 11

406.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 407 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 406 y 407 fueron aprobadas de manera unánime.

408.- Del convencional señor Caamaño, para agregar el siguiente artículo:

“Artículo XX.- **Rendición de cuentas de gastos públicos.** Las normas sobre transparencia se aplicarán, además, a aquellas personas jurídicas de derecho privado que reciban recursos públicos, quienes deberán rendir públicamente cuenta de los gastos que efectúen con dichos recursos, en la forma que determine la ley.

Puesta en votación la indicación **número 408**, fue rechazada por 5 votos a favor de las y los convencionales Caamaño De La Maza, y las señoras Dorador, Valenzuela y Vidal; cinco en contra y cinco abstenciones.

Votaron en contra los señores Calvo y Neumann, y las señoras Letelier, Tepper y Videla.

Se abstuvieron los convencionales señores Achurra, Botto y Caiguan, y las convencionales señoras Pinto y Vargas.

C) DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGITAL DE CALIDAD

Artículo 1

409.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. Modernización del Estado. Es deber del Estado interactuar de manera eficaz con las personas, promover la mejora continua de los servicios públicos digitales y ofrecer una alternativa a ellos. Las y los funcionarios públicos, en conjunto con las y los usuarios podrán participar e incidir en la mejora de los servicios públicos.

La ley determinará las acciones necesarias para su cumplimiento, poniendo especial énfasis en la formación de las y los funcionarios.”.

Puesto en votación la indicación **número 409**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales Achurra, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla, y cuatro abstenciones.

Se abstuvieron los convencionales señores Botto y Neumann, y las convencionales señoras Letelier y Tepper.

410.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.

El legislador determinará las condiciones a través de las cuales el Estado desarrollará una cultura de innovación constante en el sector público, aplicando diversos sistemas de conocimiento científicos y tecnológicos que, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, hagan efectivo y oportuno el cumplimiento de este deber.”

411.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la oración “una alternativa a los procedimientos digitales” por “a que se le proporcione una alternativa distinta a los formatos digitales si lo solicitare”.

Las indicaciones número 410 y 411, fueron rechazadas de manera unánime por la Comisión.

Inciso nuevo

412.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“En el cumplimiento de este deber, el Estado debe utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.”

Puesto en votación la indicación **número 412**, fue rechazada por 4 votos a favor de las y los convencionales De La Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; 8 en contra; y 3 abstenciones.

Votaron en contra los señores Achurra, Calvo y Caiguan,, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron los convencionales señores Botto y Caamaño, y las convencionales señoras Valenzuela.

Artículo 2

413.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

La indicación número 413 fue aprobada de manera unánime.

414.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimir la palabra “todos”.

La indicación número 414 fue rechazada de manera unánime.

Artículo 3

415.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 416.- De los convencionales señor Calvo y otros**, para suprimirlo.

Las indicaciones número 415 y 416 fueron aprobadas de manera unánime.

Artículo 4

417.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicación número 416 fue aprobada de manera unánime.

418.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la palabra “favorecer” por “fortalecer”.

Las indicación número 418 fue rechazada de manera unánime.

DERECHO A LA MEMORIA

Artículo 1

419.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Puesto en votación la indicación **número 419**, fue rechazada por 3 votos a favor de las y los convencionales Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; 11 en contra; y una abstención.

Votaron en contra los señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el convencional señor De La Maza.

420.- De los convencionales señora Videla y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Reconocimiento de la memoria. La Constitución reconoce las memorias como patrimonio de los pueblos y sus culturas. El ejercicio social de la memoria es pilar fundamental para la construcción de culturas de paz.”.

Puesto en votación la indicación **número 420**, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla; y tres abstenciones.

Se abstuvieron los convencionales señor Neumann, y las convencionales señoras Letelier y Tepper.

421.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas su derecho a desarrollar e identificarse con la memoria acorde a su cosmovisión comunitaria, y a poder determinarla libremente, en igualdad de condiciones y sin discriminación arbitraria en relación a las demás memorias que integran la identidad intercultural de Chile.

El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, conforma, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras memorias, cosmovisiones y saberes.

Es deber del Estado garantizar la no discriminación arbitraria entre las diversas memorias que conforman la identidad nacional, promoviendo su interrelación armónica, diversa y tolerante, con pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.”

422.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. Toda persona tiene derecho a la memoria personal, familiar, ancestral y comunitaria, en los términos que establezca la ley.

El Estado fortalecerá la conciencia histórica de las comunidades, con el objeto de recuperar la memoria y el fortalecimiento de las múltiples identidades y trayectorias colectivas e individuales.

Los órganos del Estado deberán contribuir con la recuperación y preservación de la memoria, los testimonios y las vivencias.

Existirá una especial protección para los sitios de memoria y memoriales. El Estado deberá identificar, recuperar y preservar estos sitios, como lugares de interés público, patrimonial y cultural, y de libre acceso para la sociedad en general.”.

Inciso primero

423. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

424. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

425. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

426.- De la convencional señora San Juan, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado deberá fortalecer la conciencia histórica de las comunidades, con el objeto de recuperar la memoria, resguardar las fuentes de información histórica y fortalecer las múltiples identidades locales e indígenas. Lo anterior se realizará mediante la conservación de sus culturas, la creación de archivos locales y la preservación de los bienes culturales documentales, de manera de resguardar las fuentes de información histórica, jurídica, sociológica, económica, política, religiosa o cultural.”.

Las indicaciones número 421, 422, 423, 424, 425 y 426, fueron rechazadas de manera unánime en la Comisión.

Inciso nuevos

427.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, conforma, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la memoria y cultura propia y su relación intercultural con otras memorias, cosmovisiones y saberes.”

Puesto en votación la indicación **número 427**, fue rechazada por 4 votos a favor de las y los convencionales Botto y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; 9 en contra; y 2 abstenciones.

Votaron en contra los señores Achurra, Caamaño, Calvo y Caiguan y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron los convencionales señor De La Maza, y la convencional señora Valenzuela.

428.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Es deber del Estado garantizar la no discriminación arbitraria entre las diversas memorias que conforman la identidad intercultural de Chile, promoviendo su interrelación armónica, diversa y tolerante, con pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.”

Puesto en votación la indicación **número 428**, fue rechazada por 5 votos a favor de las y los convencionales señores Botto, De La Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; 9 en contra; y una abstención.

Votaron en contra los señores Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo la convencional señora Valenzuela.

Artículo 2

429.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 430. de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Puestas en votación las indicaciones **números 429 y 430**, fueron rechazadas por 3 votos a favor de las y los convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; 11 en contra; y una abstención.

Votaron en contra los señores Achurra, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el convencional señor Botto.

431.- De los convencionales señora Videla y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Derecho a la memoria. Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho a la memoria personal, familiar, ancestral y comunitaria, cuya regulación estará reservada para la ley.”.

Puesta en votación la indicación **número 431**, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.; y 3 abstenciones.

Se abstuvieron los convencionales señor Neumann y las señoras Letelier y Tepper.

432.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Es deber del Estado garantizar la no discriminación arbitraria entre las diversas memorias que conforman la identidad intercultural de Chile, promoviendo su interrelación armónica, diversa y tolerante, con pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.”

Inciso primero

433. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

434. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

435. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Las indicaciones número 432, 433, 434 y 435, fueron rechazadas de manera unánime en la Comisión.

436.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir, cada vez que se utiliza en el artículo las palabras “la memoria” por “las memorias”.

Puesta en votación la indicación **número 436**, fue aprobada por 13 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño,, Calvo, De La Maza y Neumann, y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Valenzuela, Vargas y Videla, 1 en contra y 1 abstención.

Voto en contra la convencional señora Vidal.

Se abstuvo el convencional señor Caiguan.

Artículo nuevo

437.- De los convencionales señora Videla y otros, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 3.- Deber del Estado. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos.

Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección, asegurando su preservación y sostenibilidad.”.

Puesta en votación la indicación **número 437**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vidal y Videla.; 1 en contra y 2 abstenciones.

Voto en contra la convencional señora Tepper.

Se abstuvieron los convencionales señor Neumann y la señora Letelier.

PATRIMONIOS

Artículo 1.-

438.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. Patrimonios naturales y culturales. El Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes.

Se prohíbe la asimilación o destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas preexistentes.

En estas materias, la ley establecerá los medios que aseguren la participación de todas las personas, individual y colectivamente, así como el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, se deberán generar medidas eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción.”

Puesta en votación la indicación **número 438**, fue aprobada por 10 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vidal y Videla.; 3 en contra y 1 abstenciones.

Votaron en contra los convencionales señor Neumann y las señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvo el convencional señor De La Maza

439.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Es deber del Estado el reconocimiento, protección y promoción descentralizada y en condiciones de igualdad de las diversas manifestaciones materiales e inmateriales que integran la identidad intercultural de Chile.

Asimismo, se desarrollarán planes, políticas y programas que promuevan y proyecten la identidad y diversidad intercultural, patrimonial y medioambiental de Chile en el mundo en un marco de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil”.

La indicación numero 4396 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

440.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado deberá proteger las diversas manifestaciones que forman parte de los distintos patrimonios culturales y cosmovisiones que integran la identidad intercultural de Chile, en igualdad de condiciones y garantizando la no discriminación arbitraria entre ellas.”

Puesta en votación la indicación **número 440**, fue rechazada por 3 votos a favor de las y los convencionales señores De La Maza y Neumann y las señoras Tepper.; 11 en contra y 1 abstención.

Voto en contra los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador Letelier, Pinto, Vargas, Vidal y Videla

Se abstuvo la convencional señora Valenzuela

441.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que promuevan y proyecten la identidad y diversidad intercultural, patrimonial y medioambiental de Chile en el mundo, en un marco de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil”.

Puesta en votación la indicación **número 441**, fue rechazada por 4 votos a favor de las y los convencionales señores De La Maza y Neumann y las señoras Letelier y Tepper.; 9 en contra y 2 abstención.

Voto en contra los convencionales señores Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla

Se abstuvieron los convencionales señor Botto y señora Valenzuela.

442.- De la convencional señora Videla, para agregar un nuevo inciso final al artículo 1, del siguiente tenor:

“Esta Constitución garantiza la participación del pueblo tribal afrodescendiente en el desarrollo y promoción de sus culturas, su conservación y protección, y se aplicará con pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes para su consentimiento libre, previo e informado.”.

Puesta en votación la indicación **número 442**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.; 3 en contra y 1 abstención.

Voto en contra los convencionales señor Neumann y las señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvo el convencional señor Botto.

Artículo 2

443.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 444 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 443**, fue rechazada por 3 votos a favor de las y los convencionales. señor Neumann y las señoras Letelier y Tepper.y 12 en contra

Votaron en contra los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

La indicación **numero 444** fue retirada por sus autores.

445.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2. Patrimonio y propiedad intelectual indígena. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen derecho a la propiedad, posesión, mantención, revitalización y desarrollo de su patrimonio cultural, material e inmaterial, entre otros, incluyendo sus conocimientos y expresiones tradicionales, los recursos genéticos y humanos, y a la propiedad intelectual colectiva sobre estos. Ello comprende las epistemologías y cosmovisiones, las lenguas, las ciencias y tecnologías, las artes visuales e interpretativas, los sitios y elementos

sagrados, los objetos culturales y restos humanos, las medicinas tradicionales, las semillas ancestrales, los diseños, la herencia cultural y memorias, entre otros que permiten su continuidad colectiva y la de sus miembros, y su transmisión a las generaciones futuras. Estos derechos colectivos y sus elementos son inviolables, inembargables, intransferibles e imprescriptibles, respetando su derecho e instituciones propias.”.

Puesta en votación la indicación **número 445**, fue aprobada por 12 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De La Maza y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla. Y 3 en contra

Voto en contra los convencionales señor Neumann y las señoras Letelier y Tepper.

446.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

La indicación **numero 446** fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

B) DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Artículo 2

447.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 447**, fue aprobada por 13 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, y Neumann, y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla. y 2 en contra

Voto en contra los convencionales señores Calvo y De La Maza.

448.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.

El Estado reconoce dentro de la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y garantiza la adecuada protección de su patrimonio material e inmaterial, de acuerdo a las condiciones consagradas en la Constitución, la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

449.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

Las indicaciones número 448 y 449, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 3

450.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 451 de los convencionales señor Calvo y otros** para suprimirlo.

Las indicaciones número 450 y 451, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

452.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

La indicación **número 452** fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 4

453.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 454 de los convencionales señor Calvo y otros para suprimirlo.

Las indicaciones número 453 y 454 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

455.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo ejerzan su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

La indicación **número 455** fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 5

456.- De los convencionales Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5. Patrimonio paleontológico y arqueológico. El Estado deberá proteger el patrimonio paleontológico y arqueológico.

El patrimonio bioantropológico y cultural de los pueblos será protegido por el Estado. En el caso del patrimonio de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, dicha protección se hará con su consentimiento previo, libre e informado.”

Puesta en votación la indicación **número 456**, fue aprobada por 9 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, , Caamaño, Caiguan, Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vidal y Videla, 4 en contra y una abstención.

Voto en contra los convencionales señor De La Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvo el señor Botto.

Inciso primero

457.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Inciso segundo

458.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, la ley podrá establecer limitaciones o requisitos especiales para la adquisición del dominio y la administración de bienes que hayan sido declarados parte del patrimonio cultural de Chile en la forma prescrita en la ley, resguardando siempre el derecho a indemnización de sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Las indicaciones **número 457 y 458** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 6

459.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

La indicación **número 459** fue retirada por sus autores.

460.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4: Difusión y educación sobre patrimonios. El Estado fomentará la difusión y educación sobre los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales.”.

Puesta en votación la indicación **número 460**, fue aprobada por 14 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo, De La Maza y Neumann, y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper, Vargas Vidal y Videla, y una abstención.

Se abstuvo la convencional señora Valenzuela.

Artículo 7

461.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 462 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 461 y 462 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

463.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado reconoce en igualdad de condiciones, junto a la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y garantiza la adecuada protección de su patrimonio material e inmaterial, de acuerdo a las condiciones consagradas en la Constitución, la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La indicación 463 fue rechazada de manera unánime.

Artículo 8

464.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

La indicación número 464 fue retirada por sus autores.

465.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3. Derecho al acceso a los patrimonios. Todas las personas tienen derecho a acceder a los patrimonios naturales y culturales, respetando los derechos consagrados en esta Constitución y las leyes, así como los derechos de los pueblos y naciones indígenas preexistentes.”.

Puesta en votación la indicación **número 465**, fue aprobada por 11 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Caamaño, Caiguan, Calvo y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vidal y Videla, y 4 abstenciones.

Se abstuvieron los convencionales señores De La Maza y Neumann y las señoras Letelier y Tepper.

466.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado reconoce dentro de la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, y garantiza la adecuada protección de su patrimonio material e inmaterial, de acuerdo a las condiciones consagradas en la

Constitución, la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La indicación número 466 fue rechazada de manera unánime.

C) DEBERES DEL ESTADO

Artículo 9

467.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 467**, fue rechazada por 3 votos a favor de las y los convencionales señor Neumann y las señoras Letelier y Tepper, 9 en contra y 3 abstenciones.

Voto en contra los convencionales señores Botto, Caamaño, Calvo, De la Maza y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vidal y Videla.

Se abstuvieron los convencionales señores Achurra, Caiguan y la señora Vargas.

468.- De los convencionales señor Caamaño y señora Malucha Pinto, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 9.- Registro de patrimonios. Es Estado creará un registro de los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, mediante un sistema de preservación digital que permita su consulta pública y gratuita.”.

Puesta en votación la indicación **número 468**, fue rechazada por 6 votos a favor de las y los convencionales señor Botto, Caamaño, Caiguan, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, 6 en contra y 3 abstenciones.

Voto en contra los convencionales señores Calvo, Neumann, y las señoras Letelier y Tepper, Vidal y Videla.

Se abstuvieron los convencionales señores Achurra, De la Maza y la señora Vargas.

469.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que permitan el registro, restauración, recuperación, promoción, archivo y difusión de los

patrimonios culturales, de acuerdo a las condiciones establecidos en la Constitución y las leyes.”.

Puesta en votación la indicación **número 469**, fue rechazada por 5 votos a favor de las y los convencionales señores De la Maza y Neumann, y las señoras Letelier, Tepper y Valenzuela; 9 en contra y 1 abstenciones.

Votaron en contra los convencionales señores Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvo el señor Botto.

Inciso nuevo

470.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Artículo 9.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, promoverá el respeto, protección, resguardo, conservación, exhibición y difusión de los patrimonios culturales y diversas manifestaciones simbólicas que componen la identidad intercultural del país, con pleno respeto a los derechos que sobre ellas tengan sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley.”

Puesta en votación la indicación **número 470**, fue rechazada por 3 votos a favor de las y los convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; 9 en contra y 3 abstenciones.

Votaron en contra los convencionales señores Achurra, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.

Se abstuvieron los convencionales señores Botto y De La Maza y la señora Valenzuela.

Siendo rechazadas la totalidad de indicaciones señaladas al artículo 9 de esta sección, corresponde, en consecuencia, someter a votación en particular el texto aprobado en general.

Puesto en votación **el artículo 9 aprobado en general en materia de Patrimonios**, fue rechazado por 2 votos a favor de las y los convencionales señoras Vargas y Vidal; 10 en contra y 3 abstenciones.

Votaron en contra los convencionales señores Achurra, Caamaño, Calvo, De La Maza y Neumann, y las señoras Dorador, Letelier, Pinto, Tepper y Videla.

Artículo 10

471.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 472, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 471 y 472, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

473.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 10.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, promoverá el respeto, protección, resguardo, conservación, exhibición y difusión de los patrimonios culturales y diversas manifestaciones simbólicas que componen la identidad intercultural del país, con pleno respeto a los derechos que sobre ellas tengan sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley.”

La indicación número 473 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 11

474.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 475 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 474 y 475, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

476.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que permitan el registro, restauración, recuperación, promoción, archivo y difusión de los patrimonios culturales, de acuerdo a las condiciones establecidos en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

477.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta,

consenso y compensación de los titulares de dicho patrimonio, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

Las indicaciones **número 476 y 477** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 12

478.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 479 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 478 y 479, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

480.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 12.- El patrimonio arqueológico de Chile, declarado y reconocido en la forma prescrita en la ley, estará sujeto a un régimen de protección especial y su exhibición será un derecho de todos los ciudadanos.

La ley definirá las condiciones de resguardo del patrimonio arqueológico y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición en consenso y previa compensación a las personas, comunidades o asociaciones que la ley considere como titulares de dichos bienes.”.

Inciso nuevo

481.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta, consenso y compensación de los titulares de dicho patrimonio, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

Las indicaciones número 480 y 481, fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 13

482.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 483 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones **número 482 y 483** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

484.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 13.- El patrimonio arqueológico de Chile, declarado y reconocido en la forma prescrita en la ley, estará sujeto a un régimen de protección especial y su exhibición será un derecho de todos los ciudadanos.

Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo del patrimonio arqueológico y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición, previa consulta y compensación de las personas, comunidades o asociaciones que la ley considere como titulares de dichos bienes.”.

Inciso nuevo

485.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta, consenso y compensación de los titulares de dicho patrimonio, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

Las indicaciones **número 484 y 485** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 14

486.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 487 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones **número 486 y 487** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

488.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 14.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, deberá velar por el respeto, protección, resguardo, conservación, exhibición y difusión de los patrimonios culturales y diversas manifestaciones simbólicas que componen la identidad intercultural del país, con pleno respeto a los derechos que sobre ellas tengan sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley.”.

Inciso nuevo

489.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo del patrimonio cultural del país, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición, previa compensación y consulta de sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”

Las indicaciones **número 488 y 489** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 15

490.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 491 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones **número 490 y 491** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

492.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 15.- El Estado reconoce y protege en colaboración con la sociedad civil, el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país.

Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

493.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Las indicaciones número **492 y 493** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 16

494.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 495 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número **494 y 495** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

496.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 16.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, reconoce y protege el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país, incluyendo los sitios reconocidos por organismos internacionales como Patrimonio de la Humanidad, atendido su valor único y excepcional. La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

497.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Las indicaciones número **496 y 497** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 17

498.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 499 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número **498 y 499** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

500.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, reconoce y protege el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país.

Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

501.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Las indicaciones número **500 y 501** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 18

502.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 503 de los convencionales señor Calvo y otros**, para suprimirlo.

Las indicaciones número **502 y 503** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

504.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 18.- El Estado reconoce y protege, en colaboración con la sociedad civil, el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país, incluyendo los sitios reconocidos por organismos

internacionales como Patrimonio de la Humanidad, atendido su valor único y excepcional.

La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

505.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Las indicaciones número **504 y 505** fueron rechazadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 19

506.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 507 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número **506 y 507** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 20

508.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 509 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número **508 y 509** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 21

510.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 511, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número **510 y 511** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Inciso nuevo

512.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos, memorias y saberes.”

La indicación número 512 fue rechazada por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 22

513.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 514 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número **513 y 514** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 23

515.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 516 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 515 y 516 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 24

517.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 517**, fue rechazada por 3 votos a favor de las y los convencionales señor Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; y 12 en contra.

Votaron en contra los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan , Calvo y De La Maza, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla..

518.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 6: Tesoro Humano Vivo. El Estado reconocerá la calidad de Tesoro Humano Vivo de aquellas comunidades, grupos y personas, que sean custodios del patrimonio de un determinado pueblo, indígenas o no, de acuerdo a los requisitos que regule la ley.”

Puesta en votación la indicación **número 518**, fue aprobada por 10 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla; 4 en contra y 1 abstención.

Votaron en contra los convencionales señores De La Maza y Neumann y las señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvo la convencional señora Valenzuela.

Artículo 25

519.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 520 de los convencionales señor Calvo y otros**, para suprimirlo.

Las indicaciones número 519 y 520 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 26

521.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 522 de los convencionales señor Calvo y otros**, para suprimirlo.

Las indicaciones número 521 y 522 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 27

523.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y **Nº 524 de los convencionales señor Calvo y otros**, para suprimirlo.

Las indicaciones número 523 y 524 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo nuevo

525.- De la convencional señora Vargas, doña Margarita, para agregar el siguiente artículo:

Artículo (X): “Patrimonio inmaterial lingüístico. El Estado reconoce el patrimonio constituido por las diferentes lenguas indígenas, las que serán objeto de especial fortalecimiento, revitalización y protección, resguardando su conservación.

Puesta en votación la indicación **número 525**, fue aprobada por 10 votos a favor de las y los convencionales señores Botto, Caamaño, Caiguan, Calvo y De la Maza, y las señoras Dorador, Pinto; Vargas, Vidal y Videla; 1 en contra y 4 abstenciones.

Voto en contra la convencional señora Tepper.

Se abstuvieron los convencionales Achurra y Neumann, y las señoras Letelier y Valenzuela.

Artículo 28

526.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 527 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 526 y 527 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 29

528.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 529 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 528 y 529 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 30

530.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 531 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones número 530 y 531 fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 31

532.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

La indicación numero 532 fue aprobada de forma unánime.

533.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado, en colaboración con la sociedad civil, deberá velar por la conservación, protección, vinculación con la comunidad y puesta en valor de los sitios de patrimonio mundial reconocidos en Chile, con el objeto de mantener tal categoría e integridad de manera permanente.”

La indicación numero 532 fue rechazada de forma unánime.

Artículo 32

534.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Puesta en votación la indicación **número 534**, fue rechazada por 4 votos a favor de las y los convencionales señores De la Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper; y 11 en contra

Votaron en contra los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Valenzuela, Vargas, Vidal y Videla.

535.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 7. Protección del patrimonio biocultural. El Estado protegerá el patrimonio biocultural del país a través de la declaración de reservas patrimoniales, las que constituirán a lo menos un 30% de los territorios de los ecosistemas declarados como representativos. Estas no admitirán actividad industrial alguna, podrán coincidir espacialmente con otras áreas protegidas y serán gestionadas por el Estado, en conjunto con las comunidades locales y con especial atención de

Los derechos de los pueblos y naciones preexistentes, cuando corresponda, y se regularán, en lo demás, por lo que establezca esta Constitución y la ley.

El Estado reconoce como representativos los siguientes ecosistemas: el mar, el desierto, los salares, las zonas costeras, la alta montaña,

los valles transversales, el secano costero, el bosque esclerófilo, el bosque andino patagónico, la estepa patagónica, los archipiélagos, las turberas, la tundra magallánica y otros que determine la ley.”.

Puesta en votación la indicación **número 535**, fue aprobada por 9 votos a favor de las y los convencionales señores Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas; Vidal y Videla; 4 en contra y 2 abstenciones.

Votaron en contra los convencionales señores De La Maza y Neumann, y las señoras Letelier y Tepper.

Se abstuvieron el convencional señor Achurra y señora Valenzuela

536.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado debe proteger el patrimonio biocultural del país a través de los medios que determine la ley. Este deber se llevará a cabo con pleno respeto de los derechos y garantías que establecen la Constitución y las leyes, y en equilibrio con la protección sustentable del medioambiente y el desarrollo económico.”

La indicación **536** fue rechazada de forma unánime.

Artículo 33

537.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

La indicación numero 537 fue retirada por sus autores.

538.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 8: Reconocimiento de la artesanía. El Estado reconoce la artesanía como patrimonio cultural inmaterial, su función social y el aporte al desarrollo productivo del país. Los artesanos y artesanas podrán ser reconocidos dentro de la categoría de Tesoros Humanos Vivos por su aporte a la transmisión de oficios, la preservación y divulgación de saberes y herencias culturales de los territorios, según lo establezca la ley.

Es deber del Estado proteger, fomentar y garantizar la actividad creativa y productiva de las artesanas y artesanos en todo ámbito de su desarrollo.

En el caso de las creaciones de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, representativas de sus saberes ancestrales, serán valoradas por su aporte tecnológico y artístico como patrimonio inmaterial.”

Puesta en votación la indicación **número 538**, fue aprobado por 10 votos a favor de las y los convencionales señores Achurra, Botto, Caamaño, Caiguan y Calvo, y las señoras Dorador, Pinto, Vargas, Vidal y Videla.; 2 en contra y 3 abstenciones.

Votaron en contra los convencionales señor De la Maza y la señora Letelier.

Se abstuvo el señor Neumann y las señoras Teppper y Valenzuela.

Artículo 34

539.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, y N° 540 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones **número 539 y 540** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.

Artículo 35

541.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, y N° 542, de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones **número 541 y 542** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión

543.- De la convencional señora Vargas, doña Margarita, para sustituir el artículo 35 por el siguiente:

“Artículo 35. Protección de la biodiversidad. El Estado resguardará el patrimonio biocultural fomentando practicas sostenibles, y protegiendo a las personas y comunidades de desplazamientos por causa de actividades que atenten contra la biodiversidad.”

La indicación número 543 fue rechazada de forma unánime.

Artículo 36

544.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, y N° 545 de los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

Las indicaciones **número 544 y 545** fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión

VI.- INDICACIONES RECHAZADAS

A continuación se identifican las indicaciones que fueron rechazadas por la Comisión:

Artículo 1

1.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo

3.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para sustituir el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1. Libertad de creación e investigación. El Estado garantiza el ejercicio de la libertad de creación e investigación de los conocimientos, como actividades esenciales que contribuyan a la sociedad y al bienestar de las personas, comunidades y naturaleza.

Para ello, el Estado fomentará la creación de entidades públicas que generen conocimiento y establecerá acciones que incentiven su desarrollo.”

4.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas la libertad creativa y su libre ejercicio como un elemento esencial de la naturaleza, individualidad y expresividad humana. El Estado reconoce la función que esta libertad cumple para la realización de la persona en sociedad y el desarrollo de la comunidad política en su conjunto, y promoverá el acceso a los conocimientos y beneficios que dicha libertad genere, con pleno respeto de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y la ley.

La libertad creativa se promoverá de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil. Para ello, la ley generará mecanismos de soporte que permitan la participación autónoma y efectiva de las personas, sus familias y comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural que derivan los conocimientos, las ciencias y las culturas.”

5.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo, por el siguiente:

“El Estado asegura el derecho a participar de los procesos de creación, desarrollo, transmisión y conservación de los sistemas de conocimientos, y a gozar de sus beneficios y de sus aplicaciones.”

Inciso primero

6.- De la convencional señora San Juan, para sustituir su **Inciso primero**, por el siguiente:

“Todas las personas y comunidades tienen derecho a participar de la creación, desarrollo, transmisión y conservación de los diversos sistemas de conocimientos y sus aplicaciones.”.

7.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “creación, desarrollo, transmisión, conservación y enriquecimiento de los diversos sistemas de conocimientos” por “creación, desarrollo, transmisión y conservación de los sistemas de conocimientos”.

8.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “sin discriminación arbitraria alguna y de forma equitativa y descentralizada”.

Inciso segundo

9.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 10.- de los convencionales señora Villena y señor Bravo para suprimirlo.

11.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la palabra “activamente”.

12.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “la promoción, la difusión, las iniciativas de divulgación y la educación científica” por “la **13.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo**, para sustituir la frase “en diferentes contextos culturales, sociales y territoriales, poniendo especial atención a su acceso abierto y de calidad”.

Inciso tercero

14.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Incisos nuevos

15.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado promoverá en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

16.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El ejercicio de estos derechos deberá realizarse con pleno respeto de los derechos y deberes que establecen esta Constitución y las leyes.”

Artículo 1.1.

17.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y 18.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

20.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2. Derecho a participar y a beneficiarse de los conocimientos. Todas las personas tienen derecho a participar libremente de los sistemas de conocimientos y a gozar de sus beneficios.

El Estado debe promover el desarrollo, conservación, innovación, transferencia, socialización y acceso equitativo a los sistemas de conocimientos, así como a sus aplicaciones.

El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes a controlar, preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio.”

21.- Del convencional señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Es deber del Estado promover, la creación, desarrollo, conservación y acceso de los conocimientos a través de un marco colaborativo entre el sector público, el privado y la sociedad civil, con pleno respeto de los derechos que sus autores u otras personas pudieran tener sobre ellos.”

22.-De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para agregar, después de la frase “los conocimientos estéticos”, la frase “, entre otros”.

Incisos nuevos

23.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado promoverá en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas

en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

24.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.”

Artículo 1.2.

28.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a desarrollar, enseñar, y difundir sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías y saberes, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.

El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos y saberes.

Asimismo, el Estado reconoce y ampara a las asociaciones humanas como espacios comunitarios de construcción de conocimientos, saberes e identidades culturales y les reconoce su adecuada autonomía para cumplir con los fines legítimos que sus miembros se han dado. Para ello, la ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva de las personas en la vida cultural.”

29.- De la Convencional señora Paulina Valenzuela, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3. Límites al derecho a beneficiarse de los conocimientos y la libertad de investigación. El ejercicio de estos derechos y libertades tiene como límite el respeto a los principios de la bioética, además de otros principios y derechos establecidos en esta Constitución y tratados e instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos.”

Inciso segundo

30. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “mantener, controlar, proteger, desarrollar, enseñar, compartir y difundir” por la frase “difundir y proteger”.

Inciso tercero

31. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso nuevo

32.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce y ampara a las asociaciones humanas como espacios comunitarios de construcción de conocimientos, saberes e identidades culturales y les reconoce su adecuada autonomía para cumplir con los fines legítimos que sus miembros se han dado. Para ello, la ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva de las personas en la vida cultura, a través de un marco de colaboración armónica entre el sector público, privado y la sociedad civil.”

Inciso final, nuevo

33.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Para ello, el Estado fomentará la creación de entidades públicas que generen conocimiento y establecerá acciones que incentiven su desarrollo.”

Artículo 1.3.

34.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 35. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

37.- De la convencional señora Valenzuela, doña Paulina, para para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4. Deberes del Estado. El Estado garantiza el acceso a los conocimientos y a su intercambio, protegiendo los derechos morales y patrimoniales de los

autores, propiedad intelectual y saberes ancestrales. Corresponderá a la ley establecer las condiciones y restricciones sobre esta materia.

Es deber del Estado promover la comunicación de los sistemas de conocimientos reconociéndola como un medio fundamental para el desarrollo de estos.

Para la toma de decisiones públicas, el Estado considera el conocimiento científicamente afianzado de los distintos sistemas de conocimientos.

El Estado debe resguardar a las personas y a la naturaleza de los usos indebidos de los conocimientos, tecnologías y sus aplicaciones, protegiendo la dignidad e integridad de las personas.”.

38.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

Estado promueve y garantiza la libertad de creación e investigación, fomentando el intercambio de datos, ideas y producción de conocimientos de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada, mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil.

La ley generará mecanismos de soporte a la creación e investigación científica y cultural que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa, respetando la autonomía de sus comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso que de ellas deriven”

Inciso primero

39. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

40. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la frase “creación, fiscalización y restauración” por “creación, resguardo y restauración”.

41. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la frase “aquel instrumento pertinente para el desarrollo del conocimiento, biocultura, ciencia, tecnología y artes” por “los instrumentos pertinentes para el desarrollo del conocimiento, cultura, ciencia, artes y tecnología”.

42.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, a continuación del punto, que pasa a ser una coma (,),la siguiente frase:

“con pleno respeto de los derechos y deberes que establecen esta Constitución y las leyes.”

Inciso segundo

43. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

44. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “(científico, artístico, ancestral, patrimonial, tecnológico, etc.)”..

45.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar, a continuación del punto, que pasa a ser una coma (,),la siguiente frase:

“Asimismo, se les reconoce a estas asociaciones y las personas que lo integran el derecho a objeción de conciencia, tanto personal como institucional.”.

Inciso tercero

46. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

47. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “promueve y”.

48. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “de manera descentralizada, con equidad de género y territorial”.

Inciso cuarto

49. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

50. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la palabra “política”.

Inciso quinto

51. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

52. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo “El Estado garantiza la libertad de producción y de creación, con los límites establecidos en la ley”.

Inciso sexto

53. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso séptimo

54. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Incisos nuevos

55.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley generará mecanismos de descentralización territorial y diversificación financiera que den soporte efectivo a la creación e investigación científica y cultural, a través de un marco colaborativo entre el sector público, privado y la sociedad civil.”.

56.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado, sus instituciones y organismos, deberán respetar la autonomía de las personas, sus familias, comunidades y asociaciones en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes”.

57.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación científica y cultural, así como su relación intercultural con otras cosmovisiones y saberes.”

Artículo 1.4.

59.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas la libertad creativa y su libre ejercicio La ley generará mecanismos de soporte a la creación e investigación científica y cultural que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa, respetando la autonomía de sus comunidades en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso que de ellas deriven.”

Inciso primero

60. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

61.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir, en el **Inciso primero**, la oración “y los colectivos que desarrollan labores de investigación relacionadas con los sistemas de conocimientos podrán organizarse y establecer instituciones autónomas” por “, en el ejercicio de su libertad creativa, podrán desarrollar labores de investigación a través de asociaciones autónomas”.

62.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar al final, luego del punto que pasa a ser una coma, la siguiente frase “con

pleno respeto de los derechos y deberes que establecen esta Constitución y las leyes.”.

Inciso segundo

63. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

64. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“La investigación tiene por finalidad el desarrollo integral de las personas y pueblos que habitan el territorio.”.

65.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar al final, luego del punto, lo siguiente: “Asimismo, se les reconoce a estas asociaciones y las personas que lo integran el derecho a objeción de conciencia, tanto personal como institucional.”

Incisos nuevos

66.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación científica y cultural, así como su relación intercultural con otras cosmovisiones y saberes.”

67.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado, sus instituciones y organismos, deberán respetar la autonomía de las personas, sus familias, comunidades y asociaciones en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes”

68.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley generará mecanismos de descentralización territorial y diversificación financiera que den soporte efectivo y plural, entre los diversos actores de la sociedad, a la creación e investigación científica y cultural.”.

71.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para suprimir todos sus incisos, salvo el primero.

72.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado desarrollará políticas, planes, programas e infraestructura que promuevan y faciliten la creación de entidades que generen conocimiento y establecerá mecanismos y alianzas que incentiven la inversión en artes, cultura, ciencia, tecnología, educación e innovación a través de una colaboración armónica entre el sector público, privado y la sociedad civil.

El Estado desarrollará planes, políticas y programas que desarrollen en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

73. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado promoverá un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

Inciso primero

74. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso segundo

75. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso tercero

76.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

77- De la convencional señora Vergara, para agregar, después de “tratados internacionales”, la frase “de Derechos Humanos y de la Naturaleza”.

Inciso cuarto

78. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso quinto

79. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso sexto

80. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Incisos nuevos

81.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Se reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación científica y cultural, así como su relación intercultural con otras cosmovisiones y saberes”.

82.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado promoverá la creación de entidades que generen conocimiento en sus diversos campos, a través de un marco colaborativo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.”

85.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.6.- Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.”.

86. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“En la elaboración de políticas públicas y de normas legales o reglamentarias, el Estado deberá considerar el conocimiento científico generalmente aceptado y el desarrollo tecnológico, y, en caso que afecten a comunidades indígenas, sus saberes ancestrales.”.

Inciso primero

87. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

Inciso segundo

88.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N°

89. de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

90. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para agregar, luego del punto final, que pasa a ser coma, lo siguiente: “con enfoque de género en la creación, comunicación y goce de sus beneficios.”.

Inciso tercero

91.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, y N° 92 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso final, nuevo

93.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar, como inciso final, el siguiente:

“El Estado desarrollará políticas, planes, programas e infraestructura que promuevan, en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento.”

97.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.7.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, culturas, memorias y formas sociales tradicionales en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.

El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos y saberes.

Asimismo, el Estado reconoce y ampara a las asociaciones humanas como espacios comunitarios de construcción de conocimientos, saberes e identidades culturales, y les reconoce su adecuada autonomía para cumplir con los fines legítimos que sus miembros se han dado. Para ello, la ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva, democrática y pluralista de las personas en la vida cultural.”.

98. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Los Pueblos y Naciones indígenas tienen derecho a una protección especial de su territorio, lugares, arquitectura, pictografías, petrograbados y demás objetos que consideren sagrados, y el derecho a mantener, resguardar y desarrollar sus conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales los cuales no podrán ser usados para fines comerciales, sin la autorización de dichas comunidades.”.

Inciso segundo

99. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Incisos primero y segundo

100. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la frase “Pueblos-Naciones” por “Pueblos y Naciones”.

Inciso tercero

101. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso cuarto

102. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso final, nuevo

103.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como inciso final, el siguiente:

“La ley generará mecanismos diversificados de incentivos y soportes financieros que permitan la participación efectiva y descentralizada de las personas en la vida cultural, a través de un marco de colaboración armónica entre el sector público, privado y la sociedad civil.”

106.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado promueve y garantiza la libertad de creación, investigación, y divulgación de la ciencia y la tecnología, fomentando el intercambio de datos, ideas y producción de conocimientos de manera territorialmente descentralizada y financieramente diversificada mediante una relación colaborativa entre el sector público, privado y la sociedad civil.

La ley generará mecanismos de soporte a la creación e investigación científica y cultural que permitan la participación efectiva de las personas en la vida creativa.

Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible.”

Inciso primero

107.- De la convencional señora San Juan, para sustituir su **Inciso primero**, por el siguiente:

“El Estado reconoce la comunicación científica como un mecanismo fundamental para el desarrollo de la ciencia y su vínculo con la sociedad, por lo que debe asegurar la implementación de políticas públicas que promuevan la educación y valoración de la ciencia y tecnología entre la población, teniendo especial consideración con los grupos vulnerables y los criterios de segmentación etaria, diversidad social, identidad regional, plurinacionalidad, enfoque de género e inclusión.”.

Incisos nuevos

108.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos y saberes.”.

109.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado, sus instituciones y organismos, deberán respetar la autonomía de las personas, sus familias, comunidades y asociaciones en el acceso, producción, divulgación, participación y disfrute del progreso científico y cultural, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes.”.

110.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley generará mecanismos de descentralización territorial y diversificación financiera que den un soporte efectivo y plural a la creación e investigación científica y cultural, a través de un marco colaborativo entre el sector público, privado y la sociedad civil.”.

114.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas el derecho a acceder a los conocimientos, y a beneficiarse de estos y sus aplicaciones. Este derecho se ejercerá con pleno respeto a la dignidad humana, la protección sustentable del medioambiente, y a los derechos y garantías que la Constitución y las leyes establecen.”

Inciso nuevo

115.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El progreso científico y cultural reconoce como límite la dignidad humana y la protección sustentable del medioambiente, con pleno respeto a los derechos que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Artículo 1.2.

116.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 117 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

119.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.2.- El progreso científico y cultural reconoce como límite la dignidad humana y la protección sustentable del medioambiente, con pleno respeto a los derechos que esta Constitución y las leyes establecen.”.

120.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente: “Las personas tienen derecho a que, en el marco del desarrollo científico y tecnológico, se respete su vida privada, integridad física y psíquica, y demás derechos fundamentales.”.

Inciso primero

121.- De convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

122.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la expresión “las fuentes aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y garantías de las personas, las comunidades y la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad”, por lo que sigue:

“la dignidad humana y el desarrollo sustentable del medioambiente, con pleno respeto a la Constitución, las leyes, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

Inciso segundo

123.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 124 de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

128.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado asegura a todas las personas la protección de la identidad genética y del microbioma humano, frente a cualquier tipo de intervención tendiente a la creación, desarrollo y uso de las tecnologías, la experimentación científica, intervenciones biomédicas y otros similares.”

Inciso primero

129.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

130.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.3.- El Estado reconoce la función que la libertad creativa cumple para la realización de la persona en sociedad y el desarrollo de la comunidad política en su conjunto, y promoverá el acceso a los conocimientos que dicha libertad genere, con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Inciso segundo

131.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

135.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “o sea candidata a ejercerlas”.

136.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “, sin perjuicio de la aplicación directa que los Tribunales de Justicia puedan hacer de esta norma, de acuerdo con las demás disposiciones constitucionales”.

137.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazar la oración “Una ley regulará los requisitos, procedimientos y sanciones en caso de

incumplimiento de este deber” por “Una ley regulará los procedimientos y sanciones en caso de infracción de este artículo”.

138.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La ley desarrollará mecanismos de formación y promoción plural y diversa de las ciencias, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad ciudadana de identificar fenómenos de desinformación en la divulgación y comunicación de los diversos sistemas de conocimiento.”.

Inciso nuevo

139.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley desarrollará mecanismos de formación y promoción plural y diversa de las ciencias, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad ciudadana de identificar fenómenos de desinformación en la divulgación y comunicación de los diversos sistemas de conocimiento”.

142.- De la convencional señora Vergara, para suprimir la frase “a la vida y”.

Inciso primero

143.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

144.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y mental de todo ser humano. El progreso científico y cultural reconoce como límite la dignidad humana y el desarrollo sustentable del medioambiente, con pleno respeto a los principios de la bioética y los derechos que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Inciso segundo

145.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

146.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la frase “a la vida y”..

Inciso segundo, nuevo

147.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como inciso segundo, nuevo, lo siguiente:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que protejan la vida del que está por nacer, y la integridad física, psíquica y mental de las personas gestantes”.

Inciso tercero

148.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

149.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la oración “Este derecho también comprende gozar de sus beneficios y de la tecnología.”

Inciso nuevo

150.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso el siguiente:

“La Constitución garantiza a todas las personas naturales o jurídicas sin distinción, el derecho de objeción de conciencia personal e institucional.”.

153.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Inciso primero, nuevo

154.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo **Inciso primero**, el siguiente:

“Artículo 1. La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”.

Incisos nuevos

155.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”.

156.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

158.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán

garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

159.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

160.- De los convencionales señora Valenzuela, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. Derechos de autor. La Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras literarias, artísticas o científicas, comprendiendo los derechos morales y los derechos patrimoniales sobre la obra, por un tiempo que no será inferior al de la vida del titular, conforme a lo que establezca la ley. Asimismo, la Constitución asegura, como derechos conexos a los derechos de autor, y sin perjuicio de estos, los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes respecto de la difusión de sus producciones en conformidad a la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Los derechos de autor y los derechos conexos a los derechos de autor están sujetos a las disposiciones establecidas por esta Constitución para el derecho de propiedad, en cuanto a sus garantías, limitaciones y función social, debiendo la ley velar tanto por su protección con la de los demás derechos culturales, el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del beneficio de los conocimientos.

Corresponderá a la ley regular las limitaciones y excepciones de este derecho.”

Inciso primero, nuevo

161.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo **Inciso primero**, el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Incisos primero y segundo

162.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlos por el siguiente:

“La Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales, de cualquier especie, del que sea autor o intérprete, en conformidad a la ley.”

Inciso tercero

163.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimir la siguiente frase “así como los derechos de paternidad, divulgación e integridad de éstas, lo que será determinado por la ley”.

Inciso nuevo

164.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

166.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos

de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

167.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer procedimientos de concesión de licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que se fijará de común acuerdo y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares previamente indicados”

Inciso primero, nuevo

168.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Inciso primero

169.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“La Constitución garantiza a todas las personas la libertad de crear y difundir la cultura y las artes, así como también hacer uso justo de las obras literarias, artísticas o culturales.”.

Inciso segundo

170.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

171.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso nuevo

172.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

175.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

176.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo

otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”

Inciso primero, nuevo

177.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.3.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Inciso primero, nuevo

178.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

181.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.4.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

“La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero, nuevo

182.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.4.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Inciso primero

183.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

Inciso segundo

184.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

185.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Estado promoverá el acceso a los resultados de las investigaciones científicas y el intercambio de estos conocimientos entre investigadores encargados de formular políticas públicas y a todas las personas y comunidades.”.

Inciso tercero

186.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

187.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Estado promoverá un equilibrio entre la protección de los intereses materiales y morales que les correspondan a los autores, y el acceso abierto a los conocimientos y a la cultura.”.

Inciso cuarto

188.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

Inciso quinto

189.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

Inciso nuevo

190.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”.

Artículo 1.5.

191.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para eliminarlo.

192.- De los convencionales señora Malucha Pinto y otros, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Uso justo. El Estado promoverá a través de una ley el uso justo de las obras, con un objetivo de bien común, resguardando los derechos morales de sus autores o intérpretes.”

194.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1.5.- Toda persona tiene derecho a que sus creaciones sean resguardadas, como archivo, en un espacio digital patrimonial de administración pública y participación comunitaria, cuyas condiciones serán establecidas por la ley.”

Inciso primero, nuevo

195.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.5.- La Constitución asegura a todas las personas los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaigan sobre creaciones artísticas, tecnológicas y científicas de cualquier especie. El modo de adquisición de tales derechos, su objeto, duración, atributos y mecanismos de tutela, serán regulados en la ley.”

Inciso nuevo

201.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“Se garantiza también la propiedad sobre las patentes de invención, signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley.”

Inciso final, nuevo

202.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como inciso final, nuevo, los siguientes:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer procedimientos de concesión de licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que se fijará de común acuerdo y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares previamente indicados.”.

205.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado reconoce, dentro de la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico y patrimonial de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de los pueblos indígenas y garantiza la adecuada protección intelectual de los bienes que componen su patrimonio cultural, cuya titularidad se ejercerá de acuerdo la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

208.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

"La Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, garantizando su adecuada protección patrimonial y moral, de acuerdo a las condiciones consagradas en la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

209.- De la convencional señora San Juan, para agregarle la palabra "utilizada", tras la frase "apropiación individual o".

214.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 2.- El legislador establecerá los mecanismos para que las manifestaciones culturales propias de los pueblos indígenas no sean objeto de apropiación individual, sin consentimiento previo del pueblo indígena a que dicha manifestación pertenezca en el ejercicio de la titularidad que la ley le confiera".

217.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 3.- El Estado reconoce y protege el derecho de los pueblos indígenas a definir libremente sus sistemas de conocimientos culturales y científicos, su cosmovisión e identidad, y garantiza la propiedad intelectual sobre los bienes que componen su patrimonio cultural, de acuerdo a las condiciones consagradas en la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

El legislador establecerá los mecanismos para que las manifestaciones culturales propias de los pueblos indígenas no sean objeto de apropiación individual, sin consentimiento previo del pueblo indígena a que dicha manifestación pertenezca en el ejercicio de la titularidad que la ley le confiera".

226.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

"El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero, nuevo

227.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones”.

Inciso primero

228.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Los derechos de propiedad intelectual deben tener por objetivo el bien común y en concordancia con los derechos humanos y la naturaleza”.

Inciso segundo

229.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Una ley reconocerá el uso justo de las creaciones literarias, artísticas y culturales.”.

Inciso tercero

230.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Incisos nuevos

231.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

232.- De los convencionales señor Bravo y otros, para agregar, como nuevos incisos, los siguientes:

“Las obras literarias, artísticas y científicas de cualquier naturaleza, producidas por el Estado, o por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos, pertenecen al patrimonio cultural común y podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se reconozca la autoría y la integridad de la obra.

Lo anterior no será aplicable a las obras desarrolladas en el contexto de la actividad propia de las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación, cuando la obra tenga un sentido estratégico para sus fines o cuando la ley así lo establezca.”.

236.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.1.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero, nuevo

237.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 1.1.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones”.

Inciso nuevo

238.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

241.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.2.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Inciso primero, nuevo

242.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“**Artículo 1.2.-** El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones”.

Inciso nuevo

243.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho

del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

250.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“**Artículo 2.1.-**El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

Inciso primero

251. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

252. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso primero, nuevo

253.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“**Artículo 2.1.-**El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.”.

Inciso nuevo

254.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

258.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.2.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.

Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados”.

Inciso primero

259. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

260. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

261. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado prohibirá la constitución de derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, sin el consentimiento del respectivo pueblo.”.

Inciso tercero

262. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso cuarto

263. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso primero, nuevo

264.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para anteponer como nuevo inciso primer, el siguiente:

“Artículo 2.2.- El Estado y sus órganos promoverán la creación artística, la investigación científica y la innovación tecnológica, así como su transferencia, difusión y acceso, propendiendo al beneficio mutuo de creadores, innovadores, usuarios y beneficiarios de los diversos sistemas de conocimiento, con pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial que, en conformidad a la ley, recaigan sobre dichas creaciones.”.

Inciso nuevo

265.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Teppper, para agregar, como nuevo inciso, el siguiente:

“Excepcionalmente, y solo por razones de interés general previamente calificadas por el legislador, la ley podrá establecer licencias no voluntarias de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las cuales deben posibilitar un uso racional, proporcionado, por un tiempo previamente delimitado y compatible con la explotación comercial de dichos derechos. Estos procedimientos deberán garantizar una justa compensación a su titular que, a falta de acuerdo, se fijará por resolución judicial, y deberá ser pagada en dinero efectivo y al contado, previo otorgamiento de la licencia respectiva. Asimismo, se garantiza también el derecho del titular de reclamar judicialmente en caso de contravenirse cualquiera de los estándares y condiciones previamente indicados.”.

266.- De los convencionales señor Bravo y otros, para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo 2.3. Obras del Estado en Patrimonio Cultural Común. Las obras literarias, artísticas y científicas de cualquier naturaleza, producidas por el Estado, o por sus funcionarios en el desempeño de sus cargos, pertenecen al patrimonio cultural común y podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se reconozca la autoría y la integridad de la obra.

Lo anterior no será aplicable no será aplicable a las obras desarrolladas en el contexto de la actividad propia de las empresas públicas o en las que el Estado tenga participación, cuando la obra tenga un sentido estratégico para sus fines o cuando la ley así lo establezca.”.

269.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado incentivará la creación e investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo cultural, promoviendo para ello la participación activa de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, en estos objetivos.”.

270. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. El Estado impulsará un desarrollo armónico y sostenible, mediante la conciliación de los derechos y deberes relacionados con la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad y el patrimonio histórico, cultural y artístico de la nación; con el desarrollo de actividades económicas y el avance en bienestar social y en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.”.

Inciso primero

271. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituir la frase “Serán objetivos prioritarios del Estado” por “El Estado propenderá a:”.

285. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado deberá utilizar las mejores soluciones técnicas y tecnológicas disponibles, para que su funcionamiento sea eficiente, eleve los estándares de los servicios públicos, y mejore la transparencia y rendición de cuentas.”.

Inciso segundo

286. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

287. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

288.- De la convencional señora San Juan, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Estado deberá destinar los recursos materiales y humanos necesarios para que la educación permita a la sociedad participar informada y exitosamente en todos los procesos de la vida social, política, económica y ecológica, la que se basará preferentemente en las culturas, historias y diversidad natural de cada territorio y región.”.

304. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8. El Estado promoverá el desarrollo de tecnologías, equipamiento y profesionales especializados en la investigación científica, para el cuidado de la vida, el buen vivir de la comunidad y asegurar la salud de toda la población.”.

314.- De los convencionales señor Caamaño y señora Malucha Pinto, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 11.- La diversidad cultural constituye una base fundamental del Estado.

Chile es un Estado intercultural, siendo un principio fundamental para lograr la cohesión y la convivencia pacífica de los pueblos y naciones indígenas preexistentes que cohabitan el país, así como para la generación de las condiciones de respeto mutuo entre las distintas identidades culturales.”.

315.- De la convencional señora Malucha Pinto, para intercalar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“El Estado protegerá y promoverá la diversidad de nuestras expresiones culturales. A tal efecto, debe desarrollar, conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas necesarias. Estas favorecerán especialmente un entorno que incentive a las personas y a las comunidades a crear, contribuir, producir, difundir y distribuir la diversidad de nuestras expresiones culturales, y tener igual acceso a ellas.”.

316.- De la convencional señora Labraña, para intercalar un inciso segundo del siguiente tenor:

“El Estado protegerá y promoverá la diversidad de nuestras expresiones culturales. A tal efecto, deberá desarrollar, conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas necesarias. Ésas favorecerán especialmente un entorno que incentive a las personas y a las comunidades a crear, contribuir, producir, difundir y distribuir la diversidad de nuestras expresiones culturales, y tener igual acceso a ellas.”.

322.- De los convencionales señor Caamaño y señora Malucha Pinto, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 13.- Es obligación del Estado reconocer y resguardar las diferentes identidades culturales del país, en un constante diálogo y participación con las personas, comunidades, pueblos y naciones indígenas preexistentes, otorgando igualdad de trato y dignidad a sus expresiones y manifestaciones.”.

342. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para sustituirlo por el siguiente texto:

“Artículo 18.- Los órganos del Estado deberán fomentar y asegurar la participación popular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas culturales.”.

Inciso primero

343. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

344. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

355.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 1.- La Constitución reconoce y asegura a todas las personas el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de su persona y de su familia.

Asimismo, asegura la protección de sus datos personales, cuyo tratamiento y protección se efectuarán en la forma y bajo las condiciones que determine la ley”.

Inciso segundo

356.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

Inciso tercero

357.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

358.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar, luego de “datos sensibles”, lo siguiente:

“,claramente definidos por la ley,”.

360.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución reconoce y asegura a todas las personas el derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de su persona y de su familia.

Asimismo, asegura la protección de sus datos personales, cuyo tratamiento y protección se efectuarán en la forma y bajo las condiciones que determine la ley”.

Párrafo primero

363.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimir la palabra “comunidades”

Párrafo segundo

364.- De la convencional señora San Juan, para suprimirlo.

365.- Del convencional señor Harboe, para sustituirlo por el siguiente:

“Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento sólo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley, salvo en caso de flagrancia.”

366.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por los siguientes:

“La inviolabilidad de todo recinto privado y de toda forma de comunicación privada.

Dichos lugares sólo podrán allanarse, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y en la forma determinados por ley”.

Párrafos tercero y cuarto

367.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlos.

368.- Del convencional señor Harboe, para sustituirlos por el siguiente:

“Las comunicaciones y los documentos privados son inviolables, incluyendo sus metadatos. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión sólo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley.”

Numeral 2

369.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y de los convencionales señor Calvo y otros para suprimirlo.

370.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para reemplazar la palabra “leal” por “fiel”.

Párrafo tercero

371.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona titular de datos, tiene derecho a ser informada, derecho a solicitar y recibir del responsable una copia de los datos personales que le conciernen de manera estructurada, en un formato estándar, abierto, que sea interoperable entre distintos sistemas y de uso común, a comunicarlos o transmitirlos o transferirlos a otro responsable al que los hubiera facilitado, en la manera que concurran los requisitos legales y condiciones establecidas por la ley”

Párrafo cuarto

372.- Del convencional señor Harboe, para sustituir su párrafo cuarto por el siguiente:

“La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica que velará por el respeto efectivo de este derecho.”

373.- Del convencional señor Harboe, para incorporar el siguiente párrafo:

“Toda persona tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, inferencia y otros que establezca la ley.”

Numeral 3

374.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

375.- De los convencionales señor Calvo y otros, para sustituirlo por el siguiente artículo 2:

“Artículo 2.- Derecho a la Seguridad Informática. La Constitución asegura la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas, individual y colectivamente. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad que contengan los sistemas informáticos que administren, salvo en los casos expresamente señalados por la ley.”.

377.- Del convencional señor Harboe, para sustituirlo por el siguiente artículo:

“Art. x.- Derecho a la seguridad informática.

Toda persona tiene derecho a la seguridad informática.

El Estado, los particulares y los responsables de los sistemas de información automatizados deberán adoptar las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, continuidad, resiliencia y autenticidad de la información que contengan los sistemas informáticos que administren y la disponibilidad de los servicios prestados.

Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias según la criticidad de la información. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho.

La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica y patrimonio propio que velará por el respeto efectivo y promoción de este derecho.”

382.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar después del punto aparte que pasa a ser una coma, lo siguiente:

“velando siempre por la salvaguarda de los demás derechos, deberes y garantías que esta Constitución y las leyes establecen.”.

Artículo 1

385.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

389.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir el término “sin costo” por de forma “de forma gratuita”, y “a título eterno, gratuito, no exclusivo e irrestricto” por “ en un formato estándar, interoperable entre distintos sistemas, y de uso común

392.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimir la frase “obtener intervención de quien pueda revisar e impugnar la decisión”.

400.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la frase “participar activamente en la corrección y mejora de esta” por “reclamar su rectificación, complementación y cancelación de la información, con arreglo a lo establecido por la ley”.

403.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la frase “esencial y crítica al funcionamiento de la sociedad” por “pública”.

408.- Del convencional señor Caamaño, para agregar el siguiente artículo:

“Artículo XX.- **Rendición de cuentas de gastos públicos.** Las normas sobre transparencia se aplicarán, además, a aquellas personas jurídicas de derecho privado que reciban recursos públicos, quienes deberán rendir públicamente cuenta de los gastos que efectúen con dichos recursos, en la forma que determine la ley.

410.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1.- Es deber del Estado utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.

El legislador determinará las condiciones a través de las cuales el Estado desarrollará una cultura de innovación constante en el sector público, aplicando diversos sistemas de conocimiento científicos y tecnológicos que, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, hagan efectivo y oportuno el cumplimiento de este deber.”

411.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la oración “una alternativa a los procedimientos digitales” por “a que se le proporcione una alternativa distinta a los formatos digitales si lo solicitare”.

Inciso nuevo

412.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar como nuevo inciso, el siguiente:

“En el cumplimiento de este deber, el Estado debe utilizar los mejores avances disponibles de la ciencia y la tecnología para servir a las personas, sus familias y comunidades en la forma más digna, eficiente, oportuna, transparente y segura posible. Este deber recae sobre todos los órganos del Estado, especialmente en su administración, empresas y servicios.”

414.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimir la palabra “todos”.

418.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituir la palabra “favorecer” por “fortalecer”.

419.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

421.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas su derecho a desarrollar e identificarse con la memoria acorde a su cosmovisión comunitaria, y a poder determinarla libremente, en igualdad de condiciones y sin discriminación arbitraria en relación a las demás memorias que integran la identidad intercultural de Chile.

El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, conforma, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras memorias, cosmovisiones y saberes.

Es deber del Estado garantizar la no discriminación arbitraria entre las diversas memorias que conforman la identidad nacional, promoviendo su interrelación armónica, diversa y tolerante, con pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.”

422.- De los convencionales señora Villena y señor Bravo para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1. Toda persona tiene derecho a la memoria personal, familiar, ancestral y comunitaria, en los términos que establezca la ley.

El Estado fortalecerá la conciencia histórica de las comunidades, con el objeto de recuperar la memoria y el fortalecimiento de las múltiples identidades y trayectorias colectivas e individuales.

Los órganos del Estado deberán contribuir con la recuperación y preservación de la memoria, los testimonios y las vivencias.

Existirá una especial protección para los sitios de memoria y memoriales. El Estado deberá identificar, recuperar y preservar estos sitios, como lugares de interés público, patrimonial y cultural, y de libre acceso para la sociedad en general.”.

Inciso primero

423. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

424. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

425. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

426.- De la convencional señora San Juan, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado deberá fortalecer la conciencia histórica de las comunidades, con el objeto de recuperar la memoria, resguardar las fuentes de información histórica y fortalecer las múltiples identidades locales e indígenas. Lo anterior se realizará mediante la conservación de sus culturas, la creación de archivos locales y la preservación de los bienes culturales documentales, de manera de resguardar las fuentes de información histórica, jurídica, sociológica, económica, política, religiosa o cultural.”.

Inciso nuevos

427.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, conforma, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la memoria y cultura propia y su relación intercultural con otras memorias, cosmovisiones y saberes.”

428.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Es deber del Estado garantizar la no discriminación arbitraria entre las diversas memorias que conforman la identidad intercultural de Chile, promoviendo su interrelación armónica, diversa y tolerante, con pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.”

Artículo 2

429.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, y N° 430. de los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo

432.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Es deber del Estado garantizar la no discriminación arbitraria entre las diversas memorias que conforman la identidad intercultural de Chile, promoviendo su interrelación armónica, diversa y tolerante, con pleno respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.”

Inciso primero

433. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso segundo

434. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

Inciso tercero

435. De los convencionales señora Villena y señor Bravo, para suprimirlo.

439.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Es deber del Estado el reconocimiento, protección y promoción descentralizada y en condiciones de igualdad de las diversas manifestaciones materiales e inmateriales que integran la identidad intercultural de Chile.

Asimismo, se desarrollarán planes, políticas y programas que promuevan y proyecten la identidad y diversidad intercultural, patrimonial y medioambiental de Chile en el mundo en un marco de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil”.

Incisos nuevos

440.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado deberá proteger las diversas manifestaciones que forman parte de los distintos patrimonios culturales y cosmovisiones que integran la identidad intercultural de Chile, en igualdad de condiciones y garantizando la no discriminación arbitraria entre ellas.”

441.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que promuevan y proyecten la identidad y diversidad intercultural, patrimonial y medioambiental de Chile en el mundo, en un marco de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil”.

446.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

448.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.

El Estado reconoce dentro de la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y garantiza la adecuada protección de su patrimonio material e inmaterial, de acuerdo a las condiciones consagradas en la Constitución, la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

449.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper,
para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2.- Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

452.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper,
para sustituirlo por el siguiente:

“Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

455.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper,
para sustituirlo por el siguiente:

“Las personas, sus familias, comunidades y asociaciones, así como los Pueblos Indígenas, ejerciendo ejerzan su titularidad en la forma prescrita por la ley, tienen derecho a decidir sobre su patrimonio, historia, cultura, memorias y cosmovisiones en un marco de interculturalidad, igualdad y no discriminación arbitraria, con pleno respeto a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y la ley.”.

Inciso primero

457.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper,
para suprimirlo.

Inciso segundo

458.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper,
para sustituirlo por el siguiente:

“Excepcionalmente, la ley podrá establecer limitaciones o requisitos especiales para la adquisición del dominio y la administración de bienes que hayan sido declarados parte del patrimonio cultural de Chile en la forma prescrita en la ley, resguardando siempre el derecho a indemnización de sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

459.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

463.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado reconoce en igualdad de condiciones, junto a la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y garantiza la adecuada protección de su patrimonio material e inmaterial, de acuerdo a las condiciones consagradas en la Constitución, la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Artículo 8

464.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

466.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado reconoce dentro de la diversidad de cosmovisiones que integran la interculturalidad del país, el valor simbólico de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, y garantiza la adecuada protección de su patrimonio material e inmaterial, de acuerdo a las condiciones consagradas en la Constitución, la ley y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Artículo 9

467.- De los convencionales señor Calvo y otros, para suprimirlo.

469.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que permitan el registro, restauración, recuperación, promoción, archivo y difusión de los patrimonios culturales, de acuerdo a las condiciones establecidos en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

470.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Artículo 9.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, promoverá el respeto, protección, resguardo, conservación, exhibición y difusión de los patrimonios culturales y diversas manifestaciones simbólicas que componen la identidad intercultural del país, con pleno respeto a los derechos que sobre ellas tengan sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley.”

473.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 10.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, promoverá el respeto, protección, resguardo, conservación, exhibición y difusión de los patrimonios culturales y diversas manifestaciones simbólicas que componen la identidad intercultural del país, con pleno respeto a los derechos que sobre ellas tengan sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley.”

476.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado desarrollará planes, políticas y programas que permitan el registro, restauración, recuperación, promoción, archivo y difusión de los patrimonios culturales, de acuerdo a las condiciones establecidos en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

477.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta, consenso y compensación de los titulares de dicho patrimonio, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

480.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 12.- El patrimonio arqueológico de Chile, declarado y reconocido en la forma prescrita en la ley, estará sujeto a un régimen de protección especial y su exhibición será un derecho de todos los ciudadanos.

La ley definirá las condiciones de resguardo del patrimonio arqueológico y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición en consenso y previa compensación a las personas, comunidades o asociaciones que la ley considere como titulares de dichos bienes.”.

Inciso nuevo

481.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta, consenso y compensación de los titulares de dicho patrimonio, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

484.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 13.- El patrimonio arqueológico de Chile, declarado y reconocido en la forma prescrita en la ley, estará sujeto a un régimen de protección especial y su exhibición será un derecho de todos los ciudadanos.

Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo del patrimonio arqueológico y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición, previa consulta y compensación de las personas, comunidades o asociaciones que la ley considere como titulares de dichos bienes.”.

Inciso nuevo

485.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta, consenso y compensación de los titulares de dicho patrimonio, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

488.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 14.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, deberá velar por el respeto, protección, resguardo, conservación, exhibición y difusión de los patrimonios culturales y diversas manifestaciones simbólicas que componen la identidad intercultural del país, con pleno respeto a los derechos que sobre ellas tengan sus titulares, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley.”.

Inciso nuevo

489.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo del patrimonio cultural del país, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio y exhibición, previa compensación y consulta de sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”

492.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 15.- El Estado reconoce y protege en colaboración con la sociedad civil, el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país.

Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

493.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

496.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 16.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, reconoce y protege el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país, incluyendo los sitios reconocidos por organismos internacionales como Patrimonio de la Humanidad, atendido su valor único y excepcional. La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

497.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

500.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17.- El Estado, en colaboración con la sociedad civil, reconoce y protege el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país.

Atendida su función social, la ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

501.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

504.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 18.- El Estado reconoce y protege, en colaboración con la sociedad civil, el patrimonio material, inmaterial y medioambiental que conforma la identidad intercultural del país, incluyendo los sitios reconocidos por organismos internacionales como Patrimonio de la Humanidad, atendido su valor único y excepcional.

La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

Inciso nuevo

505.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“La ley definirá las condiciones de resguardo de dicho patrimonio, y adoptará medidas tendientes a su conservación, estudio, divulgación y exhibición, previa consulta y compensación a sus titulares respectivos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.”.

512.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El Estado reconoce a la familia, en todas sus formas, como el primer cuerpo social donde se vive, desarrolla y transmite de manera preferente el conocimiento, comprensión y educación en la cultura propia y su relación intercultural con otras cosmovisiones, conocimientos, memorias y saberes.”

Artículo 24

517.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

533.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado, en colaboración con la sociedad civil, deberá velar por la conservación, protección, vinculación con la comunidad y puesta en valor de los sitios de patrimonio mundial reconocidos en Chile, con el objeto de mantener tal categoría e integridad de manera permanente.”

534.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para suprimirlo.

536.- De los convencionales señor Neumann y señoras Letelier y Tepper, para sustituirlo por el siguiente:

“El Estado debe proteger el patrimonio biocultural del país a través de los medios que determine la ley. Este deber se llevará a cabo con pleno respeto de los derechos y garantías que establecen la Constitución y las leyes, y en equilibrio con la protección sustentable del medioambiente y el desarrollo económico.”

543.- De la convencional señora Vargas, doña Margarita, para sustituir el artículo 35 por el siguiente:

“Artículo 35. Protección de la biodiversidad. El Estado resguardará el patrimonio biocultural fomentando practicas sostenibles, y protegiendo a las personas y comunidades de desplazamientos por causa de actividades que atenten contra la biodiversidad.”

VII.-NUEVA PROPUESTA CONSTITUCIONAL

En consecuencia, el texto de la **propuesta de norma constitucional que la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios** somete a consideración del Pleno es el siguiente:

“Artículo 1. Derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios.

El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes a controlar, preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio.”.

“Artículo 2. Deberes del Estado. El Estado reconoce los diversos sistemas de conocimientos, comprendiendo ciencias, artes, humanidades, saberes ancestrales, territoriales y populares y conocimientos estéticos, entre otros. Además, se promueve su creación, desarrollo y conservación en diferentes contextos culturales, sociales y territoriales.

El Estado fomenta el acceso abierto e intercambio de conocimientos y el derecho a beneficiarse de ellos, respetando la protección de los intereses morales y materiales de sus autores, la propiedad intelectual indígena y los saberes ancestrales. Corresponderá a la ley establecer las condiciones y restricciones sobre esta materia.

El Estado reconoce que la comunicación de los sistemas de conocimientos es un medio fundamental para su desarrollo, promoviendo las condiciones para su divulgación y difusión.

El Estado considera las mejores evidencias científicas, complementadas con los sistemas de conocimientos, para sustentar la toma de decisiones informadas, especialmente en la formulación de normas jurídicas, planes, proyectos y políticas públicas.”.

“Artículo 3. Libertad de Investigación. La Constitución garantiza el ejercicio de la libertad de investigación, la que comprende, entre otros aspectos, la protección de la indebida influencia del juicio independiente, el cuestionamiento libre y abierto de la ética de los proyectos y el retiro por razones de conciencia de quienes desarrollan labores de investigación.

El Estado reconoce la contribución social de esta libertad para el bienestar de las personas, comunidades y naturaleza.”.

“Artículo 4. Límites al derecho a los conocimientos y la libertad de investigación. El ejercicio del derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos y la libertad de investigación tienen como límite el respeto a los principios de la bioética, además de otros principios y derechos establecidos en esta Constitución y tratados e instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos.”.

“Artículo 5. Protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología. El Estado resguarda a las personas, individual y colectivamente, y a la naturaleza frente a los usos indebidos de los conocimientos, tecnologías y sus aplicaciones, y protege la dignidad e integridad física, psíquica y mental de las personas, incluyendo su identidad genética y microbioma humano.”.

“Artículo 6. Derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales. Todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales sobre las creaciones o producciones culturales, científicas, artísticas y otras relativas a los conocimientos en general, de las que sean autoras o intérpretes.

Estos derechos comprenden el aprovechamiento y el uso de la obra o interpretación, por un tiempo que no será inferior al de la vida del titular, así como el reconocimiento a la creación, divulgación e integridad de éstas, conforme a lo que establezca la ley.

El derecho material de autores o intérpretes estará sujeto a las disposiciones del derecho de propiedad establecidas por esta Constitución, en cuanto a sus garantías, limitaciones y función social, debiendo la ley velar tanto por su protección con la de los demás derechos culturales, el resguardo de los saberes ancestrales y el goce del beneficio de los conocimientos.”.

Artículo 7.- Reconocimiento del aporte de las culturas, artes y patrimonios. El Estado reconoce el aporte fundamental de las culturas, las artes y los patrimonios para el desarrollo integral de las personas, las comunidades, los pueblos y naciones indígenas preexistentes.”

Artículo 8.- Rol del Estado en el patrimonio cultural indígena. El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena”.

“Artículo 9.- Derecho a la Protección de Datos Personales. Todas las personas tienen derecho a la protección de los datos de carácter personal, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que les conciernen.

Ninguna persona podrá ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos, salvo en los casos que expresamente lo señala la ley.

La recolección y tratamiento de datos de carácter personal se realizará de manera excepcional según las condiciones que disponga la ley. Respecto a los datos sensibles, estará prohibido, salvo los casos específicos que disponga la ley.

Los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen derecho al control, acceso y posesión de los datos que proceden de ellos y que se refieren a sus miembros, sistemas de conocimientos, costumbres, territorios, entre otros.”

“La ley establecerá los límites del tratamiento de datos de carácter personal que tenga por objeto inducir, de cualquier forma, el comportamiento de las personas.”.

“Artículo 10- Derecho a la seguridad informática. La Constitución asegura la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas, individual y colectivamente. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos que administren, salvo los casos expresamente señalados por la ley.”.

“Artículo 11.- Derecho al Acceso Abierto a la Información Pública.

Las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso abierto y uso gratuito por medios digitales u otros, a la información que esté en poder del Estado, de sus empresas o en las que este tenga participación, y la recibida o producida por instituciones privadas en el ejercicio de una función pública encomendada por el Estado, según lo establezca la ley.

La ley determinará la forma en que se podrá establecer la reserva o secreto, por razones de seguridad del país, la protección de los derechos de las personas y comunidades o cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de las instituciones respectivas.

No podrá ser sometida a régimen de reserva la información que, a juicio de los tribunales competentes, permita esclarecer y sancionar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y a la Naturaleza.”

“Artículo 12.- Reutilización de la información pública. Es deber del Estado promover la reutilización de la información pública, creando las condiciones para una comunicación y publicación oportuna, periódica, proactiva, comprensible y en formatos abiertos.”

“Artículo 13.- Modernización del Estado. Es deber del Estado interactuar de manera eficaz con las personas, promover la mejora continua de los servicios públicos digitales y ofrecer una alternativa a ellos. Las y los funcionarios públicos, en conjunto con las y los usuarios podrán participar e incidir en la mejora de los servicios públicos.

La ley determinará las acciones necesarias para su cumplimiento, poniendo especial énfasis en la formación de las y los funcionarios.”.

“Artículo 14.- Reconocimiento de la memoria. La Constitución reconoce las memorias como patrimonio de los pueblos y sus culturas. El ejercicio social de la memoria es pilar fundamental para la construcción de culturas de paz.”.

“Artículo 15.- Derecho a las memorias. Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho a las memorias personal, familiar, ancestral y comunitaria, cuya regulación estará reservada para la ley.”.

“Artículo 16.- Deber del Estado. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos.

Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección, asegurando su preservación y sostenibilidad.”.

“Artículo 17.- Patrimonios naturales y culturales. El Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes.

Se prohíbe la asimilación o destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas preexistentes.

En estas materias, la ley establecerá los medios que aseguren la participación de todas las personas, individual y colectivamente, así como el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, se deberán generar medidas eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción.”

Esta Constitución garantiza la participación del pueblo tribal afrodescendiente en el desarrollo y promoción de sus culturas, su conservación y protección, y se aplicará con pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes para su consentimiento libre, previo e informado.”.

“Artículo 18.- Patrimonio y propiedad intelectual indígena. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen derecho a la propiedad, posesión, mantención, revitalización y desarrollo de su patrimonio cultural, material e inmaterial, entre otros, incluyendo sus conocimientos y expresiones tradicionales, los recursos genéticos y humanos, y a la propiedad intelectual colectiva sobre estos. Ello comprende las epistemologías y cosmovisiones, las lenguas, las ciencias y tecnologías, las artes visuales e interpretativas, los sitios y elementos sagrados, los objetos culturales y restos humanos, las medicinas tradicionales, las semillas ancestrales, los diseños, la herencia cultural y memorias, entre otros que permiten su continuidad colectiva y la de sus miembros, y su transmisión a las generaciones futuras. Estos derechos colectivos y sus elementos son inviolables, inembargables, intransferibles e imprescriptibles, respetando su derecho e instituciones propias.”.

“Artículo 19.- Patrimonio paleontológico y arqueológico. El Estado deberá proteger el patrimonio paleontológico y arqueológico.

El patrimonio bioantropológico y cultural de los pueblos será protegido por el Estado. En el caso del patrimonio de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, dicha protección se hará con su consentimiento previo, libre e informado.”

“Artículo 20.- Difusión y educación sobre patrimonios. El Estado fomentará la difusión y educación sobre los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales.”.

“Artículo 21.- Derecho al acceso a los patrimonios. Todas las personas tienen derecho a acceder a los patrimonios naturales y culturales, respetando los derechos consagrados en esta Constitución y las leyes, así como los derechos de los pueblos y naciones indígenas preexistentes.”.

“Artículo 22.- Tesoro Humano Vivo. El Estado reconocerá la calidad de Tesoro Humano Vivo de aquellas comunidades, grupos y personas, que sean custodios del patrimonio de un determinado pueblo, indígenas o no, de acuerdo a los requisitos que regule la ley.”

“Artículo 23.- Patrimonio inmaterial lingüístico. El Estado reconoce el patrimonio constituido por las diferentes lenguas indígenas, las que serán objeto de especial fortalecimiento, revitalización y protección, resguardando su conservación.

“Artículo 24.- Protección del patrimonio biocultural. El Estado protegerá el patrimonio biocultural del país a través de la declaración de reservas patrimoniales, las que constituirán a lo menos un 30% de los territorios de los ecosistemas declarados como representativos. Estas no admitirán actividad industrial alguna, podrán coincidir espacialmente con otras áreas protegidas y serán gestionadas por el Estado, en conjunto con las comunidades locales y con especial atención de los derechos de los pueblos y naciones preexistentes, cuando corresponda, y se regularán, en lo demás, por lo que establezca esta Constitución y la ley.

El Estado reconoce como representativos los siguientes ecosistemas: el mar, el desierto, los salares, las zonas costeras, la alta montaña, los valles transversales, el secano costero, el bosque esclerófilo, el bosque andino patagónico, la estepa patagónica, los archipiélagos, las turberas, la tundra magallánica y otros que determine la ley.”.

“Artículo 25.- Reconocimiento de la artesanía. El Estado reconoce la artesanía como patrimonio cultural inmaterial, su función social y el aporte al desarrollo productivo del país. Los artesanos y artesanas podrán ser reconocidos dentro de la categoría de Tesoros Humanos Vivos por su aporte a la transmisión de oficios, la preservación y divulgación de saberes y herencias culturales de los territorios, según lo establezca la ley.

Es deber del Estado proteger, fomentar y garantizar la actividad creativa y productiva de las artesanas y artesanos en todo ámbito de su desarrollo.

En el caso de las creaciones de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, representativas de sus saberes ancestrales, serán valoradas por su aporte tecnológico y artístico como patrimonio inmaterial.”.



TOMÁS MUÑOZ CAMPOS
Abogado Secretario Accidental

- - -

Santiago, 27 de marzo de 2022